USO OFICIAL

/////MIGUEL DE TUCUMÁN, Diciembre de 2.010.-

AUTOS Y VISTOS: Para resolver la situación procesal de Roberto Heriberto Albornoz, Pedro Osvaldo Caballero, Juan Carlos Benedicto, Camilo Ángel Colotti, Horacio Alberto Vaccaro, Adolfo Ernesto Moore, Ariel Orlando Valdiviezo, Carlos Eduardo Trucco, Ernesto Rivero, Ramón Alfredo Ojeda Fuente, Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, Fernando Torres, Marcelo Omar Godoy, Celso Alberto Barraza, Ernesto Alais, José Carlos Sowinski, Hugo Enzo Soto, Tomás Adolfo Güemes, Luis Orlando Varela, Luis Daniel De Urquiza, Augusto Leonardo Neme, José Eloy Mijalchyk y Miguel Alfredo Manuel Paz, en la Causa caratulada: "Actuaciones Complementarias de ARSENALES MIGUEL DE AZCUÉNAGA CCD S/Secuestros y Desapariciones Expte. n° 443/84 y conexos", y

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio Público Fiscal (en adelante MPF) a fs. 5008/5081, 5082/5097 amplía requerimiento de instrucción en la presente mega causa, respecto a la presunta responsabilidad penal, como autores mediatos, autores materiales, autores mediatos y materiales, y partícipes.

Conforme la acusación formulada por el MPF, fueron indagados los ciudadanos que se identifican a continuación:

Roberto Heriberto Albornoz, L.E. N° 4.073.811, argentino, viudo, de profesión policía jubilado, nacido el 20/11/31, hijo de Juan Roberto Albornoz (f) y de María Orfila BASILIS (f), domiciliado en calle Martín Fierro N° 541 de la ciudad de Banda del Río Salí, Departamento Cruz Alta.

Pedro Osvaldo Caballero, LE nº 4.259.468, de 72 años de edad, nacido en la ciudad de Buenos Aires en fecha 30 de setiembre de 1937, casado, de profesión militar retirado e ingeniero mecánico, con domicilio en calle Ramallo 2346, piso 14 Dpto. "A", CABA.

Juan Carlos Jesús Benedicto, argentino, DNI 12.352.042, de profesión escribano, casado, domiciliado en calle Frías Silva 938 de Yerba Buena, Tucumán.

Camilo Ángel Colotti, DNI 6.119.283, argentino, casado, militar retirado, nacido el 07/11/1935 en Berabevu, Provincia de Santa Fe, Hijo de Vicente Colotti (f) y de Maria Julia Mochetti (F), domiciliado en calle 7 nro 1215 quinto piso Dpto. 1, de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.

Horacio Alberto Vaccaro, argentino, DNI 5.526.801, casado, militar retirado ingeniero mecánico matriculado en el Colegio Profesional de Ingenieros de Tucumán con Matrícula 29201, desempeñándose actualmente como perito auxiliar de los Tribunales Ordinarios de Tucumán, con domicilio en Avda Coronel Suárez 71 de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Adolfo Ernesto Moore, DNI 7.772.824, argentino, de 64 años de edad, divorciado, nacido en Capital Federal el 16/01/1946, hijo de José Alfredo Moore (f) y de

María Elena Beascoechea (f), de profesión militar retirado, actualmente empresario, con domicilio en Av. Maipú N° 821, 6 to. D de Vicente López Provincia de Bs. As., pero con lugar de residencia en calle Guayra N° 1810 8vo. A de Capital Federal, provincia de Bs. As.

Ariel Rolando Valdiviezo, argentino, DNI 8.196.717, de 66 años de edad, domicilio en Avda. Almirante Brown 959 Piso 3ro Departamento "D" de Capital Federal, casado con cuatro hijos, actualmente trabaja en la empresa de seguridad PRETORIAN, goza de retiro militar desde mediados de los años 90.

Carlos Eduardo Trucco, argentino, casado, DNI 8.268.240, nacido en Puerto Borghi Provincia de Santa Fe, 7/10/1947, hijo de Benito Trucco (f) y Beatriz Marina Lastretti (v), con domicilio en Juan Bautista Alberdi 2462, Olivos CP 1636 de la Provincia de Bs. As., de profesión militar retirado, siendo su medio de vida el retiro como militar. Además actualmente se desempeña como gerente de operaciones en una empresa de seguridad.

Ernesto Rivero, argentino, edad 62 años, DNI 7.788.235, con domicilio en calle Jaramillo n° 2877 Piso 15 Departamento "B", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estado civil casado en primeras nupcias con cuatro hijos (todos casados) con nueve nietos, residiendo con su esposa solamente.

Ramón Alfredo Ojeda Fuente, argentino, DNI 4.531.128, separado de hecho den la Sra. María Cristina Pérez Linares con quien tuvo cuatro hijos, actualmente su domicilio es el sito en calle Nicolas Descalzi 5520, Piso 4 Departamento B, Lugano I y II, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde reside con su hermana Marta Elena Ojeda Fuentes. De ocupación docente en varios ámbitos de conocimiento.

Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, argentino, DNI 8.024.954, de 66 años de edad, casado con Marta Miriam Gamarra, nacido el 24/10/1943, en San Rafael Provincia de Mendoza, Hijo de Alberto Montes de Oca (f) y Milagros Romera (f), de profesión retirado de Gendarmería Nacional Argentina, realizando actualmente la actividad de comerciante en el rubro panadería, con domicilio en Belgrano y Maza, Villa Atuel, provincia de Mendoza, lugar en el cual reside.

Fernando Torres, argentino, edad 68 años, DNI 7.088.663, casado con la Sra. Elena María Medina, con quien convive, de profesión militar retirado, con domicilio en calle Santa Fe 215 de la ciudad de San Miguel de Tucumán.-

Marcelo Omar Godoy, argentino, DNI 11.119.961, edad 56 años, estado civil casado con Elvira Laura Rotela, con domicilio sito en calle Pedro Suárez 3117 (ex calle 120) Pasadas Misiones donde reside con su esposa, respecto a su ocupación es retirado de Gendarmería Nacional recibiendo un haber mensual en tal carácter.

Celso Alberto Barraza, argentino, DNI 8.465.018, de 59 años de edad, , nacido el 30/03/1951 en San Lorenzo Provincia de Santa Fe, de profesión Gendarme retirado, con Domicilio en Av. Alem 3078 de la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones. Que vive de sus ingresos como retirado de la Gendarmería.

Ernesto Alais, argentino, mayor de edad, LE 4.794.181, de 80 años de edad a la fecha, de profesión Militar retirado (General de Brigada), hijo de Ernesto Alais (f) y de Isabel Santos (f), con domicilio en calle Sarmiento N° 880 Lomas de Zamora provincia de Bs. As., siendo su medio de vida su sueldo como General retirado.

José Carlos Sowinski, argentino, DNI 5.093.721 (indicando que al momento de renovar la LE por el DNI se habría producido un error en la consignación del número existiendo otra persona con el mismo número que el consignado), de 61 años de edad, con domicilio en Calle Timbo Casa 17 Mza F Barrio Santa Helena, Localidad de Garupá, Provincia de Misiones, de estado civil casado con la Sra. Nélida Lucía Gerloff con quien reside; de ocupación Comandante Principal Retirado de Gendarmería Nacional

Hugo Enzo Soto, argentino, LE 6.946.841, casado con la Sra. Alicia del Valle Escudero, edad 75 años, con domicilio en calle Virrey Olagueri y Feliu 3052, PB Dpto. A Capital Federal, de ocupación militar retirado.

Tomás Adolfo Güemes, argentino, DNI nº 8.160.683, 68 años de edad, nacido el 12/11/1942, en la ciudad de Salta, casado con Elisa Lisabet Arachutcz, de profesión Comandante Mayor retirado de Gendarmería Nacional Argentina, con domicilio en calle Ingeniero Ambrosio Taravella N° 6486, B° Granja de Funes Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, siendo su medio de vida su retiro como Comandante de Gendarmería.

Luis Orlando Varela, argentino, edad 67 años, DNI 7.092.080, casado con la Sra. Olga Cristina Flores de Varela, de ocupación retirado como coronel del Ejército, domiciliado en calle Tero Tero 625 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy.

Luis Daniel De Urquiza, argentino, DNI 7.792.831, nacido el 26 de Abril de 1948, en la ciudad de Villa Viale provincia de Entre Ríos, Hijo de Luis Daniel de De Urquiza (f) y de Dora Esther Bossie Mones Ruiz, estado civil divorciado de María Cristina Cattaneo desde 1994, de profesión abogado, siendo además Mayor retirado del Ejército Argentino. Actualmente se desempeña como abogado en el fuero de Capital Federal y Provincia de Bs. As., con domicilio en Sánchez de Bustamante N° 1831 6 “B”, Ciudad Autónoma de Bs. As.

Augusto Leonardo Neme, argentino, mayor de edad, DNI 4.862.449, de 73 años de edad, nacido el 19/9/1937, en la ciudad de Santiago del Estero, estado civil viudo, hijo de Nadim Neme (f) y de Rosa Ises de Neme (f), con domicilio real en calle Zabala N° 2465 Piso 4 Dpto. A de la Capital Federal Pcia. de Bs. As., de ocupación militar retirado.

José Eloy Mijalchyk, argentino, DNI 7.086.361, de 68 años de edad, nacido el 13/12/41, de profesión sacerdote, domiciliado en calle Pedro de Mendoza n° 55, El Colmenar, Tucumán.

Miguel Alfredo Manuel Paz, argentino, mayor de edad, DNI 4.833.407, de 76 años de edad, nacido el 4/2/1934 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, estado civil casado en primeras nupcias con Silvia Fernández Romero, con domicilio real en calle

USO OFICIAL

España N° 550 Block D Piso 7 departamento E, San Miguel de Tucumán, de ocupación militar retirado.

Que en la causa de marras también fueron imputados como autores mediatos y/o materiales los ciudadanos **Luciano Benjamín Menéndez**, **Antonio Domingo Bussi, Albino Mario Alberto Zimmermann, Alberto Cattaneo, Carlos Alberto Lafuente, Benito Palomo y Guillermo Francisco López Guerrero.-**

Con relación a **Luciano Benjamín Menéndez**, **Antonio Domingo Bussi**, **Albino Mario Alberto Zimmermann (fallecido), Alberto Cattaneo (fallecido)**, se encuentra clausurada parcialmente la instrucción respecto a su presunta intervención en parte de los hechos investigados en la presente megacausa (de acuerdo con la ampliación del requerimiento de instrucción casos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 80; causa "Ale Lorenzo Orlando" -Expte. 1896/04-, y causa "Paz Raúl Santiago" -Expte. n° 785/07-, imputadas en el requerimiento original), todo de conformidad con sentencia de procesamiento de fecha 20 de junio de 2007, confirmada por la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante sentencia de fecha 17 de setiembre de 2008, y auto de elevación a juicio de fecha 9 de octubre de 2009.-

Que de conformidad con los informes e investigaciones efectuados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, los encartados **Carlos Alberto Lafuente y Benito Palomo,** no habrían sido habidos a la fecha, en tanto respecto a **Guillermo Francisco López Guerrero,** a la fecha se desconocería su paradero (informes de fs. 7620/7621).-

Que a fs. 5312/5316 se le recibe declaración indagatoria a Roberto Heriberto Albornoz, todo de conformidad con lo normado por el art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación.

Que a fs. 5329/5354 se le recibe declaración indagatoria a Pedro Orlando Caballero, todo de conformidad con lo normado por el art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación.

Que a fs. 5370/5373 se le recibe declaración indagatoria a Juan Carlos Benedicto, todo de conformidad con lo normado por el art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación.

Que a fs. 5400/5407 se le recibe declaración indagatoria a Camilo Ángel Colotti todo de conformidad con lo normado por el art. 294 del C.P.P.N.-

Que a fs. 5412/5428 se le recibe declaración indagatoria a Horacio Alberto Vaccaro, todo de conformidad con lo normado por el art. 294 del C.P.P.N.-

Que a fs. 5449/5474 se le recibe declaración indagatoria a Adolfo Ernesto Moore, todo de conformidad con lo normado por el art. 294 del C.P.P.N.-

Que a fs. 5475/5491 se le recibe declaración indagatoria a Ariel Orlando Valdivieso todo de conformidad con lo normado por el art. 294 del C.P.P.N.-

Que a fs. 5493/5504 se le recibe declaración indagatoria a Carlos Eduardo Trucco, todo de conformidad con lo normado por el art. 294 del C.P.P.N.-

Que a fs. 5537/5569 se le recibe declaración indagatoria a Ernesto Rivero, todo de conformidad con lo normado por el art. 294 del C.P.P.N.-

Que a fs. 5576/5598 se le recibe declaración indagatoria a Ramón Alfredo Ojeda Fuente, todo de conformidad con lo normado por el art. 294 del C.P.P.N.-

Que a fs. 5601/5643 se le recibe declaración indagatoria a Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, todo de conformidad con lo normado por el art. 294 del C.P.P.N.-

Que a fs. 5659/5700 se le recibe declaración indagatoria a Fernando Torres, todo de conformidad con lo normado por el art. 294 del C.P.P.N.

Que a fs. 5735/5741 se le recibe declaración indagatoria a Marcelo Omar Godoy, todo de conformidad con lo normado por el art. 294 del C.P.P.N.-

Que a fs. 5742/5746 se le recibe declaración indagatoria a Celso Alberto Barraza, todo de conformidad con lo normado por el art. 294 del C.P.P.N.-

Que a fs. 5747/5790 se le recibe declaración indagatoria a Ernesto Ángel Alais todo de conformidad con lo normado por el art. 294 del C.P.P.N.-

Que a fs. 5795/5810 se le recibe declaración indagatoria a José Carlos Sowinski, todo de conformidad con lo normado por el art. 294 del C.P.P.N.-

Que a fs. 6517/6542 se le recibe declaración indagatoria a Hugo Enzo Soto, todo de conformidad con lo normado por el art. 294 del C.P.P.N.-

Que a fs. 6545/6568 se le recibe declaración indagatoria a Tomás Adolfo Güemes, todo de conformidad con lo normado por el art. 294 del C.P.P.N.-

Que a fs. 6771/6817 se le recibe declaración indagatoria a Luis Orlando Varela, todo de conformidad con lo normado por el art. 294 del C.P.P.N.-

Que a fs. 6828/6834 se le recibe declaración indagatoria a Luis Daniel De Urquiza, todo de conformidad con lo normado por el art. 294 del C.P.P.N.-

Que a fs. 6855/6866 se le recibe declaración indagatoria a Augusto Leonardo Neme, todo de conformidad con lo normado por el art. 294 del C.P.P.N.-

Que a fs. 7279/7284 se le recibe declaración indagatoria a José Eloy Mijalchyk todo de conformidad con lo normado por el art. 294 del C.P.P.N.-

Que a fs. 7578/7589 se le recibe declaración indagatoria a Miguel Alfredo Manuel Paz, todo de conformidad con lo normado por el art. 294 del C.P.P.N.-

1.- Hechos imputados y probados en autos.-

La presente megacausa en trámite ante esta instrucción se compone por el conjunto de causas conexas a la causa “Arsenal Miguel de Azcuénaga” (conforme ampliación de requerimiento casos identificados como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 80; y las causas “”Ale Lorenzo Orlando”, Expte. 1896/04 y “Paz Raúl Santiago” expte. n° 785/07, sólo imputadas en el requerimiento

USO OFICIAL

original) a las que, al momento de ampliarse el requerimiento de instrucción con fecha 8 de julio de 2010, se anexan 22 nuevos hechos (casos identificados como n° 58, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 y 98)

1.1.- Arsenales Miguel de Azcuénaga CCD: Primer grupo.

En el contexto del primer grupo de causas requeridas por el MPF en la megacausa "Arsenales Miguel de Azcuénaga s/Secuestros y Desapariciones" (encabezadas por la causa "Carloni de Campopiano Adelaida s/Su denuncia", Expte 443/84 y conexos), se investigaron y demostraron los siguientes hechos:

*** Hechos que perjudicaron a Luis Alfonso Holmquist** (CASO 1) Causa: "Holmquist Luis Adolfo, Fernández Enrique Raúl y Corral Ana Cristina s/privación ilegal de la libertad" Expte. nº 1.565/4 y sus Actuaciones Complementarias.

Luis Alfonso Holmquist, argentino, DNI nº 12.149.627, (a) "Fachito", a la fecha de los hechos tenía 20 años de edad, se domiciliaba en calle La Plata n° 1.439 de San Miguel de Tucumán y militaba en la UES.

Hechos: El 29 de mayo de 1976 Luis Alfonso Holmquist se encontraba en su domicilio de calle La Plata n° 1.439 de San Miguel de Tucumán cuando irrumpió un grupo de personas, algunos con uniformes policiales y otros de civil, entre los que se encontraban Félix Arturo González Naya y Roberto Heriberto Albornoz. Horas antes habían secuestrado a de su domicilio a su hermano Gustavo Enrique Holmquist, quien iba a bordo de uno de los automóviles en los que se movilizaban los incursores en el que también ingresan a Luis Alfonso. Ambos son trasladados al CCD que funcionaba en la Jefatura de Policía de Tucumán, donde son sometidos a torturas. Gustavo Holmquist fue liberado con posterioridad y una persona le dijo que no volvería a ver a su hermano.

Luego Luis Alfonso Holmquist fue trasladado al CCD llamado "Reformatorio" en donde fue visto por el entonces gendarme Antonio Cruz, para finalmente ser trasladado al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde fue visto y reconocido por Juan Martín. Al día de hoy Luis Alfonso Holmquist permanece desaparecido.

Prueba: (i) Denuncias y Habeas corpus presentados por su madre Irma Gómez de Holmquist de fs. 68/91; (ii) Recurso de amparo presentado por Irma Herminia Gómez de Holmquist de fs. 74/75; (iii) Denuncia judicial presentada por Irma Herminia Gómez de Holmquist, María Estela Posse de Fernández y Guillermina Manuela Romano de Corral a fs 140/148; (iv) Declaración testimonial de Gustavo Enrique Holmquist ante Comisión Bicameral a fs. 160/161, quien relata su propio secuestro y que escuchó cuando torturaban a su hermano en la Jefatura de Policía; (v) Testimonio y declaraciones de Juan Martín en causa "Martín Juan s/su denuncia por privación ilegitima de la libertad" Expte. Nº 401.921/04; (vi) Testimonio de Antonio Cruz ante Conadep a fs. 1.838/1.853 de la presente causa principal, Expte. Nº 443/84, en el que señala que en mayo de 1976 vio detenido a Luis Alfonso Holmquist en el CCD "Reformatorio"; (vii) "Índice de Declaraciones de DS (Delincuentes Subversivos)" elaborada en el ámbito del CCD Jefatura de Policía de Tucumán, a fs. 1/9 de causa: "Fiscal Federal s/solicita investigación" Expte. nº 401.109/08,

donde a fs. 4 figura la víctima con el número de orden 104, con apodo “Fachito” y con las siglas “DF”, es decir, que se había ordenado su ejecución; (viii). Radiograma Nº 455 emitido por el Comando Radioeléctrico de la Policía de la de Tucumán. Se informa que Luis Adolfo Holmquist y Ramón Antonio Ortiz fueron detenidos por Fuerzas de Tareas con asiento en Famaillá, el día 29 de mayo de 1976, obrante en causa principal.

*** Hechos que perjudicaron a Enrique Raúl Fernández** (CASO 2) Causa: "Holmquist Luis Adolfo, Fernández Enrique Raúl y Corral Ana Cristina s/privación ilegal de la libertad" Expte. nº 1.565/4 y sus Actuaciones Complementarias.

Enrique Raúl Fernández, argentino, DNI nº 12.149.529, (a) “Negrito”, a la fecha de los hechos tenía 21 años de edad, se domiciliaba en calle Lamadrid n° 1.307 de San Miguel de Tucumán y era estudiante universitario en la Facultad de Medicina de la UNT.

Hechos: El día 30 de mayo de 1976 Enrique Raúl Fernández fue secuestrado en la vía pública, de calle Lamadrid altura 1.100 de esta ciudad, por tres personas que descendieron de un automóvil Ford Falcon color celeste sin chapa patente. Posteriormente fue trasladado al CCD que funcionaba en la Jefatura de Policía de Tucumán, registrándose su ingreso y su “disposición final”. A esos fines, y atento a la amistad existente entre Fernández, Holmquist y Corral y a la evidente relación temporal entre sus secuestros, existen indicios suficientes de que luego habría sido trasladado al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, en donde habría sido asesinado. Al día de hoy Enrique Raúl Fernández continúa desaparecido.

Prueba: (i) Denuncias y Habeas Corpus de fs. 109/139; (ii) Declaración testimonial de Roberto Caram de fs. 159; (iii) Declaración testimonial de Ana María Estequin de Canelada de fs. 160. (iv) Copia de denuncia policial presentada por Enrique Fernández en fecha 30 de mayo de 1976 a fs 126, en la que denuncia la desaparición de la víctima; (v) Denuncia judicial presentada por Irma Herminia Gómez de Holmquist, María Estela Posse de Fernández y Guillermina Manuela Romano de Corral a fs. 140/148; (vi) “Índice de Declaraciones de DS (Delincuentes Subversivos)” elaborada en el ámbito del CCD Jefatura de Policía de Tucumán, a fs. 1/9 de causa: “Fiscal Federal s/solicita investigación” Expte. nº 401.109/08, donde a fs. 3 figura la víctima con el número de orden 81, seguido de las siglas “DF”, es decir, que se había ordenado su ejecución.

*** Hechos que perjudicaron a Ana Cristina Corral** (CASO 3) Causa: "Holmquist Luis Adolfo, Fernández Enrique Raúl y Corral Ana Cristina s/privación ilegal de la libertad" Expte. nº 1.565/4 y sus Actuaciones Complementarias.

Ana Cristina Corral, Argentina, DNI nº 13.475.370, a la fecha de los hechos tenía 16 años de edad, se domiciliaba en calle Mario Bravo n° 1.170 de Barrio Parque Centenario de San Miguel de Tucumán, era estudiante y militaba en la U.E.S.

Hechos: El 8 de junio de 1976 Ana Cristina Corral se encontraba en su domicilio familiar de Barrio Parque Centenario de San Miguel de Tucumán. En horas de la madrugada irrumpió en ese domicilio un grupo de personas pertenecientes a fuerzas de seguridad que se llevaron detenida a la adolescente.

USO OFICIAL

Fue llevada al CCD que funcionaba en la Jefatura de Policía de Tucumán, donde fue interrogada y torturada hasta agosto de 1976, registrándose su ingreso y su "disposición final". Posteriormente Ana Corral fue trasladada al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde fue vista y reconocida por el ex gendarme Omar Torres entre septiembre de 1976 y abril de 1977. En estas fechas la adolescente habría sido asesinada por Antonio Domingo Bussi, estando también presentes en el fusilamiento Mario Albino Zimmermann, Roberto Heriberto Albornoz, Arturo González Naya y Antonio Arrechea.---

Prueba: (i) Constancia de denuncia policial ante Policía de Tucumán a fs. 96 presentada por Luis Roberto Corral de fecha 10 de junio de 1976, en donde denuncia la desaparición de la víctima; (ii) Denuncia y Habeas Corpus de fs. 93/104; (iii) Denuncia judicial presentada por Irma Herminia Gómez de Holmquist, María Estela Posse de Fernández y Guillermina Manuela Romano de Corral a fs 140/148; (iv) Declaración testimonial de Carlos David Powel de fs. 152/153; (v) Declaración testimonial de Carlos Nelson Tettamanzi de fs. 155; (vi) Declaración de Omar Torres ante Comisión Bicameral de Tucumán a fs. 1361/1489; (vii) Testimonio de Omar Torres a fs. 1936/1938; (viii) Testimonio de Omar Torres ante la CONADEP legajo N° 6667 a fs. 1493/1507 de esta causa principal, Expte. n° 443/84, en estas tres declaraciones el ex gendarme, destinado en Arsenales entre septiembre de 1976 y abril de 1977, señala que Bussi llegaba de noche al Arsenal, cuando se iba a fusilar, operación que se realizaba cada 15 días aproximadamente, que ataban a los detenidos con cable, les vendaban los ojos y los colocaban de rodillas al borde de un pozo previamente excavado y mirando a dicho pozo, que Bussi llegaba en uniforme de campaña y con el casco debajo del brazo cuando ya estaban los detenidos arrodillados frente al pozo y solía hacerse acompañar de oficiales de alta graduación tanto del Ejército como de Gendarmería o de la Policía, dando personalmente la orden de disparar y realizando él mismo el primer tiro en la nuca de un detenido: a este horroroso procedimiento fue sometida Ana Cristina Corral, de 17 años de edad; (ix) Testimonio y declaraciones de Juan Martín en causa "Martín Juan s/su denuncia por privación ilegitima de la libertad" Expte. Nº 401.921/04; (x) "Índice de Declaraciones de DS (Delincuentes Subversivos)" elaborada en el ámbito del CCD Jefatura de Policía de Tucumán, a fs. 1/9 de causa: "Fiscal Federal s/solicita investigación" Expte. nº 401.109/08, donde a fs. 2 figura la víctima con el número de orden 45, apodo "Pupe", seguido de las siglas "DF", es decir, que se había ordenado su ejecución.

*** Hechos que perjudicaron a César Gustavo Campopiano** (CASO 4) Causa: Principal, Expte. N° 443/84 acumulado Expte. N° 1.530/05 y sus Actuaciones Complementarias.

César Gustavo Campopiano, argentino, DNI nº 12.161.390, a la fecha de los hechos tenía 20 años de edad, y se domiciliaba en Pje. Primero de Mayo nº 540 de esta ciudad.

<u>Hechos:</u> El 21 de octubre de 1976, se presentaron en el domicilio de los Campopiano, en pasaje Primero de Mayo nº 540 de esta ciudad, dos personas que se

identificaron con su hermana Ada Celia Campopiano como compañeros de estudio de César. Al ser atendidos por éste se introdujeron en el domicilio con armas de fuego, identificándose con un carnet del Ejército. Luego de forcejear, se llevaron secuestrado a César Gustavo Campopiano en un automóvil Renault 12 blanco.

Fue trasladado al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde fue golpeado para que dijera donde se encontraba su hermano Julio César Campopiano. Ese mismo día éste fue llevado al mismo CCD, pudiendo César Gustavo escuchar su voz. Al día siguiente escuchó además que lo torturaban y volvió a escucharlo por última vez al momento de ser liberado.

Prueba: (i) Declaración testimonial de Ada Celia Campopiano de fs. 3 y 639; (ii) Declaración de Noemí Campopiano de fs. 4 y 637; (iii) Declaración de César Gustavo Campopiano de fs. 5, 459/472, 627/629, 1321/1322 -croquis-; (iv) Declaración testimonial de Adelaida Campopiano de fs.386/387; (v) Declaración testimonial de César Gustavo Campopiano de fs. 5, 459/472, 627/629.

*** Hechos que perjudicaron a Celia Georgina Medina** (CASO 5) Causa: Principal, Expte. N° 443/84 acumulado Expte. N° 1.530/05 y sus Actuaciones Complementarias.-

Celia Georgina Medina, Argentina, DNI nº 13.278.013, a la fecha de los hechos tenía 19 años de edad, se domiciliaba en calle Muñecas nº 660 de San Miguel de Tucumán, era estudiante.

Hechos: Celia Georgina Medina era novia de Julio César Campopiano. En la madrugada del 21 de octubre de 1976 la víctima se encontraba estudiando en casa de una compañera cuando recibió un llamado telefónico de su madre, solicitándole que volviera a su casa. Al llegar a su domicilio de calle Muñecas nº 660 encontró a toda su familia reunida en el comedor junto a tres personas armadas que apuntaban a su madre y hermana. Una de esas personas le preguntó si conocía a “Rulo” Campopiano, a lo que ella respondió afirmativamente. Le informaron que éste había sido detenido y que ella tenía que ir a declarar. Al negarse a hacerlo, es reducida, encapuchada y obligada a acompañarlos.

Fue trasladada al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Apenas llegada, luego de marearla y vendarle los ojos, la condujeron por un camino de tierra a un lugar que ellos llamaban el pabellón donde se escuchaban quejidos de otras personas, ingresándola a una celda muy pequeña con el piso de tierra. Esa misma noche, escuchó cuando traían a Julio César Campopiano. Compartió cautiverio con una adolescente de 16 años analfabeta quien le comentó que era del campo y que en su secuestro habían matado a sus padres (estaba en la celda contigua a la de ella), con Trinidad Iramain y Teresa Guerrero de Díaz Saravia, las que llevaban mucho tiempo ya en el campo de concentración. Fue sometida a interrogatorios y torturas, preguntándole sus captores por Ricardo Torres Correa, Adriana Mitrovich, Julio Campopiano y otras personas. Los torturadores usaban el método del “abogado defensor”, es decir que una persona le hacía

USO OFICIAL

creer que era abogado y le decía que lograría que la pongan a disposición del Ejecutivo si confesaba y decía la verdad.

Posteriormente fue trasladada en un automóvil a un sitio desconocido donde fue obligada a bajar y se le ordenó que corriera, a lo que ella desobedeció, siendo nuevamente ingresada al automóvil y trasladada a lo que describe como un garage. Allí fue brutalmente torturada hasta que llegó al lugar una persona con autoridad militar y ordenó que la trasladaran. Fue llevada a un lugar donde fue recogida por personal policial y atento a que llevaba una carta en la que había una supuesta declaración en la que reconocía ser miembro del ERP fue traslada a la Jefatura de Policía, donde fue entrevistada por Albino Mario Zimmermann quien le informó que había sido detenida por ser estudiante de filosofía y que lamentablemente no la podían dejar detenida porque no le podían comprobar nada, pero si fuera por él no saldría en libertad. Fue liberada el 30 de noviembre de 1976.

Prueba: (i) Declaración de Celia Medina ante Juzgado Federal a fs. 55/59; (ii) Descargo por escrito presentado por Osvaldo Humberto Pérez en fecha 01/02/2006 ante Juzgado Federal Nº1 a fs 714/721 de causa "Auad Leoni Susana y Pérez Humberto s/ encubrimiento y torturas" Expte. n° 1.120/05, cuyas copias se acompañan a la presente. (ii) Declaraciones de Osvaldo Humberto Pérez ante Juzgado Federal nº 1 de fechas 28/02/2008 (fs. 4.005/4010), con copias certificadas agregadas a la presente causa principal, Expte. nº 443/84 en las fs. señaladas. Pérez reconoció a la víctima en el Arsenal.

*** Hechos que perjudicaron a Julio César Campopiano** (CASO 6) Causa: Principal, Expte. N° 443/84 acumulado Expte. N° 1.530/05 y sus Actuaciones Complementarias.

Julio César Campopiano, Argentino, DNI nº 13.474.020, a la fecha de los hechos tenía 20 años de edad, se domiciliaba en Asunción n° 236, era actor y escritor.

Hechos: El día 21 de octubre de 1976 Julio César Campopiano fue secuestrado frente al Cementerio Oeste de San Miguel de Tucumán por individuos que se desplazaban en un automóvil color blanco. En esos momentos la víctima se dirigía a un centro oficial de San Miguel de Tucumán a preguntar por el paradero de su hermano César Gustavo, quien había sido secuestrado ese mismo día en su domicilio. El secuestro de Julio César fue presenciado por el testigo Pedro Eugenio Dilascio.

Posteriormente Julio César Campopiano fue trasladado al CCD que funcionaba en la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga, donde fue visto y reconocido por su hermano, por Celia Georgina Medina, por el ex gendarme Antonio Cruz y por Antonia del Valle Barrionuevo. En ese centro fue sometido a torturas. En febrero de 1977 se infectó de tétanos a consecuencia de las torturas que había recibido. Sin atención médica, Julio César Campopiano fue dejado morir lentamente, agonizando durante días, arrojado en el suelo.---

Prueba: (i) Declaración de Adelaida Carloni de Campopiano de fs. 386/387, 747/750 y 1398/1400; (ii) Declaración de Pedro Dilascio de fs. 641; (iii) Testimonio de César Gustavo Campopiano de fs. 5, 459/461, 470/472, 627/629, 1321/1322 (croquis); (iv) Declaración de Celia Medina de fs. 55/59 y 345/349, 360 y 640; (v) Declaración de

Antonio Cruz de fs. 128/134; (vi) Declaración de Antonia Barrionuevo de fs. 2.157, quien señala haber escuchado nombrar a un “Campopiano” en el CCD Arsenal.

*** Hechos que perjudicaron a Oscar René Nieva y Ernestina Teresa Yackel** (CASOS 7 y 8) Expte. N° 1.547/05.

Oscar René Nieva era argentino, DNI nº 7.049.235, a la fecha de los hechos tenía 43 años de edad, se domiciliaba en calle Isabel La Católica n° 2.586 de San Miguel de Tucumán, era docente de literatura y conducía un taxi flet.

Ernestina Teresa Yackel es argentina, DNI nº 8.727.283, a la fecha de los hechos tenía 38 años de edad, se domiciliaba en calle Isabel La Católica n° 2.586 de San Miguel de Tucumán y estaba embarazada de dos meses y medio.

Hechos: El 20 de marzo de 1976 el matrimonio conformado por Oscar René Nieva y Ernestina Teresa Yackel (embarazada de dos meses y medio) y la hija de ambos Gabriela del Carmen, se encontraban en su domicilio de calle Isabel la Católica altura 2.800 de San Miguel de Tucumán. Aproximadamente a las 2.00 horas de la madrugada un grupo armado irrumpió en ese domicilio derribando la puerta de acceso; frente a ello Nieva y Yackel intentaron correr hacia el fondo de la vivienda para escapar. En esas circunstancias Ernestina Yackel escuchó el llanto de su hija, lo que la determinó a regresar a la vivienda, escuchando en dicho momento un disparo y observando que su esposo había sido herido a la altura del abdomen. Luego, parte del grupo de incursores se llevó a Nieva y otra parte requisó el domicilio para luego llevar a Yackel secuestrada. Los raptores la amenazaron con un arma de fuego al pedir ésta que no dejaran sola a su hija de 10 meses de edad, la que le dijeron iban a dejar con una vecina porque se la tenían que llevar a ella sola.

Ambos fueron llevados presumiblemente al CCD “El Reformatorio”, donde Yackel pudo escuchar los quejidos de su esposo por última vez y compartió cautiverio con Susana Leoni Auad. Yackel pasó como detenida clandestina en varios centros de detención. Posteriormente fue llevada al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Durante su cautiverio fue sometida a gravosas condiciones de detención, se le infectaron sus ojos a causa de las vendas con las que era obligada a permanecer todo el tiempo, fue obligada a presenciar sesiones de tortura. Compartió cautiverio con “La Comadre” quien estaba embarazada y al momento de tener su hijo/a fue trasladada.

Finalmente fue liberada el 27 de julio de 1976.

Prueba: (i) Declaración de Ernestina Yackel ante Juzgado Federal nº 1 a fs. 2137/2138 de la presente causa principal, Expte. nº 443/84; (ii) Legajo N° Y-802 de la Comisión Bicameral; (iii) Declaración de Susana Leoni Auad de fecha 2 de diciembre de 2005 a fs 157/158 de causa “Auad, Leoni Susana y Pérez, Osvaldo Humberto s/ Encubrimiento y Torturas.” Expte. nº 1120/5, señalando que compartió cautiverio con Ernestina Yackel en el Reformatorio en el mes de abril de 1976.

*** Hechos que perjudicaron a Mario Barrionuevo y Antonia del Valle Barrionuevo** (CASOS 9 y 10) Causa: "Barrionuevo Antonia del Valle s/denuncia por secuestro y desaparición de Mario Barrionuevo" Expte. nº 817/07.

USO OFICIAL

Mario Barrionuevo era argentino, LE nº 8.057.240, a la fecha de los hechos tenía 29 años de edad, se domiciliaba en calle Lavandería s/n de la localidad de Santa Ana y trabajaba como operario de la Fábrica Argentina Alpargatas.

Antonia del Valle Barrionuevo es argentina, LC nº 9.993.594, nacida en la localidad de Alberdi. Actualmente se domicilia en calle Urquiza s/n de la localidad de Santa Ana (Departamento Río Chico) y es jubilada.

Primer hecho: El 23 de abril de 1976 un grupo de personas vestidas de civil y portando armas largas se presentó aproximadamente a las 23.15 horas en el domicilio de la familia de Rosario Luna de Barrio Escaba, Ciudad Alberdi, al sur de la provincia, y se llevaron secuestrado en un camión tipo Unimog a Mario Barrionuevo, yerno del Sr. Luna que se encontraba residiendo en ese lugar junto a su esposa por cuestiones familiares y que había sido llamado a atender la puerta. En los alrededores de esa vivienda se encontraban fuerzas militares uniformadas.

Posteriormente Barrionuevo fue trasladado al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde fue identificado entre los detenidos clandestinos por Alberto Argentino Augier. Rina Rosa Alarcón, quien se encontraba detenida, le dijo a Antonia Barrionuevo que todavía entre los meses de septiembre y diciembre de 1976, Mario Barrionuevo estaba detenido en el pabellón opuesto al suyo, junto con Augier.

Segundo hecho: El 16 de septiembre de 1976 una persona que se identificó como personal de seguridad se apersonó en la Escuela 320 de Santa Ana preguntando por Antonia del Valle Barrionuevo, quien se desempeñaba en la institución como maestra. Al ser identificada la misma se negó a acompañar a este sujeto y se retiró del establecimiento en su vehículo junto a la directora del establecimiento. Aproximadamente a un kilómetro de distancia fue interceptada por otro rodado en el que se movilizaban las tres personas que previamente habían estado en la escuela, quienes la obligaron a que detuviera su marcha. Antonia Barrionuevo fue obligada a bajar de su automóvil y a subir al de sus captores, en el que fue trasladada al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga.

Allí le asignaron el nº 13. Fue sometida a crueles torturas, siendo interrogada por las actividades de su hermano Mario Barrionuevo, y asimismo siendo obligada a permanecer en las peores condiciones de detención, maniatada y con los ojos vendados. Fue manoseada y ultrajada sexualmente por el primer alférez de Gendarmería Celso Alberto Barraza (a) “Beto”, lo que fue observado por Teresita Hazurún. A principios de diciembre, el día 5 o 6, fue llevada a la sala de torturas, colocándola en una cama sin colchón y aplicándole picana eléctrica en los pies y los pechos, golpeándola bárbaramente con un cinto que tenía una enorme hebilla de metal, que le dejó en carne viva los glúteos y los pechos; al tratar de gritar le tapaban la boca, aumentando así su sufrimiento. El día 7 u 8 de diciembre fue sacada desnuda a campo abierto y fue obligada a permanecer con las piernas abiertas, lo que la hizo sentir nuevamente humillada y degradada. A la mañana siguiente la devolvieron al pabellón donde la tenían aun desnuda y prohibiéndole cerrar las piernas. Ese mismo día en horas de la tarde le anunciaron que la iban a dejar en libertad.

Fue liberada, en pésimas condiciones de salud, el 8 de diciembre de 1976 en horas de la noche en cercanías de la fábrica GRAFANOR. Fue trasladada hacia allí en un automóvil Renault 12 conducido por un tal "Lucho".

En el CCD Arsenal compartió cautiverio con su hermano, con Alberto Argentino Augier de Aguilares, Rina Rosa Alarcón de Concepción, Teresita Hazurún abogada de la ciudad de Frías (Santiago del Estero), y Luis Falú. También pudo ver a una estudiante de geografía de pelo lacio y largo, a una señorita de apellido González y a un tal "Tincho" (se trataría de José Almerico) a quien no le daban de comer.

Prueba: (i) Denuncia de Antonia del Valle Barrionuevo ante la CONADEP (Legajo nº 6.056) de fs. 3/4; (ii) Testimonio de Rosario Luna ante CONSUFA a fs. 6/8; (iii) Declaración de Antonia Barrionuevo ante Juzgado Federal nº 1 a fs. 18/20 y a fs. 2.157 de esta causa principal, Expte. nº 443/84; (iv) Declaración de Alberto Argentino Augier a fs. 21/42, donde manifiesta haber visto a una Srta. Barrionuevo quien había sido secuestrada y asimismo su hermano que era obrero de Alpargatas; (v) Denuncia presentada por Teresita Cándida Hazurun ante la CONADEP, a fs. 18/23 y su ratificación ante el Juzgado Federal Nº 1 a fs 141 ambos de autos "Hazurun Teresita s/privación ilegitima de la libertad y otros delitos" Expte. n° 1.413/06, donde señala que compartió cautiverio en el CCD Arsenal con Antonia del Valle Barrionuevo entre noviembre y fines de diciembre de 1976, viendo cuando fue agredida y manoseada por el gendarme Barraza.

*** Hechos que perjudicaron a José Horacio Díaz Saravia y Teresa Mercedes Guerrero de Díaz Saravia** (CASOS 11 y 12) Causa: "Díaz Saravia José Horacio y Guerrero de Díaz Saravia Teresa Mercedes s/secuestro y desaparición" Expte. n° 1.955/01.

José Horacio Díaz Saravia era argentino, DNI nº 7.838.840, a la fecha de los hechos tenía 27 años de edad, se domiciliaba en Pje. Polonia n° 53 de San Miguel de Tucumán, era estudiante de arquitectura y trabajaba como empleado no docente de la biblioteca de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT. Estaba casado con Teresa Mercedes Guerrero.

Teresa Mercedes Guerrero era argentina, DNI nº 6.392.060, a la fecha de los hechos tenía 25 años de edad, era estudiante de arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT y trabajaba en Construcciones Escolares. Estaba casado con José Horacio Díaz Saravia.

Hechos: El día 4 de setiembre de 1976 José Horacio Díaz Saravia y Teresa Mercedes Guerrero de Díaz Saravia se encontraban en su domicilio de Pje. Polonia n° 53 de San Miguel de Tucumán en compañía de sus dos hijos menores de edad (Amílcar de 2 años y María Victoria de 1 año de edad) y la empleada doméstica de nombre Eudolina. Aproximadamente a las 2.30 horas, un grupo de personas fuertemente armadas, vestidas de civil, que se identificaron como pertenecientes a fuerzas de seguridad ingresó en ese domicilio y obligó a todos los ocupantes de la vivienda a salir al patio y arrojarse al suelo. Allí golpearon a José Díaz Saravia. Previo a saquear la casa, llevándose bienes de valor y el sueldo de ambas víctimas, se llevaron a éstas secuestradas.

USO OFICIAL

José Horacio Díaz Saravia y Teresa Mercedes Guerrero fueron trasladados posteriormente al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde fueron vistos e identificados entre los detenidos clandestinos por Nora Alicia Cajal, María Cristina Rodríguez Román de Fiad, Celia Georgina Medina y Osvaldo Humberto Pérez. En ese lugar permanecieron por lo menos hasta el mes de octubre de 1976. Ambos, por el tiempo de permanencia allí, se movían sin vendas y eran obligados a colaborar en las tareas de mantenimiento del CCD, brindando alimento a los otros secuestrados y colaborando en tareas de limpieza. Al día de hoy ambos continúan desaparecidos.

Prueba: (i) Denuncia de Eduardo Rafael Díaz Saravia ante la CONADEP (Legajo nº 5.525) a fs. 3/16; (ii) Declaración testimonial de María Cristina Rodríguez Román de Fiad de fs. 66/68, quien señala que entre los cautivos que pudo reconocer en el CCD Arsenal estaban “el chico” Díaz Saravia y su mujer de apellido Guerrero; (iii) Declaración testimonial de Celia Georgina Medina de fs. 69/73, quien señala que vio a ambos en el CCD Arsenal, que llevaban mucho tiempo allí y andaban sin vendas en los ojos, siendo quienes se encargaban de las tareas de alimentación y limpieza del CCD, que se encontró con Teresa Guerrero en el baño y pudo hablar con ella, pidiéndole Guerrero que le avisara a su hermano “Mocho” que estaban allí ambos, ella y su marido y que se encontraban bien; (iv) Declaración testimonial de Nora Cajal de fs. 1719/1724 y 1726/1728 de esta causa principal, Expte. n° 443/84, en ella la testigo señala que vio y conversó con Teresa Guerrero comentándole sobre la situación de su marido, que estaba en el “box” de enfrente de la testigo y también que José Díaz Saravia se identificó por su nombre apenas llegada ella al CCD Arsenal; asimismo relata que en ocasión de uno de los “traslados” los gendarmes habían comenzado a preparar un lugar para que el matrimonio tuviera su última noche juntos, ya que estaban en pabellones separados, pero que eso no fue posible por falta de tiempo, porque esa misma noche los sacaron. (v) Declaración testimonial de José Tomás Belastegui ante Fiscalía Federal y su ratificación ante el Juzgado Federal nº 1 a fs. 126 a 128, donde el testigo refiere que tomó conocimiento del secuestro de José Horacio Díaz Saravia para la época de los hechos; (vi) Descargo por escrito de Osvaldo Humberto Pérez, quien ve a ambos en el CCD Arsenal.

*** Hechos que perjudicaron a Carlos Raúl Osores y Graciela Inés Osores** (CASOS 13 y 14) Causa: "Bussi, Menéndez y otros s/privación ilegítima de la libertad, torturas agravadas, homicidio calificado y otros delitos en perjuicio de Carlos Raúl Osores y Graciela Inés Osores" Expte. nº 499/06 y sus Actuaciones Complementarias.

Carlos Raúl Osores era argentino, DNI nº 7.884.972, (a) “Petiso”, a la fecha de los hechos tenía 26 años de edad, se domiciliaba en Empalme Ranchillos (Departamento Cruz Alta) y era de profesión electricista. Militaba en el Partido Comunista.

Graciela Inés Osores es argentina, DNI nº 13.674.458, a la fecha de los hechos tenía 15 años de edad, se domiciliaba en Empalme Ranchillos (Departamento Cruz Alta) y era estudiante.

USO OFICIAL

Primer hecho: En el mes de agosto de 1975 un numeroso grupo de individuos armados de la policía provincial y del ejército, movilizados en automóviles particulares y camiones del ejército, irrumpió de manera violenta luego de identificarse como "policía" en el domicilio de la familia Osores en la localidad de Empalme Ranchillos, Departamento Cruz Alta, Tucumán, la que previamente habían rodeado. En la vivienda se encontraban en ese momento Graciela Inés Osores, María Eugenia Osores y la madre de ambas de nombre Inés. Entre los incursores se encontraban el entonces Comisario Roberto Heriberto Albornoz, el entonces Subayudante Francisco Camilo Orce, así como alguien que oficiaba como jefe del operativo (delgado, de cabello ondulado, vestido de civil y con una boina negra), y una persona de cabello pelirrojo y de tez blanca vestido de civil. Éste y quien oficiaba como jefe del operativo tenían tonada aporteñada. En un momento determinado el jefe del operativo dio la orden de que entrara "la cuadrilla de Orce" a la vivienda, quedando el propio Francisco Camilo Orce en la galería de entrada del inmueble (ver croquis a fs.1.095).

Al ingresar primeramente obligaron a los ocupantes de la casa a colocarse en el pasillo de la misma. Allí los interrogaron sobre dónde estaban las armas y los libros, mientras los amenazaban encañonándolos con armas largas. Posteriormente uno de los efectivos hizo ingresar a la fuerza a Imelda González Gallo, quien había sido secuestrada momentos antes a fin de interrogarla junto a los ocupantes de la casa. Luego trasladaron a éstos al dormitorio, bajo amenazas y ejerciendo violencia contra ellos, excepto a Graciela Osores a quien la persona de cabello pelirrojo llevó al patio y luego a una casilla que había en el fondo de la casa para que dijera dónde estaban las armas y los libros. Luego esta persona llevó a Graciela Osores a la cocina donde comenzó a manosearla, para luego quitarle el vestido y violarla, siendo esto visto por otro de los incursores que se hallaba en la puerta del baño de la vivienda. Luego de las dos horas que duró este operativo, finalmente los efectivos se retiraron.

Segundo hecho: El 16 o 17 de septiembre de 1976 un grupo de personas armadas, entre ellas Mario "Malevo" Ferreyra, ingresó al domicilio de la familia Osores y secuestró a Carlos Raúl Osores.

Posteriormente éste fue trasladado al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga donde fue visto y reconocido como uno de los detenidos clandestinos por Alberto Argentino Augier. A fines de 1976 fue visto por última vez. Al día de hoy Carlos Raúl Osores permanece desaparecido.

Prueba: (i) Denuncias de Graciela Inés Osores de fs. 1/12, 64/65 y ratificación y ampliación ante Juez Federal a fs. 1.095/1.101; (ii) Denuncia ante CONADEP (Legajo nº 6.178) de Matilde del Valle Escobar de Osores; (iii) Declaración testimonial de Ricardo Oscar Osores ante Fiscalía Federal a fs. 114; (iv) Declaración testimonial de Matilde del Valle Escobar ante Fiscalía Federal a fs. 115; (v) Declaración testimonial de María Imelda González Gallo a fs. 807/809; (vi) Declaración testimonial ante Juez Federal de María Eugenia Osores a fs. 923/924; (vii) Copias de legajo policial de Francisco Camilo Orce, a

fs. 807/809 e informe del Jefe de policía a fs. 1.009/1.016; (viii) Denuncia de Alberto Augier de fs. 3/7 del Expte. nº 592/04 (Augier), donde señala que compartió cautiverio con un muchacho que apodaban “Petiso”, quien vivía en una villa miseria sobre avenida Roca y que un día lo sacaron sin saber su destino, se trata de Osores, quien en esa época vivía en dicha dirección.

*** Hechos que perjudicaron a Pedro Rondoletto, María Cenador de Rondoletto, Silvia Margarita Rondoletto, Jorge Osvaldo Rondoletto y Azucena Bermejo de Rondoletto** (CASOS 15, 16, 17, 18 y 19) Causa: "Bussi, Menéndez y otros s/secuestro de Pedro Rondoletto, María Cenador de Rondoletto, Silvia Margarita Rondoletto, José Osvaldo Rondoletto, Azucena Bermejo de Rondoletto, tortura agravada, homicidio calificado y otros delitos" Expte. nº 627/5 y sus Actuaciones Complementarias.

Pedro Rondoletto era argentino, DNI nº 3.626.581, a la fecha de los hechos tenía 57 años de edad, se domiciliaba en calle San Lorenzo nº 1.666 de San Miguel de Tucumán junto a toda su familia y era empleado de Tucumán Gráfica.

María Cenador de Rondoletto era argentina, DNI nº 967.313, a la fecha de los hechos tenía 51 años de edad y era ama de casa.

Silvia Margarita Rondoletto era argentina, DNI nº 6.505.113, a la fecha de los hechos tenía 26 años de edad, era docente y estudiante de ciencias de la educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT.

Jorge Osvaldo Rondoletto era argentino, DNI nº 10.221.994, a la fecha de los hechos tenía 25 años de edad, era estudiante universitario (electrotécnico) en la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional.

Azucena Bermejo de Rondoletto era argentina, DNI nº 10.982.237, a la fecha de los hechos tenía 23 años de edad y era docente de geografía.

Hechos: El día 2 de noviembre de 1976 un grupo de personas encapuchadas irrumpieron en el domicilio de la familia Rondoletto, en calle San Lorenzo n° 1.668 de esta ciudad, llevándose secuestrados al matrimonio de Pedro Rondoletto y María Cenador de Rondoletto, a sus hijos Silvia Margarita Rondoletto y Jorge Osvaldo Rondoletto y a su nuera Azucena Bermejo de Rondoletto quien se encontraba embarazada de 4 meses. Posteriormente los raptores saquearon el domicilio familiar y personal policial se apropió de vehículos de propiedad de la familia.

Las cinco víctimas fueron trasladadas al CCD que funcionaba en la Jefatura de Policía de Tucumán, donde son vistos e identificados por Juan Martín como detenidos clandestinos en el mes de diciembre de 1976.

Posteriormente fueron trasladados al CCD que funcionaba en la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga, habiendo sido víctimas de tratos crueles e inhumanos. Pedro Rondoletto y Jorge Osvaldo Rondoletto fueron fusilados en el CCD Arsenales por el Coronel Caffarena y el Primer Alférez Barraza, en presencia del gendarme Antonio Cruz. Luego sus cadáveres fueron tirados a un pozo e incinerados, lo que tuvo lugar entre los meses de marzo y mayo de 1977.

Al día de hoy María Cenador de Rondoletto, Silvia Margarita Rondoletto y Azucena Bermejo de Rondoletto, como así también del hijo/a que esperaba ésta última (que habría nacido en cautiverio) continúan desaparecidos.

Prueba: (i) Denuncia policial efectuada por Eustaquio Gramajo en fecha 8/11/76 a fs. 2; (ii) Recurso de Habeas Corpus interpuesto por Marcelo Juan Bermejo Asegurado a fs. 13; (iii) Recurso de Habeas Corpus interpuesto por Ricarda García de Bermejo a fs. 18; (iv) Denuncia de Marta Rondoletto de Martínez ante la Comisión Bicameral a fs. 49/56 y ante CONADEP a fs. 83/95 (Legajos nº 2.197, 2.198, 2.199, 2.200); (v) Declaración testimonial de Eustaquio César Gramajo (socio de Rondoletto, testigo presencial) a fs. 228; (vi) Declaración testimonial ante Juzgado Federal de Ricardo Francisco Coronel a fs. 229, quien era dueño del taller mecánico en donde Pedro Rondoletto tenía su auto en reparación y nunca lo retiró, pero un año después se presenta personal de la policía de la Provincia para retirar el auto; (vii) Declaración testimonial de Oscar Felipe Díaz ante Juzgado Federal a fs. 230; (viii) Declaración testimonial ante Juzgado Federal de Ricarda García de Bermejo a fs. 231; (ix) Declaración testimonial ante Juzgado Federal de Elsa Aurelia Correa de Ríos a fs. 237; (x) Declaración testimonial de Ricardo Ansonaud a fs. 245; (xi) Declaración testimonial de Fernando Ernesto Sosa ante Juzgado Federal a fs. 272; (xii) Declaración testimonial del ex gendarme Omar Torres fs 253/255; (xiii) Denuncias ante Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas a fs. 283/284, 288/289, 292/293 y 307/315; (xiv) Denuncias ante CONADEP a fs. 290/291, 302/303 y 308/309; (xv) Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Caso nº 10.305 Holmquist y otros) a fs. 353/366; (xvi) Declaración testimonial de Juan Martín, a fs. 1/68 de causa n° 1565/04 “Holmquist y otros” y Expte. nº 1921/04 a fs. 348/350; (xvii) Declaración testimonial del ex gendarme Antonio Cruz a fs. 128/134 y de fs. 1838/1851 de la presente causa principal Expte. n° 443/84; (xviii) Declaración testimonial del ex gendarme Omar Torres de fs. 1493/1507 de la presente causa principal, Expte. nº 443/84; (xix) Declaración testimonial de Nora Alicia del Valle Cajal a fs. 496/503.

*** Hechos que perjudicaron a María Celestina González Gallo** (CASO 20) Causa: "González Gallo María Celestina s/su secuestro y desaparición" Expte. nº 698/06.

María Celestina Gonzalez Gallo, argentina, DNI nº 10.321.584, (a) “Tina”, a la fecha de los hechos tenía 24 años de edad, se domiciliaba en Empalme Ranchillos (Departamento Cruz Alta) era maestra primaria y estudiante de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. Militaba junto a otros integrantes de su familia en el Partido Comunista.

Hechos: El día 23 de noviembre de 1976 María Celestina González Gallo se retiró de la Escuela Nacional N° 225 de los Pereyra (Dpto. Cruz Alta) donde trabajaba como docente y se dirigió junto a un colega, posiblemente Carlos Luis Sotelo, hasta el Juzgado de Paz de la localidad a fin de que el juez Crisóstomo Llano la acercara a su domicilio en su vehículo, como era habitual. Cuando se encontraba a la espera irrumpieron entre cuatro y seis sujetos armados quienes luego de identificar a María Celestina González Gallo la

USO OFICIAL

capturaron con violencia y se la llevaron en uno de los dos automóviles en los que se movilizaban (un Fiat 1600 o similar, junto a un Ami 8), dejando a los demás presentes encerrados en el juzgado con candado.

Posteriormente María Celestina González Gallo fue trasladada al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde permaneció detenida por lo menos hasta el mes de febrero de 1977, cuando fue vista y reconocida por el testigo Juan Martín. Al día de hoy permanece desaparecida.

Prueba: (i) Denuncia ante Comisión Bicameral (Legajo 77-G-84) de Augusto Andrés González a fs. 4/6 y a fs. 23 testimonio de denuncia policial; (ii) Declaración de Felin Crisóstomo Llanos ante Comisión Bicameral a fs. 9/10; (iii) Declaración ante Comisión Bicameral de Irma Imelda González a fs. 11; (iv) Declaración ante Comisión Bicameral de Pedro Armando Arteaga, testigo presencial, a fs. 12; Denuncia ante la CONADEP (Legajo nº 5240) de fs. 62/68; (v) Denuncia judicial de Andrés González de fs. 85/86; (vi) Declaración de Félix Crisóstomo Llanos de fs. 194; (vii) Declaración de Juan Martín de fs. 88/154.

*** Hechos que perjudicaron a Rosario Argañaraz y Miguel Alberto Argañaraz** (CASOS 21 y 22) Causa: "Argañaraz Antonio Roberto s/su denuncia por secuestro y desaparición de Rosario Argañaraz" Expte. nº 498/07 y sus Actuaciones Complementarias.-

Rosario Argañaraz, DNI nº 8.446.554, a la fecha de los hechos tenía 25 años de edad, se domiciliaba en Buena Vista, Departamento Simoca y era agricultor.

Miguel Alberto Argañaraz, argentino, DNI nº 13.098.968, a la fecha de los hechos tenía 17 años de edad, se domiciliaba en Buena Vista, Departamento Simoca y era agricultor.

Hechos: El 8 de enero de 1977, el Sr. Rosario Argañaraz, sus hijos Miguel Alberto, Juan Carlos y Ana Tránsito Argañaraz, así como la esposa de Antonio Roberto Argañaraz (otro de sus hijos) se encontraban en su domicilio familiar de la localidad de Buena Vista (Simoca). Alrededor de las 3.00 horas de la madrugada, unos 20 individuos armados (civiles, militares y policías) derribaron la puerta e ingresaron al domicilio de la familia Argañaraz. Luego los captores les ataron las manos y les vendaron los ojos a Rosario y Miguel Alberto Argañaraz, obligándolos luego a subir en uno de los camiones en los que se transportaban y partieron con rumbo desconocido. Entre los secuestradores estaba Víctor Gerardo Romano, alias “El Loco”, miembro de la policía provincial y vecino de la zona.----

Miguel Alberto y Rosario Argañaraz fueron llevados detenidos a un lugar de detención que tenía piso con mosaicos. Allí ambos fueron interrogados y golpeados, siendo el segundo de ellos sometido a torturas mediante la aplicación de picana eléctrica. A la mañana siguiente, el 9 de enero de 1977, Rosario Argañaraz y Miguel Alberto Argañaraz fueron conducidos hasta Buena Vista, donde les quitaron las vendas y los hicieron caminar desde un potrero, distante a un 1 kilómetro de su casa hasta la Escuela Nº 201, donde permanecieron detenidos. Entre quienes participaban de este procedimiento se encontraban

Víctor “Loco” Romano, y un tal “Quechu”, hombre gordo, grande, que vestía de civil y era quien dirigía el operativo, así como otros sujetos apodados “El Turco Abec” y “Mikilo”. En la escuela donde estaban detenidos ilegalmente los Argañaraz fueron introducidos en un aula bajo la custodia de dos soldados, luego fueron conducidos en un vehículo hasta el domicilio de un pariente de nombre Benigno Argañaraz y después este último junto a su hermano, su sobrino (además de Rosario y Miguel Alberto Argañaraz) fueron llevados a un lugar que no puede identificar donde fueron interrogados. Miguel Alberto fue interrogado por un conocido llamado Celso Isaías Zelaya y por ello fue llevado por los secuestradores hasta el domicilio del nombrado en La Rinconada (Simoca), a mediados del mes de enero de 1977. Después de un operativo en el que detuvieron a Celso Isaías Zelaya y a su hijo Isidro Zelaya, todos fueron llevados de regreso al centro de detención donde estaban. El 3 de marzo de 1977, Miguel Alberto Argañaraz fue liberado, pero Rosario Argañaraz permanece desaparecido.

Rosario Argañaraz fue visto por última vez en marzo de 1977 en la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga.

USO OFICIAL

Prueba: (i) Denuncia de Antonio Roberto Argañaraz obrante a fs 1/2. (ii) Denuncia conjunta de Antonio Roberto Argañaraz, Miguel Alberto Argañaraz y Benigno Argañaraz ante Comisión Bicameral, obrante a fs 84. y ss y fs 87. (iii) Antonio Roberto Argañaraz fue detenido 9 de enero de 1977, al día siguiente del secuestro de su padre y hermano respectivamente por el mismo grupo tareas que secuestro a su familia y denuncia que durante su secuestro robaron cosas de la casa y le sustrajeron un tractor de la familia. Además Roberto Argañaraz compartió su cautiverio con ambos pero fue liberado después de 48 horas. En una oportunidad fue sometido a un careo con Miguel Alberto Argañaraz. (iv) Declaración de Celso Isaías Zelaya ante Comisión Bicameral a fs 92. (v) Denuncia de Jorge Antonio Argañaraz a fs 19 y 20. (vi) Declaración de Antonio Roberto Argañaraz ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a fs 46 y 47. (vii) Declaración de Miguel Alberto Argañaraz ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a fs 48 y 49. (viii) Declaración de Benigno Argañaraz ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a fs 50/51. (ix) Declaración de Celso Isaías Zelaya ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a fs 55/56. (x) Declaración de Víctor Gerardo Romano ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a fs 60/61. (xi) Declaración Emilio Guillermo Abec ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a fs 65. (xii) Declaración de Jorge Antonio Argañaraz ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas obrante a fs 80/81. (xiii) Foja de servicio de Víctor Gerardo Romano, a fs 97. (xiv) Testimonio de Juan Martín. Su testimonio ante la Comisión Bicameral obrante a fs 194/205.- El testigo Juan Martín vio a Rosario Argañaraz junto a uno de sus hijos (probablemente Miguel Alberto) en el Centro Clandestino de Detención de personas que funcionaba en el ex Ingenio Nueva Baviera, y supo que allí se hallaba el tractor que les habían robado en el momento del secuestro. Luego cuando permaneció en cautiverio en Arsenal Miguel de Azcuénaga, tomo conocimiento por otros detenidos que Rosario Argañaraz había sido trasladado del campo

antes de su llegada. (xv) Legajo Personal de Emilio Guillermo Abec obrante en el marco de: “Instrucción preliminar Nº 13/05 del Ministerio Público Fiscal. Actuaciones relacionadas con pedidos de legajos de personal del Ejército, Gendarmería y Policía Federal”.

*** Hechos que perjudicaron a Víctor Hugo González Toledo** (CASO 23) Causa: "Toledo Paula s/su denuncia por secuestro y desaparición de Hugo González Toledo" Expte. nº 548/07.

Víctor Hugo González Toledo, Argentino, DNI nº 10.792.129, a la fecha de los hechos tenía 25 años de edad, se domiciliaba en Ingenio San Juan, Departamento Cruz Alta, era empleado del Ingenio San Juan y estudiante secundario.

Hechos: El 25 de mayo de 1977 Víctor Hugo González Toledo fue secuestrado por un grupo de personas armadas de la Escuela Nocturna “Lídoro Quinteros” de Banda del Río Salí a la que concurría como alumno.

Atento la relación existente entre María Celestina González Gallo, Carlos Raúl Osores y Víctor Hugo González Toledo (primos), y siendo que los dos primeros fueron llevados al CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde fueron vistos e identificados como detenidos clandestinos, tales indicios sumado al modus operandi de sus captores, resultan prueba suficiente en esta etapa del proceso para considerar que Víctor González Toledo estuvo secuestrado en el mismo lugar.

Prueba: (i) Denuncia de Paula Toledo de fs. 12; (ii) Denuncia ante la Comisión Bicameral de fs. 13, y su ampliación de fs. 14; (iii) Declaración de Carlos Rosa Silva de fs. 18; (iv) Habeas Corpus de fs. 81; (iv) denuncia ante la CONADEP (Legajo n° 5505).

*** Hechos que perjudicaron a Luis Alberto Soldatti** (CASO 24) Causa: "Notari de Soldatti Berta del Rosario s/su denuncia por secuestro y desaparición de Luis Alberto Soldatti" Expte. Nº 1.116/07.

Luis Alberto Soldatti, Argentino, DNI nº 12.165.078, a la fecha de los hechos tenía 20 años de edad, se domiciliaba en San Miguel de Tucumán, era estudiante universitario en la Facultad de Medicina de Tucumán y se encontraba cumpliendo el servicio militar obligatorio.

Hechos: Luis Alberto Soldatti se presentó a cumplir con el servicio militar obligatorio el 17 de marzo de 1978, cumpliéndolo con regularidad hasta el 18 de mayo de 1978 en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, momento en el cual desapareció sin conocerse su paradero a la fecha. Con anterioridad a ese hecho habían sido secuestrados sus hermanos Berta Soldatti en fecha 6 de julio de 1976 (quien permanece desaparecida) y Carlos Soldatti en fecha 28 de setiembre de 1976. Mientras este último permaneció en cautiverio, fue interrogado en reiteradas oportunidades sobre el domicilio de su hermano Luis Alberto Soldatti, llegando sus captores a ir a la pensión donde residía con la intención de secuestrarlo pero sin poder hallarlo.

Atento a que la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga fue el último lugar donde se vio a Luis Alberto Soldatti, se considera que existen indicios suficientes para entender que fue en ese lugar donde fue detenido clandestinamente.

Prueba: (i) Denuncia ante CONADEP de Berta del Rosario Notari de Soldatti a fs. 3/4; (ii) Denuncia ante Familiares de desaparecidos y detenidos de la provincia de Tucumán de Berta del Rosario Notari de Soldatti a fs. 7/8; (iii) Legajo CONADEP nº 5.508; (iv) Causa "Soldatti Berta María y Soldati Luis Alberto por recurso de habeas corpus" Expte nº 502/81 a fs. 17 y ss.; (v) Denuncia ante CONADEP de Berta del Rosario Notari de Soldatti a fs. 64 en la que se denuncia el secuestro de Luis Alberto Soldatti; (vi) Testimonio de Carlos Soldatti ante CONADEP a fs. 74/76 en el cual narra que al ser secuestrado es interrogado por el domicilio de su hermano Luis Alberto Soldatti.

*** Hechos que perjudicaron a María Trinidad Iramain** (CASO 25) Causa: "Rodríguez de Vitali Elva Yolanda s/su denuncia por secuestro y desaparición de María Trinidad Iramain" Expte. nº 654/06.

María Trinidad Iramain, argentina, DNI nº 4.167.328, a la fecha de los hechos tenía 36 años de edad, se domiciliaba en calle Rondeau 178 de San Miguel de Tucumán, era licenciada en Artes y trabajaba en la Dirección de Turismo de la provincia. Estaba casada y tenía dos hijos.

USO OFICIAL

Hechos: El 24 de julio de 1976 un grupo de personas armadas que se identificaron como de la policía, ingresó en horas de la madrugada al domicilio sito en calle Rondeau n° 178 de esta ciudad en momentos en que la María Trinidad Iramain dormía con sus dos hijos (de 2 y 3 años) y su esposo Raúl Fernando Campero, llevándola secuestrada.

María Trinidad Iramain fue trasladada primeramente al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, siendo vista e identificada entre los detenidos clandestinos por Celia Georgina Medina, Nora Alicia Cajal y María Cristina Román de Fiad, quien estaba justo enfrente de ella. Allí fue torturada. Al haber permanecido mucho tiempo en el CCD los guardias le permitieron andar sin vendas en los ojos, siendo obligada a colaborar en las tareas de reparto de alimentos y limpieza de los baños. A principios del mes de octubre de 1976, aproximadamente a las 10.30 de la mañana, formaron a todos los cautivos del CCD en una fila y los llevaron frente a alguien que iba separando a algunos y los hacían subir a un camión; Trinidad Iramain fue sacada de la fila en lugar de María Cristina Rodríguez Román de Fiad y subida al camión; éste anduvo un corto tiempo y luego se escuchó que frenaba y más tarde el tableteo de ametralladoras, por lo que María Trinidad Iramain habría sido fusilada en esas circunstancias.

Prueba: (i) Denuncia ante CONADEP (Legajo nº 4.907) de Elba Yolanda Rodríguez de Vitale (suegra) a fs. 1/4; (ii) Declaración de Celia Georgina Medina ante Juzgado Federal a fs. 53/57, relata que ve a Iramain en el CCD Arsenal, que llevaba mucho tiempo detenida allí y andaba con los ojos descubiertos, que colaboraba en el reparto de comida y la limpieza del CCD; (iii) Declaración de Nora Alicia Cajal de fs. 66/68, quien la menciona como "Trini" y relata que se la encuentra en el baño del CCD; (iv) Denuncia y

declaraciones de María Cristina Rodríguez Román de Fiad de fs. 69/71 y a fs. 100/101, quien relata haberla visto en el CCD, que estaba en el mismo pabellón que ella, que era una chica bonita, y relata el momento en que es llevada para ser fusilada.

*** Hechos que perjudicaron a René Manuel Quinteros** (CASO 26) Causa: "Quinteros René Manuel s/denuncia por privación ilegítima de la libertad, torturas y otros delitos" Expte. nº 309/06 y sus Actuaciones Complementarias.

René Manuel Quinteros, Argentino, LE nº 3.667.341, (a) “Gringo”, a la fecha de los hechos tenía 64 años de edad, se domiciliaba en Caspinchango (Departamento Monteros) y trabajaba como enfermero.

Hechos: René Manuel Quinteros fue secuestrado de su domicilio, sito en Caspinchango Monteros, por personal del Ejército, entre ellos un Teniente de la Base de Caspinchango apodado “Jackaroe”, el día 31 de julio de 1976. Fue maniatado con cables y vendados sus ojos, siendo trasladado en un primer momento al CCD que funcionaba en el Ex Ingenio Nueva Baviera, donde fue brutalmente torturado, compartiendo cautiverio con Guillermo Suárez y Ramón Soberón.

Posteriormente, el 7 de agosto de 1976, fue trasladado en un camión al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde fue alojado en una celda individual con ladrillos de canto, y torturado. Compartió cautiverio con Suárez, Soberón y pudo tomar contacto con Enrique Godoy.

El 13 de septiembre de 1976 fue liberado en cercanías del Dique El Cadillal.

Prueba: (i) Denuncia de René Manuel Quinteros ante CONADEP (Legajo nº 5.839) de fs. 49/50, ante la justicia provincial a fs. 55/56; (ii) Declaración de Julio Guillermo Suárez a fs. 121/122; (iii) Declaración de Enrique Godoy a fs. 54 y 56 vta/57.

*** Hechos que perjudicaron a Félix Viterbo Corbalán** (CASO 27) Causa: "Corbalán Félix Viterbo s/privación ilegítima de la libertad" Expte. nº 1.180/5.

Félix Viterbo Corbalán, Argentino, DNI nº 7.088.491, a la fecha de los hechos tenía 34 años de edad, se domiciliaba en San Miguel de Tucumán, era comerciante (tenía una ferretería) y había sido delegado gremial de los Talleres ferroviarios de Tafí Viejo representando la Sección Tornería en la Unión Ferroviaria. También había militado en el PCR.

Hechos: El 24 de agosto de 1976, alrededor de las 20.30 horas, Félix Viterbo Corbalán se encontraba atendiendo a un cliente en la ferretería de su propiedad ubicada en calle Monteagudo N° 2.800, junto a Héctor Ángel Lobo. En esos instantes irrumpieron en el local tres sujetos, dos con uniforme y el restante de civil, a cara descubierta, portando armas cortas y largas que luego de identificarlo lo obligaron a salir del negocio, llevándoselo secuestrado en una camioneta color blanca que estaba estacionada en la puerta.

Posteriormente Félix Viterbo Corbalán fue trasladado al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde fue identificado entre los detenidos clandestinos hasta el mes de febrero de 1977 por Alberto Argentino Augier, María Angélica

Mazzamuto, Antonio Romero y Alejandro Federico Alderete Soria. Tenía asignado el nº 56 y su celda era contigua a la de Augier. Fue torturado en reiteradas oportunidades hasta fines de diciembre de 1976. Para esas fechas fue sometido al "enterramiento". En febrero estaba con la barba crecida y en un relativo buen estado de salud, habiendo tomado contacto con Antonio Romero. Estaba con una notable depresión anímica, incoherente, rezaba continuamente a pesar de ser ateo y señalaba que en caso de ser liberado iba a dedicarse solamente a su familia. Al día de hoy Félix Viterbo Corbalán continúa desaparecido.

Prueba: (i) Denuncia de Magdalena Rufina Díaz de Corbalán ante Familiares de Desaparecidos y detenidos de Tucumán a fs. 1 y ante la Comisión Bicameral de Tucumán (Legajo 330-C-84) a fs. 2/3; (ii) Testimonio de denuncia policial de Juan Carlos Corbalán, padre de la víctima a fs. 4; (iii) Declaración de Juan Carlos Corbalán y Hector Ángel Lobo ante Comisión Bicameral a fs. 5/6; (iv) Declaración de María Angélica Mazzamuto ante Comisión Bicameral a fs. 8; (v) Legajo CONADEP nº 6068 a fs. 38/40; (vi) Declaración de Alberto Augier a fs. 104/109, el mismo relata que apenas llegado al CCD Arsenal pudo conversar con Corbalán, diciéndole éste que no se afligiera, que iba a ser liberado pronto; lo describe como un hombre joven, ex dirigente gremial de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo y que ya hacía meses que permanecía secuestrado y le habían asignado el nº 56; (vii) Declaración ante Juez Federal de María Angélica Mazzamuto a fs. 111/113, donde relata que conocía a Corbalán por ser ambos parte de la comisión directiva del centro vecinal de El Colmenar, que pudo ver a éste en el CCD Arsenal, que estaba en una especie de "delito místico", que rezaba constantemente cuando en realidad era ateo y prometía a viva voz que cuando saliera se iba a dedicar solamente a su familia; Declaración ante Juez Federal de Antonio Raúl Romero, a fs. 116/119, quien relata que en el CCD pudo intercambiar algunas palabras con Corbalán, que era su vecino y que éste estaba incoherente; (viii) Ratificación judicial de denuncia ante Juzgado Federal nº 1 de Magdalena Rufina Díaz; (ix) Causa judicial caratulada "Corbalán Félix Viterbo por recurso de habeas corpus" Expte. nº 1.724/76 a fs. 137/172; (x) Declaración de Alejandro Federico Alderete Soria ante Juzgado Federal a fs. 150/151 de Expte. nº 592/04 (Augier), quien relata haber compartido cautiverio con Corbalán en el CCD Arsenal.

*** Hechos que perjudicaron a Enrique Gonzalo Díaz Macías** (CASO 28) Causa: "Auad de Díaz Macías Zaira s/su denuncia por privación ilegítima de la libertad y otros delitos en perjuicio de Enrique Gonzalo Díaz Macías" Expte. nº 1.121/05.

Argentino, DNI nº 7.193.796, a la fecha de los hechos tenía 37 años de edad, se domiciliaba en calle Salta 629 Departamento "C" de San Miguel de Tucumán y era comerciante (propietario del negocio "Rincón Infantil" ubicado en Galería Mendoza de esta ciudad).

Hechos: El día 9 de octubre de 1976 a horas 13:15 aproximadamente Enrique Gonzalo Díaz Macías en momentos en que se dirigía desde su negocio a la librería "New Libros" ubicado a 20 metros de su local fue secuestrado por un grupo de personas armadas, vestidas de civil.

USO OFICIAL

Ese mismo día fue trasladado al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde fue salvajemente torturado, lo que pudo ser oído por Raúl Edgardo Elías, quien estaba siendo liberado. Enrique Gonzalo Díaz Macías falleció a los tres días de su ingreso a consecuencia de graves lesiones producidas por la tortura, lo que le fue relatado a María Cristina Román de Fiad por un médico de gendarmería apodado “El Gordo”.

Su esposa, al intentar hacer la denuncia por el secuestro de Díaz Macías en la Policía Federal fue amenazada con armas de fuego; y logró entrevistarse con Zimmermann, quien le dijo que “si a los 4 meses de la desaparición una persona no aparece, hay que pensar que está muerta”.

Prueba: (i) Denuncia de la Sra. Zaira Auad de Díaz de fs. 1/4 ante la Comisión Bicameral de Tucumán; (ii) Habeas Corpus interpuesto por Zaira Auad de fs. 77/82; (iii) Declaración de María Cristina Román de Fiad a fs. 46/48 y de fs 104/105, quien identifica a Díaz Macías en el CCD Arsenal, señalando que supo de su fallecimiento a causa de las torturas; (iv) Declaración de Raúl Edgardo Elías a fs. 124, quien escuchó cuando torturaban a la víctima en momentos en que él era liberado.

*** Hechos que perjudicaron a Alberto Argentino Augier** (CASO 29) Causa: "Bussi Antonio Domingo y otros s/privación ilegítima de la libertad y otros delitos en perjuicio de Augier Alberto Argentino" Expte. nº 592/04 acumulado 215/77.

Alberto Argentino Augier, argentino, DNI nº 3.501.840, a la fecha de los hechos tenía 54 años de edad, se domiciliaba en Aguilares, era médico y trabajaba como director del Colegio Nacional “Nicolás Avellaneda” de Aguilares.

Hechos: El día 29 de octubre de 1976, Alberto Argentino Augier salió alrededor de las 12.00 horas de su trabajo en el Colegio Nacional Nicolás Avellaneda de Aguilares, ubicado en la intersección de Avda. Mitre y calle Alberdi de dicha localidad. Allí fue interceptado por dos sujetos jóvenes que lo invitaron a ascender a una camioneta. Una vez allí le exhibieron identificaciones de la Policía Federal diciéndole que lo llevaban en presencia de sus superiores; lo cambiaron de vehículo pasando a un Peugeot 404 sobre el puente del Río Gastona y allí uno de sus captores le dijo que su secuestro se debía a una carta que le había enviado a Luciano Benjamín Menéndez, a quien Augier conocía.

Fue trasladado al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Al llegar le vendaron los ojos y fue ubicado en uno de los box del CCD, contiguo al de Félix Viterbo Corbalán, quien apenas llegado le dio palabras de aliento. Le asignaron el nº 55 y le prohibieron hablar. Fue sometido a un régimen de privación de la libertad inhumano: lo obligaban a permanecer de pie durante extenuantes jornadas, a hacer sus necesidades en el campo, a hacer ejercicios físicos hasta la extenuación, mientras era insultado y golpeado por los guardias con látigos y puños. Lo interrogaron en numerosas oportunidades, refiriéndose principalmente a su hija Nélida Argelia apodada “Kika” y a su relación de amistad con Menéndez. Fue torturado con picana eléctrica, dejado al sol durante un día entero, enterrado de cuerpo entero dejándole sólo la cabeza fuera de la tierra durante cinco días, al cabo de los cuales, con el enorme dolor que esa situación le había producido, fue

llevado nuevamente a la sala de interrogatorios y sometido a la picana eléctrica. Tres días después de estas torturas le aparecieron erupciones en todo el cuerpo, estando sus heridas cubiertas de pus y agravado el cuadro por una extensa úlcera glútea, lo que le produjo una intensa fiebre que lo llevó al borde de la muerte. Un enfermero le dio algunas inyecciones, lo que lo mantuvo con vida.

Compartió cautiverio con Luis Falú, Félix Viterbo Corbalán, Julio Ricardo Abad, Alberto Pereyra, César Correa, Carlos Osores (a) "Petiso", un joven apodado "Cayayo" de Tafí Viejo, "Nito" Medina, un hombre al que apodaban "Carancho", Armando Archetti, Alejandro Federico Alderete Soria, Antonia del Valle Barrionuevo, René Argañaraz, Luis Maldonado, un señor Maldonado y su hijo de 11 años de Monteros, Damián Márquez y Rina Rosa Alarcón. Ocupó en la vida de los cautivos del CCD Arsenal un lugar importante, porque colaboraba con la atención médica de los enfermos y heridos a causa de la tortura, según señalan todos los sobrevivientes que compartieron cautiverio con él.

El día 1º de abril fue sacado del CCD atadas las manos y amordazado en un Renault 6 fue llevado a algún lugar desconocido, donde fue interrogado largamente por su amistad con Menéndez, aunque no fue torturado. Luego fue finalmente liberado el día 3 de abril de 1977 en cercanías de la ciudad de Concepción.

USO OFICIAL

Prueba: (i) Denuncia por escrito de Alberto Argentino Augier titulada "Mi Purgatorio o ¿El Infierno?" a fs. 3/7 presentada en querella ante Juzgado Federal nº 1, en ese escrito el Dr. Augier detalla con gran precisión y profundidad las metodologías de tortura empleadas en el CCD y el régimen cotidiano del cautiverio, describiendo también exhaustivamente a los responsables del CCD y a sus "compañeros de infortunio"; (ii) Ratificación y ampliación de denuncias ante Juzgado Federal nº 1 en 2004 a fs. 51 y de 1984 a fs. 56/57; (iii) Denuncia de habeas corpus de fs. 54; (iv) Actuaciones de causa "Lorandi de Augier Eugenia s/su denuncia por desaparición de su esposo: Alberto Argentino Augier" Expte. nº 713/76 de fs. 70/76, incluyendo a fs. 74 el comparendo de la víctima; (iv) Ratificaciones judiciales de denuncias ante Juzgado Federal nº 1 de Alberto Argentino Augier a fs. 85 y a fs. 143; (v) Denuncia y testimonio escrito del mismo ante Comisión Bicameral (Expte. 151-A-84) a fs. 104/105 y 120/131 respectivamente; (vi) Declaración testimonial ante Juzgado Federal nº 1 de Eugenia Lorandi de Augier, esposa de la víctima a fs. 144; (vii) Declaración de Alejandro Federico Alderete Soria ante Juzgado Federal a fs. 150/151, donde relata que escuchó los interrogatorios a los que era sometido Augier preguntándole invariablemente por su hija, porque su box era el primero contiguo a la sala de torturas, lo conocía como rector del Colegio Nacional y ubicaba con facilidad su timbre de voz, que describe como "catamarqueño"; pudo conversar luego con él en el patio, preguntándole si sabía algo de su familia (de la de Augier), señala también que parecía enfermo y estaba golpeado; (viii) Declaración ante Juzgado Federal de Antonia del Valle Barrionuevo a fs. 158/159, quien lo ve en el "pozo" y escucha que gritaba desesperadamente, diciendo que estaba enterrado con solamente la cabeza fuera de la tierra, lo reconoció pues lo conocía por haber cursado sus estudios en el Colegio Nacional del que

Augier era director; (ix) Partida de defunción de Alberto Argentino Augier de 2007, a fs. 198; (x) Denuncia de María Cristina Rodríguez Román de Fiad ante Juzgado Federal a fs. 202/203, quien menciona que en el CCD Arsenal había un médico que era rector de un colegio del sur; (xi) Denuncia de Raúl Osvaldo Santillán ante Fiscalía Federal a fs. 207/209, donde menciona que en el CCD Arsenal estaba el Dr. Augier, quien auxiliaba a los heridos por las torturas; (xii) Denuncia de María Angélica Mazzamuto a fs. 1.858/1.860 de la presente causa principal, Expte. nº 443/84; (xiii) Denuncia de Antonio Romero a fs. 1.976/1.979 de la presente causa principal, Expte. nº 443/84.; (xiv) Denuncia ante Comisión Bicameral de Héctor Oscar Justo a fs. 3/5 de Expte. nº 1.477/05 (Justo), donde éste relata que Augier auxiliaba médicamente a los prisioneros en el CCD Arsenal.-

*** Hechos que perjudicaron a María Isabel Jiménez de Soldati** (CASO 30) Causa: "Jiménez Joaquín Absalón s/denuncia por desaparición de María Isabel Jiménez de Soldati" Expte. nº 1.595/5.

María Isabel Jiménez de Soldati, argentina, DNI nº 1.449.305, a la fecha de los hechos tenía 41 años de edad, se domiciliaba en calle Italia 547 de San Miguel de Tucumán, era ingeniera electrónica, profesora de la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional, institución en la que previamente se había desempeñado como decana (delegada interventora) y profesora en la E.N.E.T. nº 3. Militaba en la JUP.

Hechos: El día 28 de mayo de 1977 María Isabel Jiménez de Soldati se encontraba en su domicilio de calle Italia n° 557 de esta ciudad, junto a su esposo Enrique José Soldati y sus padres. Aproximadamente a las 2.30 horas de la madrugada llamaron insistentemente a la puerta de dicho domicilio. Al acercarse el esposo de la víctima, el mismo fue amenazado y encañonado con armas de fuego y un grupo de alrededor de siete personas armadas con armas largas y encapuchadas irrumpieron en la vivienda por la puerta delantera y por los fondos. Luego de inmovilizar a su esposo, golpeándolo con un arma y de obligar a los demás ocupantes de la vivienda a ponerse boca abajo, se llevaron secuestrada a María Jiménez en uno de los tres vehículos en los que se movilizaban. Además, en los minutos que duró el operativo, habían saqueado la casa.

Previamente personas de las fuerzas de seguridad habían hecho averiguaciones en el vecindario sobre la víctima. En el mismo operativo habrían sido secuestrados Juan Sandoval y otro docente de la UTN, Enrique Ernesto Espeche.

Posteriormente María Isabel Jiménez fue trasladada a la Jefatura de policía de Tucumán y de allí al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde fue vista y reconocida por Baltasar Acuña, Juan Roberto Sandoval y Juan Martín hasta mediados de agosto de 1977. En ese lugar le fue asignado el número 55. Fue torturada e interrogada por sus conocimientos de inglés y por sus salidas del país; en reuniones de presos la hacían cantar música española. En una oportunidad le dijo a Juan Sandoval que avisara a sus familiares acerca del lugar de su detención. También ayudó a dos mujeres embarazadas que habían sido víctimas de la tortura y por ello habían abortado;

presuntamente ella misma se encontraba también en estado de gravidez. Con el tiempo su salud desmejoró y se encontraba notoriamente ultrajada físicamente y mucho más delgada, aunque tenía un trato preferencial y era respetada y querida por quienes permanecían cautivos en el CCD, permitiéndolo los guardias bañarse y andar sin vendas en los ojos; la llamaban “profesora” o “decana”. Una noche uno de los guardias intentó violarla, lo que la afectó mucho y les dijo a sus compañeras de cautiverio que sabía quién había sido y lo denunciaría, produciéndose entre los guardias del CCD cierto revuelo. Un día de mediados de agosto de 1977 anunciaron a todos los que se encontraban en ese pabellón que la víctima, junto a una de las mujeres a las que había auxiliado en su aborto, iban a ser puestas en libertad y efectivamente las sacaron de allí en esas fechas. Al día de hoy María Isabel Jiménez de Soldati continúa desaparecida.

Prueba: (i) Denuncia de Enrique José Soldati, esposo de la víctima, ante Familiares de Desaparecidos y Detenidos de Tucumán, a fs. 3; (ii) Currículum vitae de la víctima a fs. 4/5; (iii) Denuncia de Joaquín Absalón Jiménez, hermano de la víctima, ante Familiares de desaparecidos por cuestiones políticas de Buenos Aires a fs. 9; (iv) Denuncia de Reinaldo Alberto Jiménez, hermano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fs. 10/13; (v) Copias de diversas gestiones y denuncias realizadas por los familiares ante diversos organismos nacionales e internacionales, de fs. 14 a 44; (vi) Declaración por escrito de Juan Martín ante la CADHU a fs. 45 a 109; (vi) Denuncia ante Comisión Bicameral de Joaquín Jiménez a fs. 110/113 (Legajo Bicameral 183-J-84); (vii) Declaración de Baltasar Acuña ante Comisión Bicameral a fs. 114/115, el mismo la describe como la ex decana de la Universidad Tecnológica Nacional y señala que tenía el nº 55 en el CCD, que pudo conocer su presencia en numerosas oportunidades porque los guardias la llamaron por su nombre y porque ella misma se identificó varias veces ante los secuestrados, pidiéndole a él personalmente que avisara a su familia que estaba allí en caso de ser liberada, también señala que en una o dos oportunidades Jiménez tuvo que ejercer de enfermera cuando por las torturas hicieron abortar a dos mujeres embarazadas; (viii) Declaración ante Comisión Bicameral de Edgardo Escobar Ponce de León, vecino de la víctima, a fs. 124, quien relata que días antes un policía había hecho averiguaciones acerca de ésta; (ix) Denuncia ante Juzgado Federal de Gladys Estela Jiménez, hermana de la víctima, en Expte. nº 444/84, a fs. 144/147; (x) Denuncia de Marta Silvia Menéndez, prima de la víctima, ante CONADEP (Legajo nº 5.596) a fs. 277; (xi) Reconocimiento fotográfico de Baltasar Acuña a fs. 309/311 y 316; Copias certificadas de declaración escrita de Baltasar Acuña, su declaración ante Comisión Bicameral y su ratificación y ampliación ante el Sr. Juez Federal nº 1 en Expte. nº 1.091/06 a fs. 476 a 484.

*** Hechos que perjudicaron a Antonio Naief Saade Saeig** (CASO 31) Causa: "Saade Saieg Miguel Elías s/su denuncia por secuestro y desaparición de Antonio Naief Saade Saieg" Expte. nº 511/07.

USO OFICIAL

Antonio Naief Saade Saieg, argentino, DNI nº 7.071.799, a la fecha de los hechos tenía 39 años de edad, se domiciliaba en calle San Juan nº 1.491 de San Miguel de Tucumán y era contador público.

Hechos: El 16 de enero de 1978, Antonio Naief Saade Saieg fue interceptado, en la vía pública, a la altura de avenida Salta al 1.100, cuando se dirigía a su casa a llevarle un yogurt a su madre para, más tarde, asistir a una reunión de directivos en el Club Atlético San Martín. Fue interceptado por tres vehículos de los cuales descendieron personas de civil armadas quienes lo secuestraron desconociéndose su paradero a la fecha a pesar de las infructuosas diligencias de amigos y familiares. Los agresores robaron el automóvil de propiedad del ciudadano Antonio Saade Saieg en el que circulaba el día de su secuestro, un Chevrolet Chevy Coupe Patente T-059210 que se encontraba registrado a nombre de la firma para la que el trabajaba, ORBIS S.A.

Los autos en los que se trasladaban las personas que secuestraron al ciudadano Saade Saieg, fueron identificados y ubicados en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, de lo que se induce que Antonio Saade Saieg estuvo detenido clandestinamente en dicho centro de detención.-

Prueba: (i) Denuncia de Miguel Elías Saade Saieg, hermano de la Víctima, ante familiares detenidos y desaparecidos de Tucumán de fs. 1/2 sobre las circunstancias del secuestro de Antonio Saade Saieg; (ii) Declaración de Miguel Elías Saade Saieg ante la Comisión Bicameral de Tucumán de fs 3; (iii) Declaración de Manuel Ernesto Fernández Kraus ante la comisión Bicameral de fs. 4 en donde detalla haber sido testigo presencial del secuestro de Antonio Saade Saieg; (iv) Declaración de Enrique Ramón García Hamilton ante la Comisión Bicameral de fs. 9; (v) Ampliación de la declaración de Elías Saade ante la Comisión Bicameral, de fs 11, de donde surge que quien vio los autos de los secuestradores en el Arsenal Miguel de Azcuénaga era un periodista de la Gaceta de nombre “Cacho” Garrocho; (vi) Legajo CONADEP N° 2323 de fs. 27/29, en donde constan las circunstancias del secuestro de Saade Saieg; (vii) Habeas Corpus interpuesto por Miguel Elías Saade Saieg a fs. 50/74; (viii) informe del registro Nacional de la Propiedad del automotor de fs. 107/108, en el que consta la propiedad de los dos vehículos sustraídos a la familia Saade Saieg; (ix) Declaración de Graciela Cristina Saade de Cantoli ante el juzgado Federal de San Isidro de fs.164/167 en la que relata las circunstancias de la sustracción del primer automóvil y del secuestro de su hermano.

*** Hechos que perjudicaron a Juan Carlos Bustamante** (CASO 32) Causa: "Arra de Bustamante Matilde s/denuncia por secuestro y desaparición de Juan Carlos Bustamante" Expte. nº 1.270/5.

Juan Carlos Bustamante, argentino, DNI nº 10.645.060, a la fecha de los hechos tenía 22 años de edad, se domiciliaba en calle Bulnes nº 216 de San Miguel de Tucumán, era estudiante universitario de ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional y trabajaba como técnico radiólogo del Hospital Padilla. Militaba en el Partido Comunista.

Hechos: El 2 de diciembre de 1975 un grupo de personas encapuchadas y armadas irrumpió en el domicilio sito en calle Bulnes n° 216 de esta ciudad y secuestró a Juan Carlos Bustamante. Posteriormente habría sido visto e identificado entre los detenidos clandestinos del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Al día de hoy continúa desaparecido.

Prueba: (i) Denuncia de Matilde Abra de Bustamante ante la Comisión Bicameral de fs. 2/5; (ii) Declaración de Juan Martín de fs. 48/58.

*** Hechos que perjudicaron a Oscar Rafael Berón** (CASO 33) Causa: "Farías de González Segunda Olga s/su denuncia por secuestro y desaparición de Oscar Rafael Berón" Expte. nº 582/07.

Oscar Rafael Berón, argentino, DNI nº 8.319.897, (a) “Sosolo”, a la fecha de los hechos tenía 27 años de edad, se domiciliaba en la localidad de Los Ralos (Departamento Cruz Alta) y era empleado de la Secretaría de Ganadería y Agricultura de Tucumán en Los Ralos. Había sido delegado gremial del Ingenio Los Ralos.

Hechos: El 11 de junio de 1976 un grupo de personas armadas y encapuchadas ingresaron al domicilio de la familia Berón en Los Ralos, Departamento Cruz Alta, y luego de requisarlo y sustraer las cosas de valor se llevaron secuestrado a Oscar Rafael Berón.

En igual fecha fueron secuestrados Sixto Pascual Villarreal, Juan Francisco Cabrera y Santos Juárez quienes fueron posteriormente liberados.

Luego de su secuestro Oscar Rafael Berón fue trasladado juntamente con Juan Francisco Cabrera al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde pudo intercambiar algunas palabras con Baltasar Acuña. En ese lugar le fue asignado el nº 50. Apenas llegar fue torturado salvajemente, produciéndole una importante herida en la cabeza y en el rostro al arrojarle agua hirviendo. Permaneció por lo menos hasta el mes de junio de 1977, cuando fue visto con vida por última vez. Al día de hoy Oscar Rafael Berón continúa desaparecido.

Prueba: (i) Denuncia de Esther Evarista Farías de Berón ante la CONADEP de fs. 1/5; (ii) Habeas Corpus a fs. 6/8; (iii) Declaración de María Cristina Orellana de Berón ante Familiares de Desaparecidos de Tucumán a fs. 62 y 63; (iv) Declaraciones de Juan Francisco Cabrera ante la secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos de Tucumán y ante la Fiscalía Federal Nº 1 de Tucumán, a fs. 67/68 y 69/72 respectivamente, en donde relata que compartió cautiverio con Berón y en la segunda expresa que hasta la fecha de su liberación, 30 de junio de 1977, Berón se encontraba con vida; (v) Declaraciones de Baltazar Acuña ante la Comisión Bicameral y el Juzgado Federal Nº1 de Tucumán de fs. 77/78, 79/82, 83/84, en donde relata haber visto y compartido cautiverio en el Arsenal Miguel de Azcuénaga con Berón, haber hablado con él en circunstancias de haberles quitado la venda de los ojos a ambos para que se bañaran, viendo además una “pelada” que tenía Berón en la cabeza producto de que el día que llegó al mencionado lugar de cautiverio le tiraron agua hirviendo en la cabeza y en la boca produciéndole una herida que Acuña pudo ver.

USO OFICIAL

*** Hechos que perjudicaron a Ana María Sosa de Reynaga y Ángel Vicente Manfredi** (CASOS 34 y 35) Causa: "Bussi, Menéndez y otros s/privación ilegítima de la libertad, homicidio agravado y otros delitos en perjuicio de Ana María Sosa de Reynaga y de Ángel Vicente Manfredi" Expte. nº 1.123/5 acumulado Expte. nº 1.124/5.

Ana María Sosa era argentina, DNI nº 9.873.884, a la fecha de los hechos tenía 38 años de edad, se domiciliaba en calle Italia nº 2.920 de San Miguel de Tucumán, era profesora en ciencias de la educación y trabajaba en la Escuela Normal Juan B. Alberdi de Tucumán. Militaba en el Partido Comunista. Estaba casada con el Dr. Carlos Alberto Reynaga, médico, y tenía tres hijos.

Ángel Vicente Manfredi era argentino, DNI nº 7.086.296, a la fecha de los hechos tenía 34 años de edad, se domiciliaba en calle Evaristo Carriego nº 1.050 (Bº Sarmiento) de San Miguel de Tucumán, era técnico ferroviario de los talleres de Tafí Viejo y estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. Militaba en el Partido Comunista.

Hechos: El día 8 de agosto de 1976 Ana María Sosa de Reynaga y Ángel Vicente Manfredi se encontraban en la Colonia 2 del Ingenio Concepción, llevando adelante una celebración con motivo del día del niño en casa de uno de los vecinos del lugar. Aproximadamente a las 18.30 de ese día un grupo de individuos armados ingresaron a ese domicilio y, amenazando de muerte a todos los presentes, secuestraron a ambos. Les pusieron bolsas en la cabeza, les ataron las manos con sogas y los empujaron al interior del auto donde se movilizaban. El mismo 8 de agosto de 1976, fue allanada la casa donde vivía el Sr. Manfredi por personal uniformado.

Primeramente, las víctimas fueron llevadas a la Jefatura de Policía donde permanecieron detenidas, para ser luego trasladadas al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Al momento de los hechos, a la víctima Ana María Sosa de Reynaga le faltaban los pechos a causa de un cáncer de mamas; estaba casada con el Dr. Carlos Alberto Reynaga quien era médico, y tenía el consultorio en calle Las Piedras de esta ciudad junto a su amigo, médico también, Dr. Desjardins. Ambas víctimas fueron vistas e identificadas entre los detenidos clandestinos del CCD Arsenal. Al día de hoy Ana María Sosa de Reynaga y Ángel Vicente Manfredi continúan desaparecidos.

Prueba: (i) Legajo 5729 de la CONADEP de fs. 1/6; Denuncia del Sr. Manfredi, padre de Ángel Vicente, a fs.77/78 donde se especifican condiciones del secuestro; (ii) Denuncia del padre de Ángel Vicente Manfredi a fs. 78 y vta., donde especifica que la esposa de Manfredi y sus tres hijos menores fueron testigos del allanamiento de la casa de Manfredi; (iii) Declaración testimonial de Diana Elsa Fabio a fs. 29 a 34 quien, a dos días de estar detenida en Arsenal Miguel de Azcuénaga, pudo saber que trasladaron a Sosa de Reynaga y Manfredi al mismo lugar, pudiendo hablar con Sosa en dos oportunidades y escuchando cuando Manfredi se identificaba; luego señala que el día 22 de agosto de 1976, vuelve a hablar con la Sra. Sosa de Reynaga, oportunidad que le pidió que si salía en libertad viera a sus hijos que eran tres Lucía, Diego y Sebastián., esa fue la última vez que escuchó su voz, tampoco volvió a escuchar la voz de Manfredi; (iv) Declaración testimonial

de María Cristina Rodríguez Román de Fiad a fs. 26/28, quien relata que en la celda del lado de la suya se encontraba Ana María Sosa Reynaga, señalando que a la fecha de su liberación (27/10/76), seguía en el lugar Ana María Sosa; (v) Declaración testimonial de Nora Alicia Cajal a fs. 53/59, donde Cajal se refiere a la "Sra. D'Jardins", a quien describe como una mujer que no tenía mamas porque habría padecido cáncer de mamas, descripción que coincide con el padecimiento que aquejó a Ana María Sosa (quien era amiga de la Sra. D'Jardins), viéndola la testigo por última vez un 30 de noviembre de 1976, fecha de la liberación de la testigo.

*** Hechos que perjudicaron a Ángel Alfonso Medina Gutiérrez** (CASO 36) Causa: "Cerrizuela de Medina Asunción de Jesús s/su denuncia por secuestro y desaparición de Ángel Alfonso Medina Gutiérrez" Expte. nº 1.620/05.

Ángel Alfonso Medina Gutiérrez, argentino, DNI nº 8.059.213, a la fecha de los hechos tenía 30 años de edad, se domiciliaba en calle Tucumán nº 53 de la localidad de Monteros, era empleado del Banco Nación y militaba en el Partido Comunista.

Hechos: El 27 de septiembre de 1976 un grupo de personas armadas pertenecientes a las fuerzas de seguridad ingresaron al domicilio de la familia Gutiérrez y tras golpear a los niños y a la Sra. Cerrizuela de Gutiérrez, se llevaron secuestrado a Ángel Alfonso Medina Gutiérrez.

Posteriormente el mismo fue trasladado al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde fue visto e identificado entre los detenidos clandestinos por Alberto Argentino Augier. Al día de hoy continúa desaparecido.

Prueba: (i) Denuncia de la Sra. Azucena Cerrizuela de Gutiérrez de fs. 1 y de fs. 9/13; (ii) Declaración de Julia Medina Gutiérrez de fs.103; (iii) Declaración de Alberto Augier de fs. 74/95.

*** Hechos que perjudicaron a Fortunato Leandro Fote** (CASO 37) Causa: "Pacheco de Fote María Luisa s/su denuncia por secuestro y desaparición de Fortunato Leandro Fote" Expte. nº 180/06.

Fortunato Fote, argentino, DNI nº 7.065.685, a la fecha de los hechos tenía 38 años de edad, residía José León Suárez, provincia de Buenos Aires, militaba en el PRT-ERP y había integrado la comisión directiva del Sindicato del Surco del Ingenio San José, habiéndose desempeñado también como diputado provincial durante la presidencia de Illia.

Hechos: Presumiblemente en ocasión en que Fortunato Leandro Fote se encontraba en una estación de trenes en la ciudad de Buenos Aires esperando por una cita con personas de Tucumán fue secuestrado, alrededor del día 1º de diciembre de 1976.

Fue trasladado al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde fue visto e identificado entre los detenidos clandestinos entre los meses de enero y febrero de 1977 por María Angélica Mazzamuto, Antonio Raúl Romero, Juan Martín y Osvaldo Humberto Pérez. Aparentemente Fote estaba quebrado psicológicamente por las torturas de las que había sido víctima. En una ocasión, en medio de una sesión de tortura, fue "careado" con Antonio Romero, negando conocerlo. El comandante de Gendarmería

USO OFICIAL

Sabbadini le encomendó que escribiese una biografía sobre su vida, utilizando una droga (probablemente Pentotal) para interrogarlo.

Prueba: (i) Denuncia de María Luisa Pachecho de Fote a fs. 13; (ii) Declaración de María Mercedes del Valle Pintos ante Comisión Bicameral a fs. 23; (iii) Habeas Corpus preventivo presentado en el año 1974 caratulado "Fote Fortunato Leandro Por recurso de habeas corpus" Expte. nº 675/74 a fs. 31/54; (iv) Declaración de María Angélica Mazzamuto ante el Sr. Juez Federal nº 1 de fs. 59/61, quien señala que el mismo estaba quebrado y aparentemente era sacado por sus captores a reconocer personas; (v) Declaración de Antonio Raúl Romero ante el Juez Federal nº 1 de fs. 62/65, en la que describe el "careo" al que fuera sometido junto con Fote; (vi) Descargo por escrito de Osvaldo Humberto Pérez a fs. 66/73 donde relata que conocía de antes a Fote y relata la manera en que era obligado a realizar su "biografía" la que él mismo (Pérez) tipeaba para entregársela a Sabbadini; (vii) Denuncia de Juan Antonio Fote ante Fiscalía Federal nº 1 a fs. 75/77, donde relata la manera en que Leandro Fote habría sido secuestrado en la ciudad de Buenos Aires; (viii) Declaración ante el Sr. Juez Federal nº 1 de María Claudia Fote de Carabajal a fs. 83/84; (ix) Testimonio y declaraciones de Juan Martín en causa "Martín Juan s/su denuncia por privación ilegitima de la libertad" Expte. Nº 401.921/04, quien dice que vio a Leandro Fote en febrero de 1977 y que había sido secuestrado en Buenos Aires y traído a Tucumán; (x) Declaración de Alejandro Federico Alderete Soria a fs. 150/151 del Expte. nº 592/04 (Augier), donde relata que los guardias del CCD Arsenal le comentaron que Fote estaba enterrado en el propio Arsenal; (xi) Declaración ante Juez Federal de Héctor Oscar Justo a fs. 83/84 de Expte. nº 1.477/05 (Justo) quien relata que en otro de los pabellones del CCD estaba uno de los hermanos Fote.

*** Hechos que perjudicaron a Damián Octavio Márquez** (CASO 38) Causa: "Montenegro de Márquez Alicia Marta s/su denuncia" Expte. nº 1.484/03 acumulada "Márquez Damián s/su secuestro y desaparición" Expte. nº 06/84.

Damián Octavio Márquez, argentino, DNI nº 6.943.473, a la fecha de los hechos tenía 42 años de edad, se domiciliaba en San Miguel de Tucumán, era dirigente del Partido Justicialista y se había desempeñado como Secretario General de la CGT de Tucumán y como Senador provincial por el FREJULI.

Hechos: El 13 de enero de 1977 fue secuestrado en la vía pública en la intersección de Avda. Colón y calle Las Piedras siendo testigo del hecho el Sr. Juan Andrés Luján.

Posteriormente fue trasladado al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde fue visto e identificado entre los detenidos clandestinos y habría sido asesinado en un fusilamiento producido a fines del mes de marzo, principios de abril de 1977. Surge sobradamente de estas actuaciones, que el Sr. Damián Márquez, fue secuestrado el día 13 de enero de 1977 y luego estuvo detenido ilegalmente en el Centro Clandestino de Detención "El Arsenal". Su permanencia en dicho lugar fue corroborada por los testigos: Alberto Augier quien escuchó a un guardia decir que estaba cautivo en la celda

nº 60 y lo habían traído en diciembre de 1976 aproximadamente cuando hubo un recambio grande de prisioneros, Matilde Palmieri de Cerviño quien lo vio en el centro clandestino que funcionaba en el arsenal Miguel de Azcuénaga en un estado deplorable debido a las torturas y Justo Héctor Oscar declara que a los pocos días de haber llegado al CCD escuchó que habían traído al ex senador provincial Damián Márquez, con quien pudo intercambiar unas palabras, diciéndole éste que había estado detenido en la Jefatura de policía; que al día siguiente sacaron a varios de los detenidos, entre ellos Márquez y se escucharon ráfagas de ametralladoras, no volviéndolo a ver y quienes lo vieron en cautiverio durante el mes de Marzo de 1977. También el Sr. Alejandro Federico Alderete Soria narra que durante su cautiverio en el Arsenal Miguel de Azcuénaga otros detenidos le dijeron que Márquez había estado allí.

Pruebas: Denuncia de Alicia Marta Montenegro de Márquez de Fs. 1, 198/199 Fs 292 Denuncia de Alicia Marta Montenegro de Márquez ante Familiares de detenidos y desaparecidos de la provincia de Tucumán Fs 293 Denuncia de Alicia Marta Montenegro de Márquez ante la Comisión Bicameral de la Legislatura de Tucumán Fs 293/294. Quien denuncia de quien denuncia el secuestro de la Victima Declaración testimonial de Juan Andrés Luján de fs. 128/129 quien fuese testigo presencial del secuestro; Habeas Corpus de fs. 373/389) Testimonio de Alberto Augier de fs. 274/278 Declaración testimonial de Alberto Argentino Augier de fecha 13 de mayo de 2004 Fs 337 denuncia ante la Comisión Bicameral de la Legislatura de Tucumán de Alberto Argentino Augier Fs 303/350; Declaración testimonial de Héctor Oscar Justo de Fs. 284/285 y de fs. 357/358; Declaración testimonial de Matilde de los Ángeles Palmieri Juárez de Cerviño de fecha 5 de enero de 1984 fs. 307 y ss. Declaración de Matilde Palmieri de Cerviño ante la denominada CAUSA 13. Declaración ante Juez Federal de Héctor Oscar Justo obrante a fs. 357/358 de la presente causa quienes compartieron cautiverio con la victima en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Causa “Márquez Damian Octavio por Recurso de Habeas Corpus Expte 1154/79 Fs 363 Declaración testimonial de Alejandro Federico Alderete Soria en fecha 29 de septiembre de 2006 quien narra que durante su cautiverio en el Arsenal Miguel de Azcuénaga otros detenidos le dijeron que Márquez había estado allí.

*** Hechos que perjudicaron a Juan Faustino Rodríguez y Pedro Ricardo Rodríguez** (CASOS 39 y 40) Causa: "Rodríguez Juan Faustino y Rodríguez Pedro Ricardo s/sus secuestros y desapariciones" Expte. nº 1.770/04 y sus Actuaciones Complementarias.

Juan Faustino Rodríguez era argentino, DNI nº 3.504.810, (a) “Toro”, a la fecha de los hechos tenía 53 años de edad, se domiciliaba en la localidad de León Rougés (Departamento Monteros), era agricultor y se desempeñaba como Secretario General del Sindicato de Obreros del Surco de Huasa Pampa.

Pedro Ricardo Rodríguez era argentino, DNI nº 11.950.727, a la fecha de los hechos tenía 21 años de edad, vivía con su padre Juan Faustino en León Rougés, era estudiante secundario, agricultor y Tesorero del mismo sindicato.

USO OFICIAL

Hechos: El día 25 de enero de 1977 un grupo de personas armadas y encapuchadas que se identificaron como de las fuerzas de seguridad, irrumpieron en el domicilio de la familia Rodríguez sito en la localidad de León Rougés y secuestraron a Pedro Ricardo Rodríguez, de 21 años de edad. Días después, el 16 de febrero de 1977 nuevamente un grupo de policías y otros sujetos irrumpieron en el mismo domicilio y secuestraron al padre del primero, Juan Faustino Rodríguez. Entre los raptores de este último hecho se encontraban el comisario de León Rougés Miguel Ángel Moreno, el civil Alfredo Lorini y por dichos de terceros los familiares de las víctimas supieron que habían intervenido también los policías Roberto Heriberto Albornoz, Héctor Simón Juárez, Carlos Roberto Andrada y Oscar Rodríguez.

Ambos fueron trasladados primeramente al CCD que funcionaba en el Ex Ingenio Nueva Baviera, posiblemente hasta marzo de 1977. Posteriormente fueron llevados al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde habrían sido vistos e identificados entre los detenidos clandestinos entre los meses de marzo y abril de 1977 por Alberto Argentino Augier y Enrique Godoy.

Al día de hoy Pedro Ricardo y Juan Faustino Rodríguez continúan desaparecidos.

Prueba: (i) Denuncia de Mercedes del Carmen Serrano de Rodríguez ante Familiares de desaparecidos y detenidos de la provincia de Tucumán a fs. 3; (ii) Denuncia de Mercedes del Carmen Serrano de Rodríguez ante CONADEP a fs. 4; (iii) Denuncia de Roberto Estanislao Rodríguez ante CONADEP a fs. 6; (iv) Denuncia de Mercedes del Carmen Serrano de Rodríguez ante CONADEP a fs. 16; (v) Denuncia de Roberto Estanislao Rodríguez ante CONADEP a fs. 18; (vi) Denuncia de Mercedes del Carmen Serrano de Rodríguez y Catalina del Carmen Rodríguez ante Familiares de desaparecidos y detenidos de la provincia de Tucumán a fs. 20; (vii) Declaración de Mercedes del Carmen Serrano de Rodríguez ante la Comisión Bicameral de Tucumán a fs. 21/22 quien fuese testigo presencial del secuestro de Juan Faustino Rodríguez y Pedro Ricardo Rodríguez; (viii) Declaración testimonial de Mercedes del Carmen Serrano de Rodríguez ante Juzgado Federal a fs. 38 quien aporta datos de los secuestradores; (ix) Denuncia de Catalina del Carmen Rodríguez ante Familiares de desaparecidos y detenidos de la provincia de Tucumán a fs. 43; (x) Testimonio presentado por escrito de Mercedes del Carmen Serrano de Rodríguez a fs. 44/46 sobre el secuestro de Juan Faustino Rodríguez y Pedro Ricardo Rodríguez donde se indican las gestiones realizadas para dar con su paradero; (xi) Declaración de Berta Elina Belmonte de Navarro ante la Comisión Bicameral de la Legislatura de Tucumán a fs. 50 y ss. quien relata su secuestro aportando datos sobre las actividades del imputado Miguel Ángel Moreno; (xii) Denuncia ante la Comisión Bicameral de la Legislatura de Tucumán de Roberto Estanislao Rodríguez sobre el secuestro de Juan Faustino Rodríguez y Pedro Ricardo Rodríguez a fs. 56 y ss.; (xiii) Declaración de Mercedes del Carmen Serrano de Rodríguez ante la Comisión Bicameral De La Legislatura De Tucumán a fs. 81 quien fuese testigo presencial del secuestro de Juan Faustino Rodríguez y Pedro Ricardo Rodríguez; (xiv) Declaración de Elisa Antonia Medina

de Jiménez a fs. 82 quien declara que el día de su secuestro es trasladada en un vehículo donde llevaban a otras dos personas, que en un momento del trayecto se detienen, los hacen descender y les piden que se identifiquen, que uno de los otros dos detenidos se identifico como “Juan Rodríguez” y cuando le preguntaron por su apodo dijo “Toro”; (xv) Declaración testimonial de fecha 29 de septiembre de 2005 de Roberto Estanislao Rodríguez a fs. 90 donde aporta datos de los autores del secuestro; (xvi) Declaración testimonial de fecha 19 de diciembre de 2005 de Berta Elina Belmonte de Navarro a fs. 100; (xvii) Declaración de Alberto Argentino Augier a fs. 132/154 quien relata haber visto a las victimas en el centro clandestino que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga; (xviii) Denuncia de Emma del Valle Aguirre presentada en fecha 16 de abril de 2004 ante el Juzgado federal Nº 1 de Tucumán a fs. 156, donde declara que en circunstancias de su secuestro fue trasladada con el Sr. Juan Rodríguez y mientras permaneció secuestrada en el centro clandestino que funcionaba en el ex Ingenio Nueva Baviera tuvo conocimiento que en el lugar no solo estaba Juan Rodríguez sino también su hijo; (xix) Denuncia de Manuel Eugenio Olivera de fecha 25 de abril de 2006 a fs. 159 y ss. quién relató que compartió cautiverio en el centro clandestino que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga con un padre y un hijo de Monteros.

USO OFICIAL

*** Hechos que perjudicaron a Héctor Oscar Justo** (CASO 41) Causa: "Justo Héctor Oscar s/su denuncia por secuestro, tortura y otros delitos" Expte. nº 1.477/05.

Héctor Oscar Justo, argentino, DNI nº 7.068.259, a la fecha de los hechos tenía 32 años de edad, era empleado de la Cámara de Diputados de la provincia de Tucumán, estaba casado y era padre de dos hijos.

Hechos: El 25 de marzo de 1977, aproximadamente a las 21.30 horas, Héctor Oscar Justo se encontraba en la vía pública, en la intersección de calles Córdoba y Monteagudo de esta ciudad, cuando fue atacado y encañonado por dos o más individuos por la espalda, obligándolo a ascender a un vehículo. En él, previo vendarle los ojos y esposarlo, fue trasladado al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga.

En ese lugar fue torturado con picana eléctrica en varias partes de su cuerpo, mientras era interrogado sobre su actividad política y sobre su conocimiento respecto al accionar subversivo. Sus torturadores le decían que habían asesinado a su madre, a su esposa y a sus dos hijos, con el objeto de quebrarlo moralmente. Posteriormente fue ubicado en los boxes junto a otros prisioneros. Compartió cautiverio con Damián Márquez, a quien trajeron a los pocos días de haber ingresado él, con Alberto Argentino Augier y Luis Antonio Cantos Carrascosa, quien le dijo que también estaban en el lugar los hermanos Germán y Anabel Cantos. Escuchó un fusilamiento masivo de detenidos mientras estuvo allí.

Fue liberado a los 34 días de cautiverio, en las cercanías de la localidad de Los Nogales. A causa de las torturas recibidas quedó con secuelas en su salud, incluida la imposibilidad de engendrar hijos.

Prueba: (i) Denuncia de Héctor Oscar Justo ante Comisión Bicameral (Legajo 418-J-84) a fs. 1/8; (ii) Declaración de Héctor Oscar Justo ante Juzgado Federal a fs. 83/84 y ratificación de sus denuncias a fs. 93.

*** Hechos que perjudicaron a Matilde de los Ángeles Palmieri de Cerviño** (CASO 42) Causa: "Palmieri de Cerviño Matilde de los Ángeles s/su denuncia por privación ilegítima de la libertad" Expte. nº 779/07.

Matilde de los Ángeles Palmieri de Cerviño, argentina, L.C. Nº 8.977.317, a la fecha de los hechos tenía 57 años de edad, era docente, rectora del Instituto Modelo (enseñanza secundaria). Desde 1972 participaba activamente de organizaciones de defensa de detenidos políticos.

Hechos: El día 11 de marzo de 1977 cuatro personas enmascaradas y armadas ingresaron al domicilio de Matilde Palmieri de Cerviño, sito en calle Junín n° 925 de esta ciudad, quienes procedieron a maniatarla, vendarle los ojos e introducirla a un automóvil en el cual se trasladaban los captores.

Fue llevada al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga y alojada en una especie de cubículo donde pudo percibir la presencia de por lo menos otros veinte detenidos en similares condiciones. Allí fue interrogada sobre sus hijos y las actividades de su familia. Durante su cautiverio pudo identificar entre los detenidos al Sr. Archetti, profesor de filosofía oriundo de la ciudad de Santiago del Estero quien le relató que había sido secuestrado cuando salía de jugar al tenis en el club social de la Provincia de Santiago del Estero. Fue liberada el 18 de marzo de ese mismo año en unos cañaverales próximos a Villa Alberdi de esta Provincia.

Prueba: (i) Denuncia de Matilde de los Ángeles Palmieri de Cerviño a fs. 25/28 y denuncia aclaratoria a fs. 439/441; (ii) Informe militar sobre actividades de la familia Cerviño a fs. 71.

*** Hechos que perjudicaron a Baltasar Acuña** (CASO 43) Causa: "Autores desconocidos s/privación ilegítima de la libertad víctima: Acuña Baltasar" Expte. nº 1.994/85.

Baltazar Acuña, argentino, DNI nº 8.082.022, a la fecha de los hechos tenía 33 años de edad, se domiciliaba en El Manantial, era trabajador metalúrgico y militaba en el Partido Comunista.

Hechos: El día 28 de junio de 1977 entre las 10.30 y las 11.00 horas, Baltasar Acuña se encontraba en la Terminal de Ómnibus de Tucumán esperando una encomienda con prensa del Partido Comunista. En esa situación fue interceptado por un grupo de aproximadamente 10 personas vestidas de civil que afirmaron ser de la policía de Tucumán (aunque tenían tonada aporteñada) quienes luego de identificarlo y de quitarle su documentación personal lo obligaron a dirigirse en su bicicleta a la intersección de avenida Colón y calle Crisóstomo Álvarez siendo “escoltado” bajo amenazas por sus captores. Finalmente, luego de permanecer en ese lugar hasta las 13.00 horas, lo obligaron a subir en una camioneta de la policía en la que se movilizaban (junto a varios vehículos más), donde

lo maniataron y le vendaron sus ojos. Lo trasladaron al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, el que pudo reconocer por ser un conocedor de la topografía del lugar y que describe dividido en dos pabellones y custodiado por personal de Gendarmería Nacional.

En el CCD Arsenal fue interrogado y torturado desde el momento mismo de su llegada por un lapso de una hora y media al menos. Fue sometido a golpes de puño, patadas, cachiporrazos y aplicación de picana eléctrica en todo su cuerpo (sienes, boca, orejas, tetillas), siendo interrogado sobre el funcionamiento del Partido Comunista, nombres, domicilios y responsables. A uno de sus torturadores le faltaba un dedo. Posteriormente lo trasladaron a un pabellón en el que había un gran número de detenidos, donde permaneció tirado en el suelo. Le asignaron el nº 50. Todos los días, al menos hasta mediado de agosto, fue sometido a sesiones de tortura. El día siguiente de su detención fue llevado en un automóvil modelo Torino color gris a plaza Belgrano a fin de dar con una persona.

Compartió cautiverio con María Isabel Jiménez de Soldatti, Oscar Berón y José Segundo Cruz; con una anciana de 72 años de edad que había sido secuestrada al no encontrar a sus hijas militantes de la Juventud Peronista; un hombre de apellido Jotar o Joter que era delegado sindical de la empresa Coca Cola, tenía seriamente afectada la rodilla derecha a causa de las torturas y habría sido liberado; un “turquito” de aproximadamente 60 años de edad que era comerciante de chacinados de cerdo de la feria de Medina; una mujer de nombre Yolanda, embarazada de siete meses y esposa de un policía de San José; y además había otras dos mujeres embarazadas quienes eran torturadas sin consideración por su situación. El día 9 de septiembre de 1977 fue liberado en las proximidades de El Manantial.

USO OFICIAL

Prueba: (i) Denuncia de Baltasar Acuña ante la Comisión Bicameral de Tucumán a fs. 1/6. (ii) Denuncia del mismo ante Juzgado Federal n° 1 de Tucumán, a fs. 34 y 35.

*** Hechos que perjudicaron a Nemesio Humberto Barrionuevo** (CASO 44) Causa: "Barrionuevo Nemesio Humberto s/su secuestro y desaparición" Expte. nº 1.902/4 acumulado Expte. nº 694/07.

Nemesio Humberto Barrionuevo, argentino, DNI nº 7.077.283, a la fecha de los hechos tenía 36 años de edad, se domiciliaba en calle Callao nº 256 de Tafí Viejo, era obrero ferroviario y trabajaba en los talleres de Tafí Viejo.

Hechos: El 17 de marzo de 1976, un grupo armado irrumpió violentamente en el domicilio de Pedro Mario Barrionuevo, quien fue golpeado para que dijera si era Humberto Barrionuevo, a lo que contestó que no, que Humberto era su hermano. Estos sujetos obligaron a Pedro Barrionuevo a acompañarlos e indicarles el domicilio de su hermano bajo amenaza de regresar y matar a su esposa y a su hijo de dos años si se negaba o los engañaba. En esas condiciones, este mismo grupo de personas encapuchadas y fuertemente armadas ingresó en el domicilio de la familia Barrionuevo de calle Callao nº 265, Tafí Viejo y secuestró a Nemesio Humberto Barrionuevo enfrente de sus familiares.

Habría sido trasladado al CCD que funcionaba en la Jefatura de Policía de Tucumán, registrándose su ingreso y su “disposición final”. Hugo Manuel Díaz, miembro del Partido Comunista luego de ser liberado el 24 de marzo de 1976 se presentó en la casa del primo de Barrionuevo, Miguel Guirense, y le informó que había estado detenido con Nemesio Humberto Barrionuevo quien se encontraba muy herido.

A principios de abril de 1976 habría sido trasladado al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Orlando Santillán, carpintero del Arsenal, informó que una semana después del 24 de marzo de 1976 supo que Humberto Barrionuevo había estado internado en el Hospital Militar y que se encontraba muy débil.

Prueba: (i) Denuncia ante familiares de desaparecidos y detenidos de Tucumán de Pedro Mario Barrionuevo obrante a fs. 2; (ii) Denuncia de Haydé del Carmen Arce de Barrionuevo ante la Comisión Bicameral a fs. 16; (iii) Declaración de Pedro Mario Barrionuevo ante la Comisión Bicameral a fs. 18 y 19 testigo presencial del secuestro; (iv) Legajo CONADEP nº 6.082; (v) “Índice de Declaraciones de DS (Delincuentes Subversivos)” elaborada en el ámbito del CCD Jefatura de Policía de Tucumán, a fs. 1/9 de causa: “Fiscal Federal s/solicita investigación” Expte. nº 401.109/08, donde a fs. 1 figura la víctima con el número de orden 22, apodo “Cabezón”, seguido de las siglas “DF”, es decir, que se había ordenado su ejecución.

*** Hechos que perjudicaron a José Almerico** (CASO 45) Causa: "Abraham de Almerico María s/su denuncia por secuestro y desaparición de José Almerico" Expte. nº 575/07.

José Almerico, argentino, DNI nº 7.063.584, (a) “Tucho” o “Tincho”, a la fecha de los hechos tenía 47 años de edad, se domiciliaba en calle Marcos Paz nº 1.941 de San Miguel de Tucumán, era camionero y trabajaba como repartidor de bebidas gaseosas en un camión de su propiedad.

Hechos: El 10 de abril de 1976 José Almerico se encontraba en su domicilio de calle Marcos Paz n° 1.941 de esta ciudad. En horas de la madrugada un grupo de personas vestidas de civil irrumpió en ese domicilio sito y se lo llevó secuestrado.

Posteriormente fue trasladado al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde fue identificado entre los secuestrados por Antonia del Valle Barrionuevo y por Juan Martín hasta febrero de 19. En el CCD fue sometido a torturas, acusado de ser correo de guerrilleros, privándoselo de comida. Fue visto hasta diciembre de 1976 por Barrionuevo y por Juan Martín hasta febrero de 1977. Al día de hoy José Almerico continúa desaparecido.

Prueba: (i) Denuncia de María Raymunda Abraham de Almerico ante Comisión Bicameral de Tucumán a fs. 2 donde denuncia el secuestro de la victima; (ii) Recurso de Habeas Corpus Interpuesto a favor de José Almerico; (iii) Testimonio de Juan Martín Martín a fs. 69, quien refiere haber compartido cautiverio con la víctima en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, identificándolo como un camionero de unos 45 años de sobrenombre “Tucho”; (iv) Testimonio de Antonia del Valle Barrionuevo obrante a fs

2.738 de la presente causa principal, Expte. nº 443/84, quien refiere haber compartido cautiverio entre el 16 de septiembre y el 8 de diciembre de 1976, en el centro clandestino que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga con un hombre apodado “Tincho” y al cual no daban de comer.

*** Hechos que perjudicaron a Juan de Dios Gómez** (CASO 46) Causa: "Batallán María Angélica s/su denuncia por secuestro y desaparición de Juan De Dios Gómez" Expte. nº 566/07.

Juan de Dios Gómez, argentino, DNI nº 10.635.730, a la fecha de los hechos tenía 23 años de edad, se domiciliaba en la localidad de Santa Lucía, Departamento Monteros, y trabajaba como obrero del Ingenio Santa Lucía.

Hechos: El 10 de agosto de 1976 un grupo de militares al mando del Teniente Flores detuvieron a Juan de Dios Gómez en su lugar de trabajo y lo llevaron al domicilio de sus padres, el cual fue requisado por los raptores y luego de ello se retiraron llevándose secuestrado a Gómez.

Posteriormente Juan de Dios Gómez fue trasladado al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, siendo visto e identificado entre los detenidos clandestinos por Enrique Godoy. En ese lugar fue sometido a crueles torturas. En una de esas ocasiones, los guardias lo colgaron de los testículos y lo sacaron luego del lugar en muy mal estado de salud. Fue la última vez que se lo vio con vida, habiendo fallecido probablemente a causa de esa tortura.

Prueba: (i) Denuncia ante CONADEP (Legajo nº 5.794) de María Angélica Batallan a fs. 2/3, ante Familiares de desaparecidos y detenidos a fs. 5, y ante la Comisión Bicameral de la Legislatura de Tucumán (Legajo 260-B-84) a fs. 95/97; (ii) Denuncia ante la Comisión Bicameral de la provincia de Tucumán de Enrique Godoy a fs. 135 y ss., quien compartió cautiverio con Juan de Dios Gómez en el centro clandestino que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga.

*** Hechos que perjudicaron a Enrique Godoy** (CASO 47) Causa: "Godoy Enrique s/denuncia por privación ilegítima de la libertad y otros delitos" Expte. nº 1.553/05 y sus Actuaciones Complementarias.

Enrique Godoy, argentino, DNI nº 6.969.533, (a) “Flaco”, a la fecha de los hechos tenía 47 años de edad, se domiciliaba en Santa Lucía, Departamento Monteros, y trabajaba como obrero en el Ingenio Santa Lucía.

Hechos: El 15 de agosto de 1976, un grupo de personas pertenecientes al Ejército, portando armas cortas y largas, ingresaron al domicilio de Enrique Godoy en la localidad de Santa Lucía, Departamento Monteros, llevándolo secuestrado en un vehículo. Primeramente fue conducido a la Base militar que funcionaba en el ex Ingenio Santa Lucía, donde permaneció unas horas, sin haber sido objeto de torturas.

Luego fue nuevamente subido a un vehículo y luego de varias horas de trayecto, estando maniatado y vendado los ojos, fue obligado a bajar en el CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga.

USO OFICIAL

Allí le asignaron el n° 75 y lo metieron en un box de aproximadamente un metro por un metro y medio. Allí fue sometido a torturas, siendo interrogado por la muerte de Viola y de su hija, hecho desconocido para él, y por gente de Santa Lucía, particularmente por René Orozco y Juan Orozco. Compartió cautiverio con Bernardino Martínez y Juan de Dios Gómez, a quienes pudo reconocer en el CCD. A su vez Héctor René Orozco y Julio Guillermo Suárez lo vieron a él entre los detenidos. Entre los jefes del lugar reconoció al Teniente 1° Ariel Valdiviezo.

Respecto a la causa de su secuestro indica que se origina en un problema con el Teniente Didio Herminio Corregidor, oriundo de Santiago del Estero, con quien había tenido un problema personal con anterioridad a su secuestro y quien lo había amenazado con “hacerlo llevar” y “hacerlo perder su trabajo”, lo que sucedió con posterioridad. Fue liberado a principios de noviembre de 1976.

Prueba: (i) Denuncia ante la Comisión Bicameral de la provincia de Tucumán de Enrique Godoy a fs. 2 y ss; (ii) Acta de reconociendo efectuado por Enrique Godoy ante la Comisión Bicameral de la Legislatura de Tucumán de la Base Militar de Santa Lucia a fs. 6; (iii) Denuncia ante la CONADEP de Enrique Godoy a fs. 16 y ss; (iv) Declaración testimonial de Julio Guillermo Suárez de fecha 6 de marzo de 2008 a fs. 150 y ss. quien compartió cautiverio con la víctima en el CCD Arsenal; (v) Declaración testimonial de Héctor René Orozco de fecha 9 de noviembre de 2009 a fs. 174 y ss., quien compartió cautiverio con la víctima en el CCD Arsenal.

*** Hechos que perjudicaron a Manuel Julio Díaz** (CASO 48) Causa: "Díaz de Naranjo Ángela Fermina s/denuncia por secuestro y desaparición de Díaz Manuel Julio" Expte. nº 1.374/5.

Manuel Julio Díaz, argentino, DNI nº 7.083.995, (a) “Manguelo”, a la fecha de los hechos tenía 35 años de edad, se domiciliaba en calle Constitución nº 356 de Tafí Viejo, trabajaba en los talleres ferroviarios de Tafí Viejo y tenía una carpintería en esa misma ciudad, en calle Perú y Avenida Roca. Estaba casado y tenía dos hijas.

Hechos: El 8 de septiembre de 1976 Manuel Julio Díaz se encontraba en su domicilio de Tafí Viejo junto a su esposa, sus dos hijas y su madre. Aproximadamente a la 1.00 hora de la madrugada irrumpió en la vivienda un grupo de entre cinco o seis personas armadas, con uniformes militares y policiales, que se identificaron como de la policía, entre ellos el oficial Ramón Jodar (quien iba de civil) y el agente Pedro Torres ambos prestando servicios en la Unidad Regional Oeste de la policía, mientras otra decena entraba por los fondos de la casa y amenazaban a sus ocupantes, llevándose a la víctima a la cocina quien aparentemente comandaba el operativo. Previo a ello el mismo grupo había saqueado la carpintería propiedad de Díaz, lo que asimismo hicieron en su casa, robando joyas y dinero en efectivo. Manuel Julio Díaz, previo ser maniatado y vendados sus ojos, fue obligado a subir en el baúl de uno de los tres vehículos en los que sus secuestradores se movilizaban.

Posteriormente fue trasladado al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, según relatara en su momento Ramón Antonio Basualdo quien fuera secuestrado la misma noche que se llevaron a Manuel Díaz.

Pese a las innumerables gestiones iniciadas por sus familiares, al día de hoy Manuel Julio Díaz permanece desaparecido.

Prueba: (i) Denuncia de Ángela Fermina Díaz de Naranjo ante la Comisión Bicameral (legajo 54-D-84) a fs. 1/2, en la que además de describir los hechos reconoce a los sujetos intervinientes; (ii) Ampliación de la denuncia ante Comisión Bicameral a fs. 4, donde la denunciante señala que Ramón Antonio Basualdo, secuestrado junto a su Díaz, le dijo que éste había sido llevado al Arsenal Miguel de Azcuénaga; (iii) Segunda ampliación de denuncia ante Comisión Bicameral a fs. 18; (iv) Denuncia de la misma ante CONADEP (Legajo nº 5018) a fs. 27; (v) Copia de denuncia ante Familiares de Desaparecidos y Detenidos de Tucumán a fs. 33; (vi) Ampliación de denuncia ante CONADEP a fs. 35; (vii) Causa judicial "Díaz Manuel Julio por recurso de habeas corpus" Expte. nº 494/81.

*** Hechos que perjudicaron a Benigno Alberto Pereyra** (CASO 49) Causa: "Bussi, Menéndez y otros s/privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Alberto Pereyra" Expte. nº 1.059/06.

Benigno Alberto Pereyra, argentino, DNI nº 12.188.632, (a) "Peto" o "Beto", a la fecha de los hechos tenía 20 años de edad, era estudiante y obrero del Ingenio Aguilares.

Hechos: El 15 de octubre de 1976 en horas de la madrugada el Ingenio Aguilares fue copado por un operativo militar en respuesta a la explosión de una bomba en la casa del administrador del Ingenio. Dicho grupo de militares estaba armado y comenzó a interrogar a los obreros sobre el Alberto Pereyra (a) "Peto" o "Beto". Cuando lograron individualizar a Pereyra, le ataron las manos, le vendaron los ojos y lo sacaron del lugar a punta de bayoneta para introducirlo en el baúl de un automóvil Torino color blanco.

Alberto Pereyra fue trasladado primeramente al CCD que funcionaba en el Ex Ingenio Nueva Baviera, en Famaillá, donde compartió cautiverio con Felipe Alberto Álvarez y Guillermo Enrique Villagra.

Luego fue llevado al CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde fue visto e identificado entre los detenidos clandestinos del Arsenal Miguel de Azcuénaga por Alberto Argentino Augier. A consecuencia de las torturas sufridas en este último lugar, padecía una úlcera gástrica, habiéndoselo visto por última vez en el mes de marzo de 1977.

Al día de hoy Alberto Pereyra continúa desaparecido.

Prueba: (i) Denuncia de Felipe Alberto Álvarez de fs. 1/8; (ii) Declaración de Guillermo Enrique Villagra de fs. 9/14; (iii) Declaración testimonial de Alberto Augier de fs. 32/53, donde este relata que Pereyra era acusado de poner una bomba en la casa del administrador del Ingenio Aguilares, que estaba allí cuando él llegó y padecía una úlcera gástrica que le ocasionaba grandes dolores, que estaba con vida cuando salió; (iv) Causa judicial "Pereyra Benigno Alberto por recurso de habeas corpus" Expte. nº 445/79 a fs. 99 y ss.

USO OFICIAL

*** Hechos que perjudicaron a Rina Rosa Alarcón** (CASO 50) Causa: "Alarcón Rina Rosa s/su secuestro y desaparición" Expte. nº 1.412/06.

Rina Rosa Alarcón, argentina, DNI nº 6.067.882, soltera, a la fecha de los hechos se domiciliaba en Los Timbos, Concepción (Departamento Chicligasta) y era empleada en una óptica en la ciudad de Concepción.

Hechos: El día 25 de octubre de 1976 Rina Rosa Alarcón se retiró junto al dueño de la óptica "García" en que trabajaba, situada en la intersección de calles Heredia y San Martín de la ciudad de Concepción, en el automóvil de éste. Al llegar al puente sobre el Río Gastona, dos vehículos interceptaron el automóvil, de ellos bajaron dos sujetos que obligaron a la víctima a descender. En esa circunstancia fue secuestrada.

Posteriormente fue trasladada al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde fue vista e identificada entre los detenidos clandestinos por Alberto Argentino Augier y Antonia Barrionuevo. En el CCD fue obligada a repartir la comida a los detenidos. Finalmente fue sacada del Arsenal en el mes de marzo de 1977, probablemente para ser asesinada. Al día de hoy continúa desaparecida.

Prueba: (i) Denuncia de Amalia del Carmen Robin de Alarcón ante Familiares de Desaparecidos y Detenidos de la provincia de Tucumán a fs. 1; (ii) Declaración de la misma ante CONSUFA a fs. 4/5; (iii) Declaración de Antonia Barrionuevo ante el Sr. Juez Federal nº 1 a fs. 16/17, en la que señala que pudo hablar en el CCD con Rina Rosa Alarcón, quien le dijo que su hermano se encontraba en el otro galpón; (iv) Declaración de Alberto Augier de fs. 21/45, en ella se refiere a Rina Rosa Alarcón como una muchacha rubia que colaboraba con "Tito" en el reparto de la comida, que trabajaba en una óptica en Concepción y que fue sacada del centro en marzo de 1977 sin volver a verla; (v) Habeas corpus caratulado "Alarcón Rina Rosa Por recurso de habeas corpus" Expte. nº 1.792/78 a fs.48 a 74; (vi) Declaración testimonial de Alejandro Federico Alderete Soria a fs. 150/151 de Expte. nº 592/04 (Augier) quien dice que en el CCD Arsenal pudo hablar con una chica joven que trabajaba en un negocio de óptica de la calle San Martín de Concepción y que vivía antes de llegar al puente en una entrada que se llamaba "Las Lanzas".

*** Hechos que perjudicaron a Alberto Díaz** (CASO 51) Causa: "Díaz Alberto s/denuncia por privación ilegítima de la libertad y otros delitos" Expte. nº 1.515/05.

Alberto Díaz, argentino, DNI nº 8.085.942, (a) "Negro", a la fecha de los hechos tenía 33 años de edad, se domiciliaba en calle Leocadio Paz 3ª cuadra del Ingenio San Juan y trabajaba como engrasador de maquinaria en ese mismo ingenio. Estaba casado y tenía hijos.

Hechos: El día 13 de mayo de 1977 Alberto Díaz se encontraba junto a su esposa e hijos en su domicilio de Ingenio San Juan habiendo regresado hace instantes del club social. Aproximadamente a las 20.10 horas, mientras se acostaba en su lecho conyugal, derribaron violentamente la puerta de entrada de su dormitorio e ingresó un grupo de personas vestidas de civil, armadas y encapuchadas quienes lo encandilaron con linternas, obligándolo a levantarse. Comenzó a vestirse e inmediatamente estos sujetos le vendaron

sus ojos, mientras lo interrogaban sobre si tenía armas, procediendo a requisar el domicilio. Lo obligaron a salir con ellos para, luego de caminar aproximadamente una cuadra y media, lo hicieron subir en el baúl de uno de los automóviles en que se movilizaban, previo esposarlo. Lo trasladaron al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde lo hicieron ingresar en uno de los galpones asignándole un box en el que tenía el nº 71. Allí lo llamaban por el número debiendo movilizarse entonces a un lugar contiguo ubicado a unos 20 metros del galpón, en el que fue sometido a brutales torturas: lo hacían desvestir, luego lo colocaban en una cama metálica y era golpeado con trompadas y objetos contundentes, para posteriormente aplicarle picana eléctrica, interrogándolo entretanto. En ocasiones le mojaban el cuerpo para mejorar la conductividad eléctrica y hacer más dolorosa la tortura. Díaz fue sometido a estos vejámenes diariamente hasta ser liberado.

Fue liberado 14 días después, cuando lo sacaron en el baúl de un automóvil, dejándolo en inmediaciones del Parque 9 de Julio, junto a una persona de San Cayetano. Le dejaron un panfleto firmado por un tal “Comando Restaurador del Norte”.

Un vecino suyo de nombre Antonio Segundo Campos le relató detalles de su cautiverio que lo vinculan con los hechos sucedidos; además, luego de ser liberada la víctima lo sometió a un estricto control, avisándole en una ocasión de un nuevo operativo en su domicilio, el que sucedió tal como esta persona se lo había anticipado.

USO OFICIAL

Prueba: (i) Denuncia de Alberto Díaz ante Comisión Bicameral (Legajo nº 194-D-84) a fs. 1 a 4; (ii) Copia del panfleto que le dejaron sus captores al ser liberado a fs. 5; (iii) Ratificación ante el Sr. Juez Federal nº 1 de su denuncia ante Comisión Bicameral, a fs. 107.

*** Hechos que perjudicaron a Manuel Eugenio Olivera** (CASO 52) Causa: "Olivera Manuel Eugenio s/su denuncia por privación ilegítima de la libertad, torturas y otros delitos" Expte. nº 501/06.

Manuel Eugenio Olivera, argentino, DNI nº 7.813.499, al momento de los hechos era jornalero y miembro del Sindicato del Ladrillo. Actualmente reside en calle 25 de mayo nº 400 de El Corte, Alderete, aun trabaja como jornalero.

Hechos: En el mes de mayo de 1977 un grupo de personas encapuchadas y fuertemente armadas ingresaron al domicilio de Manuel Eugenio Olivera en calle Santiago altura 3.000 de San Miguel de Tucumán, y se lo llevaron secuestrado.

Fue conducido al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde permaneció en cautiverio. En ese lugar fue brutalmente castigado, siendo interrogado sobre la familia López, que era una familia que vivía a una cuadra de su domicilio y que estaba integrada por Manuel, Marta, Rosa Cerafina, Juan Carlos, y Ramón Francisco López, de los cuales los últimos tres se encuentran desaparecidos. Entre las personas con quienes compartió cautiverio identificó a dos, padre e hijo, de Monteros a quienes fusilaron el día que lo liberaron; supo también que se encontraba allí Dardo Molina, escuchó nombrar a Damián Márquez del Sindicato del Cerámico, a Ponce del Sindicato de Panaderos, a dos hermanos de apellido Agüero de la Banda del Río Salí.

Prueba: (i) Denuncia ante Fiscalía Federal nº 1 de fecha 25/04/2006 a fs. 1/3.

Aclaración: respecto de Manuel Eugenio Olivera, corresponde hacer la aclaración, surgida en la investigación posterior, de que la víctima fue secuestrada en el año 1977 y no en el año 1978 según se entendiera equivocadamente en su momento. Así se exponen los hechos. Ello surge de un análisis en profundidad de la causa "Olivera Manuel Eugenio s/su denuncia por privación ilegítima de la libertad, torturas y otros delitos" Expte. Nº 501/06, especialmente del análisis de las personas que la víctima menciona como aquellas que compartieron cautiverio con él, quienes invariablemente estuvieron en esa condición durante el año 1977. Así, en ejercicio de la facultad conferida a este Ministerio Público para fijar los límites de la acusación, resulta conveniente tener presente lo manifestado a todos los efectos que de ello surgieran, incluida la posibilidad de tenerse por desistidas las acusaciones formuladas respecto de los imputados que se encuentran en espera de juicio oral.

*** Hechos que perjudicaron a Federico Adolfo Fürth** (CASO 53) Causa: "Fürth Federico Adolfo s/privación ilegítima de la libertad" Expte. nº 401/05.

Federico Adolfo Furth, argentino, DNI nº 11.548.510, a la fecha de los hechos tenía 21 años de edad, se domiciliaba en calle 9 de Julio nº 505 de San Miguel de Tucumán y estudiaba ingeniería en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT.

Hechos: El día 7 de mayo de 1976 Federico Adolfo Fürth recibió un llamado telefónico del Teniente Arturo Innocenti diciéndole éste que concurriera al Arsenal Miguel de Azcuénaga a retirar su libreta pues había sido dado de baja del servicio militar. La víctima concurrió a la dependencia militar. Al día de hoy permanece desaparecido.

Prueba: (i) Denuncia de la Sra. Elvira Rosaura Martínez de Furth de fs. 4; (ii) Declaración del teniente Abelardo Arturo Inocenti de fs. 50; (iii) Declaración del Teniente Hugo Soto de fs. 51/52.

*** Hechos que perjudicaron a Osvaldo José Gregorio Giribaldi** (CASO 54) Causa: "GIRIBALDI Osvaldo José s/privación ilegitima de la libertad y otros delitos" Expte. nº 1.450/06.

Osvaldo José Gregorio Giribaldi, argentino, DNI nº 7.652.122, a la fecha de los hechos tenía 27 años de edad, se domiciliaba en El Talar (provincia de Jujuy), estudiaba agronomía en la Facultad de Agronomía de la UNT y era empleado como supervisor de construcción de viviendas de la empresa Ledesma SA en Jujuy.

Hechos: El día 28 de mayo de 1976 Osvaldo José Giribaldi fue detenido por el Comisario de El Talar en el Ingenio Ledesma, Jujuy, siendo trasladado primeramente a la localidad de Yuto y luego a la Penitenciaría de la ciudad de San Salvador de Jujuy. En esta unidad ingresó con el Dr. Jorge Turk y fue sacado esa misma noche por personal del Ejército, quien lo habría trasladado a Tucumán para interrogarlo junto a las maestras jujeñas Dominga Álvarez de Esculta y Alicia Ranzoni, un profesor de dibujo boliviano de apellido Lara y Turk. El entonces Obispo y capellán del Ejército Miguel Medina confirmó

esta información al señalar que Giribaldi y las tres maestras “fueron llevados a Tucumán, juzgados y fusilados”.

Fue llevado, esposado y vendado, primeramente al CCD llamado “El Reformatorio” de Tucumán, donde pudo tomar contacto con Héctor Orlando Galván ya que éste había sido secuestrado en Santiago del Estero y llevado también a Tucumán. Ambos se conocían por haber sido compañeros en el secundario en esa provincia e intercambiaron unas palabras, lo que fue advertido por los guardias, quienes los golpearon brutalmente. Luego ambos fueron sometidos a torturas e interrogatorios, aplicándoles picana eléctrica y golpes en todo el cuerpo; incluso Galván fue obligado a golpear a Giribaldi, quien se encontraba en un pésimo estado de salud a consecuencia de la tortura, sangraba por la nariz y la boca y estaba muy golpeado y desnudo. Luego los dos fueron trasladados al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga de Tucumán, donde fue visto y reconocido como uno de los detenidos clandestinos por Miguel Ángel Scat. En algún momento, posiblemente el 17 de agosto de 1976, él y su hermano Mario Alejandro fueron sacados del CCD Arsenal junto a dos hermanos de apellido Figueroa y no regresaron más. Al día de hoy permanecen desaparecidos.

Con anterioridad a este hecho, el 7 de abril de 1976 fue secuestrado Mario Giribaldi, hermano de Osvaldo, en Santiago del Estero.

Prueba: (i) Actuaciones de causa “Ema C. de Giribaldi s/Querella c/Musa Azar” Expte. 0710/03, en donde se detalla lo sucedido con el hermano de la víctima, Mario Alejandro, en Santiago del Estero y adjuntando algunos trámites referidos a Osvaldo José Giribaldi especialmente: a) presentación de habeas corpus a fs. 56/58, b) denuncia ante APDH Santiago del Estero a fs. 59/60, c) Declaración ante Juez Federal de Santiago del Estero de Héctor Orlando Galván a fs. 71/72, quien sigue el mismo circuito de la víctima, pasando por el CCD “Reformatorio” y siendo luego trasladado junto a Giribaldi al Arsenal, donde lo ve por última vez el 17 de agosto de 1976, d) Declaración testimonial ante la Fiscalía Federal de Santiago del Estero de Carlos Alberto Melián a fs. 96/97, quien relata la manera en que Giribaldi pasó por la penitenciaría de Santiago del Estero, y e) Declaración ante Juez Federal de Santiago del Estero de Miguel Ángel Escat, a fs. 168/169, quien señala que compartió cautiverio con “Tito” Galván, quien era su cuñado en el CCD “Reformatorio” y luego en el CCD Arsenal, donde ve a los dos hermanos Giribaldi; (ii) Denuncia de Ema E. Jiménez de Giribaldi ante la CONADEP (Legajo nº 2.495) de fs. 173/181; (iii) presentación de Habeas Corpus a fs. 183/187; (iv) Denuncia ante la Comisión Provincial de Estudios s/Violación de Derechos Humanos de Santiago del Estero de fs. 198, y declaración de Carlos Alberto Melián ante dicha Comisión a fs. 199/200; (hecho que se investiga en el expediente N° 9043/03 “Emma de Giribaldi s/Querella contra Musa Asar” conexo al expediente N° 9002/03 “Secretaría de Derechos Humanos de la Nación s/denuncia contra Musa Azar y otros” los cuales se tramitan ante el Juzgado Federal de Santiago del Estero (Copias de fs. 13/169).

USO OFICIAL

*** Hechos que perjudicaron a Luis Eduardo Falú** (CASO 55) Causa: "Baaclini de Falu Romina Esther s/su denuncia por secuestro y desaparición de Luis Eduardo Falú" Expte. nº 413/05.

Luis Eduardo Falú, argentino, DNI nº 10.012.341, (a) "Lucho", a la fecha de los hechos tenía 25 años de edad, se domiciliaba en calle San Miguel de Tucumán, era estudiante universitario de historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT y trabajaba como empleado en Gas del Estado.

Hechos: El 14 de septiembre de 1976 Luis Eduardo Falú fue interceptado en la calle Lamadrid esquina Chacabuco de San Miguel de Tucumán, en momentos en que se dirigía a su domicilio de calle Lamadrid nº 661, por un automóvil del que descendieron dos personas quienes lo obligaron a ingresar en el vehículo.

Fue llevado al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde fue visto e identificado entre los detenidos clandestinos del Arsenal Miguel de Azcuénaga por Matilde Palmieri de Cerviño, Nora Alicia Cajal, Juan Martín y otros detenidos sobrevivientes. En ese lugar fue sometido a torturas. Luego de permanecer mucho tiempo allí se le permitió circular sin vendas en los ojos, siendo obligado a colaborar con los guardias en el reparto de comida y la limpieza de los sanitarios. Fue asesinado en uno de los fusilamientos organizados e iniciados por Antonio Domingo Bussi en mayo de 1977.

Prueba: (i) Denuncia de Regina Esther Baaclini de Falú de fs. 1/6; (ii) Habeas Corpus de fs. 318/322; (iii) Declaración de Emilio Mrad a fs. 242; (iv) Declaración de Matilde Palmieri de Cerviño a fs. 19 y a fs. 122/123; (v) Declaración de Alberto Argentino Augier a fs. 20/30, quien lo describe como hijo del Dr. Falú y declara que andaba sin vendas, que había sido torturado y temía por su vida por haber visto a sus captores, que un día de mucho calor fue estaqueado desnudo al sol, permaneciendo así durante dos o tres días completos, y que le pidió que cuando saliera avisara a su familia que estaba vivo, lo que éste hizo por intermedio de un amigo común; (vi) Declaración de Nora Alicia Cajal a fs.125/135; (vii) Declaración de María Cristina Rodríguez Román de Fiad a fs. 140/142 y a fs. 310/311; (viii) Declaración de María Angélica Mazzamuto a fs. 195/197; (ix) Declaración de Antonio Raúl Romero a fs. 201/204; (x) Declaración del Gendarme Omar Torres de fs. 160/162 de la presente causa principal, Expte. nº 443/84; (xi) Declaración de Héctor Oscar Justo a fs. 83/84 de Expte. nº 1.477/05, quien manifiesta que escuchó nombrar a Falú, quien estaba en otro pabellón; (xii) Testimonio y declaraciones de Juan Martín en causa "Martín Juan s/su denuncia por privación ilegitima de la libertad" Expte. Nº 401.921/04, quien señala que ve a Falú en el mes de febrero de 1977.

*** Hechos que perjudicaron a Hernán Eugenio González** (CASO 56) Causa: "Soria de González Norma Judith s/su denuncia por secuestro y desaparición de Hernán Eugenio González" Expte. nº 699/06.

Hernán Eugenio González, argentino, DNI nº 11.463.288, a la fecha de los hechos tenía 20 años de edad, se domiciliaba en San Miguel de Tucumán y era estudiante universitario de medicina en la UNT.

Hechos: El 17 de septiembre de 1976, mientras concurría a rendir un examen de Semiología en la Facultad de Medicina de la UNT, Hernán Eugenio González fue secuestrado en los pasillos del Hospital Padilla por un grupo armado.

Posteriormente fue trasladado al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde fue visto e identificado entre los detenidos clandestinos por María Cristina Rodríguez Román de Fiad en el mes de septiembre de 1976. Este hecho se refuerza al haber sido amigo de Raúl Vaca Rubio, quien también permaneció en cautiverio en el Arsenal Miguel de Azcuénaga.

Prueba: (i) Denuncia ante la Comisión Bicameral de la Sra. Norma Judith Soria de González de fs. 1/3 y ante la CONADEP (Legajo nº 5.585) a fs. 26; (ii) Declaración de María Cristina Rodríguez Román de Fiad de fs. 57/59.

*** Hechos que perjudicaron a Raúl Alberto Vaca Rubio** (CASO 57) Causa: "Autores desconocidos s/secuestro y desaparición de Raúl Alberto Vaca Rubio" Expte. n° 1.410/05 y sus Actuaciones Complementarias.

Raúl Alberto Vaca Rubio era argentino, DNI nº 10.676.949, a la fecha de los hechos tenía 22 años de edad, se domiciliaba en una pensión de calle Rivadavia nº 355 de San Miguel de Tucumán, y era estudiante universitario de medicina en la UNT.

Hechos que perjudicaron a Raúl Alberto Vaca Rubio: El día 20 de septiembre de 1976 aproximadamente a las 14.00 horas, un grupo de personas armadas secuestraron a Vaca Rubio junto a María Cristina Rodríguez de Fiad del automóvil de ésta, el cual se encontraba detenido en calle Rivadavia al 300.

Dos personas armadas se acercaron al automóvil y preguntaron quien era Vaca, y al identificarse los sacaron a ambos del auto y los introdujeron en la parte trasera de un vehículo, siendo trasladados al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Allí fue sometido a crueles torturas e interrogatorios sobre personas relacionadas con él.

Prueba: (i) Denuncia de Perla Ilda Rubio de 13 de abril de 2005 a fs. 20; (ii) Declaración de María Cristina Rodríguez de Fiad a fs. 49/51 quien fue secuestrada con Raúl Vaca Rubio y compartió cautiverio con el mismo; (iii) Descargo por escrito de Osvaldo Humberto Pérez en la causa “Auad Leoni Susana y Pérez Humberto s/ encubrimiento y torturas” Expte. nº 1120/05, quien menciona a Raúl Vaca como uno de los detenidos en el Arsenal Miguel de Azcuénaga; (iv) Legajo Comisión Bicameral 91-V-84, especialmente denuncia de Perla Ilda Rubio a fs. 55 y denuncia a fs. 87/88; (v) Declaración testimonial de Raúl Alberto Vaca en fecha 4 de mayo de 2007 a fs. 144/145; (vi) Causa “Vaca Raúl Alberto s/ Rec. de Habeas Corpus” Expte 2016/77 a fs. 151 y ss.

*** Hechos que perjudicaron a Rafael Vitalino Yañez** (CASO 59) Causa: "Yañez Luis Pedro s/dcia por priv ileg de la libertad y desaparición de Rafael V. Yáñez" Expte. n° 1.550/05 y sus Actuaciones Complementarias.

Rafael Vitalino Yañez, argentino, DNI nº 10.384.868, (a) “Tete”, a la fecha de los hechos tenía 24 años de edad, se domiciliaba en una pensión de calle Rivadavia nº 355 de

USO OFICIAL

San Miguel de Tucumán, era estudiante universitario de trabajo social en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT y trabajaba como empleado del FFCC Belgrano.

Hechos: El 20 de setiembre de 1976 aproximadamente a las 18.00 horas, personas vestidas de civil se apersonaron en la pensión de calle Rivadavia n° 355 de San Miguel de Tucumán donde vivía Rafael Vitalino Yáñez y se lo llevaron secuestrado.

Posteriormente Yañez fue trasladado al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde fue visto e identificado entre los detenidos clandestinos por María Cristina Rodríguez Román de Fiad y por Alejandro Federico Alderete Soria. Durante el tiempo que permaneció allí torturado permanentemente. Una noche de los primeros días de octubre de 1976, aproximadamente a las 22.30 de la noche, Yáñez junto a otras personas que permanecían cautivas en el CCD Arsenal, fue sacado de ese lugar en un camión, el que anduvo unos metros y se detuvo y luego se efectuaron disparos de ametralladora, lo que indica que el mismo habría sido asesinado en un fusilamiento.

Prueba: (i) Denuncia de Luis Pedro Yañez ante la Comisión Bicameral a fs. 1 a 4; (ii) Denuncia del mismo ante CONADEP a fs. 8; (iii) Denuncia de Julia Verónica Aleman de Yañez ante CONADEP a fs. 9; (iv) Declaraciones de María Cristina Rodríguez Román de Fiad ante Fiscalía Federal n° 1 a fs. 51/53 y ante Juzgado Federal n° 1 a fs. 73/74, la testigo reconoce a Yáñez entre los detenidos clandestinamente en el CCD Arsenal, identificándolo como “Tete” Yañez; (v) Declaración testimonial de Alejandro Federico Alderete Soria a fs. 150/151 de Expte. nº 592/04 (Augier) quien relata que en el CCD Arsenal pudo hablar con un detenido de apellido Yánez, que estaba en el box al lado del suyo, también dice que lo torturaban permanentemente y le pidió que cuando saliera que avisara a su familia.

*** Hechos que perjudicaron a Víctor Hugo Safarov** (CASO 60) Causa: "Safarov Simón s/su denuncia por secuestro y desaparición de Víctor Hugo Safarov" Expte. n° 603/07.

Víctor Hugo Safarov, argentino, DNI nº 8.551.654, (a) “Vitin” o “Pico”, a la fecha de los hechos tenía 25 años de edad, oriundo de Jujuy, se domiciliaba en una pensión de calle Lapida nº 797 de San Miguel de Tucumán y era estudiante universitario de abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT.

Hechos: Entre los días 20 de septiembre y 2 de octubre de 1976 Víctor Hugo Safarov fue secuestrado. En días cercanos, un grupo de personas se presentó en la pensión en la que vivía, en calle Laprida nº 797 de esta ciudad, preguntando por él, quien en esos momentos no se encontraba; luego de eso no volvió más a la pensión, por lo que es presumible que su secuestro se haya producido en la vía pública.

Posteriormente Víctor Safarov fue trasladado al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde fue visto e identificado por Nora Alicia Cajal, Osvaldo Humberto Pérez y Susana Leoni Auad. Allí permaneció al menos hasta el mes de octubre de 1976, cuando Nora Cajal vio su cadáver tirado en el suelo, ensangrentado y cubierto de moscas, junto al de Humberto Alfredo González.

Prueba: (i) Denuncia de Sofía Dominga de Safarov ante CONADEP (Legajo nº 4.858) de fs. 1/4 y ante Madres de Detenidos Desaparecidos de Jujuy a fs. 6/7; (ii) Denuncia de Simón Safarov ante Familiares de Desaparecidos y Detenidos d la provincia de Tucumán, a fs. 4; (iii) Habeas corpus de fs. 21/26; (iv) Descargo por escrito de Osvaldo Humberto Pérez a fs. 37 a 45; (v) Declaración de Susana Leoni Auad a fs. 46 a 69; (vi) Declaración de Nora Alicia del Valle Cajal ante Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán a fs. 70/77 y su ampliación ante el Sr. Fiscal Federal nº 1 a fs 78/80 y ante el Sr. Juez Federal nº 1 a fs. 81/82, en ella dice que durante su cautiverio en el CCD Arsenal entre el 24/09 y el 30/11 de 1976, vio el cadáver de Víctor Safarov tirado en el suelo junto al de González, reconociéndolo porque antes se lo había conocido en la confitería El Buen Gusto y describiéndolo como alto, de pelo oscuro y cabello ensortijado, lo identifica en su declaración de fs. 78/80.

*** Hechos que perjudicaron a María Teresa Sánchez** (CASO 61) Causa: "De la Vega Sánchez María del Carmen s/denuncia por secuestro y desaparición de María Teresa Sánchez de la Vega" Expte. n° 278/6.

María Teresa Sánchez, argentina, DNI nº 6.392.077, (a) “Mori”, a la fecha de los hechos tenía 26 años de edad, se domiciliaba en calle San Martín nº 1.328 de San Miguel de Tucumán, era docente (maestra diferencial) en la Escuela Domiciliaria del Consejo de Educación de Tucumán y estudiante de tercer año de psicología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT.

USO OFICIAL

Hechos: El 2 de noviembre de 1976 aproximadamente a las 2.00 horas de la madrugada un grupo de cinco o seis personas armadas con armas cortas y largas, vestidas de civil y con el rostro cubierto, que se identificaron como policías, irrumpieron en el domicilio de la familia Sánchez, en calle San Martín nº 1.328 de San Miguel de Tucumán. Preguntaban por María Teresa Sánchez de la Vega llamándola por su apodo “Mori”, quien en ese momento se encontraba estudiando en casa de una compañera. Los incursores encerraron a los demás moradores (los padres, la tía y la prima de la víctima y la empleada doméstica) en piezas separadas y permanecieron esperando el regreso de la víctima. Aproximadamente a las 10.00 horas de la mañana fue a la casa la hermana de la víctima, Rosaura del Carmen Sánchez, quien fue encerrada en una habitación y al poco tiempo liberada bajo amenazas, puesto que vivía cerca de ahí y había dejado solo a su pequeño hijo. Luego llegaron sus dos hermanos, Homero Alberto Sánchez y Pedro G. Sánchez, quienes fueron también encerrados en las habitaciones. Finalmente, pasado el mediodía regresó María Teresa de su trabajo en su automóvil marca Ami. Apenas llegada fue capturada por estos sujetos y llevada a una habitación que funcionaba como consultorio médico de su hermano. Más tarde los incursores la llevaron secuestrada, alrededor de las 14.00 horas, permaneciendo tres de los raptores en la vivienda hasta las 19.00.

Posteriormente María Teresa Sánchez fue trasladada al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde fue vista e identificada entre los detenidos clandestinos secuestrados en el Arsenal Miguel de Azcuénaga en noviembre de 1976 por el

entonces gendarme Antonio Cruz y por Osvaldo Humberto Pérez; habiéndose enterado luego Juan Martín de que la misma había estado allí. Al día de hoy María Teresa Sánchez continúa desaparecida.

Prueba: (i) Denuncia de María del Carmen De la Vega de Sánchez, madre de la víctima, ante CONADEP (Legajo nº 6.117) y Familiares de Desaparecidos y Detenidos de la provincia de Tucumán a fs. 2/3; (ii) Testimonio del ex Gendarme Antonio Cruz a fs. 18/33; (iii) Declaración de María del Carmen de la Vega ante CONSUFA, a fs. 35/37; (iv) Declaración de Angelita del Valle Salado de Terraf, prima de la víctima, ante CONSUFA a fs. 48/49 y ante Comisión Bicameral de fs. 92; (v) Declaración de Homero Alberto Sánchez ante CONSUFA a fs. 50/51 y ante Comisión Bicameral de fs. 84; (vi) Declaración de Rosaura del Carmen Sánchez de Casteluccio, hermana de la víctima, ante CONSUFA de fs. 52/53 y ante Comisión Bicameral a fs. 83; (vii) Denuncia ante la Comisión Bicameral (Legajo 88-S-84) de fs. 67/70; (viii) Declaración de María Isabel Leal ante Comisión Bicameral a fs. 86/87; (ix) Denuncia ante familiares de desaparecidos de Buenos Aires de Homero Alberto Sánchez a fs. 105; (x) Causas judiciales caratuladas “Sánchez María Teresa por recurso de habeas corpus” Exptes. nº 442/79 a fs. 187/214, nº 1.471/78 a fs.215/228, y nº 2.571/77 a fs.229/252; (xi) Declaración de Juan Martín a fs. 260 a 262 donde el testigo señala que otras personas secuestradas en el CCD Arsenal le dijeron que había estado allí María Teresa Sánchez.

*** Hechos que perjudicaron a Armando Archetti** (CASO 62) Causa: "Bussi Antonio Domingo y Otros s/privación ilegitima de la libertad tortura y otros delitos en perjuicio de Armando Archetti" Expte. n° 1.577/06.

Armando Archetti, argentino, LE nº 8.121.403, a la fecha de los hechos tenía 33 años de edad, se domiciliaba en Santiago del Estero, era docente de lógica clásica y filosofía de la ciencia de la Universidad del Salvador. Estaba casado con María Hourbeigt.

Hechos: El día 24 de enero de 1977 aproximadamente a las 20.00 horas, Armando Archetti salía de jugar al tenis de un club ubicado en Parque Aguirre de la ciudad de Santiago del Estero y fue interceptado por sujetos que se trasladaban en dos automóviles, en uno de los cuales fue obligado a subir. Desde ese momento habría permanecido en dependencias de fuerzas de seguridad en la provincia de Santiago del Estero siendo posteriormente trasladado a Tucumán al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde fue visto e identificado entre los detenidos clandestinos por Matilde Palmieri de Cerviño, Alberto Argentino Augier y Osvaldo Pérez en la primera quincena de marzo de 1977. Armando Archetti fue torturado en el CCD y obligado a relatar toda su vida en sesiones de tortura para una especie de “biografía” que hacía uno de los interrogadores, el comandante de gendarmería Sabbadini.

Los familiares de Archetti iniciaron infructuosamente una tenaz búsqueda. Víctor Silvetti, entonces director del penal de Santiago del Estero, le informó a la esposa de la víctima que el prontuario del mismo se hallaba en la sede de la SIDE de Santiago del Estero y ésta pudo enterarse de que en este organismo existía registro del secuestro de Archetti por

parte de la SIDE de Tucumán “por presunto accionar subversivo”. Luego tuvieron noticias de un traslado a Tucumán en la Policía Federal santiagueña. El Brigadier Lami Dozo le dijo a la esposa de la víctima que hablara en Tucumán con el mayor González, quien reconoció la existencia de CCD en Tucumán, pero no le brindó ninguna información. Más tarde recibieron llamados telefónicos anónimos (que fueron hechos por Matilde Palmieri de Cerviño y Alberto Argentino Augier) quienes los ponían en conocimiento de que habían compartido cautiverio con Archetti en el CCD Arsenal. Finalmente, en el mes de junio de 1977 el entonces ministro del interior Harguindeguy le dijo a la esposa de la víctima, María Rosa Hourbeigt, que no buscara más a su marido, porque ya estaba muerto. Al día de hoy Armando Archetti permanece desaparecido.

Prueba: (i) Denuncia de María Hourbeigt de Archetti ante APDH Santiago del Estero a fs.14/16, en la que además de las circunstancias del hecho relata que se reunió con Matilde Palmieri de Cerviño quien le dijo que ella había estado con Archetti en el CCD Arsenal y que la otra persona que había hecho un llamado anónimo para dar cuenta del lugar en que se hallaba su marido era el Dr. Alberto Augier; (ii) Denuncia ante CONADEP (Legajo nº 676) de la misma a fs.15; (iii) Declaración ante CONSUFA de Albano Harguindeguy, para la fecha de los hechos Ministro del Interior, quien señala que tuvo una reunión con María Rosa Hourbeigt y que Archetti “era un elemento estrechamente relacionado con el accionar subversivo en la provincia de Santiago del Estero y su presunta desaparición estaría relacionada con dicha actividad”, a fs.75; (iv) Denuncia de Nora Alicia del Valle Cajal ante Fiscalía Federal Nº 1 en fecha 16/08/2005 acompañando formulario de solicitud Ley 24.043-Ley 25.814 a fs. 87 a 97; (iv) Descargo por escrito presentado por Osvaldo Humberto Pérez en fecha 1 de febrero de 2006 ante Juzgado Federal Nº1 a fs 714/721 de causa “Auad Leoni Susana y Pérez Humberto s/ encubrimiento y torturas” Expte. N° 1.120/05, cuyas copias se acompañan a la presente, en la que el mismo relata haber compartido cautiverio con Archetti, a quien menciona como “Santiago Arquetti” y señala que el comandante de Gendarmería Sabbadini lo obligó a relatar su vida para decidir en base a lo que le dijera qué haría con él; (v) Denuncia de María Rosa Hourbeigt ante el Sr. Juez Federal nº 1 a fs. 107 a 109; (vi) Denuncia de Alberto Argentino Augier a fs. 110/133, quien señala Armando Archetti era un joven oriundo de Santiago del Estero a quien habían traído a la provincia acusándolo de ser ideólogo de la guerrilla; (vii) Denuncia de Matilde Palmieri de Cerviño de fs. 439/441 del Expte. N° 779/07; (viii) Declaración de Omar Torres Causa: “Torres Omar Eduardo S/Testimonio ante CONADEP” Expte 593/87; (ix) Descargo por escrito de Osvaldo Humberto Pérez, donde relata haber visto a Archetti en el CCD Arsenal y cómo era obligado a relatar toda su vida para confeccionar esas biografías que Pérez tipeaba para Sabbadini.

*** Hechos que perjudicaron a José Antonio Cano** (CASO 63) Causa: “Cano José Antonio s/su secuestro y desaparición” Expte. n° 1.903/04 y sus Actuaciones Complementarias.

USO OFICIAL

José Antonio Cano, argentino, DNI nº 10.773.331, (a) “Antoñito”, a la fecha de los hechos tenía 22 años de edad, era oriundo de Catamarca, pero se domiciliaba en una pensión ubicada en avenida Roca nº 551 de San Miguel de Tucumán, era estudiante universitario de Bioquímica y delegado del tercer año de su carrera, que cursaba en la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT.

Hechos: El día 20 de febrero de 1976 José Antonio Cano se encontraba en la pensión en la que vivía en San Miguel de Tucumán. Aproximadamente a las 14:30 horas irrumpieron en ese lugar dos personas armadas, uno de ellos Roberto Heriberto Albornoz, preguntando por un tal “Ramón Sebastián”; luego de identificar a Cano lo capturaron y luego de maniatarlo y vendarle los ojos se lo llevaron secuestrado en un vehículo (camioneta) en el que se movilizaban. Previo a ello saquearon su vivienda y destruyeron todo lo que había allí.

Posteriormente fue trasladado al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde fue visto e identificado entre los detenidos clandestinos por Víctor Fernando Alderete entre los meses de abril y mayo de 1976.

Sus familiares recurrieron a diferentes autoridades de facto a fin de averiguar el paradero de José Antonio Cano, pero no recibieron respuesta. El entonces jefe de policía Arrechea se burló de ellos cuando los recibió en la Jefatura de Policía de Tucumán. Al día de hoy José Antonio Cano continúa desaparecido.

Prueba: (i) Denuncia ante la CONADEP (Legajo nº 5148) de Cándida Filomena Miguel de Cano a fs. 2 a 5; (ii) Denuncia de la misma ante Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas a fs. 6 y 7; (iii) Denuncia de la misma y de Marta Cano ante la Comisión Bicameral a fs. 10; (iv) Presentación ante la Comisión Bicameral de la legisladora Clara Inés Villegas de Robert de la Comisión Provincial de Derechos Humanos de Catamarca de documental relativa al caso de José Antonio Cano a fs. 13 a 21; (v) Ratificación y ampliación de denuncias de Luis Alberto Cano, Filomena Miguel de Cano y Marta Cano ante Juzgado Federal de Catamarca a fs.71, 72 y 77 respectivamente; (vi) Declaración testimonial de Víctor Fernando Alderete ante CONADEP a fs. 79/80 y su ratificación y ampliación ante Juez Federal de Buenos Aires a fs. 92/96, en estas declaraciones Alderete relata haber compartido cautiverio con Cano, de quien era compañero de estudios y de militancia en el Centro de estudiantes de Bioquímica, en EUDEF y posteriormente haber sido trasladado con él al CCD Arsenal.

*** Hechos que perjudicaron a Julio Arnaldo Del Castillo** (CASO 64) Causa: "Pérez de Del Castillo Nora Leticia s/su denuncia por secuestro y desaparición de Julio Arnaldo Del Castillo" Expte. n° 515/07.

Julio Arnaldo del Castillo, argentino, DNI nº 7.674.812, a la fecha de los hechos tenía 26 años de edad, se domiciliaba en avenida Sáenz Peña nº 551 de San Miguel de Tucumán, era estudiante universitario de Bioquímica en la UNT y trabajaba como técnico químico del Ingenio Fronterita. Estaba casado con Marta Leticia Pérez, con quien convivía.

Hechos: El día 15 de abril de 1976, Julio Arnaldo Del Castillo se encontraba en su domicilio de avenida Sáenz Peña n° 215 de esta ciudad junto a su esposa y su hermano Carlos Alberto Del Castillo. Aproximadamente a las 3.15 horas de la madrugada un grupo armado de entre alrededor de 10 personas vestidas de civil con los rostros cubiertos y botas tipo militar, que dijeron ser de la policía federal, ingresó a dicha vivienda violentando una ventana que daba a la calle. Luego de requisar la vivienda y de identificar a la víctima, se llevaron secuestrado a Julio Arnaldo del Castillo, previo amordazarlo, vendarle sus ojos y maniatarlo.

Posteriormente Del Castillo fue trasladado al CCD que funcionaba en la Escuela Universitaria de Educación Física (EUDEF) de la UNT. Allí fue sometido a golpes y torturas que lo dejaron en muy mal estado de salud, al punto de no poder valerse por sí mismo para ponerse de pie. Luego fue trasladado al CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga. En ambos casos fue visto e identificado entre los detenidos clandestinos por Víctor Fernando Alderete, y compartió cautiverio con éste y con otros compañeros suyos de la universidad como Humberto Reyes Morales y Ramón Bianchi. Al día de hoy Julio Arnaldo Del Castillo continúa desaparecido.

USO OFICIAL

Días después del secuestro de Del Castillo sus captores regresaron a la vivienda y la saquearon. La esposa de la víctima inició averiguaciones de toda índole para dar con su paradero; cuando intentó radicar denuncia del secuestro en la seccional primera de la policía de la provincia enfrente suyo el oficial que la atendía recibió una llamada telefónica en la que le daban noticia del “operativo” cumplido en avenida Sáenz Peña 215, por lo que se negó a tomarle la denuncia.

Prueba: (i) Denuncias de Marta Leticia Pérez de Del Castillo ante Familiares de Desaparecidos y Detenidos de Tucumán a fs. 1 y ante la Comisión Bicameral de Tucumán a fs. 2/3 y ampliación a fs. 8; (ii) Copias de presentación de Habeas Corpus a fs. 4/17; (iii) Copia de carta remitida a la denunciante por una persona de nombre “Jorge” donde se hace mención a que el nombre de Del Castillo aparecía en una lista vista en el RENAPER con el título “Nómina de muertos en Julio de 1976”; (iv) Denuncia de Marta Leticia Pérez ante la CSJN a fs. 72/77; (v) Denuncia ante CONADEP a fs. 75/76; (vi) testimonio escrito de José María Pérez ante CONSUFA a fs. 78/81; (vii) Declaraciones de Víctor Fernando Alderete ante CONADEP y su ratificación y ampliación ante Juez Federal de Buenos Aires a fs. 104/109, el testigo describe la manera en que vio a la víctima, tanto en el CCD EUDEF como en el CCD Arsenal.

*** Hechos que perjudicaron a Enrique Alberto Sánchez** (CASO 65) Causa: "Sánchez Enrique Alberto s/su secuestro y desaparición" Expte. n° 677/06.

Enrique Alberto Sánchez, argentino, DNI nº 10.837.794, (a) “Villita”, a la fecha de los hechos tenía 23 años de edad, se domiciliaba en calle Ecuador nº 1.008 de San Miguel de Tucumán, era estudiante universitario y delegado de tercer año de la Facultad de Bioquímica de la UNT. Estaba casado con Alicia Noli, con quien tenían un hijo.

Hechos: El 14 de septiembre de 1976 Enrique Alberto Sánchez se encontraba con su esposa Alicia Noli y su pequeño hijo Juan Pablo en su domicilio de calle Ecuador nº 1.008 de esta ciudad. Aproximadamente a las 21.30 horas personas fuertemente armadas, que se identificaron como de la policía federal irrumpieron en dicho domicilio, llevándose secuestrado a Sánchez en presencia de su esposa y de su hijo recién nacido. Lo sacaron a la calle y lo introdujeron en un automóvil Renault 12 blanco sin patente.

Presuntamente fue llevado al CCD que funcionaba en la Escuela de Educación Física de la UNT. Dos días después la víctima fue vista por compañeros de estudio en un automóvil con varios desconocidos en las inmediaciones de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, con signos de encontrarse enfermo o mal dormido. En ese momento se produjo el secuestro de Juan Francisco Carreras, compañero de Sánchez, quien fue ingresado al mismo automóvil en el que se encontraba Enrique Alberto Sánchez.

Posteriormente Enrique Sánchez fue trasladado, posiblemente en un grupo de unas cincuenta personas al CCD que funcionaba en la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga, donde fue visto e identificado entre los detenidos clandestinos por Víctor Fernando Alderete, María Cristina Rodríguez Román de Fiad y Osvaldo Humberto Pérez. Rodríguez Román de Fiad lo vio por última vez en el mes de octubre de 1976.

Al día de hoy Enrique Alberto Sánchez continúa desaparecido.

Prueba: (i) Denuncia de Alicia Noli ante Comisión Bicameral de Tucumán y ante CONADEP de fs. 5/8; (ii) Habeas Corpus presentado por la Sra. Antonia Natividad Reyes de Sánchez de fs. 71/72; (iii) Declaración testimonial de María Cristina Rodríguez Román de Fiad a fs. 100/102, en la que surge que vio por última vez con vida a Sánchez en el CCD Arsenal en octubre de 1976; (iv) Declaración de Víctor Fernando Alderete ante la UNT a fs. 176/177 y ratificación y ampliación de su testimonio ante Juez Federal a fs. 188/192, quien declara que fue secuestrado con fecha 17 de abril de 1976 y liberado el 4 de mayo de 1976, estando detenido primero en EUDEF y luego trasladado a Arsenales, que en las sesiones de torturas los secuestradores le manifestaron que la intención era limpiar la Universidad mientras lo interrogaban sobre las actividades del cuerpo de delegados de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia y sus integrantes, y que se enteró que habían sido secuestrados los delegados de tercer año Enrique Alberto Sánchez, Juan Francisco Carreras y Nelly Yolanda Borda; (v) Testimonio y declaraciones de Juan Martín en causa "Martín Juan s/su denuncia por privación ilegitima de la libertad" Expte. Nº 401.921/04, "Anexo VII. Declaraciones: Testimonio de Juan Martín", Anexo pruebas en causa Menéndez, quien dijo haber tomado conocimiento de la presencia de la víctima en el Arsenal Miguel de Azcuénaga; (vi) Declaración testimonial de Delia Enriqueta Pernasetti de Carreras, obrante a fs.6 de la causa "Carreras Juan Francisco s/ secuestro y desaparición". Expte. nº 453, que se refiere al secuestro de Juan Francisco Carreras y de donde surge que en el auto en el que lo secuestran, se encontraba Sánchez; (vii) Causa "Sánchez Enrique Alberto por habeas corpus" Expte. nº 1.159/79 a fs. 207/237; (viii)

Descargo por escrito de Osvaldo Humberto Pérez, quien menciona a “Villita” Sánchez como uno de los cautivos que pudo ver en Arsenales.

*** Hechos que perjudicaron a Gustavo Adolfo Fochi** (CASO 66) Causa: "Fochi Gustavo Adolfo s/su secuestro y desaparición" Expte n° 1.884/04.

Gustavo Adolfo Fochi, argentino, DNI nº 11.283.869, a la fecha de los hechos tenía 22 años de edad, era soltero, se domiciliaba en calle Chiclana nº 426 de San Miguel de Tucumán y era estudiante universitario de ingeniería química en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT.

Hechos: El 20 de febrero de 1976 Gustavo Adolfo Fochi se hallaba durmiendo en su domicilio de calle Chiclana nº 426 de esta ciudad. Aproximadamente a las 3.30 horas de la madrugada un grupo de entre cinco y ocho personas armadas y encapuchadas irrumpió en la vivienda y se lo llevó secuestrado.

Posteriormente Fochi fue trasladado al CCD llamado “El Reformatorio” en el mes de mayo de 1976 siendo visto e identificado entre los detenidos clandestinos por Osvaldo Humberto Pérez. Allí fue sometido a torturas en reiteradas oportunidades. Precisamente para esas fechas, un grupo conformado por varias personas, entre ellos el Capitán Luis Orlando Varela del Destacamento 142, Juan Carlos Benedicto y, quienes controlaban el CCD, ingresaron a éste y dieron una golpiza brutal a quienes allí se encontraban, acabando con la vida de varias personas secuestradas, entre ellas la de Gustavo Adolfo Fochi.

Prueba: (i) Denuncia ante CONADEP (Legajo nº 4.624) de Ignacio Arnaldo Fochi, padre de la víctima, a fs. 1/3 y 5/6; (ii) Denuncia por escrito ante Familiares de Buenos Aires de Ignacio Fochi, a fs. 17/18; (iii) Denuncia ante la CIDH de la OEA de fs. 22/24; (iv) Copias de descargo por escrito de Osvaldo Humberto Pérez a fs. 44/49; (v) Causa judicial caratulada “Fochi Gustavo Adolfo por recurso de habeas corpus” Expte. nº 360/76 fs. 50/63.

*** Hechos que perjudicaron a Reyes Humberto Morales** (CASO 67) Causa: “Morales Reyes Humberto s/su secuestro y desaparición" Expte n° 1.678/04.

Reyes Humberto Morales, argentino, DNI nº 11.084.032, a la fecha de los hechos tenía 22 años de edad, se domiciliaba en calle Bernabé Aráoz nº 925 de San Miguel de Tucumán y era estudiante universitario de química en la UNT.

Hechos: El 14 de abril de 1976 Reyes Humberto Morales se encontraba en casa de su abuela, Socorro Medina Viuda de Morales, ubicada en calle Bernabé Aráoz n° 925 de esta ciudad junto a ésta y a su madre Selma Ebraim de Morales. Aproximadamente a las 11.30 horas de la mañana tres personas vestidas de civil y fuertemente armadas, entre las cuales se encontraba Roberto Heriberto Albornoz, irrumpieron en ese domicilio y secuestraron a Morales, a quien introdujeron en un automóvil Ford Falcon, abandonando el lugar a toda velocidad.

Reyes Humberto Morales fue trasladado al CCD que funcionaba en la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga, siendo visto e identificado entre los detenidos

USO OFICIAL

clandestinos por Víctor Fernando Alderete en mayo de 1976. Al día de hoy continúa desaparecido.

Prueba: (i) Denuncia de Humberto Morales de fs. 1/3; (ii) Interposición de Habeas Corpus a fs. 17/18; (iii) Declaración testimonial de Víctor Fernando Alderete de fs. 185/186; (iv) Denuncia de Selma Ibraim de Morales, madre de la víctima, ante Comisión Bicameral y ante CONADEP (Legajo nº 6.173) a fs. 88/90, donde relata que entre los secuestradores reconoció a RH Albornoz, quien al reclamarle por llevarse secuestrado a su hijo en su presencia le respondió con insultos y amenazas; (v) Declaración testimonial de Víctor Fernando Alderete a fs. 185/186, quien indica que durante su secuestro en el Arsenal Miguel de Azcuénaga también se encontraban cautivos junto a él otros estudiantes de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT, todos ellos miembros del Cuerpo de Delegados del centro de estudiantes, y a quienes identifica como José Antonio Cano, Ramón Oscar Bianchi, Humberto Reyes Morales, Julio Arnaldo del Castillo y Carlos Corral; posteriormente se entera que habían sido secuestrados los delegados de tercer año Enrique Alberto Sánchez, Juan Francisco Carreras y Nelly Yolanda Borda (oriunda de Catamarca); (vi) Declaración ampliatoria de Víctor Fernando Alderete a fs. 235/238; (vii) Causa “Morales Reyes Humberto por recurso de habeas corpus” Expte. nº 499/79 a fs. 246/272.

*** Hechos que perjudicaron a Rodolfo Hugo Lerner** (CASO 68) Causa: "Lerner Rodolfo Hugo s/su privación ilegitima de la libertad y otros delitos" Expte. n° 1.449/06.

Rodolfo Hugo Lerner, argentino, DNI nº 8.285.234/7.238.969, (a) “Pibe” o “Vicente”, a la fecha de los hechos tenía 26 años de edad, era oriundo de Ledesma, Jujuy, era estudiante universitario de bioquímica y miembro del cuerpo de delegados de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT, trabajando en el ingenio Santa Rosa.

Hechos: Que durante el mes de septiembre de 1976 Rodolfo Hugo Lerner fue secuestrado, probablemente en alguna frontera del país.

Posteriormente fue llevado al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde inmediatamente llegar fue sometido a salvajes torturas, lo que le produjo un enorme deterioro en su salud y una herida de gravedad en una de sus piernas. También fue sometido al “enterramiento”. Fue visto y reconocido por Juan Martín, Nora Alicia Cajal, Susana Auad Leoni y Osvaldo Humberto Pérez. Pudo conversar en alguna ocasión con Andrés Lorenzo Lerma, en el patio uno de sus días de cautiverio, y con Teresita Hazurún a quien le dijo que pensaba que lo iban a matar. En su condición de secuestrado, Lerner fue trasladado al CCD que funcionaba en el Ex Ingenio Nueva Baviera, donde fue “exhibido” por Antonio Bussi ante los integrantes del estado mayor del Ejército y de otras fuerzas. Posteriormente fue llevado nuevamente al CCD Arsenal, donde fue visto hasta febrero de 1977.

Prueba: (i) Declaración de Juan Martín ante Cámara de Diputados de Tucumán a fs. 14/89 y declaraciones en Expte. nº 1.921/04 a fs. 90/280, quien señala que

encontrándose en el centro clandestino que funcionaba en el ex ingenio Nueva Baviera en oportunidad en que visitaron la zona de operaciones integrantes del Estado Mayor del Ejército (del ejército, la armada y la fuerza aérea) y el Gral. Bussi (quien presidía la reunión) presento a un grupo de detenidos con nombre y apellido entre ellos a Rodolfo Lerner; posteriormente vio a la victima detenido clandestinamente en el Arsenal Miguel de Azcuénaga en febrero de 1977; (ii) Declaración de Andrés Héctor Lorenzo Lerma ante Juez Federal a fs. 366/367, afirma haber compartido cautiverio con Lerner en el CCD Arsenal relatando que en una oportunidad lo habían sacado al patio, un guardia le dijo que había un amigo que tenía que ver, le sacó la venda y esa persona era "El Pibe" Lerner, relata que estuvieron frente a frente unos instantes se dijeron dos palabras y pudo ver que la pierna de Lerner tenia una herida muy grave; (iii) Declaraciones ante Juzgado Federal, Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y Fiscalía Federal de Nora Alicia del Valle Cajal a fs.368/380, quien señala que compartió cautiverio con Lerner en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, señalando que lo habían llevado una noche, diciendo los guardias que lo habían detenido en la frontera, era de tez blanca, estatura mediana pelo oscuro, de más o menos treinta años, recuerda que a causa de la tortura a los días parecida un anciano de ochenta años, cuando la testigo está por salir Lerner le pide que le avise a su hermano Guillermo, quien resultó ser vecino de la testigo; (iv) Declaraciones de Susana Leoni Auad ante Juzgado Federal a fs. 383/404, quien relata que en un momento traen al CCD Arsenal a un muchacho Lerner, quedándole grabado el nombre ya que el mismo había sido compañero de su hermana en Ledesma, Jujuy; (v) Descargo por escrito de Osvaldo Humberto Pérez a fs. 405/412; quien narra haber visto al "Pibe" Lerner en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, quien había sido víctima de una modalidad de tortura denominada "enterramiento" por parte del Segundo Comandante Sabadini; (vi) Declaración de Antonia del Valle Barrionuevo a fs. 415/416; (vii) Declaración de Teresita Hazurún a fs. 18/23 y 141 de Expte. nº 1.413/06 (Hazurún), en la que la testigo relata que pudo ver a Lerner, a quien nombra como "Vicente ", tal era su alias, en el CCD Arsenal y pudo conversar con él durante varios días entre noviembre y diciembre de 1976, comentándole éste que pensaba que lo iban a matar.

*** Hechos que perjudicaron a Juan Francisco Carreras** (CASO 69) Causa: "Pernassetti de Carreras Delia s/su denuncia por secuestro y desaparición de Juan Francisco Carreras" Expte n° 794/04.

Juan Francisco Carreras, argentino, DNI nº 7.854.523, a la fecha de los hechos tenía 26 años de edad, era estudiante universitario de Bioquímica en la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT, habiendo sido elegido delegado de tercer año de esa carrera en el Centro de Estudiantes, junto a Enrique Sánchez.

Hechos: El 16 de septiembre de 1976 entre las 18.00 y las 19.00 horas, Juan Francisco Carreras concurrió a la Instituto de Biología de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT (en calle Chacabuco n° 461, en el tercer piso) a rendir por escrito la materia Fisiología. Mientras rendía, se presentó un grupo de tres o cuatro

USO OFICIAL

personas vestidas de civil, una de las cuales ingresó al examen y le preguntó a la docente Elsa Sofía Brauckmann si quien estaba rindiendo era Juan Carreras; ante la respuesta afirmativa esperaron afuera del aula a que la víctima culminara su examen. Al salir, le preguntaron su nombre y le dijeron que los acompañara. Antes de salir del Departamento de Biología, Carreras alcanzó a pedir ayuda al profesor Francisco Barbieri, quien se encontraba allí, pero el docente no pudo hacer nada ya que lo individuos que trasladaban a Carreras estaban armados. Luego fue subido en uno de los dos vehículos en el que sus captores se movilizaban (uno de ellos era un Ford Falcon color claro) en cuyo interior ya había otras personas en esa misma situación, entre ellas posiblemente Enrique Sánchez. Desde allí volvió a gritar pidiendo auxilio.

Posteriormente fue trasladado al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde fue visto e identificado entre los detenidos clandestinos por Víctor Fernando Alderete y Andrés Lorenzo Lerma. En una oportunidad Carreras fue obligado a salir en uno de los automóviles de sus secuestradores y fue llevado a la Imprenta Gráfica Interprovincial, donde se produjo el secuestro de Humberto Alfredo González y Andrés Héctor Lorenzo Lerma. Carreras, en muy mal estado de salud y con la cara llena de moretones, fue careado con éste el 20 de septiembre de 1976, mientras ambos eran salvajemente golpeados. Luego permaneció varios meses en el CCD. Los captores le habrían prometido liberarlo, pues así se lo hizo saber a Lorenzo Lerma cuando pudo conversar con él. Finalmente una noche lo sacaron y le dejó el abrigo que tenía a Lorenzo Lerma, siendo ésta la última noticia que se tiene de él. Fue visto por última vez en abril de 1977. Al día de hoy, pese a todas las gestiones iniciadas por sus familiares, Juan Francisco Carreras permanece desaparecido.

Prueba: (i) Legajo CONADEP n° 5.548 especialmente denuncia de Delia Enriqueta Pernasetti de Carreras ante Comisión Bicameral a fs. 6/8, ante Familiares de Desaparecidos y Detenidos de la Provincia de Tucumán a fs. 9, ante CONADEP a fs. 10/11 y ante CONSUFA a fs. 22/24; copias simples de presentación de Habeas Corpus a fs. 12/18 (ii) Actuaciones de Legajo Comisión Bicameral especialmente: declaración testimonial de Francisco Domingo Barbieri ante Comisión Bicameral a fs. 47, quien observó cómo introducían en el automóvil a la víctima y ésta le requirió auxilio; (iii) declaración de Elsa Sofía Brauckmann a fs. 50/52, quien era la docente a cargo del examen y relata pormenorizadamente cómo se produjo el secuestro; (iii) Declaración de Víctor Alderete ante CONADEP y ratificación y ampliación judicial a fs. 59/76, en ella el testigo confirma que compartió cautiverio en el CCD Arsenal con Carreras; (iv) Declaración de Andrés Lorenzo Lerma de fs. 2111/2126 de la presente causa principal, Expte. 443/84; (v) Testimonio y declaraciones de Juan Martín en causa “Martín Juan s/su denuncia por privación ilegitima de la libertad” Expte. Nº 401.921/04, quien señala haber visto a Carreras en el CCD Arsenal en abril de 1977.

* **Hechos que perjudicaron a Humberto Alfredo González y Andrés Héctor Lorenzo Lerma** (CASOS 70 y 71) Causa: "González Humberto Alfredo s/privación

ilegítima de la libertad" Expte. n° 1.183/05, acumulado "Lorenzo Lerma Andrés Héctor s/su denuncia por privación ilegítima de la libertad" Expte. n° 1619/05 y sus Actuaciones Complementarias.

Humberto Alfredo González era argentino, DNI nº 8.095.299, soltero, a la fecha de los hechos tenía 30 años de edad, se domiciliaba en calle San Miguel nº 583 de San Miguel de Tucumán, era empleado del ingenio La Fronterita y trabajaba en la Imprenta Gráfica Interprovincial de su propiedad, ubicada en San Miguel de Tucumán, en la intersección de calles Córdoba y San Miguel.

Andrés Héctor Lorenzo Lerma es argentino, DNI nº 8.101.369, a la fecha de los hechos tenía 29 años de edad, se domiciliaba en calle Mendoza nº 1.332 de San Miguel de Tucumán, era estudiante universitario de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT y trabajaba en la Imprenta Gráfica Interprovincial y como inspector en la Dirección Nacional de Azúcar. Actualmente vive en San José, Costa Rica.-

Hechos: El día 17 de septiembre de 1976 en horas de la mañana dos personas se habían apersonado en la Imprenta Gráfica Interprovincial y habían preguntado sobre el precio de unos trabajos, despertando en los empleados la sensación de que se trataba de policías. En horas del mediodía de ese mismo día se encontraban trabajando en el local de la imprenta Humberto Alfredo González, José Ángel Di Marco y Juan Carlos García. Andrés Héctor Lorenzo Lerma en tanto se había ido a almorzar. Aproximadamente entre las 12.30 y 13.00 irrumpió en el local un grupo de aproximadamente diez personas, algunas con uniforme de la policía provincial y otros de civil, y obligaron a todos los presentes a ponerse de cara a la pared y los vendaron y esposaron. Los interrogaron allí mismo sobre unos panfletos y sobre la identidad de cada uno y sus actividades. Posteriormente, cerca de las 14.00, regresó Lorenzo Lerma e inmediatamente fue amenazado con un arma de fuego, esposado y vendados sus ojos. A eso de las 15.00 los subieron a todos en los vehículos en que los captores se movilizaban, entre ellos una camioneta Chevrolet y un automóvil marca Peugeot, ambos color blanco. Di Marco y García fueron liberados el mismo día.

En tanto Humberto Alfredo González y Andrés Lorenzo Lerma fueron trasladados al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Apenas llegar al centro fueron torturados. Primero torturaron salvajemente a González, quien insultaba a los interrogadores haciéndolos enfurecer, hasta que la tortura fue tan intensa que perdió el conocimiento. Luego interrogaron bajo torturas a Lorenzo Lerma, careándolo en primera instancia con Juan Carreras (quien estaba desfigurado por la tortura) para determinar si en la imprenta habían hecho panfletos del centro de estudiantes de bioquímica, ante su negativa fue brutalmente golpeado hasta quedar inconsciente. Posteriormente Lorenzo Lerma volvió a conversar con él en el galpón y éste le dijo que si lo liberaban le dejaría su abrigo; un día Carreras fue sacado y no volvió a saber de él.

Lorenzo Lerma despertó en un cubículo de aproximadamente 1,50 por 1 metro, que tenía un número en la puerta (el suyo era el 76) y que a los lados había otros detenidos en otros cubículos similares. Tenía rotos tres dientes y le habían quebrado las costillas, lo

USO OFICIAL

que le producía un dolor intolerable en la parte izquierda del tórax. Además le dolían las extremidades por la posición en la que había quedado y no podía comer por tener las manos esposadas a la espalda. Uno de los días de su cautiverio, involuntariamente derramó parte de la comida y por ello fue brutalmente apaleado por uno de los guardias, hasta perder el conocimiento.

En el CCD todos eran mal alimentados, objeto constante de golpes y malos tratos, eran obligados a defecar en el campo grupalmente y de moverse con los ojos vendados y con los dolores de las torturas recibidas. Ante cualquier equivocación eran golpeados por los guardias. También los obligaban a permanecer de pie y frente a la pared todo el día, siendo constantemente vigilados. Además todos eran sometidos regularmente a sesiones de tortura, cuando, al menos dos veces por día, llegaban los interrogadores al CCD. Eran llamados por su número y llevados a la sala de torturas, contigua al galpón en que estaban encerrados. Quienes no eran conducidos allí podían escuchar los interrogatorios y los lamentos de quienes eran torturados. También los cautivos eran obligados a realizar fuertes ejercicios físicos, a pesar de su deplorable estado de salud.

Luego de un tiempo González y Lorenzo Lerma fueron llevados nuevamente a la sala de torturas. Ambos fueron sometidos a picana eléctrica y eran interrogados sobre la imprenta y nombres y direcciones. González fue bestialmente torturado, hasta perder el conocimiento. Luego los arrastraron a ambos nuevamente al galpón. Humberto Alfredo González se quejó durante mucho tiempo por el deplorable estado en que lo habían dejado y después dejó de hacerlo. Esa misma noche fue sacado por los guardias. Luego Nora Alicia del Valle Cajal vio su cadáver tirado en el suelo del CCD, ensangrentado y cubierto por moscas, lo reconoció porque era amiga de la hermana de González.

Lorenzo Lerma fue torturado varias veces más. Un día lo sometieron al llamado “submarino” metiéndole la cabeza en un tacho con agua hasta provocarle asfixia. Lo hicieron hasta que perdió el conocimiento. Otro día fue colgado de los brazos durante un día entero, sin poder tocar el suelo con los pies, lo que le provocó un intenso dolor hasta la pérdida del conocimiento. Al final de su cautiverio tenía los pies infectados, porque había perdido sus zapatos. En otra ocasión fue sacado al patio donde lo sometieron a un simulacro de fusilamiento. También el interrogador que tenía “su caso” dio órdenes a la guardia de que lo privaran de alimentos y de sueño durante tres días, lo que lo llevó al borde la muerte. Los interrogadores le preguntaban insistentemente por José Luis Maldonado, por César “Cacho” Núñez y por Yolanda Borda.

Para esos días trajeron al CCD a Juan Carlos Pastori, a quien le decían traidor a la patria (porque estaba haciendo la conscripción) y lo llevaron inmediatamente a la sala de torturas donde se identificó. Fue torturado toda la noche y luego llevado al galpón, donde le asignaron el número 90; lo llamaban “Soldado”. Pastori también había trabajado en la imprenta. En otra oportunidad a Lorenzo Lerma lo sacaron al patio y le dijeron que había un amigo suyo que quería verlo, poniéndolo enfrente del “Pibe” Lerner, un compañero suyo de la facultad quien tenía una herida muy fea en la pierna.

Una noche sacaron fuera a varios de los secuestrados del CCD, entre ellos Lorenzo Lerma, y los obligaron a subir en un camión; todos ellos pensaron que iban a matarlos. Sin embargo, Andrés Héctor Lorenzo Lerma fue liberado sobre calle Suipacha, a la vuelta de su domicilio, el día 20 de diciembre de 1976. Fue a la casa de una tía y su estado de salud era tan deplorable que sus familiares no lo reconocieron. En febrero de 1977 se fue a vivir a Costa Rica. Al día de hoy Humberto Alfredo González continúa desaparecido.

Prueba: (i) Denuncia ante la Comisión Bicameral de Tucumán (Legajo 200-A-84) de Luisa Ávila de González de fs. 2 y 68; (ii) Declaración ante la Comisión Bicameral de Hugo Gerardo González de fs. 3/4; (iii) Declaración ante la Comisión Bicameral de José Ángel Di Marco de fs. 5/6; (iv) Denuncia en recurso de habeas corpus a fs. 68; (v) Denuncia de Andrés Héctor Lorenzo Lerma ante Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Tucumán a fs. 128/143; (vi) Ratificación y ampliación de denuncia de Andrés Héctor Lorenzo Lerma ante el Sr. Juez Federal nº 1, a fs. 157/158; (vii) Denuncia ante Secretaría de Derechos Humanos y ratificación y ampliación judicial de la misma ante el Sr. Juez Federal nº 1 de Nora Alicia del Valle Cajal, a fs. 185 a 195; (viii) Declaración testimonial de Nora Alicia del Valle Cajal ante el Sr. Juez Federal nº 1 de Tucumán a fs. 199/200; (ix) Copia de causa judicial “González Humberto Alfredo por Recurso de habeas corpus” Expte. nº 1.832/76.

USO OFICIAL

* **Hechos que perjudicaron a Juan Carlos Pastori** (CASO 72) Causa: "Pastori Andrés Carlos s/Su denuncia por secuestro y desaparición de Juan Carlos Pastori" Expte. n° 707/07.

Juan Carlos Pastori, argentino, DNI nº 11.909.139, (a) “Sombra”, a la fecha de los hechos tenía 21 años de edad, se domiciliaba en San Miguel de Tucumán, era estudiante universitario de arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT y se hallaba cumpliendo con el servicio militar obligatorio. Era oriundo de la localidad de Libertador San Martín, Jujuy y estaba de novio con Nora Alicia del Valle Cajal.

Hechos: El día 25 de septiembre de 1976 mientras cumplía el servicio militar obligatorio en el Regimiento de Comunicaciones 5 de San Miguel de Tucumán, desempeñándose como dragoneante, Juan Carlos Pastori fue capturado por las propias fuerzas militares. Éstas difundieron la versión de que el mismo había salido en comisión ese día, que había sido agredido por una patota volviendo al cuartel a las 21.15 horas y que luego le habían indicado que se realizara curaciones y fuera a casa de su familia, lo que nunca ocurrió. Fue declarado desertor el día 4 de octubre de 1976. El día 22 de septiembre se había comunicado con su novia de entonces, Nora Alicia del Valle Cajal y le había dicho que saldría de franco.

Posteriormente fue trasladado al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde fue visto e identificado como uno de los detenidos clandestinos por Nora Alicia del Valle Cajal y Andrés Héctor Lorenzo Lerma. Al llegar al CCD lo acusaban de ser un traidor a la patria y lo torturaron toda la primera noche que permaneció allí. Luego fue conducido al galpón en el que se encontraban los demás secuestrados, donde le

asignaron el número 90, llamándolo los guardias “soldado”. En una oportunidad lo pusieron, encapuchado, enfrente de su novia de entonces Nora Cajal, sin que él pudiera percatarse de la presencia de ésta, mientras lo interrogaban sobre la información que él le habría pasado a ella del regimiento, así como otras preguntas relacionadas a la imprenta. Tiempo más tarde Nora Cajal consiguió que uno de los guardias le permitiera encontrarse con Pastori una noche, aproximadamente a las 3.00 de la mañana; al encontrarse Cajal le contó que estaba embarazada y Pastori lloró y le dijo que él no tenía nada que ver con lo que lo acusaban y que en realidad lo había entregado el entonces Teniente Daniel Castro.

Luego fue sacado de allí y no se supo más de él. A Nora Cajal le dijeron que lo habían asesinado.

Antes de realizar el servicio militar obligatorio Pastori había trabajado en la Imprenta Gráfica Interprovincial con Humberto Alfredo González, José Luis “el Flaco” Maldonado y otros, la que fue allanada días antes de su secuestro.

Al día de hoy, pese a todas las acciones iniciadas por sus familiares para dar con su paradero, Juan Carlos Pastori permanece desaparecido.

Prueba: (i) Denuncia de Andrés Carlos Pastori ante Comisión Bicameral (Legajo 115-P-84) a fs. 28/29 y su ampliación a fs. 32; (ii) Informe del Ejército a fs. 35; (iii) Declaración ante la Comisión Bicameral de Juan Jarma a fs. 37/39; (iv) Denuncia de Nora Alicia del Valle Cajal ante Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán a fs. 40/47 y su ampliación ante el Sr. Fiscal Federal nº 1 a fs. 48/50; (v) Ratificación de denuncia de Andrés Lorenzo Lerma ante el Sr. Juez Federal nº 1 de fs. 53/54 y a fs. 128/143 del Expte. n° 1.619/05, en ella el denunciante describe claramente su secuestro en el CCD Arsenales y que compartió cautiverio con Pastori, señalando que fue torturado toda la noche de su llegada y que escuchó que en la sala de torturas se identificaba como Juan Carlos Pastori.

*** Hechos que perjudicaron a Ernesto Cruz** (CASO 73) Ernesto Cruz, argentino, al momento de los hechos era estudiante de ingeniería química en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT de cuyo Centro de Estudiantes era Secretario General, y militaba en la Federación Juvenil Comunista.

Hechos: El día 15 de febrero de 1977 Ernesto Cruz fue secuestrado de la puerta de su domicilio en calle 25 de mayo al 600 de San miguel de Tucumán, por un grupo de tres personas armadas quienes lo introdujeron en un auto y lo llevaron al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. En ese lugar fue obligado a bajar y a entrar en una casilla prefabricada, donde fue esposado y vendados sus ojos; en ese lugar había tres o cuatro militares de tonada porteña e Ismael Haguash (quien trabajaba en seguridad del rectorado de la UNT) que lo interrogaron sometiéndolo a torturas con picana eléctrica y golpes de toda clase. Luego lo llevaron a un galpón aproximadamente a 50 metros de allí, con ventanas en la parte de arriba y escaleras en la parte de fuera, lo introdujeron en un box y le asignaron el número 49, prohibiéndole identificarse con su nombre o hablar con otros detenidos; desde allí pudo escuchar a hombres y mujeres gimiendo y llorando.

Posteriormente fue sometido en varias ocasiones a torturas, aplicándole sus captores el llamado “submarino seco”. En su cautiverio escuchó que mataron a Alicia Constantino miembro del Partido Comunista de Tafí Viejo y en las sesiones de tortura era interrogado sobre las actividades de Ricardo Torres Correa y “Coqui” Garmendia. Tomó conocimiento de que entre los detenidos se encontraba el delegado sindical de la empresa Coca Cola y de que existían en el lugar fosas comunes donde enterraban a los que asesinaban, así como la manera en que las ejecuciones tenían lugar, cuando cada 15 o 20 días eran sacadas personas del CCD y luego se escuchaban ráfagas de ametralladoras a lo lejos. Compartió cautiverio con Baltasar Acuña.

El 10 de noviembre de 1977 lo obligaron a subir en la parte trasera de un automóvil, le quitaron las esposas y lo dejaron en avenida Juan B. Justo, cerca del Cementerio del Norte de San Miguel de Tucumán.

Prueba: (i) Denuncia de Ernesto Cruz de fs. 1 a 3; (ii) Declaración de Baltasar Acuña de fs. 29/30, 30/34 y 36/43, quien vio e identificó a Ernesto Cruz entre los detenidos clandestinos del Arsenal Miguel de Azcuénaga ya que éste se identificó en voz alta en varias oportunidades.

USO OFICIAL

*** Hechos que perjudicaron a Santos Aurelio Chaparro** (CASO 74) Causa: “Chaparro Santos Aurelio s/denuncia por privación ilegítima de la libertad” Expte. N° 1.885/04.

Santos Aurelio Chaparro, argentino, DNI nº 7.058.160, a la fecha de los hechos tenía 39 años de edad y se domiciliaba en La Florida, Departamento Cruz Alta.

Hechos: El 20 de enero de 1976, en horas de la noche, Santos Aurelio Chaparro se encontraba cenando en su domicilio del Ingenio La Florida, Departamento Cruz Alta, cuando se produjo un corte de luz y un grupo de hombres algunos de fajina y otros con uniforme militar, todos armados con armas largas ingresaron a su domicilio y luego de golpear a su padre y hacer que su hijo y su esposa se acostaran en el suelo, le vendaron los ojos, lo encapucharon, lo maniataron y lo introdujeron en la parte posterior de un automóvil. Entre enero y marzo de 1976 estuvo detenido en forma clandestina en la Jefatura de Policía de Tucumán, en la Escuela de Educación Física y en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, siendo sometido a interrogatorios mediante torturas. Entre los detenidos del CCD Arsenal identificó a Blanca Hoyos, Ramón Brizuela y a Ercilla Carabajal.

Prueba: (i) Denuncia ante la CONADEP de fs. 2; (ii) Denuncia ante la Comisión Bicameral de Tucumán de fs. 4; (iii) Ratificación y ampliación de denuncias ante Fiscalía Federal a fs. 14/17.

*** Hechos que perjudicaron a Gloria del Valle Iñiguez** (CASO 75) Causa: "Iñiguez Gloria del Valle s/su denuncia por privación ilegitima de la libertad y otros delitos" Expte. n° 839/07 y sus Actuaciones Complementarias.

Gloria del Valle Iñiguez es argentina, DNI nº 12.231.951, (a) “Tina”, a la fecha de los hechos tenía 17 años de edad y se domiciliaba en La Florida, Departamento Cruz Alta.-

Hechos: Durante un día del mes de mayo de 1976 Gloria del Valle Iñiguez y Ramón Brizuela, esposos, fueron secuestrados de su domicilio en La Florida, Departamento Cruz Alta, por un grupo de personas encapuchadas entre quienes se encontraba Víctor Sánchez (a) "Pecho i' Tabla". Ambos fueron trasladados a diversos CCD, para terminar en el que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde al llegar pudieron determinar que se encontraban secuestrados muchos hombres y mujeres.

En dicho lugar Iñiguez identificó entre los detenidos a Santos Aurelio Chaparro, Blanca Nélida Hoyos, Ercilia Dolores Carabajal y su marido Alfredo Antonio Coronel, una señora de apellido García a quien llamaban "La Panzona" y que tuvo un bebé en el lugar que fue tomado por un guardia al que denominaban "El Compadre", y Hugo Román, un cañero de la Florida. También reconoció a una chica a quien llamaban "La Petisa", que iba a las reuniones de la Juventud Peronista en la casa de Santos Aurelio Chaparro, junto con Hoyos, Carabajal y Brizuela. Fue vista allí por Osvaldo Humberto Pérez. En una sesión de tortura fue careada con Alfredo Coronel, marido de su cuñada Susana Brizuela, quien se encontraba desnudo, esposado y todo marcado por las torturas. Gloria del Valle Iñiguez fue reiteradamente torturada, y violada en numerosas oportunidades por Víctor Sánchez, quien impedía que otros guardias la atacaran sexualmente. Conocía a éste porque había sido su entrenador de básquet durante su adolescencia en el Club La Florida, así como de Hoyos, Carabajal y Martina Brizuela; y porque la había hostigado sexualmente en su adolescencia intentando forzarla a mantener relaciones sexuales con él y amenazándola cuando supo que iba a casarse. Entre los guardias Iñiguez identificó a un tal "Carlitos", a un tal "Roberto" y a un tal "Indio". Entre los interrogadores reconoció a "Saba", al "Gordo 4", "Lucho" y al propio Sánchez.

Luego de mucho tiempo fue trasladada al penal de Villa Urquiza donde estuvo un mes incomunicada. Allí estuvo detenida junto a Ercilia Carabajal, Liliana Berarducci, Lilia Fernández, Cecilia Tosi de Del Gesso, Blanca Hoyos, Blanca García y "Negrita" Peralta. Entre los guardias reconoció al cabo Carrizo, a una señora de apellido Flores y al Director del Penal de apellido Hidalgo. De Villa Urquiza fue trasladada a Villa Devoto donde fue puesta a disposición del PEN y finalmente liberada el 10 de junio de 1979.

Prueba: (i) Denuncia ante la Comisión Bicameral de Tucumán de Gloria Iñiguez fs. 1/3 (Legajo 379-I-84) quien denuncia su secuestro y el de su marido; (ii) Decreto N° 1986/76 de fecha 10 de setiembre de 1976 donde se ordena la detención de Gloria del Valle Iñiguez y se pone a disposición del PEN, a fs. 15/16; (iii) Informe del Ministerio del Interior obrante a fs. 18/19 donde se indica como fecha de cese de la detención de Gloria del Valle Iñiguez el 11/05/79; (iv) Declaración testimonial de Gloria del Valle Iñiguez de fecha 26 de julio de 2005 ante la Fiscalía Federal a fs. 41/43; en la que narra sus secuestros y cautiverio nombrando a las personas a las que vio; (v) Testimonio por escrito presentado por Osvaldo Humberto Pérez a fs. 51/58, quien menciona haber compartido cautiverio con Gloria Iñiguez (a) "Tina"; (vi) Declaración testimonial de Ramón Brizuela de fecha 7 de noviembre de 2007 a fs. 60 en el que relata su cautiverio; (vii) Declaración de Blanca

Hoyos ante la Comisión Bicameral de la Legislatura de Tucumán a fs 6 del Expte. n° 809/07 donde relata haber compartido cautiverio con Gloria Iñiguez y Ramón Brizuela; (viii) Declaración testimonial de Blanca Nélida Hoyos de fs. 1.707/1.711 de la presente causa principal, Expte. nº 443/84 y a quien declara haber compartido cautiverio con las victimas; (ix) Declaración testimonial de Blanca Hoyos de fecha 2 de agosto de 2005 a fs. 57/61 de Expte. n° 809/07 donde declara haber compartido cautiverio con las víctimas; (x) Declaración testimonial de Santos Aurelio Chaparro a fs. 1.714 de la presente causa principal, Expte. nº 443/84 quien declara haber compartido cautiverio con las víctimas; (xi) Declaración testimonial de Santos Aurelio Chaparro de fecha 8 de agosto de 2005 obrante a fs. 64/67 del Expte. n° 809/07 quien declara haber compartido cautiverio con Gloria Iñiguez Y Ramón Brizuela.

*** Hechos que perjudicaron a Alfredo Antonio Coronel** (CASO 77) Causa: "Coronel Filadelfio del Carmen s/su denuncia por secuestro y desaparición de Alfredo Antonio Coronel" Expte n° 809/07.

Alfredo Antonio Coronel era argentino, DNI nº 11.544.038, (a) “Fredy”, a la fecha de los hechos tenía 21 años de edad, se domiciliaba en calle Pedro Méndez, Barrio La Cancha, Delfín Gallo, trabajaba como obrero del Ingenio La Florida y se hallaba cumpliendo el servicio militar obligatorio.

USO OFICIAL

Hechos: Alfredo Coronel era obrero del Ingenio Florida y estaba cumpliendo con el servicio militar obligatorio. El día 21 de junio de 1976 en horas de la madrugada un grupo de individuos armados que dijeron pertenecer a la policía, ingresó a su domicilio y se lo llevó secuestrado. Esa misma noche fueron secuestradas Ercilia Dolores Carabajal, ahijada de Filadelfio Coronel, y su vecina Blanca Hoyos.

Los tres fueron trasladados al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde fueron sometidos a torturas e interrogatorios. Blanca Hoyos y Ercilia Carabajal fueron perversamente torturadas por Víctor Roberto Sánchez (a) “Pecho i’ Tabla”, quien había sido su profesor de básquet en la escuela secundaria. Fueron liberadas luego de tres años de permanecer privadas de su libertad, habiendo sido trasladadas luego del Arsenal Miguel de Azcuénaga al penal de Villa Urquiza y de allí a diversas unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires.

Alfredo Antonio Coronel fue visto e identificado en el CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga por Osvaldo Humberto Pérez, Gloria del Valle Iñiguez, Blanca Hoyos, Santos Aurelio Chaparro, María Cristina Rodríguez Román de Fiad, Juan Martín Martín y Susana Leoni Auad. Al día de hoy permanece desaparecido.

Prueba: (i) Denuncia de Filadelfio del Carmen Coronel ante Familiares de desaparecidos y detenidos de Tucumán a fs. 1; (ii) Denuncia manuscrita de Filadelfio del Carmen Coronel ante la Comisión Bicameral de la Legislatura de Tucumán a fs. 2; (iii) Denuncia de Filadelfio del Carmen Coronel ante la Comisión Bicameral de la Legislatura de Tucumán a fs. 3/5; (iv) Declaración de Blanca Hoyos ante la comisión Bicameral de la Legislatura de Tucumán a fs 6, quien relata haber compartido cautiverio con Coronel y

Ercilia Carabajal en CCD Arsenal, narra también que tiempo después llegó a su domicilio un hombre llagado que se había fugado del Arsenal Miguel de Azcuénaga y le dice que a Coronel lo habían matado una semana antes de su fuga; (v) Declaración de Santos Aurelio Chaparro ante la comisión Bicameral de la Legislatura de Tucumán a fs. 9 quien relata haber compartido cautiverio con Coronel en el centro clandestino que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga; (vi) Denuncia de Filadelfio del Carmen Coronel ante CONADEP a fs. 28; (vii) Descargo por escrito presentado por Osvaldo Humberto Pérez, quien vio a Coronel en el Arsenal Miguel de Azcuénaga; (viii) Declaración testimonial de Santos Aurelio Chaparro de fecha 8 de agosto de 2005 a fs. 64/67, quien declara haber compartido cautiverio con Alfredo Antonio Coronel, Ercilia Dolores Carabajal y Blanca Hoyos; (ix) Declaración testimonial de Blanca Hoyos en fecha 2 de agosto de 2005 a fs. 57/61, quien manifiesta haber compartido cautiverio con Alfredo Antonio Coronel y Ercilia Dolores Carabajal; (x) Declaración testimonial de Gloria del Valle Iñiguez de fecha 26 de julio de 2005 a fs. 54/56, quien declara haber compartido cautiverio con Alfredo Antonio Coronel, Ercilia Dolores Carabajal y Blanca Hoyos; (xi) Declaración testimonial de María Cristina Román de Fiad de fecha 10 de octubre de 2007 a fs 85/86, quien manifiesta haber compartido cautiverio con Coronel en el Arsenal Miguel de Azcuénaga; (xii) Descargo por escrito presentado por Osvaldo Humberto Pérez obrante a fs 51/ 58 Expte. N° 809/07; (xiii) Legajo Bicameral Nº 110-C-84 perteneciente a Alfredo Coronel; (xiv) Testimonio y declaraciones de Juan Martín en causa "Martín Juan s/su denuncia por privación ilegitima de la libertad" Expte. Nº 401.921/04, quien vio en el centro Clandestino que funcionaba en Arsenal Miguel de Azcuénaga a Alfredo Coronel describiéndolo como un joven de aproximadamente 20 años oriundo de La Florida; (xv) Declaración indagatoria de Susana Leoni Auad obrante a fs 161/164 del Expte. n° 1.120/05 quien refiere haber visto en el Arsenal Miguel de Azcuénaga a Coronel a quien lo nombra como "Fredy".

*** Hechos que perjudicaron a Julio Ricardo Abad** (CASO 80) Causa: "Albarracín de Abad, Asunción Dolores s/su denuncia por secuestro y desaparición de Ricardo Romualdo Abad" Expte. n° 608/07.

Julio Ricardo Abad, argentino, a la fecha de los hechos se domiciliaba en Santa Lucía y tenía alrededor de 20 años de edad. Militaba en la Compañía de Monte "Ramón Rosa Jiménez" del ERP.

Hechos: El padre de Julio Ricardo Abad alias "El Bombo", Ricardo Romualdo Abad (también apodado "Bombo") fue secuestrado en Santa Lucía el 4 de mayo de 1975 y aun permanece desaparecido. Posteriormente Julio Abad fue detenido en Buenos Aires en el año 1976 y luego trasladado a dependencias del Ingenio Nueva Baviera y más tarde al Arsenal Miguel de Azcuénaga. Allí fue sometido a brutales torturas y tormentos que le ocasionaron la muerte durante el mes de febrero de 1977.-

Prueba: (i) Testimonio de Alberto Argentino Augier: "Mi Purgatorio o ¿El Infierno?" a fs. 2/7 y su ratificación ante Fiscalía Federal Nº 1 a fs. 51 de causa "Bussi Antonio Domingo y Otros s/ Privación ilegitima de la libertad y Otros Delitos en perjuicio

de Augier Alberto Argentino" Expte. nº 592/04, acumulada jurídicamente a la presente. Augier permaneció cautivo en el Arsenal desde el 29 de octubre de 1976 hasta el 1º de abril de 1977 y en ese lapso vio detenido a Abad. Relata que Abad había sido detenido en Buenos Aires y trasladado a Tucumán, donde era llevado por distintos centros de detención para que reconociera a otros detenidos. Recuerda además que "El Bombo" estaba esposado de manos y pies y que era sometido a maltratos y torturas permanentes hasta que perdía el conocimiento. Una vez que recobraba el sentido y sanaban un poco las heridas inflingidas los represores retomaban la rutina de castigos contra el mismo. (ii) Declaración testimonial de Antonio Raúl Romero obrante a fs. 1.976/79 de la presente causa principal, Expte. nº 443/84. El testigo manifestó que durante su cautiverio en el Arsenal a mediados de enero de 1977 y febrero del mismo año, sintió los quejidos de un detenido apodado "El bombo", quien agonizaba .A los tres días los gendarmes lo sacaron del pabellón donde estaban alojados los detenidos. (iii) Declaración testimonial de María Angélica Mazzamuto obrante a fs. 8/10 de causa "Albarracín de Abad, Asunción Dolores s/su denuncia por secuestro y desaparición de Ricardo Romualdo Abad", Expte. Nº 400.608/07. La testigo relata que a la semana siguiente de haber ingresado detenida al Arsenal llevaron a la victima al pabellón de los detenidos (segunda semana de febrero de 1977). Abad había sido sacado del "arbolito" o enterramiento y se encontraba en muy malas condiciones, estaba en estado de delirio, por lo cual era asistido por un detenido que era médico (el Dr. Augier). Pero falleció a los tres días y fue enterrado en el Arsenal. (iv) Testimonio de Juan Martín a fs 13/28 de causa "Albarracín de Abad, Asunción Dolores s/su denuncia por secuestro y desaparición de Ricardo Romualdo Abad", Expte. nº 400.608/07, y su testimonio y declaraciones en causa "Martín Juan s/ su denuncia por privación ilegitima de la libertad" Expte. Nº 401.921/04. Martín manifiesta que Julio Abad fue detenido en Buenos Aires y que posteriormente compartió cautiverio con él en el CCD del Ex Ingenio Nueva Baviera durante el mes de noviembre de 1976 y luego en el Arsenal durante febrero de 1977. (v) Descargo por escrito presentado por Osvaldo Humberto Pérez en fecha 1 de febrero de 2006 ante Juzgado Federal Nº1 a fs 714/721 de causa "Auad Leoni Susana y Pérez Humberto s/ encubrimiento y torturas" Expte. N° 1.120/05, cuyas copias se acompañan a la presente; asimismo, declaraciones de Osvaldo Humberto Pérez de fechas: 28/02/2008 (fs. 4.005/4010), ante Juzgado Federal Nº1 con copias certificadas agregadas a la presente causa principal, Expte. Nº 443/84. Pérez compartió cautiverio con la víctima en el Arsenal y junto a otros detenidos (Juan Martín, Fote, Lerner) era trasladado a otros centros de detención en Nueva Baviera y en Famaillá para ser exhibidos como trofeos de guerra ante formaciones militares. Pérez después fue obligado a escribir una especie de biografía sobre la víctima, a partir de confesiones obtenidas bajo tortura. Esos informes eran llevados por los interrogadores al Comando de la Vº Brigada de Infantería. (vi) Declaración testimonial de Antonia del Valle Barrionuevo fs. 2157 de la presente causa principal, Expte. nº 443/84. La testigo refirió que cuando estuvo en cautiverio en el Arsenal Miguel de Azcuénaga desde el 16 de septiembre de 1976 al 30 de diciembre del mismo año fue sometida a

USO OFICIAL

torturas por un tal Ávalos a quien le decían “El Bombo”. (vii) Declaración testimonial de Manuel Medina a fs. 203 de causa “Arroyo Elba Amanda S/ Su denuncia por secuestro y desaparición de Juan Ángel Danun y Roque Raúl Danun” Expte. Nº 401.379/05 acumulado jurídicamente a la presente causa principal. Dice que cuando estuvo en cautiverio en el Arsenal Miguel de Azcuénaga escucho cuando pasaban lista que lo nombraban al Bombo pero que no lo vio.

1.2. Arsenales Miguel de Azcuénaga CCD: Segundo Grupo.

Paralelamente, en el contexto de Actuaciones Complementarias de la causa “Arsenales Miguel de Azcuénaga s/Secuestros y Desapariciones”, se investigaron y demostraron, con el nivel de probabilidad que habilita esta etapa procesal los hechos que se describen a continuación a saber:

*** Hechos que perjudicaron a María Cristina Rodríguez Román de Fiad** (CASO 58) Causa: "Autores desconocidos s/secuestro y desaparición de Raúl Alberto Vaca Rubio" Expte. n° 1.410/05 y sus Actuaciones Complementarias.

María Cristina Rodríguez Román de Fiad es argentina, DNI nº 4.489.863. Actualmente se domicilia en Avenida Mate de Luna nº 2.534 de esta ciudad.

Hechos que perjudicaron a María Cristina Rodríguez Román de Fiad: La víctima fue secuestrada el día 20 de septiembre de 1976 mientras se encontraba dentro de su automóvil en la calle Rivadavia al 300 de la ciudad de San Miguel de Tucumán junto a Raúl Vaca Rubio. Los captores, que eran cuatro, los introdujeron en el piso de la parte de atrás en un automóvil. Posteriormente fueron llevados al Centro Clandestino de Detención que funcionaba para esa fecha en el Arsenal Miguel de Azcuénaga.

En ese lugar, María Cristina Rodríguez fue depositada en el penúltimo box. Fue interrogada mediante torturas que consistían en brutales golpizas. Estas torturas eran llevadas a cabo por el “grupo de tareas” del mencionado Centro Clandestino, entre los que se encontraban el Capitán del Ejercito Varela a quien le decían “Naso”, un enfermero a quien le decían “el Gordo”, otras personas apodadas “Indio” y “Moreno” (se trata de Adolfo Güemes, oriundo de Salta), el “Manchado” y dos alférez del Chaco. Todos ellos pertenecían a Gendarmería Nacional. En el “Grupo de Tareas” además del Ejercito había personal policial y para-policial. Éstos se encargaban de salir “a marcar” y secuestrar personas. Un día a la mañana sacaron de las caballerizas a los secuestrados diciéndoles que iba a venir el jefe; luego escucharon un helicóptero del que bajó Antonio Domingo Bussi, a quien los guardias informaron el tiempo que llevaban detenidos cada una de las personas.

En ese lugar la víctima, como forma de tortura psicológica, fue obligada a presenciar la tortura a las que fueron sometidas otras personas como golpes, aplicación de picana eléctrica, mordedura de perros, ahogamientos y simulacros de fusilamiento. Compartió cautiverio con Enrique Sánchez, Ana María Sosa, Trinidad Iramain de Vitale, Lucho Falú, Raúl Vaca, “Tete” (Rafael Vitalino) Yáñez, José Díaz Saravia y su esposa Teresa Guerrero de Díaz Saravia, un matrimonio de apellido Madrid, Hernán González, un médico que era rector de un colegio del sur (Alberto Argentino Augier), Gerardo Giménez

quien había sido detenido en Salta y un hombre de apellido Díaz, esposo de Zaira Auad. Todos se encontraban en un estado deplorable debido a las torturas. El 10 de octubre de 1976 fue asesinado en una sesión de torturas con picana eléctrica el mencionado Díaz; luego fue colgado de un tirante de la puerta hasta producirle la muerte un hombre oriundo de Tafí Viejo; asimismo en los primeros días de octubre fueron fusilados Tete Yáñez y Trinidad Iramain.

María Cristina Román de Fiad fue liberada el 27 de octubre de 1976 junto al matrimonio Madrid, un muchacho de 15 años que trabajaba con ellos y otra chica quien era novia de un soldado.

Prueba: (i) Declaración testimonial de María Cristina Rodríguez Román de Fiad obrante a fs 49 y ss de la presente causa. (ii) Declaración testimonial de Perla Hilda Rubio obrante a fs 20 y vta. de la presente causa. (iii) Legajo Bicameral 91-V-84 Perteneciente a Raúl Alberto Vaca Rubio. Fs 54 y ss. (iv) Denuncia de Perla Hilda Rubio ante la Comisión Bicameral. Fs 86 y ss. (v) Declaración testimonial de María Cristina Román de Fiad obrante a fs 148 y ss de la presente causa. (vi) Descargo por escrito y Declaraciones de Osvaldo Humberto Pérez en la presente causa principal, Expte. nº 443/84.

*** Hechos que perjudicaron a Ramón Brizuela** (CASO 76) Causa: "Iñiguez Gloria del Valle s/su denuncia por privación ilegitima de la libertad y otros delitos" Expte. n° 839/07 y sus Actuaciones Complementarias.

Ramón Brizuela es argentino, DNI nº 10.941.068, a la fecha de los hechos tenía 24 años de edad y se domiciliaba en La Florida, Departamento Cruz Alta.

Hechos: Durante un día del mes de mayo de 1976 Gloria del Valle Iñiguez y Ramón Brizuela, esposos, fueron secuestrados de su domicilio en La Florida, Departamento Cruz Alta, por un grupo de personas encapuchadas entre quienes se encontraba Víctor Sánchez (a) “Pecho i’ Tabla”. Ambos fueron trasladados a diversos CCD, para terminar en el que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde al llegar pudieron determinar que se encontraban secuestrados muchos hombres y mujeres.

En dicho lugar Iñiguez identificó entre los detenidos a Santos Aurelio Chaparro, Blanca Nélida Hoyos, Ercilia Dolores Carabajal y su marido Alfredo Antonio Coronel, una señora de apellido García a quien llamaban “La Panzona” y que tuvo un bebé en el lugar que fue tomado por un guardia al que denominaban “El Compadre”, y Hugo Román, un cañero de la Florida. También reconoció a una chica a quien llamaban “La Petisa”, que iba a las reuniones de la Juventud Peronista en la casa de Santos Aurelio Chaparro, junto con Hoyos, Carabajal y Brizuela. Fue vista allí por Osvaldo Humberto Pérez. En una sesión de tortura fue careada con Alfredo Coronel, marido de su cuñada Susana Brizuela, quien se encontraba desnudo, esposado y todo marcado por las torturas. Gloria del Valle Iñiguez fue reiteradamente torturada, y violada en numerosas oportunidades por Víctor Sánchez, quien impedía que otros guardias la atacaran sexualmente. Conocía a éste porque había sido su entrenador de básquet durante su adolescencia en el Club La Florida, así como de Hoyos, Carabajal y Martina Brizuela; y porque la había hostigado sexualmente en su adolescencia

USO OFICIAL

intentando forzarla a mantener relaciones sexuales con él y amenazándola cuando supo que iba a casarse. Entre los guardias Iñiguez identificó a un tal “Carlitos”, a un tal “Roberto” y a un tal “Indio”. Entre los interrogadores reconoció a “Saba”, al “Gordo 4", “Lucho” y al propio Sánchez.

Luego de mucho tiempo fue trasladada al penal de Villa Urquiza donde estuvo un mes incomunicada. Allí estuvo detenida junto a Ercilia Carabajal, Liliana Berarducci, Lilia Fernández, Cecilia Tosi de Del Gesso, Blanca Hoyos, Blanca García y “Negrita” Peralta. Entre los guardias reconoció al cabo Carrizo, a una señora de apellido Flores y al Director del Penal de apellido Hidalgo. De Villa Urquiza fue trasladada a Villa Devoto donde fue puesta a disposición del PEN y finalmente liberada el 10 de junio de 1979.

Prueba: (i) Denuncia ante la Comisión Bicameral de Tucumán de Gloria Iñiguez fs. 1/3 (Legajo 379-I-84) quien denuncia su secuestro y el de su marido; (ii) Decreto N° 1986/76 de fecha 10 de setiembre de 1976 donde se ordena la detención de Gloria del Valle Iñiguez y se pone a disposición del PEN, a fs. 15/16; (iii) Informe del Ministerio del Interior obrante a fs. 18/19 donde se indica como fecha de cese de la detención de Gloria del Valle Iñiguez el 11/05/79; (iv) Declaración testimonial de Gloria del Valle Iñiguez de fecha 26 de julio de 2005 ante la Fiscalía Federal a fs. 41/43; en la que narra sus secuestros y cautiverio nombrando a las personas a las que vio; (v) Testimonio por escrito presentado por Osvaldo Humberto Pérez a fs. 51/58, quien menciona haber compartido cautiverio con Gloria Iñiguez (a) “Tina”; (vi) Declaración testimonial de Ramón Brizuela de fecha 7 de noviembre de 2007 a fs. 60 en el que relata su cautiverio; (vii) Declaración de Blanca Hoyos ante la Comisión Bicameral de la Legislatura de Tucumán a fs 6 del Expte. n° 809/07 donde relata haber compartido cautiverio con Gloria Iñiguez y Ramón Brizuela; (viii) Declaración testimonial de Blanca Nélida Hoyos de fs. 1.707/1.711 de la presente causa principal, Expte. nº 443/84 y a quien declara haber compartido cautiverio con las victimas; (ix) Declaración testimonial de Blanca Hoyos de fecha 2 de agosto de 2005 a fs. 57/61 de Expte. n° 809/07 donde declara haber compartido cautiverio con las víctimas; (x) Declaración testimonial de Santos Aurelio Chaparro a fs. 1.714 de la presente causa principal, Expte. nº 443/84 quien declara haber compartido cautiverio con las víctimas; (xi) Declaración testimonial de Santos Aurelio Chaparro de fecha 8 de agosto de 2005 obrante a fs. 64/67 del Expte. n° 809/07 quien declara haber compartido cautiverio con Gloria Iñiguez Y Ramón Brizuela.

*** Hechos que perjudicaron a Ercilia Dolores Carabajal y Blanca Hoyos** (CASOS 78 y 79) Causa: "Coronel Filadelfio del Carmen s/su denuncia por secuestro y desaparición de Alfredo Antonio Coronel" Expte n° 809/07.

Ercilla Dolores Carabajal (a) “Morocha” es argentina, a la fecha de los hechos tenía alrededor de 17 o 18 años de edad y se domiciliaba en La Florida, Departamento Cruz Alta.

Blanca Hoyos es argentina, DNI nº 10.941.195, a la fecha de los hechos tenía alrededor de 17 o 18 años de edad y se domiciliaba en La Florida, Departamento Cruz Alta.

Hechos: Alfredo Coronel era obrero del Ingenio Florida y estaba cumpliendo con el servicio militar obligatorio. El día 21 de junio de 1976 en horas de la madrugada un grupo de individuos armados que dijeron pertenecer a la policía, ingresó a su domicilio y se lo llevó secuestrado. Esa misma noche fueron secuestradas Ercilia Dolores Carabajal, ahijada de Filadelfio Coronel, y su vecina Blanca Hoyos.

Los tres fueron trasladados al CCD que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde fueron sometidos a torturas e interrogatorios. Blanca Hoyos y Ercilia Carabajal fueron perversamente torturadas por Víctor Roberto Sánchez (a) "Pecho i' Tabla", quien había sido su profesor de básquet en la escuela secundaria. Fueron liberadas luego de tres años de permanecer privadas de su libertad, habiendo sido trasladadas luego del Arsenal Miguel de Azcuénaga al penal de Villa Urquiza y de allí a diversas unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires.

Alfredo Antonio Coronel fue visto e identificado en el CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga por Osvaldo Humberto Pérez, Gloria del Valle Iñiguez, Blanca Hoyos, Santos Aurelio Chaparro, María Cristina Rodríguez Román de Fiad, Juan Martín Martín y Susana Leoni Auad. Al día de hoy permanece desaparecido.

USO OFICIAL

Prueba: (i) Denuncia de Filadelfio del Carmen Coronel ante Familiares de desaparecidos y detenidos de Tucumán a fs. 1; (ii) Denuncia manuscrita de Filadelfio del Carmen Coronel ante la Comisión Bicameral de la Legislatura de Tucumán a fs. 2; (iii) Denuncia de Filadelfio del Carmen Coronel ante la Comisión Bicameral de la Legislatura de Tucumán a fs. 3/5; (iv) Declaración de Blanca Hoyos ante la comisión Bicameral de la Legislatura de Tucumán a fs 6, quien relata haber compartido cautiverio con Coronel y Ercilia Carabajal en CCD Arsenal, narra también que tiempo después llegó a su domicilio un hombre llagado que se había fugado del Arsenal Miguel de Azcuénaga y le dice que a Coronel lo habían matado una semana antes de su fuga; (v) Declaración de Santos Aurelio Chaparro ante la comisión Bicameral de la Legislatura de Tucumán a fs. 9 quien relata haber compartido cautiverio con Coronel en el centro clandestino que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga; (vi) Denuncia de Filadelfio del Carmen Coronel ante CONADEP a fs. 28; (vii) Descargo por escrito presentado por Osvaldo Humberto Pérez, quien vio a Coronel en el Arsenal Miguel de Azcuénaga; (viii) Declaración testimonial de Santos Aurelio Chaparro de fecha 8 de agosto de 2005 a fs. 64/67, quien declara haber compartido cautiverio con Alfredo Antonio Coronel, Ercilia Dolores Carabajal y Blanca Hoyos; (ix) Declaración testimonial de Blanca Hoyos en fecha 2 de agosto de 2005 a fs. 57/61, quien manifiesta haber compartido cautiverio con Alfredo Antonio Coronel y Ercilia Dolores Carabajal; (x) Declaración testimonial de Gloria del Valle Iñiguez de fecha 26 de julio de 2005 a fs. 54/56, quien declara haber compartido cautiverio con Alfredo Antonio Coronel, Ercilia Dolores Carabajal y Blanca Hoyos; (xi) Declaración testimonial de María Cristina Román de Fiad de fecha 10 de octubre de 2007 a fs 85/86, quien manifiesta haber compartido cautiverio con Coronel en el Arsenal Miguel de Azcuénaga; (xii) Descargo por escrito presentado por Osvaldo Humberto Pérez obrante a fs 51/ 58 Expte. N° 809/07; (xiii)

Legajo Bicameral Nº 110-C-84 perteneciente a Alfredo Coronel; (xiv) Testimonio y declaraciones de Juan Martín en causa "Martín Juan s/su denuncia por privación ilegitima de la libertad" Expte. Nº 401.921/04, quien vio en el centro Clandestino que funcionaba en Arsenal Miguel de Azcuénaga a Alfredo Coronel describiéndolo como un joven de aproximadamente 20 años oriundo de La Florida; (xv) Declaración indagatoria de Susana Leoni Auad obrante a fs 161/164 del Expte. n° 1.120/05 quien refiere haber visto en el Arsenal Miguel de Azcuénaga a Coronel a quien lo nombra como "Fredy".

*** Hechos que perjudicaron a Alejandro Federico Alderete Soria** (CASO 81) Causa Principal, Expte. 443/84.

Alejandro Federico Alderete Soria, argentino, LE Nº 7.966.100, domiciliado en calle Hermano Roberto José Nº 4166, Barrio Argüello, Córdoba. A la fecha de los hechos era abogado y vivía en la ciudad de Concepción.

Hechos: El 1º de noviembre de 1976 Alejandro Alderete Soria fue detenido en su domicilio en la ciudad de Concepción, Tucumán, por dos sujetos que irrumpieron violentamente, identificándose como policías federales y exhibiendo armas de fuego. Fue llevado al "CCD Arsenal" e introducido en una celda individual o "tabique" que se encontraba a la entrada del galpón, desde donde podía escuchar los interrogatorios que se hacían a los detenidos. Pudo identificar a uno de los represores como "Carlitos".

Compartió cautiverio con el Dr. Alberto Augier, a quien conocía de la ciudad de Aguilares; con él conversaba frecuentemente y escuchaba los interrogatorios a los que era sometido porque reconocía su voz, hallándose el mismo en malas condiciones físicas por haber sido golpeado. También con Ramón Vitalino Yáñez, que se encontraba al lado de su celda y era torturado permanentemente. También compartió cautiverio con Rina Rosa Alarcón de la ciudad de Concepción, Félix Viterbo Corbalán de Tafí Viejo y un joven que era esposo de la hija del ministro de Economía de apellido Bleckwedel, propietarios de la empresa Java. Por comentarios de otros detenidos se enteró que había estado allí Damián Márquez y por comentarios de los guardias, que Leandro Fote había sido enterrado en el Arsenal.

El Sr. Alejandro Alderete Soria fue dejado en libertad el 28 de noviembre de 1976.

Prueba: (i) Declaración testimonial de Alejandro Alderete Soria a fs. 150/151; (ii) Testimonio escrito y declaraciones testimoniales de Alberto Argentino Augier a fs. 2/7, 51 y 56/57, todos ellos en causa: "Bussi Antonio Domingo y Otros s/ Privación ilegitima de la libertad y Otros Delitos en perjuicio de Augier Alberto Argentino" Expte. nº 592/04 acumulado jurídicamente a la presente. El testigo Augier manifestó que durante su cautiverio en el Arsenal vio detenido durante un mes a Alejandro Alderete Soria.

*** Hechos que perjudicaron a Víctor Fernando Alderete** (CASO 82) Causa Principal, Expte. 443/84.

Víctor Fernando Alderete, argentino, DNI Nº 8.466.818, domiciliado en calle Humberto Primo 253, departamento 4, Capital Federal. A la fecha de los hechos tenía 25

años de edad, era estudiante de bioquímica y formaba parte del Cuerpo de Delegados de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT.

Hechos: El día 17 de abril de 1976 aproximadamente a las 14.00 horas seis sujetos fuertemente armados quienes dijeron pertenecer al Ejército, al mando de un militar que se hacía llamar "Capitán Quiroga" irrumpieron el domicilio familiar de Víctor Fernando Alderete en calle Marco Avellaneda nº 532 de San Miguel de Tucumán. Como la víctima no se encontraba en ese momento decidieron esperar a que regresara, lo que ocurrió aproximadamente a las 20.00 horas cuando se encontró con dichos sujetos quienes luego de golpearlo y vendarle los ojos se lo llevaron junto a su hermano Luis Alberto de 17 años en dos automóviles rumbo a la Escuela de Educación Física de la UNT, donde para la fecha existía un CCD custodiado por Gendarmería Nacional. Luis Alberto permaneció detenido por espacio de cuarenta minutos a los efectos de que presenciara las sesiones de torturas a las que fue sometido Víctor Alderete; luego fue liberado. En ese lugar Víctor Alderete compartió cautiverio con algunos de sus compañeros del cuerpo de delegados de la Facultad de Bioquímica como Ramón Bianchi, José Antonio Cano, Humberto Reyes Morales y Julio del Castillo, quien se hallaba muy débil a raíz de las torturas y golpes y no se podía mantenerse en pie. Al día siguiente de su secuestro fue llevado también Carlos Corral, con quien pudo dialogar. En este CCD fue sometido a torturas (submarino, picana eléctrica en la cara, la boca, los genitales, lo acostaban en una parilla metálica que calentaban o le aplicaban electricidad y golpes). Era interrogado por el tal "Capitán Quiroga" quien le manifestó que estaba detenido a causa de sus actividades políticas en Bioquímica y lo interrogaba en tal sentido.

A los cinco días fue trasladado con los mencionados al Arsenal Miguel de Azcuénaga en un contingente de unos 50 detenidos. Allí volvió a ser sometido a torturas e interrogatorios, en ocasiones por el mencionado Capitán Quiroga. También fue "careado" con sus compañeros universitarios. En tal ocasión pudo constatar que Julio del Castillo se encontraba en un estado deplorable de salud. Asimismo pudo conocer a otro detenido que era de Escobar (Provincia de Buenos Aires). Los guardias que custodiaban el CCD eran del litoral y había uno al que le decían "El indio", es decir, Marcelo Omar Godoy.

Fue liberado durante la primera semana de mayo de 1976 junto a cuatro o cinco detenidos sobre Ruta Nacional 9, donde fueron individualizados por la policía provincial y llevados a una dependencia policial. Allí avisaron a los familiares de su paradero y así pudieron recuperar la libertad.

Prueba: (i) Testimonio de Víctor Fernando Alderete ante Comisión Bicameral a fs. 2.130 de la presente causa principal, Expte. N° 443/84. (ii) Declaración testimonial de Víctor Fernando Alderete a fs. 92/96 de causa "Actuaciones complementarias en causa 'Cano José Antonio s/ Secuestro y desaparición'", Expte. Nº 401.903/4, acumulada jurídicamente a la presente. (iii) Declaraciones y testimonios de Andrés Lorenzo Lerma a fs. 157/158 de causa "Actuaciones complementarias de causa: 'González Humberto Alfredo S/ Privación Ilegitima de la libertad'" Acumulado a causa "Lorenzo Lerma Andrés

USO OFICIAL

s/su denuncia por privación ilegítima de la libertad" Expte.Nº 1183/05, acumulada jurídicamente a la presente causa principal. El testigo manifestó que se enteró que conocidos suyos de la facultad como Víctor Alderete habían sido secuestrados en esa época.

*** Hechos que perjudicaron a Nora Alicia del Valle Cajal** (CASO 83) Causa: Principal, Expte. 443/84.

Nora Cajal, argentina, DNI Nº 6.558. 581, domiciliada en calle Asunción 535, San Miguel de Tucumán. A la fecha de los hechos militaba en el FANET.

Hechos: El día 24 de septiembre de 1976 Nora Alicia del Valle Cajal se encontraba trabajando en un stand en la Expo de la Sociedad Rural de Tucumán cuando se presentaron un tal "Ganso" y otro bajo y regordete, quienes le exhibieron credenciales de la Policía provincial. La víctima los acompañó sin resistirse, pero al salir del lugar estos dos sujetos le esposaron las manos tapándola con una campera y la arrojaron en la parte trasera de un automóvil que conducía Lito Cruz o "Mauricio" para trasladarla al CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga.

Al llegar al Arsenal le vendaron los ojos dejándola largo tiempo bajo el sol; luego la llevaron a una habitación donde la interrogaron bajo tortura y la violaron. Luego fue trasladada a otro sitio del mismo predio en medio de un ataque de nervios. En ese lugar reconoció a Santiago Díaz, Luis Falú y José Díaz Saravia.

Por la noche la llevan a una casilla de madera donde la carearon con su novio Juan Carlos Pastori. Al día siguiente tomó contacto con Ana María Sosa de Reynaga (a quien le faltaban los pechos por un cáncer de mamas) y con Trinidad Iramain. También vio a dos personas que trajeron "del monte"; a uno le decían "Afanancio" y la otra persona era una mujer; también Rodolfo Lerner y a una familia de apellido Rondoletto, compuesta por un hombre y una mujer mayores y una joven embarazada; estaban también allí las esposas de Díaz Saravia y de Santiago Díaz, un muchacho del campo a quien le decían "el Meón", un hombre llamado Martín y un chico cuyo padre tenia una cerrajería en la calle Catamarca y 24 de septiembre. También vio tirados en el suelo dos cadáveres, pudiendo reconocer a uno de ellos como Alfredo González; el otro era un joven alto de cabello enrulado.

En una de las sesiones de tortura sus captores le mostraron la foto de un joven al que ella conocía, apodado "Pichón", diciéndole que éste había estado en ese lugar y había sido liberado; también le mostraron fotos de José Luis Maldonado diciendo que éste había sido detenido en Buenos Aires y lo habían matado allí. En tales circunstancias también estaban dos personas: "la Piturra" Auad (otra detenida que había sido llevada por los secuestradores para "señalar" a la víctima) y "El Chaqueño" Pérez.

En una oportunidad sacaron a la víctima (quien estaba embaraza de dos meses y medio) y la llevaron a una casilla de madera para picanearla; dos días después de ocurrido ese hecho, comenzó a sangrar y se le produjo un aborto.

En otra oportunidad, uno de los guardias de gendarmería le permitió cruzar unas palabras con su novio Juan Carlos Pastori; éste le dijo que había sido "entregado" por un

teniente de la V Brigada De Comunicaciones. Luego de su liberación Cajal conoció a esta persona, que era el militar Daniel Castro.

Una noche se escucharon movimientos en el lugar, pusieron a todos los detenidos boca abajo, les ataron la boca, las manos y los pies, apagaron las luces y comenzaron a sacar gente, luego se escuchó un tiroteo.

Entre los represores del lugar recuerda a Tomás Güemes (a) "Moreno" que era quien la interrogaba siempre estaba bastante perfumado y tenía tonada aporteñada; "Cachito", "Mario", "El Indio" quien era morocho y de gran contextura física (se trata de Marcelo Omar Godoy); "el Ganso" alto de pelo lacio, nariz prominente de aproximadamente 30 años oriundo de Tafí Viejo y el Mayor del Ejército Augusto Leonardo Neme. Los informantes civiles eran Guillermo López Guerrero, "Conejo" Benedicto quien era escribano, Germán Migueles, Marcos Urrutia, "Conejo" López Guerrero ,"Lito" Cruz o "Mauricio" que era petiso de tez blanca, cabello ondulado y tonada porteña.

Nora del Valle Cajal fue liberada el día 30 de noviembre de 1976 siendo posteriormente hostigada por el Mayor Neme y el tal "Ganso" hasta el año 1981.

Prueba: (i) Denuncia presentada por Nora Alicia del Valle Cajal ante Fiscalía Federal Nº 1 en fecha 16/08/2005 acompañando formulario de solicitud Ley 24.043-Ley 25.814 a fs. 1726 a 1728 vta de la presente causa principal, Expte. 443/84. (ii) Declaración Indagatoria de Susana Leoni Auad de fecha 7/12/2005 a fs. 403 de la presente causa principal, Expte. 443/84. (iii) Declaración testimonial de Blanca Iris Cosentino de Casanova en fecha 18/02/2010 a fs. 47/48 de causa "Cosentino de Casanova Blanca Iris s/su denuncia por secuestro y desaparición de su hermana Alba Luz Cosentino" Expte. 401.145/09: La testigo manifestó que tomó conocimiento a través de Nora Cajal, que su hermana desaparecida Alba Luz Cosentino estaba cautiva en el Arsenal. (iv) Declaración testimonial de Nora Alicia Cajal a fs. 199/200 de causa "Actuaciones complementarias de causa: 'González Humberto Alfredo S/ Privación Ilegitima de la libertad'" acumulado a causa "Lorenzo Lerma Andrés s/su denuncia por privación ilegítima de la libertad" Expte. Nº 1183/05, acumulado jurídicamente a la presente causa principal.

*** Hechos que perjudicaron a Diana Elsa Fabio** (CASO 84) Causa: Principal, Expte. 443/84.

Diana Fabio, argentina, DNI Nº 10.910.584, a la fecha de los hechos tenía 22 años, era maestra y estudiante de Arquitectura en la UNT y militaba en el Frente de Agrupaciones Universitaria de Izquierda.

Hechos: El día 6 de agosto de 1976, mientras transitaba por la Plaza Independencia, en el centro de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Diana Elsa Fabio fue interceptada por tres sujetos que se identificaron como policías. Éstos la introdujeron por la fuerza en la parte trasera de un automóvil Ford Falcon en el que fue llevada a la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia. En ese lugar fue dejada en una habitación, para luego de un corto lapso regresar sus captores y vendarle los ojos y subirla a un automóvil para conducirla a la Jefatura de Policía. Al llegar a este lugar, fue golpeada con

USO OFICIAL

un arma en los riñones, lo que le produjo un desmayo. Al volver en sí se encontró tirada en un sillón en medio de gritos de dolor, voces de hombres y mujeres quienes pedían que los condujesen al baño, pudiendo oír también a guardias que les gritaban.

Al día siguiente fue subida nuevamente a un auto, arrojada en el piso del mismo y tapada con una manta para ser conducida al CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga. Al llegar, dos sujetos la tomaron del brazo y la condujeron por la fuerza al edificio principal de dicho CCD. En una oportunidad sus captores la llevaron a una casilla situada a unos 10 metros del galpón en el que era obligada a permanecer, donde la forzaron a desnudarse y la acostaron sobre un elástico metálico de una cama esposándola con las piernas y los brazos abiertos para aplicarle "picana" eléctrica en diferentes partes de su cuerpo, mientras era interrogada acerca de los integrantes del centro de estudiantes de la Facultad de Arquitectura, leyéndole comunicados de prensa que había firmado en asambleas estudiantiles de años anteriores. Durante su permanencia en el CCD fue torturada al menos dos veces por día, lo que ocurría también con el resto de los detenidos.

Uno de los guardias a quien llamaban "El Indio" le manifestó a la víctima que los guardias del lugar eran de Gendarmería Nacional y los interrogadores del Ejército. Un día la llevaron a la habitación de torturas y la desnudaron diciéndole que "el General" estaba allí. Al llevarla de nuevo al lugar "el Indio" le dijo que sería liberada.

En Arsenales tomó contacto con Ángel Manfredi y Ana María Sosa relatándole ésta última que ambos habían sido secuestrados en La Colonia del Ingenio Concepción y habían pasado por la Jefatura de Policía antes de ser llevados al Arsenal; también compartió cautiverio con una persona a quien apodaban "el Viejo", que estaba prácticamente desnudo y descalzo; asimismo a otro hombre que decían era guerrillero y parecía haberse vuelto loco.

El 22 de agosto de 1976 fue sacada del lugar para ser trasladada al penal de Villa Urquiza. Allí fue conducida a una celda de 2 x 2 metros, donde pudo hablar con otra detenida que estaba en la celda contigua en la misma condición, Albertina Paz de Saavedra Lamas.

Luego de una semana tuvo una charla con el director de Institutos Penales de apellido Hidalgo. Dos días después, la revisó un médico constatando las lesiones que tenía por las torturas. Al día siguiente la llevaron al despacho de un joven militar quien pareció sorprendido de que fuese liberada, ella intuyó que se trataba de uno de los interrogadores del Arsenal. Éste la obligó a firmar una declaración en la que decía que había participado en la guerrilla urbana para ser llevada luego a la oficina de Hidalgo donde también estaba el padre de Diana Fabio. Momentos después fue puesta en libertad.

Prueba: (i) Denuncia de Diana Elsa Fabio ante Fiscalía Federal N º1 de fecha 17/11/2003 obrante a fs 1404/1409 de la presente causa principal, Expte n° 443/84.

*** Hechos que perjudicaron a Juan Manuel Quinteros** (CASO 85) Causa: Principal, Expte. 443/84.

Juan Manuel Quinteros, argentino, DNI Nº 10.283.436, con domicilio en Manzana B, casa 18, Barrio 89 Viviendas, Santa Lucía, Tucumán.

Hechos: El día 29 de mayo de 1976 Juan Manuel Quinteros se encontraba durmiendo en la casa de sus abuelos y fue secuestrado por personal del Ejército. En el mismo operativo fueron detenidos los hermanos Manuel Humberto Suárez ("Quico") y Julio Guillermo Suárez y Juan Carlos Lizárraga.

Todos ellos fueron trasladados a la base militar asentada en instalaciones del Ex Ingenio Santa Lucía y luego a la de Caspinchango. En ambos lugares fue sometido a torturas de picana eléctrica y golpes y reconoció a un soldado llamado Juan Francisco Reyes, quien se hallaba realizando la conscripción y presenció las torturas a las que era sometido.

En los primeros días del mes de junio de 1976 fue trasladado al Arsenal Miguel de Azcuénaga. Lo sacaron en horas del anochecer en un camión con un grupo grande de personas. Durante su cautiverio en el Arsenal sufrió distintos tipos de torturas: picana eléctrica, submarino, lo colocaban sobre el elástico de una cama y le aplicaban corriente eléctrica en todo el cuerpo. Como consecuencia del maltrato recibido le quedaron secuelas físicas. Vio morir a varios detenidos durante la aplicación del submarino.

Compartió cautiverio con el "Ñato" Castellanos, de Caspinchango y "Chala" Ruiz, a quienes pudo ver cuando los represores del Arsenal sacaban a los detenidos al campo para que hicieran sus necesidades.

La víctima permaneció en el Arsenal hasta que el 29 de julio de 1976, cuando fue trasladado al Penal de Urquiza donde permaneció hasta el 5 de octubre de 1976, fecha en que lo trasladaron a la cárcel de Sierra Chica donde estuvo detenido a disposición del PEN hasta el 15 de enero de 1979 en que fue liberado. Mientras Juan Manuel Quinteros se encontraba cautivo, el día 31 de julio de 1976 fue secuestrado su padre René Manuel Quinteros.

Prueba: (i) Declaración testimonial de Juan Manuel Quinteros ante Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán obrante a fs. 2166 de la presente causa principal, Expte. Nº 443/84. (ii) Declaración testimonial de Juan Manuel Quinteros a fs. 117 de causa "Actuaciones complementarias de causa: 'Quinteros René Manuel s/su Denuncia por privación ilegitima de la libertad, torturas y otros delitos'" Expte. Nº 400. 309/6, acumulada jurídicamente a la presente. (iii) Declaración testimonial de Domingo Antonio Jerez a fs. 169/170 de causa "Actuaciones complementarias de Quinteros René Manuel s/ Su denuncia por privación ilegítima de la libertad, torturas y otros delitos" Expte. Nº 400.309/06, acumulada jurídicamente a la presente. (iv) Artículo periodístico "Yo vi a Bussi matar prisioneros a garrotazos" publicado en Revista "Gente" de fs. 2168/2173 la presente causa principal, Expte. nº 443/84: en sus dos declaraciones el ex soldado Domingo Antonio Jerez relata que mientras estuvo como conscripto en la Base Militar de Caspinchango, cuyo jefe era el Teniente Ariel Valdiviezo secuestraban a personas de la zona y las llevaban a ese centro. En una ocasión presenció el operativo de secuestro del "Gringo "Quinteros y la

USO OFICIAL

Ñata Monasterio quienes fueron acusados por los militares de realizar un atentado a una ambulancia militar (mayo de 1976). Quinteros y Ñata Monasterio fueron llevados a la Base de Caspinchango donde fueron sometidos a torturas y malos tratos. Jerez presenció cómo torturaban salvajemente a Quinteros y cómo éste pedía que no lo torturaran más. Jerez pensó que al final de las sesiones de torturas Quinteros había fallecido. (v) Solicitud de beneficio Ley 24.043 presentada por Julio Guillermo Suárez ante Secretaria de Derechos Humanos de la Nación obrante a fs. 1/2, su denuncia ante Fiscalía Federal Nº 1 en fecha 06/03/2008 obrante a fs. 5/7 y su testimonio ante Secretaría de Derechos Humanos de la Nación obrante a fs 7/8, todo ello en causa: "Suárez Julio Guillermo s/ privación ilegítima de la libertad y otros delitos" Expte nº 256/08. De estas actuaciones surge que Julio Guillermo Suárez estuvo detenido en el centro clandestino que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga desde mayo de 1976 al 24 junio de 1976 donde compartió cautiverio con la víctima. (vi) Solicitud de beneficio Ley 24.043 presentada por Manuel Humberto Suárez ante Secretaría de Derechos Humanos de la Nación obrante a fs. 2/3, su denuncia ante Fiscalía Federal Nº 1 obrante a fs. 1 y su testimonio ante Secretaría de Derechos Humanos de la Nación obrante a fs 6/7 de la causa "Suárez Manuel s/privación ilegitima de la libertad y otros delitos" Expte. nº 261/08. De estas actuaciones surge que Manuel Suárez estuvo detenido en el centro clandestino que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga desde mayo de 1976 al 24 junio de 1976 donde compartió cautiverio con la víctima. (vii) Certificado de libertad de Juan Manuel Quinteros emitido por Institutos Penales de la Provincia de Buenos Aires a fs. 2.179 de la presente causa principal, Expte. Nº 443/84.

*** Hechos que perjudicaron a María Angélica Mazzamuto de Romero, Roberto Romero y Antonio Raúl Romero** (CASOS 86, 87 y 88) Causa: Principal, Expte. 443/84.-

María Angélica Mazzamuto de Romero es argentina, DNI nº 3.808.667, domiciliada en Pasaje Ibatín Nº 165, San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán. A la fecha de los hechos se domiciliaba en calle Ayacucho al 400 de San Miguel de Tucumán.

Antonio Raúl Romero es argentino, DNI Nº 7087.942, (a) "Corto" o "Chichí", con el mismo domicilio.

No se tienen mayores datos filiatorios de Roberto Romero, (a) "Tito", hermano Antonio Raúl.-

Hechos: El día 8 de enero de 1977 antes del mediodía fue detenido Roberto Romero, confundiéndolo con su hermano Antonio. El mismo día, María Angélica Mazzamuto y su esposo Antonio Raúl Romero se encontraban en su domicilio de calle Rivadavia n° 1.688 de San Miguel de Tucumán, cuando alrededor de la 1.00 hora de la tarde dos sujetos se presentaron a Romero preguntándole si les podía arreglar un auto. Cuando Romero se identificó los dos sujetos sacaron pistolas, lo encañonaron y en ese momento avanzaron varios automóviles de uno de los cuales bajó Roberto Heriberto Albornoz gritando que él era la persona que estaban buscando y que lo secuestraran. Entre

los captores además se encontraban los policías Chaile, Marini alias “El Turco” y un tal “Colorado”. A María Angélica Mazzamuto y su esposo Antonio Raúl Romero los vendaron y los introdujeron en un auto. Los llevaron a un centro de detención que podría ser la Jefatura de Policía o la Brigada de Investigaciones, donde al llegar fueron separados.

A Mazzamuto la llevaron a un salón grande donde había varios detenidos. Allí Roberto Heriberto Albornoz la sometió a torturas e interrogatorios sobre las actividades de su marido. Por su parte Antonio Romero fue inmediatamente sometido a torturas e interrogatorios: lo ataron a una silla, lo golpeaban y le daban golpes de corriente mientras Roberto Heriberto Albornoz lo interrogaba. Permaneció en ese lugar cinco días y lo torturaban una o dos veces por día, hasta que una noche lo llevaron a otro centro de detención en el que fue llevado en presencia Antonio Arrechea, por entonces jefe de policía, quien ordenó que lo siguieran torturando hasta que confesara. Permaneció allí aproximadamente por otros cinco días y luego fue trasladado al Arsenal Miguel de Azcuénaga junto con su hermano Roberto. Por su parte, Mazzamuto fue llevada al CCD Arsenal en los primeros días de febrero de 1977.

Las tres víctimas compartieron cautiverio con Alberto Argentino Augier, Félix Viterbo Corbalán (a quien Mazzamuto conocía del Centro Vecinal de El Colmenar y que se encontraba en un estado de delirio místico y le contó que había sido sometido a un “enterramiento”) y Luis Falú. Antonio Romero escuchó decir que se encontraba detenido en el lugar Juan Martín y sintió los quejidos de un detenido apodado “El Bombo”, es decir, Julio Ricardo Abad, quien se encontraba agonizante por haber sufrido “enterramiento” y a los tres días falleció, siendo sacado del lugar por los gendarmes y enterrado en el mismo Arsenal. María Angélica Mazzamuto, por su parte, pudo identificar además a Leandro Fote y a una joven embarazada de dos meses llamada Laura que estaba junto a su pareja.

Las tres víctimas fueron torturadas. Antonio Romero fue sacado al patio y lo estaquearon en un piso de cemento permaneciendo así toda la noche hasta que Luis Falú le dio agua. Como consecuencia de esta tortura se le ampollaron el pecho y el estómago. Todos los días lo llevaban a la sala de interrogatorios donde lo torturaban miembros de inteligencia del Ejército. En una sesión de interrogatorios, le sacaron la venda y lo “carearon” con Leandro Fote, preguntándoles a ambos si se conocían. Como ambos se negaron, comenzaron a torturar a Romero mediante picana eléctrica y golpes de puño. A Fote lo sacaron del lugar. Por su parte, a los dos días de llegada al Arsenal, Mazzamuto fue conducida a un cuarto pequeño, que se ubicaba fuera del galpón donde fue torturada con picana e interrogada sobre las actividades de su esposo. Ambos reconocieron a dos detenidos que eran pareja: la “Piturra” y el “Chaqueño”, quienes andaban sin vendas y participaban de los interrogatorios y torturas de los detenidos.

También pudieron ver en el Arsenal a Antonio Bussi, en lo que fue anunciado como una “visita”. En otra oportunidad se produjo la “visita” del sacerdote José Eloy Mijalchik, quien hablaba con los detenidos para exhortarlos a colaborar con los represores.

USO OFICIAL

El último día de febrero de 1977 las tres víctimas fueron dejadas en libertad. Los subieron a un auto y los abandonaron en las cercanías del Cementerio del Norte de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Prueba: (i) Declaración testimonial de María Angélica Mazzamuto de fecha 28/09/2005 ante Juzgado Federal nº 1 obrante a fs. 1858/1860 de la presente causa principal, Expte. nº 443/84. (ii) Declaración testimonial de Antonio Raúl Romero de fecha 12/10/2005 ante Juzgado Federal nº 1 obrante a fs. 1976/79 de la presente causa principal, Expte. nº 443/84. En ésta denuncia una primera detención en septiembre de 1975. El Sr. Antonio Romero fue secuestrado por el mismo personal policial (Roberto Heriberto Albornoz, Chaile, Marini) que lo secuestrara la segunda vez y también fue llevado a la Jefatura de Policía donde luego de ser brutalmente torturado recuperó su libertad a los pocos días. Roberto Heriberto Albornoz lo amenazó en esa oportunidad diciéndole "esta vez te salvas, la próxima no". (iii) Testimonio de Osvaldo Humberto Pérez de fecha 18/03/2008 ante Juzgado Federal Nº 1 a fs. 4070 de la presente causa principal, Expte. nº 443/84. (iv) Descargo por escrito presentado por Osvaldo Humberto Pérez de fecha 01/02/2006 ante Juzgado Federal Nº 1 a fs. 714/721 de causa "Auad Leoni Susana y Pérez Humberto s/ encubrimiento y torturas" Expte 1.120/05, cuyas copias se acompañan a la presente. En ambas ocasiones Pérez manifiesta que María Angélica Mazzamuto estuvo detenida en el Arsenal. (v) Testimonio de María Angélica Mazzamuto ante Comisión Bicameral de Tucumán. (Legajo 330-C- 84) a fs. 8 de causa "Corbalán Félix Viterbo s/Privación ilegitima de la libertad" Expte. nº 401.180/5, acumulada jurídicamente a la presente.

*** Hechos que perjudicaron a Julio Guillermo Suárez** (CASO 89) Causa: "Suárez Julio Guillermo s/privación ilegitima de la libertad y otros delitos". Expte. nº 256/08.

Julio Guillermo Suárez, argentino, DNI. nº 7.004.396 domiciliado en calle Saavedra s/n Barrio Oeste, Famaillá, provincia de Tucumán. A la fecha de los hechos vivía en Caspinchango, Departamento Monteros.

Hechos: Entre fines de abril y los primeros días de mayo de 1976 Julio Guillermo Suárez fue secuestrado por miembros del ejército, en horas de la madrugada, de su domicilio en Frías Silva, Caspinchango, Departamento Monteros. En el mismo operativo fue secuestrado su hermano, Manuel Humberto Suárez (quien vivía en la casa contigua), Francisco Monasterio y su tío Antonio Monasterio. Todos fueron llevados maniatados y con los ojos vendados en un camión, en donde ya estaban en la misma condición los hermanos Ramón Ricardo y José Agustín Lizárraga, Juan Manuel Quinteros, José Inocencio Racedo y su esposa Alcira Ochoa de Racedo. Los llevaron hacia la Base de Santa Lucía.

Mientras estuvo en la Base de Santa Lucía, compartió cautiverio con un joven de Caspinchango apodado "Boyero", con "Pocha" Moyano y Enrique Godoy, alias "El Mono", ambos de Santa Lucía. Entre quienes estaban a cargo de la base pudo reconocer a

un sujeto oriundo de Santiago del Estero de apellido Corregidor, un oficial de apellido Trucco, y otro de apellido Salaverri o Salaberry.

A los tres días fue trasladado al Arsenal Miguel de Azcuénaga junto con su hermano, los hermanos Lizárraga, Juan Manuel Quinteros, José Inocencio Racedo y Alcira Ochoa de Racedo. A la semana de estar allí Lizárraga, Juan Manuel Quinteros, José Inocencio Racedo y su esposa Alcira Ochoa de Racedo. Los llevaron hacia la Base de Santa Lucía.

Mientras estuvo en la Base de Santa Lucía, compartió cautiverio con un joven de Caspinchango apodado “Boyero”, con “Pocha” Moyano y Enrique Godoy, alias “El Mono”, ambos de Santa Lucía. Entre quienes estaban a cargo de la base pudo reconocer a un sujeto oriundo de Santiago del Estero de apellido detenidos fueron trasladados a la Jefatura de Policía o al Comando de la V Brigada de Infantería. En este lugar, Suárez fue atado a una silla y torturado con picana eléctrica, también le pegaron con un garrote en las rodillas y en la espalda. Lo interrogaban sobre sus relaciones con los “extremistas” y si pertenecía a algún partido político. Los interrogadores eran tres, el primero hacía las preguntas, el segundo lo torturaba y el tercero daba las órdenes. Después del interrogatorio lo dejaron en un calabozo colgado de las manos, permaneciendo así durante varias horas.

Durante su cautiverio en la Jefatura, escuchó que torturaban salvajemente al matrimonio Racedo.

Posteriormente fue trasladado nuevamente al Arsenal, con su hermano y las mismas personas que habían sido llevadas a Jefatura, menos el matrimonio Racedo, del que no tuvieron más noticias. Suárez fue liberado el 24 de junio de 1976, junto a su hermano y Francisco Monasterio, en las inmediaciones de la empresa Tecotex sobre la ruta 38. Cuando volvían caminando en dirección a Famaillá fueron nuevamente detenidos y los llevaron a la Base Militar del Ingenio Santa Rosa para verificar si era cierto que habían sido liberados. Allí los interrogaron, les tomaron los datos y los liberan con la condición de que regresaran al día siguiente con el documento de identidad.

Al mes de su liberación, en el mes de julio de 1976, Julio Suárez y su hermano, Manuel, fueron nuevamente secuestrados de su domicilio por un operativo similar al del primer secuestro. Junto a ellos fueron detenidos Ramón Soberón y René Quinteros.

Todos fueron trasladados al centro clandestino del Ex Ingenio Nueva Baviera, donde permanecieron por dos noches. Luego los llevaron al Arsenal, excepto su hermano que fue liberado. En este centro estuvieron alojados cada uno en un calabozo individual en la zona de las caballerizas, siempre vendados y maniatados. Le pegaron con palos en las manos y en la espalda, además de no recibir comida.

Compartió cautiverio en el Arsenal con Bernardino Martínez y su hijo Luis Bernardino Martínez, quienes fueron sacados de sus celdas una noche y no volvieron más; también pudo ver a un joven llamado Carlos Ale.

Suárez fue liberado el 25 de agosto de 1976, junto a René Quinteros y Ramón Soberón, previamente habían firmado un papel en un pequeño cuarto.

USO OFICIAL

Mientras estuvo en el Arsenal, pudo advertir que una o dos veces, sacaban por la noche a personas, las que no regresaban. Además, desde los calabozos, se podían oír disparos de armas de fuego, provenientes de los fusilamientos que supone se realizaban.

Prueba: (i) Solicitud de beneficio Ley 24.043 presentada por Julio Guillermo Suárez ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación obrante a fs. 1/2. (ii) Denuncia de Julio Guillermo Suárez obrante a fs. 5/7. (iii) Testimonio de Julio Guillermo Suárez ante la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación obrante a fs 7/8. (iv) Declaración testimonial de Manuel Humberto Suárez en causa "Suárez Manuel Humberto s/ su denuncia por privación ilegitima de la libertad y otros delitos". Expte. N° 400.261/08 obrante a fs 24. (v) Solicitud de beneficio Ley 24.043 presentada por Manuel Humberto Suárez ante Secretaria de Derechos Humanos de la Nación obrante a fs. 25/28. (vi) Testimonio de Julio Guillermo Suárez ante Secretaría de Derechos Humanos de la Nación obrante a fs. 29/30. (vii) Declaraciones de René Manuel Quinteros ante el CONSUFA y ante la CONADEP obrante a fs. 32/35. Quinteros relata haber compartido cautiverio con Julio Suárez en Nueva Baviera y el Arsenal. (viii) Declaración testimonial de Julio Guillermo Suárez ante Juzgado Federal Nº1 de Tucumán obrante a fs. 24. (ix) Declaración testimonial de Francisco Carlos Monasterio ante la Fiscalía Federal Nº 1 de Tucumán obrante a fs 41 /42. Monasterio fue secuestrado en el mismo operativo que los hermanos Manuel y Julio Suárez. (x) Declaración testimonial de Julio Guillermo Suárez ante Juzgado Federal Nº1 de Tucumán a fs 36/37. (xi) Declaración de Juan Manuel Quinteros ante Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán obrante a fs 2166/2167 de causa "Actuaciones complementarias de causa "Quinteros René Manuel s/su denuncia por privación ilegitima de la libertad, torturas y otros delitos" Expte. Nº 400. 309/06. Juan Manuel Quinteros denuncia que fue secuestrado en el mismo operativo que los hermanos Julio y Manuel Suárez y compartió su cautiverio con ambos en el Arsenal. (xii) Denuncia ante Fiscalía Federal Nº 1 presentada por Alicia del Carmen Arrieta a fs. 43/44. Alicia del Carmen Arrieta relata que su esposo José Agustín Lizárraga y los hermanos de este último Juan Carlos y Ramón Ricardo Lizárraga fueron secuestrados en el mismo operativo que los hermanos Julio y Manuel Suárez y luego compartieron cautiverio con la víctima en la Base de Santa Lucía.

*** Hechos que perjudicaron a Manuel Humberto Suárez** (CASO 90) Causa: "Suárez Manuel Humberto s/ su denuncia por privación ilegitima de la libertad y otros delitos" Expte nº 261/08.

Manuel Humberto Suárez, argentino, DNI. 7.010.536 domiciliado en calle Saavedra s/n Barrio Oeste, Famaillá, provincia de Tucumán. A la fecha de los hechos vivía en Caspinchango, Departamento Monteros.

Hechos: A fines del mes de abril de 1976, personal militar ingresó al domicilio de Manuel Humberto Suárez, sito en la calle Frías Silva de la localidad de Caspinchango (Monteros) y se lo llevaron secuestrado junto a su hermano Julio Guillermo, quien vivía en

la casa contigua, y Francisco Monasterio (alias “Pancho”), su tío Antonio Monasterio, y otras personas del lugar.

Todos fueron trasladados a la Base Militar del Ex Ingenio Santa Lucía, en donde Suárez fue interrogado, se le aplicó picana eléctrica, se le privó de alimentación, y era acusado de ser “correo” de los “extremistas”. Compartió cautiverio con José Agustín Racedo, su esposa Alcira Ochoa de Racedo, los hermanos Ramón Ricardo, José Agustín y “Chacho” Lizárraga; un muchacho de apellido Abraham, René Quinteros y su hijo Juan Manuel Quinteros. Suárez permaneció detenido en la Base aproximadamente una semana. El 2 de mayo de 1976, todos fueron subidos en un camión, donde iban unos encima de otros y con sus ojos vendados y los trasladaron al centro clandestino de Arsenal Miguel de Azcuénaga. Allí Suárez fue nuevamente sometido a torturas con picana eléctrica, lo sentaban en una silla, lo ataban con un cable y le pasaban corriente eléctrica en los oídos. También lo pateaban y golpeaban con un garrote. En otras oportunidades le ponían esposas y lo colgaban de los brazos mientras lo apaleaban.

El 24 de junio de 1976 fue liberado junto a su hermano Julio Guillermo Suárez y Francisco “Pancho” Monasterio, en la localidad de La Reducción, sobre la ruta 38. Pero fueron nuevamente detenidos a la entrada de Famaillá y llevados a la Base militar del Ingenio Santa Rosa. En este lugar, también les vendaron los ojos, pero no recibieron malos tratos, estuvieron detenidos un día, esa noche fueron liberados.

El 20 de julio de 1976, mientras Suárez se encontraba durmiendo en su casa, fue secuestrado y trasladado a las instalaciones del Ex Ingenio Nueva Baviera, lugar donde compartió cautiverio con su hermano Julio Guillermo, René Quinteros y Ramón Soberón. Manuel Suárez fue liberado el 23 de julio de 1976 en la ruta 38, lo dejaron en un cañaveral junto a dos santiagueños.

En el año 1979, mientras Suárez se encontraba trabajando en la Municipalidad de Santa Lucía lo hicieron llamar de parte del intendente. Cuando concurrió a la intendencia le hicieron un interrogatorio tres sujetos con boina. Le preguntaban qué hacía después del trabajo y por qué calle se dirigía a su vivienda.

Cuando Suárez volvía en bicicleta a su casa, se le cruzó un automóvil Peugeot color blanco del cual descendieron unos sujetos que lo encañonaron y lo metieron al auto. Inmediatamente, Suárez fue llevado a un lugar desconocido, donde lo sometieron a torturas, le ataron de manos y cuello, le pusieron una bolsa plástica en la cabeza y le rompieron las costillas de las patadas que le dieron. Al día siguiente lo volvieron a torturar y finalmente fue puesto en libertad en cercanías del Ingenio Fronterita. Como consecuencia de las torturas debió ser internado en el Hospital de Santa Lucía.

Prueba: (i) Declaración de Manuel Humberto Suárez, de fs. 1 y 6/7. Allí refirió que los militares que estaban en la Base Militar Santa Lucía y actuaban en la zona, eran Trucco, Corregidor (santiagueño); Ausile (quien tenía tonada cordobesa), Salaverri, Valdivieso, y el Mayor Paz. (ii) Declaración testimonial de Julio Guillermo Suárez ante el Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán obrante a fs. 28/29 de la causa “Suárez, Julio Guillermo

USO OFICIAL

s/ Privación ilegitima de la libertad y otros delitos" Expte. N° 400.256/08. (iii) Solicitud de beneficio Ley 24.043 presentada por Julio Guillermo Suárez ante Secretaría de Derechos Humanos de la Nación obrante a fs. 31/32. (iv) Declaración testimonial de Julio Guillermo Suárez ante la Fiscalía Federal Nº 1 de Tucumán y ante Secretaria de Derechos Humanos de la Nación obrantes a fs 31/38. (v) Declaración testimonial de Francisco Carlos Monasterio ante la Fiscalía Federal Nº 1 de Tucumán obrante a fs. 44/45. Monasterio fue secuestrado en el mismo operativo que Manuel Suárez. (vi) Declaración de Juan Manuel Quinteros ante Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán obrante a fs. 50. Juan Manuel Quinteros denuncia que fue secuestrado en el mismo operativo que los hermanos Julio y Manuel Suárez y compartió su cautiverio con ambos en el Arsenal. (vii) Denuncia ante Fiscalía Federal Nº 1 presentada por Alicia del Carmen Arrieta a fs. 46/47 de autos. Alicia del Carmen Arrieta relata que su esposo José Agustín Lizárraga (fallecido), y los hermanos de este último Juan Carlos y Ramón Ricardo Lizárraga fueron secuestrados en el mismo operativo que los hermanos Julio y Manuel Suárez, y luego compartieron cautiverio con la víctima en la Base de Santa Lucía. (viii) Declaración testimonial de Julio Guillermo Suárez ante Juzgado Federal Nº1 de Tucumán obrante a fs. 121 de causa "Actuaciones complementarias de causa 'Quinteros René Manuel s/ Su Denuncia por privación ilegitima de la libertad, torturas y otros delitos'" Expte. Nº 400. 309/6.

*** Hechos que perjudicaron a Francisco Carlos Monasterio** (CASO 91) Causa: "Monasterio Francisco Carlos s/ su denuncia por privación ilegitima de la libertad y otros delitos" Expte. nº 628/08.

Francisco Carlos Monasterio, argentino, DNI. 4.984.959, domiciliado en Teniente Berdina, Monteros, provincia de Tucumán.

Hechos: Los últimos días del mes de abril de 1976, Francisco Carlos Monasterio se encontraba viviendo en la casa de una tía suya ubicada en Caspinchango, junto a su tío, Antonio Monasterio. Uno de esos días, en horas de la madrugada, ingresaron a la vivienda un grupo de alrededor de seis militares con cascos, empujando la puerta con sus fusiles, quienes preguntaban por Monasterio. A éste lo obligaron a levantarse, lo sacaron de la casa mediante golpes y lo introdujeron en la parte trasera de un camión. En el mismo operativo fueron secuestrados los hermanos Suárez (Julio Guillermo y Manuel) y su tío Antonio Monasterio.

Le arrancaron la camisa, con ella le vendaron los ojos, y lo esposaron con las manos hacia atrás. Fue trasladado al Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde compartió cautiverio con una chica de nombre Gladys de "Las Mesadas" -a quien conocía de la infancia-, el "Ñato" Castellanos, Juan Coronel oriundo de Santa Mónica y "Chacho" Aguilera.

Monasterio fue interrogado en varias oportunidades, lo acusaban de andar con "gente fulera" que disparaba en el monte. En horas de la madrugada era desnudado y llevado a una sala donde le aplicaban picana eléctrica en las sienes.

El 24 de junio de 1976 fue liberado desnudo, junto a los hermanos Julio Guillermo y Manuel Suárez, cerca del INTA en la zona de Lules, estaban con los ojos vendados y las manos atadas. Pero cerca de Famaillá, fueron nuevamente detenidos y llevados en un camión hasta el Ingenio Santa Rosa, allí estuvieron encerrados durante cinco días, y luego fueron finalmente liberados en las cercanías de Acheral.

Prueba: (i) Denuncia de Francisco Carlos Monasterio ante Fiscalía Federal N° 1 de Tucumán, a fs. 1/2. (ii) Declaración de Manuel Humberto Suárez a fs. 1 y 6/7 en la causa "Suárez Manuel Humberto s/ su denuncia por privación ilegitima de la libertad y otros delitos" Expte. N° 400.261/08. Suárez reitera que fue secuestrado en el mismo operativo y luego compartió su detención con Francisco Monasterio en la Base militar de Santa Lucia y posteriormente en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. (iii) Solicitud del beneficio de la Ley 24.043 presentada por Manuel Humberto Suárez ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, obrante a fs. 2/7 de la causa "Suárez Manuel Humberto s/ su denuncia por privación ilegítima de la libertad y otros delitos" Expte 261/08. (iv) Solicitud del beneficio de la Ley 24.043 presentada por Julio Guillermo Suárez ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, obrante a fs. 1/2 de la causa "Suárez Julio Guillermo s/ Privación Ilegitima de la libertad y otros delitos "Expte. Nº 400.256/08. Julio Guillermo Suárez relata que compartió su detención con Francisco Monasterio. (v) Testimonio de Julio Guillermo Suárez ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación obrante a fs. 7/8 de causa "Suárez Julio Guillermo s/ Privación Ilegitima de la libertad y otros delitos "Expte. Nº 400.256/08. A fs. 7 dice que fue liberado el 24 de junio con su hermano Manuel Suárez y con Francisco Monasterio. (vi) Declaración testimonial de Julio Guillermo Suárez ante Juzgado Federal Nº1 de Tucumán obrante a fs. 121 de causa "Actuaciones complementarias en causa 'Quinteros René Manuel s/ su denuncia por privación ilegitima de la libertad, torturas y otros delitos'" Expte. Nº 400.309/6, acumulado jurídicamente a la presente.

*** Hechos que perjudicaron a María Candelaria Moyano** (CASO 92) Causa: "Moyano María Candelaria s/ su denuncia por privación ilegitima de la libertad y otros Delitos" Expte. nº 149/08.

María Candelaria Moyano, argentina, MI 6.048.841, (a) "Pocha", domiciliada en Caspinchango, Monteros, Tucumán.

Hechos: El 12 de mayo de 1976, alrededor de las 10 horas, mientras María Candelaria Moyano (a) "Pocha" se encontraba en el domicilio de sus padres en Potrero Negro, Santa Lucía, ingresaron a la vivienda varios militares, al mando de un teniente de apellido Arias y encontrándose fuera de la misma el entonces jefe de policía Arrechea. Fue interrogada en ese mismo domicilio y luego llevada por la fuerza detenida a la Base Militar de Santa Lucía, donde fue amarrada a una cama y torturada.

Luego fue trasladada al Arsenal Miguel de Azcuénaga, en donde pudo reconocer al Sr. Castellanos de Santa Lucía, a René Quinteros, a unas personas de apellido Martínez y Racedo y a una chica de apellido Monasterio.

USO OFICIAL

En dicho lugar Moyano fue brutalmente torturada, le dieron golpes en todo el cuerpo -ovarios, columna y rodillas-, le pisaron los dedos, la golpearon con un látigo, y le metían la cabeza en el agua hasta dejarla sin respiración.

Moyano fue liberada un día viernes a fines del mes de julio 1976, en las cercanías del Dique El Cadillal, junto con René Quinteros; ambos caminaron hasta la Avenida Belgrano en San Miguel de Tucumán y se dirigieron a la casa de una familia de apellido Teruel, parientes de Quinteros.

Al regresar a su domicilio en Caspichango, Moyano permaneció vigilada por el ejército hasta el término del proceso militar.

Mientras estuvo detenida en el Arsenal pudo reconocer al coronel Arrechea, a quien le pidió que sus padres no sean detenidos.

Prueba: (i) Denuncia presentada por María Candelaria Moyano ante Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán obrante a fs 1/2 y su ampliación testimonial obrante a fs 11. (ii) Declaración testimonial de René Manuel Quinteros ante el CONSUFA obrante a fs 18/22. El mismo declara que durante su cautiverio, vio a Guillermo Suárez, quien estuvo detenido con la Moyano. (iii) Declaración testimonial de Julio Guillermo Suárez ante Fiscalía Federal N° 1 de Tucumán, obrante a fs 16/17. El mismo estuvo detenido en el centro clandestino que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga entre los meses de junio y julio de 1976. Allí compartió cautiverio con la víctima, a quien nombra como “Pocha” Moyano de Caspichango, así como también con el matrimonio conformado por José Inocencio Racedo y Alcira Ochoa de Racedo, un padre e hijo de apellido Martínez, René Quinteros y Francisco “Panchito” Monasterio. (iv) Denuncia de José Teodoro Rocha ante la Fiscalía Federal N° 1 a fs 1/2 de la causa “Rocha José Teodoro s/su denuncia por privación ilegitima de la libertad y torturas” Expte. Nº 400.657/08, quien refiere que en el tiempo que estuvo en el Arsenal, pudo ver a “Ñata” Monasterio, “Serrucho” Castellano de Caspichango, René Quinteros, “Pocha” Moyano, Godoy, Gringo Sellaran, los hermanos Orozco y a la esposa de uno de ellos, al Sr. Ago Figueroa de Santa Lucía, a Miguel René Suárez alias “Sapo” de Santa Lucía (quien fue asesinado en el Arsenal) y a Daniel Soria “alias Fisicudo” hijo de Juan Pedro Soria, quien también murió en el Arsenal a causa de las torturas.

*** Hechos que perjudicaron a Teresita Cándida Hazurun** (CASO 93) Causa: “Hazurun Teresita s/privación ilegitima de la libertad y otros delitos” Expte. nº 1.413/06.

Teresita Cándida Hazurum, argentina, DNI 5942712, con domicilio en calle Chivilcoy Nº 1283 del Barrio Floresta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la fecha de los hechos se domiciliaba en la localidad de Frías, Santiago del Estero, donde ejercía como abogada.

Hechos: El 20 de noviembre de 1976, a las 11.00 horas, mientras Teresita Hazurun se encontraba en su domicilio, sito en las calles Alvear y Quintana de la localidad de Frías (Departamento Choya, Santiago del Estero), se apersonó el jefe de policía de la Comisaría de Frías, quien le ordenó que debía acompañarla porque había una orden de detención en su

contra, sin exhibir ningún tipo de orden al respecto. Inmediatamente la subieron a una camioneta Ford que se dirigió hacia la comisaría del lugar, donde permaneció aproximadamente por espacio de media hora, ya que luego fue llevada en el mismo vehículo a la ciudad de Santiago del Estero.

En Santiago del Estero fue llevada a las oficinas de la SIDE, donde le vendaron los ojos y le hicieron sentar en una habitación hasta horas de la noche. Estuvo sentada todo el día domingo en esas condiciones, y se le preguntaba el motivo de su detención.

El 22 del mismo mes y año, a las 8 horas, dos sujetos condujeron a Hazurun a una habitación ubicada al fondo de las oficinas de la SIDE. En esta habitación comenzaron a pegarle trompadas en el estómago y en el rostro. Mientras era interrogada por Musa Azar, quien le preguntaba por su ex novio Hugo Libaak, las actividades a las que se dedicaba y las reuniones que frecuentaba.

Al no obtener respuesta por parte de Hazurun, los sujetos la acostaron en una cama donde le aplicaron picana eléctrica en distintos lugares del cuerpo. Después del interrogatorio la llevaron a un sótano donde fue estaqueada en un catre, mientras una persona la custodiaba y la amenazaba.

Permaneció en esa situación durante dos días, hasta que la condujeron a un garaje. Estuvo cuatro días sin recibir ningún tipo de alimentación, al cuarto día le permitieron bañarse y la llevaron nuevamente ante Musa Azar, quien estaba a cara descubierta, y mantuvo una conversación.

Luego fue trasladada a la Central de Policía de Santiago del Estero, donde Hazurun fue fichada y fotografiada. Volvió a ser trasladada a la delegación de la SIDE, donde fue obligada a firmar una declaración falsa. En la SIDE estuvo en el garaje durante seis días vendada, hasta que un día la introdujeron por la fuerza en el baúl de un automóvil con destino a la provincia de Tucumán.

En horas de la noche, llegó a un centro clandestino de Tucumán que funcionaba en el predio de Arsenales Miguel de Azcuénaga. En dicho lugar la introdujeron a una barraca donde la hicieron acostar. Todas las mañanas llegaba personal del Ejército quienes se retiraban a las 20 horas, siendo relevados por personal de la Gendarmería Nacional, quienes tenían la función de custodia del centro clandestino.

Por las noches podía conversar con los gendarmes que habían sido alumnos del hermano de Hazurun en Jesús María (Córdoba). Entre los integrantes de la guardia de gendarmería pudo identificar a Roberto Barraza alias “Lucho”, ya que éste solía sacarle las vendas y conversar frecuentemente con ella. Del mencionado Barraza recuerda, que en una oportunidad en que a una detenida Antonia Barrionuevo la dejaron desnuda a campo abierto burlándose de ella, éste sujeto le acariciaba los senos.

Cuando llegaban los detenidos al Arsenal, lo primero que hacían los integrantes del centro clandestino era introducirlos desnudos en pozos de tierra (“enterramiento”) hasta el cuello. Los dejaban así durante varios días, sin agua y sin comida, a la intemperie, hasta que eran llevados a los interrogatorios. Cuando los desenterraban tenían picaduras de

USO OFICIAL

insectos en su cuerpo; después los llevaban a la sala de torturas donde eran sometidos a la picana eléctrica mediante el llamado “teléfono”, que solían ponérselos simultáneamente en los dientes y en las orejas. Al lado de la sala de torturas, había una habitación donde vivían los torturadores.

Finalmente, alrededor del 23 de diciembre de 1976, la sacaron en un auto, iba en compañía de tres sujetos y la llevaron a la delegación de la SIDE de Santiago del Estero.

Posteriormente fue trasladada al Centro Clandestino de Detención de “La Perla” en la ciudad de Córdoba, donde permaneció hasta el 3 de marzo de 1977, cuando aproximadamente a las 11.00 horas, la subieron a un avión y la llevaron a Buenos Aires (bajaron en la base aérea del Palomar) y luego la llevaron en un Fiat 128 hasta la Plaza Once, donde se encontró con su hermano que la llevó hasta la casa de su hermana.

Prueba: (i) Declaración testimonial de Antonia del Valle Barrionuevo, de fs. 2/3, quien refirió que cuando estuvo en cautiverio en el Arsenal Miguel de Azcuénaga conversó con Teresita Cándida Hazurun. (ii) Denuncia presentada por Teresita Cándida Hazurun ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), de fs. 18/23 y su ratificación ante el Juzgado Federal Nº 1 obrante a fs 141. (iii) Declaración testimonial ante el CONSUFA del ex Comisario Abel Jacobo Mitre MÍ Nº 7.193.914, de fs. 49/51. Era jefe de la comisaría del Departamento de Choya y fue uno de los policías que traslada a la detenida Teresita Hazurun desde Frías a Santiago del Estero. (iv) Copia del prontuario policial Nº 155482 perteneciente a la víctima, obrante a fs. 53/61. Consigna a fs. 57 de la detención de la víctima a disposición del Departamento de Informaciones de la Policía de Santiago del Estero, mediante nota firmada por el Jefe, Comisario Musa Azar. (v) Testimonio del ex gendarme Antonio Cruz ante CONADEP obrante a fs. 149/162. Recuerda que había una detenida en el Arsenal que era estudiante de abogacía y era hermana de un gendarme de la Escuela de Suboficiales de gendarmería. Se trata de Teresita Hazurum.

*** Hechos que perjudicaron a Ángel Adolfo Méndez Brander y María Margarita Laskowski** (CASOS 94 y 95) Causa: “Autores desconocidos s/ privación ilegitima de la libertad de Ángel Adolfo Méndez Brander” Expte. nº 732/07.

María Margarita Laskowski es argentina, DNI nº 4.558.070, domiciliada en Congreso Nº 696, San Miguel de Tucumán.

Ángel Adolfo Méndez Brander era argentino, DNI nº 7.652.169, a la fecha de los hechos tenia 27 años de edad, se domiciliaba en calle Júpiter s/n, Yerba Buena, Tucumán y era estudiante universitario en la UNT.

Hechos: El 22 de junio de 1976, en horas de la siesta, mientras Ángel Adolfo Méndez Brander y María Margarita Laskowski se encontraban en su domicilio, sito en calle Júpiter s/n, Yerba Buena, ingresó un grupo de personas vestidas de civil, quienes apuntándolos con armas los sacaron de su casa y los obligaron a tirarse en el suelo de la parte trasera de un automóvil Renault 12, color azul, sin chapa patente.

En el trayecto les vendaron los ojos y fueron llevados al centro clandestino “Reformatorio”. Allí Laskowski fue interrogada pero no torturada. En el lugar había más gente secuestrada. La custodia y los alimentos de los detenidos eran provistos por gendarmes del Litoral y de Córdoba, quienes se encargaban de llevarlos al baño a veces y en el camino los golpeaban.

A fines de junio o julio de 1976, Laskowski y Méndez fueron trasladados al Arsenal Miguel de Azcuénaga, junto a varias personas. En el Arsenal fueron separados, Laskowski fue introducida en una caballeriza donde estaban las mujeres. En el Arsenal fue interrogada en tres ocasiones y preguntada por si su esposo era guerrillero.

Alrededor del 28 de julio de 1976, Laskowski fue llevada al baño y la hicieron bañar, luego se le acercó un gendarme de nombre Marcelo Godoy, alias “el Indio”, quien le dio un billete y le dijo que lo iba a necesitar. Fue subida a un automóvil, junto a Berta Miranda, quien se encontraba embarazada. Ambas fueron liberadas en la ciudad de Tucumán, bajo amenazas de no denunciar lo sucedido.

Según el testimonio de Osvaldo Pérez, Méndez habría sido muerto a patadas por el Segundo Comandante de Gendarmería, Sabadini (fallecido), al tomar conocimiento que éste era hijo de un oficial del Ejército.

USO OFICIAL

Prueba: (i) Denuncia y Habeas Corpus presentados por Inés Gertrudis Brander de Méndez, obrantes a fs. 1/46. (ii) Declaración testimonial de María Margarita Laskowski ante el Juzgado Federal Nº 1 en fecha 23 y 24/10/ 2008, obrante a fs. 108/110. La misma agregó que cuando fue liberada se fue a vivir a la casa de sus padres. En el mes de agosto del mismo año, se presentaron unos gendarmes que le entregaron una carta de su esposo donde decía que le mande ropa y dinero. Ella envió el pedido y a partir de ese momento no volvió a tener noticias de Adolfo Méndez ni de esos gendarmes. (iii) Declaraciones y testimonios de Osvaldo Humberto Pérez a fs. 114/129.

*** Hechos que perjudicaron a Anabel Beatriz Cantos, Luis Cantos y Germán Cantos** (CASOS 96, 97 y 98) Causa: “Autores desconocidos s/ privación ilegitima de la libertad y otros delitos en perjuicio de Anabel Beatriz Cantos, Luis Cantos, Germán Cantos y Dardo Ezequiel Arias” Expte. n° 1.304/07.

Germán Cantos era argentino, tenía 21 años de edad cuando fue secuestrado, oriundo de la provincia de Santiago del Estero. Hasta el mes de agosto de 1976, se encontraba residiendo en Buenos Aires donde estudiaba la carrera de Psicología y trabajaba.

Anabel Beatriz Cantos de Caldera, era de la ciudad de Santiago del Estero, tenía 20 años de edad, estudiaba en la Universidad Católica de Santiago del Estero la carrera de Ciencias de la Educación y Geografía. Casada con Hugo Miguel Caldera, quien desapareció en el año 1975.

Luis Antonio Cantos era oriundo de la ciudad de Santiago del Estero, tenía 22 años de edad cuando fue secuestrado, residía en Buenos Aires donde estudiaba Licenciatura en Economía en la Universidad de Buenos Aires y trabajaba en la Empresa Aluar.

Hechos: En el mes de agosto de 1976, Germán Francisco Cantos, fue incorporado al Batallón de Ingenieros de Combate 141 con asiento en la ciudad de Santiago del Estero. Allí fue visitado por sus padres, Francisco Cantos y Ángeles López, en cuatro oportunidades.

Germán Cantos, que pertenecía a una compañía de combate, al saludar a su amigo Ramón José Eladio Iglesias le dice que estaban próximos a salir de franco y que ante ello sentía cierto temor, por lo que quería que algún conocido de él, tome conocimiento de su situación. Que este temor, infiere Iglesias, era porque Cantos estaba públicamente identificado con un grupo de izquierda.

El domingo 5 de septiembre, cuando la familia acude a visitarlo, en la guardia les comunicaron que el soldado Germán Cantos había salido con permiso de franco el viernes 3 de septiembre de 1976; que salió acompañado hasta la guardia por un sargento a las 18:20 hs, más tarde que sus compañeros por haber sido demorado, ya que su cédula militar no estaba firmada por su Jefe de Compañía, que era el capitán D'Amico. Les informaron que el joven figuraba en el libro de guardia como ausente sin causa. La familia intentó hablar con el Jefe del Batallón Correa Aldana (f), pero se encontraba en comisión (en la comitiva que recibiría al entonces Presidente Videla, que arribaba a Santiago), de manera que se dirigieron al domicilio de D'Amico, para pedir información sobre el hecho, quien manifestó desconocer la situación. El día miércoles 8 de septiembre, el padre de la víctima fue recibido por el Tte. Coronel Correa Aldana, quien repitió la versión del hecho informado en la guardia el día anterior con idénticos detalles, le manifestó que conocían antecedentes de participación del joven Cantos en grupos subversivos de estudiantes en Tucumán, pero que desde el cuartel no se había realizado ninguna acción.

Germán Cantos estuvo detenido ilegítimamente en el centro clandestino Arsenal Miguel de Azcuénaga, habiendo sido visto allí por Juan Martín, Susana Leoni Auad y Osvaldo Pérez. Este último refirió que los primos Cantos –Anabel y Germán- realizaban junto a él, las tareas de limpieza en el CCD.

Germán Cantos tenía 21 años de edad cuando fue secuestrado, oriundo de la provincia de Santiago del Estero. Hasta el mes de agosto de 1976, se encontraba residiendo en Buenos Aires donde estudiaba la carrera de Psicología y trabajaba. Hasta la fecha, permanece desaparecido.

El 19 de noviembre de 1976 Anabel Beatriz Cantos de Caldera, alrededor de las 10 horas, salió a dar un paseo, junto a su hijo de un año y ocho meses de edad –Daniel Caldera Cantos-, por las inmediaciones del domicilio de sus padres, sito en Av. Roca Sud Nº 841 de la ciudad de Santiago del Estero. Ella nunca regresó y su hijo apareció unas horas después en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, y fue entregado a los padres de Anabel por personal de la policía.

Anabel Cantos estuvo detenida ilegítimamente en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, siendo vista allí por Juan Martín, Teresita Hazurun, Leoni Susana Auad y

Osvaldo Pérez. Este último refirió que los primos Cantos –Anabel y Germán- realizaban junto a él, las tareas de limpieza en el CCD.

El padre de Anabel, Juan Cantos, recibió en varias oportunidades información anónima sobre el paradero de su hija y todos los datos indicaban que se encontraba en la provincia de Tucumán. Ello fue así hasta el 12 de diciembre de 1977 que le hicieron saber que "había dejado de estar en Tucumán". Hasta la fecha se desconoce su paradero.

Anabel Beatriz Cantos de Caldera, era de la ciudad de Santiago del Estero, tenia 20 años de edad, estudiaba en la Universidad Católica de Santiago del Estero la carrera de Ciencias de la Educación y Geografía. Casada con Hugo Miguel Caldera, quien desapareció en el año 1975.

El 22 de abril de 1977, alrededor de la 1.00 horas, un grupo numeroso de personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad, fuertemente armados, irrumpieron el domicilio sito en Marcelo T. de Alvear 464 de la Capital Federal, donde residía Luis Antonio Cantos junto a otros cuatro estudiantes, Carlos Gómez Álvarez, Emilio Palferro, Juan Rafael Cantos Sanabria y Ernesto Benito Campos. Tras maniatarlos y vendarlos a todos, revisaron el departamento, luego los metieron en los baúles de varios automóviles y fueron trasladados hasta un lugar desconocido. Allí fueron interrogados durante varias horas, luego volvieron a ser introducidos en los baúles y dejados en un camino secundario de la periferia de la Capital Federal. A excepción de Cantos que no fue liberado.

Luis Cantos fue trasladado al centro clandestino Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde compartió cautiverio con Héctor Justo y Juan Martín.

Luis Antonio Cantos era oriundo de la ciudad de Santiago del Estero, tenia 22 años de edad cuando fue secuestrado. Residía en Buenos Aires donde estudiaba Licenciatura en Economía en la Universidad de Buenos Aires y trabajaba en la Empresa Aluar. Hasta la fecha, permanece desaparecido.

Prueba: (i) Denuncia presentada por Francisco Cantos y Ángeles López de Cantos a fs. 196, padres de Germán, quienes refirieron que visitaron a su hijo en el Batallón de Ingenieros de Combate n° 141, los días 21, 22, 28 y 29 de agosto de 1976, y que cuando se presentaron el 5 de septiembre, les fue informado que Germán había salido de franco el 3 de septiembre y no había regresado; (ii) Causa caratulada en Santiago del Estero: "Denuncia de María de los Ángeles Petra Cantos s/ Privación ilegitima de la libertad, etc. en p. Germán Cantos c/ Jorge Rafael Videla". Expte. Nº 1021/05; (iii) Denuncia penal presentada por María de los Ángeles Petra Cantos obrante a fs 227/229; (iv) Testimonio de Juan Martín obrante a fs 16/21, quien refiere haber visto a Germán; Anabel y Luis Antonio Cantos en el mes de febrero de 1977 en el Arsenal Miguel de Azcuénaga; (v) Descargo por escrito y declaraciones testimoniales de Osvaldo Humberto Pérez, obrantes en la causa "Auad, Leoni Susana y Pérez Humberto S/ Encubrimiento y Torturas" procedimiento por separado referido a Osvaldo Humberto Pérez ".Expte N ° 1120/05, obrantes a fs. 440/448, en donde refiere que los primos Cantos realizaban junto a él, las tareas de limpieza en el CCD; (vi) Testimonio de Susana Leoni Auad en la causa "Auad, Leoni Susana y Pérez

USO OFICIAL

Humberto S/ Encubrimiento y Torturas” Expte N ° 1120/05; quien refiere haber visto a Germán y Anabel Cantos en el CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga obrante a fs 417/420; (vii) Testimonio de Héctor Justo ante Comisión Bicameral obrante a fs 30/31, quien refirió haber compartido cautiverio en el Arsenal con Luís Antonio Cantos y a través de este supo que allí también se encontraban Germán y Anabel Cantos; (viii) Legajo Nº 4421 correspondiente a Anabel Beatriz Cantos fs. 246/308, específicamente: a) Denuncia ante Conadep obrante a fs 246/254, presentada por Anabel Beatriz del Rosario Sanabria de Cantos (madre de Anabel Cantos) y por Juan Cantos (padre de Anabel), b) Denuncia de Juan Cantos obrante a fs 255/ 260, c) “Secretaria de Derechos Humanos s/ Denuncia c/ Musa Azar y otros”.Expte. Nº 9002/03, ix) Legajo CONADEP Nº 4420 correspondiente a Luis Antonio Cantos fs. 309/338; (a) Denuncia presentada por Antonio Cantos obrante a fojas 317; (b) Denuncia presentada por Antonio Cantos (padre de Luis Antonio) ante Asamblea Permanente por los Derechos Humanos obrante a fojas 318; (c) Denuncia presentada por María Eugenia Carrascosa de Cantos (madre de Luis Antonio), obrante a fojas 320/26; (x) Legajo CONADEP nº 290 correspondiente a Germán Francisco Cantos fs. 339/351, específicamente: a) Declaración de Francisco Cantos fs. 335/337 de Santiago del Estero, b) Copia cerificada de testimonio de Teresita Hazurun, quien manifiesta haber compartido cautiverio con una chica oriunda de Santiago del Estero fs. 372/378, xi) Denuncia ante la Comisaría Regional 1° de Policía de la Provincia del 19 de noviembre de 1976, por la privación ilegítima de la libertad de Anabel Cantos y su hijito Daniel Caldera, xii) Denuncia del Sr. Juan Cantos ante la Seccional 1° de Policía, del 19 de noviembre de 1976. xiii) Declaración testimonial de Alicia María Cantos, hermana de la víctima, en la Seccional 1° de Policía, del 19 de noviembre de 1976. xiv) Declaración testimonial de María Adelaida Mena, empleada doméstica de la familia Cantos, en la Seccional 1º de Policía, de fecha 20 de noviembre de 1976. xv) Radiograma emitido por Luis Barbieri a las 14:25 donde informa que la ciudadana Amalia Cortez de Wierna, hace entrega de una criatura de sexo masculino de aproximadamente 2 años, abandonado en el parque LLajta Sumaj de Las Termas, que tiene prendido en un botón del jardinero una etiqueta de cigarrillos marca Colorado en cuyo reverso dice “Soy Cantos Caldera – Roca 481 Santiago”. xvi) Declaración testimonial de Silvia Teresita Cantos, hermana de la víctima, en la Seccional 1° de Policía, del 20 de noviembre de 1976. xvii) Declaración testimonial de Amalia Cortéz de Wierna, vecina de Las Termas que encuentra a Daniel Caldera abandonado en la Plaza de la ciudad, con un cartel colgando de un botón del pantalón, en la Comisaría Seccional de Las Termas, del 19 de noviembre de 1976. xviii) Radiograma de hs 16:50 a la Comisaría 40 Seccional Río Hondo averiguando el paradero del menor Daniel Caldera, motivado por la denuncia efectuada por su familia. xix) Acta de entrega del menor Daniel Caldera a su abuelo Juan Cantos, en la Seccional 40, Río Hondo. xx) Radiograma firmado por Luis Barbieri, Comisario Principal a cargo en Río Hondo, donde informa que el menor Daniel Caldera fue entregado a su abuelo. xxi) Presentación judicial del padre de la víctima dando cuenta de los trámites realizados en procura de su paradero. xxii) Nota al

Ministro del Interior Gral. Albano Harguindegui, de fecha 1° de junio de 1979. xxiii) Nota al Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina Cardenal Raúl Primatesta, de fecha 1° de junio de 1979. xxiv) Nota al Ministro del Interior Horacio Tomás Liendo. xxv) Respuesta de Primatesta del 18 de junio de 1979. xxvii) Respuesta del Ministerio del Interior del 21 de junio de 1979, donde le informan que se ha ordenado realizar las investigaciones correspondientes. xxvi) Respuesta del Ministerio del Interior del 10 de septiembre de 1979, donde manifiestan que no existen constancias de que Anabel Cantos se encuentre detenida. xxvii) Respuesta del Ministerio del Interior del 17 de abril de 1981, donde le informan que dado el tiempo transcurrido, si persiste la búsqueda del paradero de Anabel Cantos, deberá hacerlo saber, caso contrario se procederá al archivo de la investigación. xxviii) Nota del padre de la Víctima al Ministerio del Interior, de fecha 6 de mayo de 1981, en la que informa que subsiste el pedido dado que no se modificó la situación de Anabel Cantos. xxix) Idéntica comunicación del Ministerio del Interior, con fecha 24 de abril de 1982. xxx) Presentación de denuncia ante el Batallón de Ingenieros de Combate 141 de fecha 21 de febrero de 1984. xxxi) Denuncia ante la Comisión Provincial de Estudio sobre Violación de los Derechos Humanos, en fecha 14 de marzo de 1984. xxxii) Presentación de la Comisión Provincial de Estudio sobre Violación de los Derechos Humanos, ante CONADEP de los casos de Anabel Cantos, Germán Cantos, Dardo Exequiel Arias y Daniel Dicchiara fs. 104/115. xxxiii) Testimonio ante la Comisión Provincial de Estudio sobre Violación de los Derechos Humanos de Juan Cantos, padre de la víctima de fecha 26 de marzo de 1984. xxxiv) Comunicación de CONADEP donde se informa que la denuncia realizada fue elevada a la Justicia de la Provincia de Tucumán, ante el Juez Manlio Torcuato Martínez. xxxv) Declaración de Juan Cantos, padre de la víctima ante el juez de instrucción militar, Rinaldo Sebastián Rigazio, el 7 de junio de 1985. xxxvi) Declaración de Daniel Virgilio correa Aldana, Jefe del Batallón de Ingenieros de Combate 141 –Santiago del Estero, ante el juez de instrucción militar, Rinaldo Sebastián Rigazio, el 16 de junio de 1985. xxxvii) Comunicación del Batallón de Ingenieros de Combate 141 de fecha 10 de julio de 1985, informando que no existen antecedentes de la detención de Anabel Cantos en esa Unidad militar. xxxviii) Solicitud del juez de instrucción militar, Rinaldo Sebastián Rigazio a la Delegación Santiago del Estero de la Policía Federal Argentina solicitando antecedentes de la detención de Anabel Cantos en esa Dependencia. xxxix) Comunicación Jefe de la Delegación Santiago del Estero de la Policía Federal Argentina de fecha 8 de julio de 1985, informando que no existen antecedentes de la detención de Anabel Cantos en esa Unidad militar. xl) La instrucción militar eleva las actuaciones al Consejo Supremo de las FFAA, el 12 de marzo de 1986 opinando que se proceda al sobreseimiento de la causa. xli) Resolución del Ministro de Defensa Horacio Jaunarena del 20 de noviembre de 1986 que ordena sobreseer provisoriamente el sumario por la desaparición de Anabel Cantos. xlii) Escrito otorgando la tutela legítima del menor Daniel Caldera Cantos a sus abuelos maternos, de fecha 4 de noviembre de 1987. xliii)

USO OFICIAL

Informe Bicameral de Tucumán, donde el Sr. Juan Martín es testigo de la presencia de Anabel Cantos y sus primos en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, Tucumán.

2.- Declaraciones Indagatorias: Versión de los hechos aportada por los imputados.-

2.1. Declaración de Roberto Heriberto Albornoz

Al momento de prestar declaración indagatoria el encartado Roberto Heriberto Albornoz niega y rechaza totalmente todos los cargos que se le imputan, afirmando desconocer totalmente las instalaciones del Arsenal Miguel de Azcuénaga.

2.2.- Declaración de Pedro Caballero

Al momento de prestar declaración indagatoria, el encartado informa que desconoce totalmente las circunstancias, identidades y denunciantes de los hechos que se le endilgan. Rechaza además que haya habido personal dependiente de la compañía de Arsenales 5 Miguel de Azcuénaga, que haya intervenido o haya estado relacionado con la comisión de los delitos que se mencionan en la imputación.

Manifiesta que la organización a su cargo –Arsenales 5- estaba circunscripta totalmente a tareas de reparación de elementos mecánicos y eléctricos. Específicamente, como Jefe de la Compañía Arsenales 5 refiere a sus funciones y responsabilidades, indicando que dicha organización funcionaba en las instalaciones industriales pertenecientes al campo cuya responsabilidad patrimonial era del comando de la V Brigada, y que es conocida coloquialmente por la población de San Miguel de Tucumán, como el campo del Arsenal. Luego el encartado ilustra sobre los antecedentes históricos del Arsenal, manifestando que a mediados del siglo XX se crea el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Este Arsenal según la concepción de la organización del ejército de la época era un arsenal regional dependiente de la Dirección de Materiales del Ejército, cuyo asiento estaba en Buenos Aires. Dicha organización administraba todo lo referido al servicio de arsenales: mantenimiento y abastecimiento de armas y municiones y otros elementos referidos al área. Dada la responsabilidad que debía ejercer quien estaba a su frente de un Arsenal, la jerarquía del director era de Coronel y debía revestir especialidad de ingeniero militar. Cuando se produce la reestructuración del Ejército en la década del 60 -a cargo del General Onganía-, se pasa del modelo de despliegue territorial -en el cual estaba inscripto el Arsenal-, a un modelo similar al del ejército de EEUU, donde cada una de las Brigadas lleva consigo todas las organizaciones de los servicios, entre los cuales se encuentra el de Arsenales, por lo que su función deja de ser territorial para pasar a ser móvil. Los talleres del Arsenal eran montados sobre vehículos tipo camión, y tenía seis camiones taller, dos vehículos taller más livianos, grúa de recuperación y semi remolques de transporte de material.

Informa el encartado que cuando la Brigada pone en ejecución esta nueva organización y se designa al primer jefe de la compañía de Arsenales 5, se lo hace con el grado de Mayor y, dada la característica del servicio de Arsenales, incluye personal capacitado técnicamente (ingenieros militares) para realizar tareas de reparación de los

distintos componentes mecánicos y eléctricos de los vehículos, reparación de los distintos componentes mecánicos de las armas, pistolas, fusiles, ametralladoras, morteros, cañones, reparación de artículos radioeléctricos de transmisión.

En el caso específico del Arsenal en Tucumán, se dispuso que hasta tanto se produjera la provisión de los materiales, el mismo se asentara en los galpones industriales que había dejado el viejo Arsenal disuelto, y que incorporara –para evitar su cesantía- al personal civil de operarios y artesanos que habían quedado disponibles. Como homenaje y recuerdo del viejo Arsenal disuelto se resuelve, dada la característica del servicio que presta la Compañía de Arsenales, denominarla con el nombre de “Miguel de Azcuénaga”, queriendo indicar que el nombre no supuso una transferencia de responsabilidades y atribuciones, sino que su uso se justificó en un recuerdo, en un homenaje.

Conforme la descripción efectuada, el encartado destaca que la persona que estaba al frente de la organización del Arsenal debía poseer capacitación en ingeniería militar. Sobre tal particular manifiesta que la política de personal vigente en el Ejército en las décadas del 70 y del 80 establecía que el personal asignado a Jefes con especialidad de ingeniero militar, debían desempeñarse pura y exclusivamente en funciones relacionadas con el servicio de Arsenales -fabricaciones militares, organismos de investigación y desarrollo-, es decir que sus funciones estaban circunscriptas pura y exclusivamente a esas áreas. Los Jefes que habían cursado la Escuela Superior de Guerra eran quienes estaban habilitados para ejercer el Comando de los Regimientos, Brigadas y Cuerpo de unidades de combate. Es decir existía una clara discriminación en la política de personal referida a las funciones de jefes de organizaciones, estipulando claramente quiénes estaban capacitados para dirigir las operaciones de combate, y que era quienes constituían funcionalmente la cadena de comandos para la ejecución de operaciones de combate. Dentro de las organizaciones existe también para apoyo de las unidades de combate, organizaciones de servicios, que no se encontraban dentro de la cadena de comandos, ya que su función se circunscribía pura y exclusivamente al apoyo a brindar con los servicios: arsenales, sanidad, e intendencia. Dentro de las ordenes de operaciones que eran el instrumento mediante el cual se ejerce el comando, existían apartados especiales que explicaban qué debía hacer cada servicio dentro del desarrollo de la operación que se estaba ordenando, que no estaba relacionado con el accionar de las unidades de combate, que son el principal destinatario de las ordenes de operaciones.

Manifiesta el encartado que tanto en las declaraciones de los ex gendarmes Torres y Cruz, como así también diversos testimonios volcados en la causa, se describe la existencia de un lugar al que se da en llamar “centro clandestino de detención Miguel de Azcuénaga”, localizándose la entrada a ese lugar alejada de la puerta a la cual se accedía a la compañía de Arsenales 5, como así también la situación de aislamiento en que se encontraba el lugar que describen. También mencionan gran cantidad de personal, ninguno de los cuales tiene ningún tipo de relación con la compañía de Arsenales 5.

USO OFICIAL

Desde los conceptos volcados precedentemente, reflexiona el encartado respecto a que quien tenía dominio de todo el sector geográfico, con responsabilidad patrimonial sobre el mismo y con posibilidad de disponer a su arbitrio -dentro de las reglamentaciones vigentes-, era el comandante de la Brigada V. Fue el Comandante de la Brigada V quien dispuso que la parte correspondiente a los talleres fuera ocupada para el funcionamiento de la compañía de Arsenales 5, incluso el barrio de casas que se encuentra en el extremo del campo fuera administrada por el comandante de la V Brigada, quien ocupaba la casa del director del viejo Arsenal. Informa el encartado que, en su calidad de Jefe de la Compañía de Arsenales 5 tuvo que requerirle al Comandante de la V Brigada se le adjudicara una de tales viviendas, donde residió durante el período que estuvo como Jefe.

Informa el encartado que, si se considera todo el predio del Arsenal, el cual cuenta con cientos de hectáreas de superficie, resulta significativo que proporcionalmente la superficie asignada a la Compañía de Arsenales 5 era ínfima.

Paralelamente, respecto de las fechas de los hechos endilgados, destaca como particularidades a ser tenidas en cuenta que existirían errores en el período relevado respecto a sus funciones como Jefe del Arsenal 5. Se le imputa haber ingresado como Jefe el día 26 de noviembre de 1.976, cuando claramente de su legajo personal surge que fue puesto en posesión del cargo el día 14 de diciembre de 1.976.

Consecuentemente, considera que respecto a los hechos que se le imputan existen algunos acaecidos con anterioridad a la fecha referida, y que serían los siguientes: Almérico José 10 de abril de 1.976, Abad Ricardo Romualdo 4 de mayo de 1.976, Corral Ana Cristina 8 de junio de 1.976, Berón Oscar Rafael 11 de junio de 1.976, Paz Santiago 21 de junio de 1.976, Godoy Enrique 15 de agosto de 1.976, Díaz Saravia José Horacio 4 de setiembre de 1.976, Cantos Germán 5 de setiembre de 1.976, Pereyra Benigno Alberto 15 de setiembre de 1.976, Barrionuevo Antonia del Valle 16 de setiembre de 1.976, Carreras Juan Francisco 16 de setiembre de 1.976, Cajal Nora Alicia de Valle 24 de setiembre de 1.976, Medina Gutiérrez Ángel Alfonso 27 de setiembre de 1.976, Campopiano Cesar Gustavo 21 de octubre de 1.976, Medina Célea Georgina 21 de octubre de 1.976, Campopiano Julio Cesar 21 de octubre de 1.976, Alarcón Rina Rosa 25 de octubre de 1.976, Augier Alberto Argentino 29 de octubre de 1.976, Alderete Soria Alejandro Federico 1 de noviembre de 1.976, Rondoletto Pedro 2 de noviembre de 1.976, Cenador de Rondoletto María 2 de noviembre de 1.976, Rondoletto Silvia Margarita 2 de noviembre de 1.976, Rondoletto Jorge Osvaldo 2 de noviembre de 1.976, Bermejo de Rondoletto Azucena 2 de noviembre de 1.976, Cantos Anabel Beatríz 19 de noviembre de 1.976, Hazurun Teresita Cándida 20 de noviembre de 1.976, González Gallo María Celestina 23 de noviembre de 1.976, Fote Fortunato Leandro 1 de diciembre de 1.976.

Para el imputado resulta importante aclarar que el presente detalle de ninguna forma determina que pueda existir algún tipo de responsabilidad del suscripto respecto al resto de las personas cuyas fechas de desaparición son posteriores a las mencionadas, ello por cuanto su actividad durante el período 1.977 y 1.978 se circunscribieron pura y

exclusivamente al desarrollo de tareas relacionadas con el servicio de Arsenales. En el año 1.977 como reparación y puesta en servicio de gran cantidad de material que estuvo exigido por los movimientos de las unidades de combate en la zonas de operaciones, y durante el año 1.978 en la preparación de las tareas logísticas de mantenimiento y abastecimiento que había que prever para una posible operación en la zona de la puna, por el conflicto con Chile.

También efectúa una nueva aclaración respecto del funcionamiento de la Compañía de Arsenales 5 Miguel de Azcuénaga, respecto a que, si bien tenía dependencia orgánica del comandante de la Brigada de Infantería V, se guardaba también una relación de dependencia funcional con el Comando de Arsenales, órgano central del servicio de arsenales, quien determinaba los presupuestos y efectuaba los controles técnicos respecto a la tareas que se desarrollaban y al uso de los recursos presupuestarios. Al respecto considera interesante destacar que durante los períodos en que se desempeñó como Jefe de la compañía de Arsenales 5 de Miguel de Azcuénaga, se le destinó el presupuesto más alto con relación a todas la organizaciones de funciones similares, lo cual da idea de la magnitud de su responsabilidad y de las tareas que debía realizar en su organización.-

USO OFICIAL

2.3.- Declaración de Juan Carlos Benedicto

Al prestar declaración indagatoria el encartado Benedicto sostuvo que las causas que se le imputan datan del año 1976, y que en esa época él tenía 18 años de edad, que a la fecha tiene 52 años, habiendo nacido el 1 de enero de 1958.

Indica que, a la fecha de los hechos se encontraba cursando el 4to año de secundaria del colegio Nacional, contando con la documentación que acredita tales extremos.

Que por lo que tiene entendido a la edad de 18 años no podría haber accedido a un cargo público del estado por la minoría de edad y que además no necesitaba trabajar porque el nivel social de su padre le permitía estudiar.

Indica que nunca le dijeron “Juanca” como sobrenombre, que desconoce al Sr. Pérez, y que nunca estuvo en la provincia de Chaco, por lo que solicita un careo con el testigo Pérez.

Que se recibió como escribano en el año 1989.

Que nunca tuvo conocimiento de la presente causa, tomando conocimiento de la misma aproximadamente 20 días atrás, a su regreso de un viaje por Europa con su mujer, momento en el que personal de migraciones le informó que existía una causa en su contra indicándole la carátula. Que inmediatamente tomo contacto con el Dr. Lo Pinto quien le indicó que esperara la cédula para presentarse.

2.4.- Declaración de Camilo Colotti

Al momento de prestar declaración indagatoria sostuvo el encartado que se desempeñó como Segundo Jefe del Regimiento 19 entre el 14 de diciembre de 1976 y el 26 de enero de 1979.

Que con relación a los hechos que se le imputan, ocurridos entre el año 1977 y 1978, desea efectuar algunas aclaraciones.

Afirma el encartado que durante el Operativo Independencia operaron de cuatro a seis fuerzas de tarea, cada fuerza de tarea básicamente estaba constituida por dos equipos de combate, cada equipo de combate se formaba sobre la base de una compañía de tiradores, más refuerzos (medios de comunicaciones, exploración, logística, apoyo de fuego).

Manifiesta además que el Regimiento 19 para operar en el monte constituyó la fuerza de tarea "Teniente Berdina" que contaba con dos equipos, uno de combate que operaba en el monte y otro equipo que quedaba en el regimiento cumpliendo tareas normales. Que a cargo del equipo de combate se turnaban, cada 30 días, el Jefe con el Segundo jefe. Aclara el encartado que la fuerza de tarea Berdina que operaba en el monte dependía directamente del puesto de comando táctico de la Brigada, de quién recibía las órdenes y a quién se reportaba. Ello implica que cuando la fuerza de tarea Berdina operaba en el monte no tenía ninguna relación con el Regimiento, dependiendo del puesto de la Brigada.

Refiere a que los mismos hechos que se le imputan son también imputados al Gral. Alais, entonces Jefe del Regimiento, lo que no podría ser ya que a cargo de las fuerzas de tarea en el monte estaba el Gral. Alais o él nunca los dos. Los LRD Nueva Baviera y Arsenal, nunca tuvieron nada que ver con la fuerza de tarea Berdina, afirma que nunca supo que existiera en Caspichango un LRD. Que entre los años 1977 y 1978 no existió en Santa Lucia un LRD, esto era muy estricto, atento a que existía una orden del Gral. Bussi respecto a que no hubiera detenidos en Santa Lucía, lo que era controlado por el Gral Bussi quien aterrizaba en helicóptero a efectos de controlar. Afirma que si durante la ejecución de operaciones, se detenía a alguien, inmediatamente debía ser puesto en conocimiento del puesto de comando táctico para que lo retiraran. Además cada fuerza de tarea operaba en una zona claramente delimitada, nadie podía salirse de la zona ni ejecutar acciones fuera de la misma. La fuerza de tarea Berdina, todas las operaciones que ejecutó las hizo conforme a la doctrina vigente en el Ejercito Argentino para este tipo de operaciones.

Con relación a los hechos particulares que se le imputan, manifiesta que respecto al caso 21 (Rosario Argañaraz) esta persona fue detenida en Buena Vista, lugar que no estaba dentro de la zona de acción de la fuerza de tareas, la cual no operaba ni custodiaba los LRD escuela 201 ni Nueva Baviera. Con relación al caso 22 (Miguel Alberto Argañaraz) esta persona es hijo del anterior por lo cual valen las mismas consideraciones antes expresadas.

Respecto al caso de Juan Faustino Rodríguez (caso 39), el mismo fue detenido en León Rouges, fuera de la zona de acción de la fuerza de tarea Berdina, identificándose como captores al Comisario de León Rouges Miguel Ángel Monteros y al Policía Roberto Heriberto Muñoz y Carlos Roberto Andrada y Oscar Rodríguez, aclarando que la fuerza de tarea Berdina no tenia ninguna relación con la policía ni con Nueva Baviera lugar en el cual

no tenían ninguna intervención. Con relación al caso 40 de Pedro Ricardo Rodríguez que es hijo de la anterior y valen las mismas consideraciones.

Respecto al caso 80 de Ricardo Romualdo Abad, quien dijo haber sido detenido en el año 1975, en ese momento indica que era alumno de la escuela Superior de Guerra en Buenos Aires, estando allí destinado.

Con relación al caso de Fortunato Fote caso N° 37, este fue detenido el 1 de Diciembre de 1976 en Bs. AS., él en esa fecha no se desempeñaba como Segundo Jefe del Regimiento.

Respecto del Caso de Benigno Alberto Pereyra caso 49, este fue detenido el 15 de octubre de 1976 fecha en la cual él no se desempeñaba como Segundo Jefe.

Con relación al Caso de Luis Antonio Cantos quien fue detenido en Buenos Aires y de allí traslado al Arsenal, desconoce como se lo vincula con su persona.

2.5.- Declaración de Horacio Vaccaro.-

Al momento de prestar declaración indagatoria el encartado niega los hechos que se le imputan, y niega haber tenido conocimiento o participación alguna en la totalidad de los hechos que se mencionan en la presente causa. Niega haber cumplido funciones en el Destacamento de Inteligencia 142 en el período comprendido entre el 30/12/77 y el 18/04/79. Niega particularmente haber cumplido funciones durante el mes de enero de 1978 en el Destacamento de Inteligencia 142, y especialmente en la fecha 16 de enero de 1978 donde se habría producido uno de los hechos que le imputan (víctima Saieg).

Manifiesta haber comenzado a cumplir funciones en el Destacamento de Inteligencia 142 a partir del día lunes 13/02/1978, al término de una licencia anual ordinaria concedida por el Comando de la Brigada de Infantería V mediante comunicación radioeléctrica a distancia a su anterior destino, el Regimiento de Infantería de Montaña 21 ubicado en la localidad de Las Lajas, provincia de Neuquén, distante a 40 Km. de la frontera con Chile y a 2200 Km. aproximadamente de la localidad de San Miguel de Tucumán.

Que las constancias de dicha licencia se pueden observar de la lectura del informe de calificación período 1977/1978 de su legajo personal en el apartado “c) Licencias” donde ese consigna como fecha de inicio de la licencia el día 13/01/78 y como tiempo el término de 30 días corridos. Acompaña en este acto copia simple de las fojas de legajo pertinente (fs. 5417/5418)

Manifiesta el encartado que la fecha 30 de diciembre de 1977 consignada en la imputación como de inicio de sus funciones en el Destacamento de Inteligencia 142, en realidad corresponde a la fecha de publicación en Buenos Aires del Boletín reservado de Ejército n° 4749. Dicha fecha aparece en la carátula de tal documento y en cada una de las hojas foliadas. Acompaña copia simple del documento referido (fs. 5419/5420)

Manifiesta el encartado que a partir de la fecha de publicación del Boletín antes mencionado, se produce la distribución a todas las unidades del país por medio de Correo Postal de Ejército, por lo que la toma de conocimiento se realiza durante el transcurso del

USO OFICIAL

mes de enero de 1978 en su anterior destino –Las Lajas- y administrativamente se consigna como fecha de cese de sus funciones en dicha localidad el día 15 de enero de 1978 cuya constancia puede observarse en el informe de calificación antes mencionado, pero ahora en el apartado “a) Servicios y destinos”. Manifiesta que a partir de la fecha de cese de sus funciones en el Regimiento de Las lajas y en uso de licencia, se dedico ha preparar y enviar la mudanza de la casa instalada en dicha localidad, y a preparar y realizar a continuación el viaje por vía terrestre con su familia en su auto particular. Hecho que puedo acreditar por lo consignado en el informe de calificación antes mencionado en el casillero “observaciones” del apartado “licencias”, donde se consigna *“anual sin pedido de prestación de servicio (pps)”*. Manifiesta que a consecuencia de estas tareas o movimientos no estuvo físicamente en San Miguel de Tucumán hasta el día 20 de enero de 1978, continuando inclusive de licencia en sus funciones hasta el 13 de febrero de 1978 momento en que se presentó ante la nueva unidad.

En resumen indica que a la fecha de la imputación (16 de enero de 1978 caso “Saieg”) se encontraba en uso de licencia y físicamente fuera de la provincia.

Paralelamente advierte el encartado que no poseer la aptitud especial de inteligencia (AEI) en razón de nunca haber realizado el curso de capacitación correspondiente que debe desarrollarse para este fin en la Escuela de Inteligencia del Ejército, ofreciendo como prueba a tal efecto las constancias de su legajo personal en donde en ningún folio del mismo figura su paso por la Escuela de Inteligencia del Ejército, y en particular el hecho de haber cumplido funciones los tres últimos años anteriores a su pase en el Regimiento de Las Lajas.

Indica el imputado que la AEI resultaba incompatible con sus intenciones de ingresar a la escuela Superior Técnica del Ejército por lo que, manifestada la misma, fue incorporado a un listado de llamado a rendir examen durante el mes de noviembre de 1977, acreditando tal extremo con el Boletín reservado del Ejército n° 4738 cuya copia simple acompaña en este acto (fs. 5421/5423)

Manifiesta que su pase al Destacamento de Inteligencia 142 tuvo características de excepcionalidad por varias razones entre las cuales menciona: (i) no poseer la AEI, considerando que para ir destinado a una unidad de esas características el causante debe tener la capacitación correspondiente antes descripta mediante la realización de los cursos en las Escuela de Inteligencia hecho éste de características sorprendentes, siendo él el primer sorprendido de dicha asignación de destino; (ii) que la situación antes descripta de haber rendido examen de ingreso a la Escuela Superior Técnica en el mes de noviembre de 1977 y no haber podido ingresar a la misma por la valuación de los resultados, no se le consideró en los pases generales anuales que usualmente se publican a mediados del mes de diciembre, por lo que el documento que le asigna destino es un documento de pases complementarios; (iii) el nuevo destino asignado tendría las características de transitorio en virtud de que su situación estaba encuadrada entre un examen efectivamente rendido a fines de diciembre y un segundo examen a rendir en el año 1978 según lo acredita a través de la

presentación de una copia simple del Boletín reservado de Ejército n° 4795 de fecha 10/11/78 donde nuevamente integra un listado de llamado a rendir examen de ingreso a la EST, con la particularidad de que en este caso no se establecen las fechas de examen sino que se anuncia su oportuna publicación en virtud de la existencia del conflicto limítrofe con Chile, fecha que posteriormente fueron fijadas para el mes de abril del año 1979 (fs. 5424/5425)

Manifiesta el encartado que a partir de su presentación en el Destacamento de Inteligencia 142 se le asignaron funciones ajenas a las actividades de inteligencia por no poseer la capacitación correspondiente, siendo las funciones que desarrolló relacionadas estrictamente con el control de bienes patrimoniales. Tal función estaba vinculada directamente con el control de existencia de bienes patrimoniales en el edificio ubicado en la calle 25 de mayo a la altura de la calle España, control del estado de conservación de dichos bienes, control y supervisión de las modificaciones, mejoras o adecuaciones de los mismos y finalmente la actualización de los inventarios y de los planos del edificio. Estas funciones lo llevaron a desarrollar varias actividades entre las cuales puedo mencionar: recepción de teleimpresores de nueva generación para esa época que como exigencia obligó a la instalación de una antena de gran porte en la terraza del primer piso del edificio, adecuación de instalación eléctrica y finalmente instalación de los equipos. Otra actividad importante consistió en la adecuación de una sala de importantes dimensiones para instalar equipos de computación de nueva generación para esa época que serían enviados en la segunda mitad del año 1978. La adecuación señalada incluía la instalación de un piso de goma aislante, aires acondicionados, una jabalina de descarga a tierra, instalación con tablero eléctrico independiente, estabilizador de corriente, burlete en puertas y ventanas, todo ello para asegurar cierta estanqueidad y niveles de temperatura y humedad dado la complejidad de los equipos a recibir. Como actividades relacionadas con la descripción anterior, efectuó la actualización de inventarios y modificación de planos para su aprobación a nivel del Estado Mayor.

Manifiesta el encartado que en la segunda mitad del año, a raíz del recrudecimiento del conflicto limítrofe con Chile, se produjo una movilización en todo el país, que concretamente involucró la convocatoria de reservas y la reasignación de destinos del personal en actividad, suspendiéndose el dictado de los cursos normales.

En tales circunstancias, fue reasignado internamente dentro de la Guarnición Tucumán, para colaborar con actividades del Comando de Brigada en lo referente a actualización de cartografía de la zona próxima al limite con Chile, lo que lo llevó a participar de una marcha motorizada hasta la localidad de San Antonio de los Cobres entre los meses de setiembre y octubre de 1978, movimiento que se realizó con la totalidad de los vehículos del Comando de Brigada a través de la Localidad de Purmamarca –Jujuy-, hasta San Antonio de los Cobres –Salta-, por camino de cornisa, para la instalación de un puesto de comando en la mencionada localidad. Durante la marcha y ya en el lugar se aprovecho

USO OFICIAL

para reunir experiencia sobre el comportamiento de los vehículos y el completamiento de reconocimientos en la zona.

Dicho puesto comando quedo instalado hasta la finalización del conflicto con Chile, no obstante el encartado retornó a esta ciudad después de haber realizado la marcha referida.

Afirma el encartado que con fecha 10/11/78, se publico el Boletín con el llamado a rendir examen por lo que manifestó su necesidad de realizar la preparación para afrontar dicho examen, concediéndoseme algunas tardes libres.

Que a principios de 1979, solucionado pacíficamente el conflicto con Chile y conocidas las fecha de examen, se dedico enteramente a su preparación habiendo gozado de licencia por el término de 25 días a partir del 10/03/79, habiendo viajado a la provincia de Buenos Aires el día 30/03/79, rendido el examen y regresando el día 13/04/79, para incorporarse definitivamente a la Escuela Superior Técnica el día 18/04/79, situación que con posterioridad fue regularizada con la publicación del BRE n° 4819 de fecha 27/04/79, cuya copia simple acompaña (fs. 5426/5427)

Como constancia de las fechas antes mencionadas, presenta informe de calificación período 1978/1979 el que acompaño en copias simples (fs. 5428/5429).

Por consiguiente, manifiesta que el período de prestaciones de servicios en el Destacamento de Inteligencia 142 ocurrieron efectivamente entre el 13/02/78 al 10/03/1979 y que su ingreso a la Escuela Superior Técnica le permitió acceder al título de Oficial Ingeniero Militar (OIM) capacitación que le permitió ocupar cargos en fábricas militares, comandos y finalmente llegar a desempeñarme como Director de Tecnología del Ejército hasta su pase a retiro en el año 1998.

Que luego de su declaración el Ministerio Público Fiscal le formuló preguntas, todas las cuales fueron contestadas por el Sr. Vaccaro.

El Ministerio Fiscal formuló las siguientes preguntas *(i) para que informe el encartado cual era la función de inteligencia del Ejército y cual la acción proyectada; (ii) para que informe el encartado como se realizaba la acción de inteligencia, que métodos se utilizaban, (iii) para que informe cuales eran las directivas, normativas u ordenanzas generales en materia de inteligencia con respecto a la lucha contra elementos subversivos; (iv) para que informe el imputado que es la inteligencia táctica cuales eran las fuentes de información más frecuentes, (v) para que informe que significa la expresión "explotar sistemáticamente la fuente de información"; (vi) para que indique como funcionaba la comunidad informativa y quienes participaban de ella, (vii) para que indique quienes eran sus superiores, que tareas desarrollaba el personal civil de inteligencia y de quien dependían; (viii) para que informe que Lugares de reunión de Detenidos existían en Tucumán; (ix) para que informe el imputado si estuvo entre el año 1977 y 1979 en el Arsenal Miguel de Azcuénaga; (x) para que informe el imputado quien llamaba a rendir los exámenes de la EST; (xi) para que informe el encartado cuando fue asignado a Tucumán*

quien determinó las funciones que cumpliría; (xii) para que indique, si puede detallar, la manera en que tuvo acceso a la acusación fiscal.

El encartado contestó las preguntas consignadas de la siguiente manera: respecto a las preguntas (i) a (vi), y (viii) se manifiesto incapaz de responderlas en razón de no haber participado nunca en actividades de inteligencia por no poseer la capacitación o la especialización de AEI. A la pregunta (vii) manifiesto que los superiores inmediatos fueron las instancias de calificación consignadas en los informes de calificación de cada período agregadas como pruebas (Teniente Coronel Busso, Mayor Rivas); y con relación a la pregunta sobre personal civil de inteligencia afirma que él no tenía ninguna vinculación con los mismos en razón de que sus funciones estaban restringidas al control patrimonial de los bienes en el edificio de la calle 25 de mayo,, sin personal a cargo en razón de que era una actividad de control personal; informa además que el Jefe de Destacamento 142 era quien asignaba todas las funciones, y que éste tenía sus oficinas en el edificio de la calle 25 de mayo. A la pregunta (ix) manifestó no haber estado en el Arsenal Miguel de Azcuénaga ni tampoco haber necesitado, por sus funciones, mantener ninguna vinculación con esa dependencia, ya que la totalidad de sus funciones y actividades se desarrollaron en el edificio de la calle 25 de mayo. A la pregunta (x) manifiesta que a requerimiento de los causantes el llamado a rendir examen constituye una autorización para quienes así lo han solicitado. A la pregunta (xi) respondió que sus funciones fueron determinadas por el Jefe de Unidad. Finalmente respecto la pregunta (xii) respondió que se informa a través del detalle que pone en su conocimiento su abogado defensor, y además agrega que existió una información pública sobre una investigación que lo involucraría.

USO OFICIAL

2.6.- Declaración de Adolfo Ernesto Moore.

Al momento de prestar declaración indagatoria el encartado niega todos y cada uno de los cargos y hechos que se le imputan, como así también manifiesta que desconoce a todas las personas nombradas. Que tampoco conoce el Arsenal referido, que nunca pisó dicho cuartel, ni tiene conocimiento de un centro de detención, por lo cual niega cualquier tipo de vinculación con el mencionado Arsenal.

Con respecto a sus funciones, indica el encartado que se remitía a *juntar datos referidos a determinados ámbitos*, para lo cual contaba con un grupo de personas de cada ámbito, y los datos eran relativos a cuestiones de tipo social o económica que afectaban a la provincia.

Que al ingresar al Destacamento 142, su Jefe (Teniente Coronel Busso) dispuso que su función principal se concentraría en “moralizar” y cuidar que nada saliera fuera de la ley.

Respecto a su grado al ser destinado a Tucumán, era de Capitán recién ascendido el día 31/12/76, siendo asignado al grupo AEI el día 3 de Enero de 1977, dejando aclarado que se le imputa haber formado parte del grupo DEI que desconoce que significa. Que conforme figura en su legajo su destino en tal grupo finalizó el 23/02/79.

Aclara el encartado que al llegar a Tucumán no tenía la Aptitud de Inteligencia Militar (AEI) por haber realizado el curso, pero sin constar su aprobación, situación demorada por un problema que el encartado había tenido durante su asignación al Regimiento 6 de Infantería en Mercedes Buenos Aires. Tal situación justificó numerosas limitaciones en sus actividades -pues no tenia la especialidad-, la que le fue concedida seis u ocho meses después, conforme surge de su legajo.

Con relación a su lugar de trabajo, aclara que jamás trabajó en el Arsenal, siendo su lugar de trabajo real una oficina en la calle 25 de mayo en la cual estaba el Destacamento 142. Que su Jefe directo era quien le daba todas las órdenes y determinaba las tareas a cumplir. Que el Teniente Coronel Busso fue su Jefe durante todo su periodo en Tucumán.

Con relación a la acusación, afirma que no pudo encarar las acciones que se le imputan puesto que no estaba dentro de sus atribuciones, además agrega que conforme las fechas en que se habrían producidos los hechos, él se encontraba cumpliendo tareas fuera de la provincia de Tucumán, conforme figura en su legajo personal.

Afirma el encartado que, sobre un total de 42 causas que se le imputan 19 de ellas no estaba en Tucumán, una fue el día de su cumpleaños -día en el cual no trabajó-, 10 estaba cumpliendo tareas en Bs. As. Chaco y Santiago del Estero y otros lugares que no recuerda, 5 estaba en el puesto de comando en el Monte, estas suman 35 causas de las siete restantes niego todo tipo de imputación en base a todo lo mencionado.

Asimismo respecto a los hechos y personas referidas en testimonios aportados afirma el encartado no tener conocimiento de quienes son. Respecto a la relación con el Regimiento 19 o con la Policía u otras fuerzas manifiesta no haber tenido relación alguna de ningún tipo.

Con relación a la acusación relativa a haber cumplido funciones de interrogador dentro del Arsenal, indica que tales dichos no son reales ni procedentes, ni se condicen con las funciones asignadas, atento a que en ese momento no tenía la especialidad,.

Agrega que durante el curso de inteligencia, recuerda la definición de interrogatorio *"es el arte de extraer información mediante la formulación de preguntas evitando en todo momento la violencia física"* cuestión con la concuerda, indicando que él jamás haría un interrogatorio ilegal por cuanto traería aparejado sacar conclusiones erróneas que lleven a tomar medidas equivocadas. Aclara que inteligencia se maneja dentro de su organización en compartimentos estancos independientes unos de otros, por lo que no podría tener conocimiento de otras actividades realizadas en otros sectores, fundamentalmente por razones de seguridad.

También deja aclarado como conclusión de lo manifestado precedentemente que siempre fue reacio a realizar cualquier actividad que no este relacionada con el bien del servicio. Que la fecha en la que le otorgan aptitud de inteligencia fue el 25 de abril de 1978, solicitando se agregue a la causa copia de las fojas de su legajo en donde figuran los traslados y asignaciones a otros destinos o tareas.

Que luego de su declaración el Ministerio Público Fiscal le formuló preguntas, todas las cuales fueron contestadas por el Sr. Moore.

El Ministerio Fiscal formuló las siguientes preguntas *(i) Para que diga si existían directivas, normativas y ordenanzas generales en materia de inteligencia en relación con la lucha contra la subversión. Y en su caso que establecían; (ii) En que consistían las tareas de inteligencia en Tucumán; (iii) Para que explique que significa explotar sistemáticamente la fuente de información; (iv) En Tucumán se realizaban informes escritos de inteligencia; (v) Que es el canal de Comando o el Canal técnico de inteligencia; (vi) Que funciones tenia como Jefe del AEI y cuales eran las tareas de ese grupo; (vii) Si conoció a las siguientes personas, De Urquiza , Torres, Ojeda Fuentes, Vaccaro y Varela en ese caso sabe que funciones cumplían estos; (viii) Que tareas realizaba el personal Civil de inteligencia; (ix) Usted conoció un lugar de Reunión de Detenidos en Tucumán. Conoció a Juan Martín; (x) Usted tenia personas a cargo; (xi) Recuerda el nombre de alguna de estas personas (personal civil que trabajaba con usted); (xii) Presto servicio a su cargo Juan Carlos Benedicto; (xiii) Pude aclarar que entendió usted por moralizar y que nada se saliera de la ley. Que hacia al respecto?; (xiv) Si la empresa Adolfo Moore Seguridad Integral SRL de Vicente López es de su propiedad o el presta servicio en ella?*

El encartado contestó las preguntas consignadas de la siguiente manera: (i) que ya la contestó cuando explicó porque no le dieron el certificado de inteligencia, lo tenían raleado y lo ponían a realizar tareas mas bien domesticas como control de precios, desconociendo si existían directivas; (ii) se remite a lo declarado anteriormente; (iii) doctrinariamente es sacar información para sacar posteriormente conclusiones actividad que realizan por ejemplo los periodistas que no por eso son delincuentes; (iv) que sí en lo que a le pedían, por ejemplo informe de precios que lo hacía por escrito y los remitía a su Jefe el teniente Coronel Busso; (v) que la verdad no lo puede decir, ya que hoy esta mas abocado a la seguridad privada que al ejército, que las definiciones teóricas o doctrinarias no las recuerda; (vi) que se remite a lo ya contestado y repite que recibía las ordenes del Teniente coronel Busso quien las impartía personalmente a él y al personal del destacamento; (vii) que si los conoce a todos por ser camaradas del Colegio Militar y las actividades que realizaba cada uno eran particulares y nadie le contaba a otro lo que tenia que hacer. Aclara que en el caso particular de Vaccaro esta muy sorprendo de lo que se dice de él porque él es Ingeniero Militar y vino a Tucumán a perfeccionar un sistema de computación y nunca tuvo relación con alguna actividad de inteligencia, cree que también vino por un tema de la guerra con Chile. Afirma que coincidió con todos ellos temporalmente en Tucumán, que no eran amigos, inclusive que no se llevaban bien, salvo con Vaccaro, por su personalidad ya que lo trataban despectivamente como si fuera un infiltrado que los quería perjudicar. Vaccaro nunca participo en cuestiones de inteligencia el estaba en una oficina donde realizaba sus tareas de Ingeniero Militar; (viii) que esas tareas eran las órdenes que el Teniente Coronel Busso le impartía a cada uno en forma

USO OFICIAL

particular; (ix) que no conoce; (x) que sí, el personal civil recibía ordenes, y que él no tenia atribuciones para indicar tareas o actividades; (xi) en su gran mayoría deben estar muertos no recuerdo sus apellidos; (xii) que no conoce; (xiii) que el término era muy amplio y fundamentalmente era sobre delitos de carácter civil porque habían excesos en beneficio personal de algunas personas, tarea que le valió innumerables inconvenientes con sus compañeros y de todo tipo; (xiv) el imputado expresa que no desea responder dicha pregunta.

2.7.- Declaración de Ariel Orlando Valdiviezo.

Que al momento de prestar declaración indagatoria, sostuvo el encartado que existe total contradicción de las imputaciones con la realidad de los hechos.

Manifiesta el encartado que no trabajaban como asociación ilícita sino que intervinieron en un operativo dispuesto por la Sra. Presidenta de la Nación Estela de Perón, el cual se efectuó en cumplimiento de las leyes existentes en la Nación.

Que con relación específicamente a la Compañía Arsenales nunca estuvo en ese lugar. Que él personalmente estuvo siempre en el Regimiento 19 de Infantería en donde se efectuaban operaciones tácticas de combate, también en cumplimiento de los reglamentos que rigen las operaciones de lucha contra la guerrilla, así que todos los operativos que se efectuaron fueron hechos bajo las leyes del momento.

Declara desconocer la existencia de un centro de detención Caspinchango, que nunca lo vio, que él estaba a cargo de la Base Caspinchango. Que dicha Base estaba rodeada por cañaverales y era un galpón grande no compartimentado donde se alojaba la tropa y los oficiales y suboficiales. Que a pocos metros del galpón existía una cancha de fútbol y un centro sanitario. La Base, militarmente, estaba protegida por ellos mismos como seguridad. Que tenían la orden específica del Gral Bussi de no hacer inteligencia táctica con personas, pero sí inteligencia en la población y en el terreno a efectos operativos –reconocimiento de terreno a efectos de saber como realizar operaciones tácticas-.

Que cada detenido debía ser inmediatamente mandado a la superioridad, es decir que ellos en ningún momento manejaban detenidos. Que no actuaban como organización ilícita sino que cumplían órdenes, cuya desobediencia los hacía pasible a la aplicación del Código de Justicia Militar, que habilita desde la destitución a la pena de muerte.

Que él dependía de la Fuerza de Tarea Berdina: la zona de operaciones por el decreto presidencial militarmente se organiza en un puesto de comando táctico (que tenía el mando de toda la zona de operaciones, la que era muy grande), cada zona de esas cuatro iniciales estaba a cargo de una fuerza de tarea (4 zonas y 4 fuerzas de tareas), una de las cuales tomo el nombre del primer soldado muerto (Subteniente Berdina a quien lo matan en el año 1975) en la zona. Que el Jefe de la Fuerza de Tareas Verdina cambiaba cada dos meses por los relevos (se cumplían dos meses en el monte y dos meses en la ciudad) y en el relevo además de cambiar todos los integrantes de los equipos de combate también cambiaban los jefes, por lo que no recuerda quien específicamente estaba a cargo de los mismos. La fuerza de Tarea Berdina tenía dos equipos de combate, un equipo que operaba

en la zona de Santa Lucía y otro que operaba en la zona de Caspinchango. Los jefes de equipo de combate eran los jefes de compañía que no siempre eran del Regimiento 19. En Santa Lucía por ejemplo, cuando él llego estaba un equipo de combate del Regimiento 28 de Infantería Montes de Tartagal. Y jefe del equipo de combate de Caspinchango era él.

Que recuerda que los guerrilleros hicieron una emboscada –para matarlo- pero cuando pasan los médicos militares en ambulancia, los emboscan y los matan en el camino que va de Caspinchango a Santa Lucía. Que él llego a la zona de operaciones el 11 de mayo del año 1976 y el 17 de mayo le montan la emboscada para matarlo, y matan a los médicos.

Que respecto a las imputaciones efectuadas, manifiesta que no tuvo intervención porque no estuvo en la zona de operaciones en las fechas indicadas. Que existen contradicciones entre los mismos declarantes que lo imputan. Por ejemplo indica que el testigo Godoy afirma que en Santa Lucía no le tocaron un pelo, y otros en la misma fecha afirman haber sido torturados.

Considera que, como esta aclarado, Godoy dice la verdad, ya que ellos no tenían detenidos, en tanto cuando detenían a alguien inmediatamente debían trasladarlos al puesto de comando.

Afirma el encartado que en el requerimiento de instrucción existe una contradicción terrible, en tanto su imputación es coincidente con la que se le efectúa al Coronel Trucco, lo que resuelta imposible por cuanto nunca operaron juntos.

Que quiere agregar que conociendo la existencia de una orden de detención, continuó trabajando sin intentar fugarse.-

Que luego de su declaración el Ministerio Público Fiscal le formuló preguntas, todas las cuales fueron contestadas por el Sr. Moore.

El Ministerio Fiscal formuló las siguientes preguntas: *(i) que otras fuerzas además del Regimiento de Infantería Montes 28 cumplieron funciones en la zona, específicamente si fue desplegado el Regimiento 141 de Santiago del Estero; (ii) cuando señala que cada persona detenida era mandada a la superioridad, a donde eran físicamente enviadas; (iii) si recuerda alguna detención mientras estuvo en la zona de operaciones; (iv) si hubo detenciones con posterioridad al atentado contra la ambulancia; (v) quienes efectuaban las detenciones de los que se conocían como "delincuente subversivos" en el lenguaje militar; (vi) quienes era los oficiales S2 de la zona de operaciones; (vii) si conoce al suboficial Zurita, (viii) si conoce o conoció a Domingo Antonio Jeréz, a Pérez Cometo y a Didio Corregidor, (ix) en sus funciones en la agencia PRETORIA tiene manejos de armas*

El encartado contestó las preguntas consignadas de la siguiente manera: (i) que desconoce; (ii) al Puesto de Comando Táctico el cual funcionaba en Nueva Baviera; (iii) que si hubo detenidos pero no recuerda los nombres, en particular respecto a las detenciones imputadas afirma que no participó en ninguna; (iv) que de parte nuestra no, no sabe de parte de otros servicios; (v) manifiesta que ese no es lenguaje militar sino que ese término era el usado en los reglamentos militares y en todas las leyes que avalan la lucha del operativo, firmados por el Presidente de la Nación como Comandante en Jefe. El

USO OFICIAL

Ejército en ese momento tenía dos tipos de reglamentos: el Código de justicia Militar y los reglamentos militares que avalan las operaciones en guerras convencionales (ejemplo guerra con Malvinas); y tienen los reglamentos y leyes militares contra la subversión (guerrilleros) que no podrían aplicarse en guerras convencionales. Las detenciones las efectuaban quienes recibían las órdenes, para eso teníamos una cadena de comando; (vi) no teníamos oficiales especialistas en inteligencia, todo el personal del Regimiento era combatiente; (vii) voy a contestar con posterioridad cuando tenga en mi mano lo que ellos dicen de mí; (viii) se remite a la respuesta anterior respecto a Jerez, respecto a Pérez Cometo esta fallecido y con relación a Didio Corregidor no recuerda; (ix) PRETORIA es una empresa avocada exclusivamente al cuidado de edificios particulares,. Importantes, todas viviendas, en donde ninguno de los edificios ni tampoco la empresa da personal armado, por ejemplo nosotros tenemos el control de salida de vehículos donde vive Macri, donde vive el Ministerio De Vido, en donde los vigiladotes no están armados. Inclusive cuando me detienen no tenía armas en mi poder

2.8.- Declaración de Carlos Trucco.

Al momento de prestar declaración indagatoria el encartado expresa que dada la cantidad de hechos que se le imputan y atento a los 33/34 años trascurridos desde la ocurrencia de los hechos, no se considera en condiciones de contestar en forma correcta y precisa sobre su participación o no en los mismos.

Que desea agregar que al haber transcurrido 12 años desde su retiro voluntario del servicio activo dentro del Ejército argentino no recuerda con precisión los hechos referidos, encontrándose abocado en la actualidad a otro tipo de actividad empresarial.

Que no obstante lo expresado entiende pertinente efectuar algunas consideraciones y explicaciones importantes a la hora de evaluar la conducta del suscripto en relación con los hechos materia de investigación.

Que niega terminantemente haber tenido participación alguna en los hechos ilícitos que de amplísima manera le imputan siendo imposible ejercer su defensa eficazmente atento el tiempo transcurrido.

Que por el grado que detentaba en el Ejército Argentino al momento de los hechos no se puede sostener que tuviera ninguna responsabilidad en la dirección de la Brigada o del Regimiento en el que se encontraba destinado.

Manifiesta el encartado que fue designado en el Regimiento de Infantería 19 en la Provincia de Tucumán, actuando en forma absolutamente legal en el marco de la lucha en el monte contra grupos subversivos que pretendían el dominio territorial del suelo tucumano. Esa fue la misión que cumplió durante el desarrollo del “Operativo Independencia” ordenado por un Gobierno Democrático de signo justicialista, sin que jamás haya participado en ningún hecho ilegal o del que sospechara su ilegalidad.

Que atento el grado que detentaba y que las intervenciones en el monte podrían realizarse en forma alternativa con diferente personal del Regimiento, o bien, en rotación con otras Unidades militares, resulta imposible sostener su responsabilidad en los hechos

que se investigan. Afirma no haber participado en ningún hecho ilegal, en tanto no estuvo destinado en ninguna unidad en donde se afirme haber existido un centro de detención clandestino, que sólo conocía las órdenes que por su condición de militar debía conocer y cumplir, bajo pena de incurrir en el delito de desobediencia.

Manifiesta el encartado que debe tenerse presente que en el propio informe de la CONADEP se lee *"...en Tucumán el ejército se encontraba en zona de operaciones contra la guerrillas, existiendo especial cuidado en evitar la vinculación fáctica entre los grupos clandestinos que actuaban en los C.C.D. y la cara oficial de las Fuerzas Armadas."* (Nunca Más, p. 214, Eudeba, 6ta. Ed.).

Afirma el encartado que él no participó de ningún procedimiento ilegal, el combate ordenado por sus superiores se enmarcó dentro de legalidad, sin que existieran variaciones en esa actuación luego de iniciado el gobierno de facto.

Que su actuación en la zona de combate no era permanente, se rotaba con regimientos de otras provincias. Asimismo, esto se corrobora en el hecho que ninguno de los trabajos de investigación realizados por los organismos de derechos humanos establece la existencia de un centro clandestino de detención en el ámbito del Regimiento en donde prestó servicios.

USO OFICIAL

Paralelamente, por el grado que detentaba, no se puede presumir que poseía dominio de los hechos que se investigan en el marco de esta causa, por el contrario para imputársele un hecho concreto se debería corroborar su directa participación en cada uno de ellos.

Manifiesta que no se trata de hablar del "in dubio pro reo" que debe regir en nuestro sistema jurídico, sino de establecer mínimamente un razonamiento que siga las reglas de la sana crítica racional. En tal sentido considera que los elementos de prueba con que se sostiene la imputación no conducen a su responsabilidad penal, toda vez que podrían establecerse cientos de hipótesis diferentes que no podrían ser rebatidas por el acusador.

Por ejemplo, afirma que se le imputan diferentes hechos sin probar que efectivamente en las fechas en que habrían ocurrido, él personalmente se encontrara en esos lugares, o bien que esos lugares estuvieran total, parcial o temporalmente bajo la órbita del Regimiento 19, o que efectivamente en esos momentos actuara él y no otros oficiales del mismo Regimiento o de otros, o que efectivamente estuvieron bajo su custodia y no de la de otras personas.

Es evidente que no existen suficientes pruebas o indicios que generen una hipótesis unívoca respecto de su participación en los hechos.

Remarca que debido al tiempo transcurrido desde los hechos que se le imputan le resulta imposible analizar en los hechos y brindar mayores aclaraciones, aunque analizará las actuaciones con detenimiento para en lo posible aportar elementos de convicción, aunque la carga de la prueba la deberían tener los acusadores.

En virtud de todo lo expuesto, solicita a S.S. se tenga presente su más absoluta inocencia por los hechos que se le imputan, y se dicte su sobreseimiento toda vez que no participó de los hechos que aquí se investigan.

Que el Ministerio Público Fiscal solicita realizar algunas preguntas pero el encartado manifiesta que no se encuentra en condiciones de contestarlas, atento el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos investigados.

2.9. Declaración de Ernesto Rivero

Al momento de prestar declaración indagatoria, sostuvo el encartado que nunca cumplió funciones como Segundo Jefe del Destacamento Móvil 1 por una razón de grado, en tanto sólo un oficial superior desempeña ese cargo. También expresa que no fue interrogador, que nunca interrogo a ninguna persona porque no fue capacitado para eso en tanto no realizó ningún curso específico.

Que con relación a las fechas que se mencionan, en el año 1976 prestó servicio en Tucumán aproximadamente desde el 21 de setiembre hasta fines de octubre, y que en el año 1977 la fecha consignada en la imputación coincidiría con la fecha en la que estuvo asignado en Tucumán.

Respecto a la función que desarrollaba en Tucumán, afirma que era la normal de la fuerza en cuanto al patrullaje de rutas nacionales y provinciales, caminos secundarios y sendas dentro de la provincia de Tucumán. En cuanto a los casos que se mencionan en la imputación, deja constancia que no conoce a los participantes ni las víctimas.

Que el Ministerio Público Fiscal solicita se le efectúen al encartado las siguientes preguntas: (i) para que diga que función tenían los Destacamentos Móviles de gendarmería nacional; (ii) quienes eran sus superiores del destacamento móvil de Campo de Mayo, (iii) que función cumplía en la zona de operaciones el oficial de enlace de gendarmería nacional; (iv) si conoce de la existencia en la zona de operaciones de la comunidad informativa; (v) si conoció o supo de la existencia del LRD (lugar de reunión de detenidos) en la provincia; (vi) si conoce o conoció al ex gendarme Omar Torres.

El encartado luego de mantener una entrevista con su defensor, manifiesta su voluntad de abstenerse de contestar las preguntas formuladas.

2.10.- Declaración de Ramón Ojeda Fuente.

Al momento de prestar declaración indagatoria, el encartado ejerce su derecho de abstenerse de declarar por no encontrarse en condiciones sicofísicas.-

2.11.- Declaración de Alberto Héctor Rafael Montes de Oca.

Que al momento de prestar declaración indagatoria, afirma el encartado que nada de lo que se le imputa es verdad. Que conforme se informa en la imputación su grado a la fecha de los hechos era el de Primer Alférez, y con ese grado él no podía ser Jefe del Destacamento Móvil 2 de Jesús María.

Que los Jefes de los Destacamentos Móviles revestían el cargo de Comandante Mayor y el segundo jefe de Comandante Principal.

Respecto al período imputado indica que el primer viaje que hizo a Tucumán fue durante el mes de junio de 1975 y que lo tuvieron que evacuar el 9 de julio de ese mismo año por cuanto nacía su primer hijo, siendo esa la única fecha que recuerda, después regreso en otras fechas pero no las recuerda.

Que respecto a las misiones que tenia en Tucumán eran las propias de Gendarmería control de ruta, custodia del edificio donde vivía el Comandante de Brigada y el segundo Comandante de Brigada, eso es todo lo que hizo en Tucumán.

Además agrega que tuvo un ACV, dos infartos, dos operaciones de colon y una hernia, que le han dejado secuelas para caminar y movilizarse y también para pensar, por lo que considera que no se encuentra en las mejores condiciones para declarar.-

El Ministerio Público Fiscal solicita se le pregunte si contestará preguntas a dicho Ministerio a lo que el encartado responde que conforme lo afirmado precedentemente, no se encuentra en condiciones de responder preguntas.

2.12.- Declaración de Fernando Torres

Al prestar declaración indagatoria sostuvo el encartado efectúa una presentación por escrito que se agrega a fs. 5701/5717, solicitando se la considere al momento de resolver su situación procesal.

A través de la presentación escrita, el encartado Torres niega terminantemente haber tenido participación o responsabilidad en los hechos que le son imputados, indicando que la acusación en su contra se sustenta en meras presunciones no corroboradas por prueba alguna que lo indique como responsable de los hechos que se investigan.

En particular respecto a la prueba obrante en la causa, manifiesta que del Informe del Ministerio de Justicia sobre el Destacamento 142 no surge ninguna referencia a su persona, sino sólo una descripción del funcionamiento de dicho destacamento, y su pertenencia al mismo. En tal sentido considera que si su mera intervención en el Destacamento 152 fundamenta la acusación en su contra, se estaría incurriendo en derecho penal de persona. La misma valoración cabe para las evidencias emergentes de su Legajo personal, relativa a sus funciones al momento de comisión de los hechos investigados.

Con relación al testimonio de Osvaldo Pérez de fecha 28 de febrero de 2008, el mismo lo menciona al encartado entre las personas que habría visto en el Arsenal, lo que sería mendaz atento a que nunca cumplió funciones en Arsenales, como así tampoco estuvo relacionado con ninguna actividad en el gobierno provincial.

Respecto de las pruebas que se invocan con relación a los hechos investigados en autos (informe CONADEP, informe Bicameral) no surge ninguna evidencia en su contra y que cuando se trataron sus ascensos dentro de las Fuerzas Armadas en los años 1990 y 1993 en el Senado de la Nación, no se presentaron objeciones.-

Reitera al respecto que no tiene ni nunca tuvo vinculación funcional con el Arsenal Miguel de Azcuénaga, no existiendo prueba en la causa a tal respecto.

USO OFICIAL

Reconoce como lo único cierto respecto a su persona que integró entre 1973 y 1977 el Destacamento de Inteligencia 142 con asiento en Tucumán y dependiente de la V Brigada, revistando como Teniente Primero, para ascender como Capitán en el año 1975.

Que con relación a la estructura orgánica del Destacamento 142 la misma se conformaba con dos oficiales Jefes (el Jefe del Destacamento con rango de Teniente Coronel; y el Segundo Jefe con rango de Mayor) y que él integró el Destacamento en las últimas jerarquía de grado.

Remarca que la estructura de mando del Ejército Argentino tiene tres categoría de Oficiales: Oficiales Superiores, Oficiales jefes y oficiales subalternos (subtenientes, tenientes, tenientes primeros y capitanes).

Manifiesta que en lo que respecta a al superioridad por jerarquía, es la que tiene un oficial sobre otro por razón de poseer grado más elevado, y los grados están determinados por la ley 19101.

Conforme dicha ley son Oficiales Superiores los grados de Teniente General a Coronel y son quienes se desempeñan como Jefe del Estado Mayor, Comandantes de Cuerpo, Comandantes de Brigada o Directores de Institutos. Oficiales Jefes comprende los grados de Teniente Coronel y Mayor, que cumplen las funciones de Jefes y Segundos Jefes de Unidades. Finalmente Oficiales Subalternos comprende grados de Capitán a Subteniente completando los cuadros del Ejército de menor responsabilidad sin autonomía de decisión ni de mando.

Con relación a la superioridad por cargo y por antigüedad, la primera es la que tiene un oficial respecto a otro en virtud de la dependencia orgánica y la segunda se da entre dos oficiales de igual cargo por la fecha se egreso del Colegio Militar.

Trasladando tales conceptos a su situación particular, informa el Sr. Torres que él revestía un cargo jerárquico de Teniente Primero y luego de Capitán, es decir los últimos grados de la categoría de oficiales subalternos, sin poseer responsabilidades a su cargo, lo que puede corroborarse en su legajo personal particularmente en el informe de calificaciones 1976/1977 cuando en el ítem “realización de tareas de cierta responsabilidad” se informa “no corresponde calificar”.

Luego de efectuar una introducción sobre el concepto de “inteligencia” como actividad, desarrolla cual era la actividad específica del Destacamento 142 indicando que estaba debidamente organizado en tanto en el desarrollo de las actividades diversas que competen a un destacamento de inteligencia rige el principio de la seguridad, consecuentemente cada integrante sólo sabe lo que necesita saber para realizar la tarea encomendada, lo que se materializaba a través de las “Áreas restringidas”. Que la única persona en la que confluía toda la información era el Jefe del Destacamento, quien es el encargado de relacionar la información y extraer conclusiones para asesorar al Comando

Que en dicho contexto las actividades asignadas al dicente durante el período 1976/1977 fueron de comunicación social: analizar la repercusión de las acciones de gobierno en los medios de comunicación, locales y nacionales, midiendo su extensión,

ubicación de la estructura del medio, fotografías, etc., de acuerdo a la importancia de este le asignaba, determinando el mensaje real que deseaba trasmitir y finalmente si la información resultaba positiva, negativa o neutra para el gobierno provincial.

Que también era su tarea medir la imagen pública de los funcionarios de gobierno, ante el anuncio de determinadas medidas, también el relevamiento de los medios de comunicación escrito y de las transmisiones radiales, elaborando informes diarios por triplicado los que eran presentados al Jefe del destacamento.

Que el lugar físico donde prestaba servicios era en la sede del Destacamento 142 sita en 25 de mayo al 1000.

Conforme lo expuesto entiende el encartado que la sola calidad de oficial de inteligencia no acredita por sí ningún tipo de vinculación con el Comando o las Dependencias. Que la pertenencia o permanencia en un destino militar es una decisión institucional no voluntaria. Que cualquier tipo de vinculación o dependencia técnica entre las autoridades del Destacamento y de Arsenales debe constar por escrito en los legajos personales del personal interviniente y dispuestas por las autoridades del Ejército o del Ministerio de Defensa.

USO OFICIAL

Que los oficiales subalternos del Ejército no podían tener ninguna relación de mando con las fuerzas de seguridad como Gendarmería, desconociendo absolutamente si tales relaciones existían por no ser de su competencia.

Que valorando la acusación fiscal y de la querella, cualquier integrante del Ejército durante el período 1976/1983 ingresaría como sospechoso en la comisión de los hechos investigados, lo que resulta absolutamente infundado. Afirma que no por integrar el mismo trabajo una persona cumple la misma función o tiene las mismas responsabilidades.

En particular respecto al trabajo asignado afirma que siempre se ajustó en su cumplimiento a las normas constitucionales vigentes y que en lo específico era una tarea que se ajustaba a la normativa militar.-

Paralelamente manifiesta en la audiencia que desconoce las personas, lugares, circunstancias y hechos que se mencionan en la acusación fiscal y que rechaza cualquier tipo de participación en los hechos que me son imputados por el Ministerio Público. No teniendo nada más para decir.

Que el Ministerio Público Fiscal solicita efectuar las siguientes preguntas al encartado: *(i) para que indique el encartado si prestó servicios en el Destacamento de Inteligencia 142 entre 1973 y el 13 de diciembre de 1977; (ii) para que indique si realizó cursos de especialización en algún área militar; (iii) para que indique cuales eran las directivas, normativas u ordenanzas en materia de inteligencia en relación con la lucha contra la subversión; (iv) para que indique si en su experiencia cuales eran las tareas de inteligencia de los cuerpos del ejército entre 1975 y 1983; (v) para que indique cuales eran las fuentes de información más frecuentes en la lucha contra la subversión; (vi) para que indique si en la llamada zona de operaciones de Tucumán se producían informes escritos de inteligencia destinados a otras fuerzas; (vii) para que diga si sabe que es el "comando"*

o "canal técnico" de inteligencia; (viii) para que diga si conoció la comunidad informativa o de información y en su caso quienes la componían en la zona de operaciones de Tucumán; (ix) para que indique que funciones tenía como jefe de la primera sección de ejecución durante 1976; (x) para que indique que funciones tenía como jefe del grupo "situación general" en 1977; (xi) para que informe que significan las siglas AEI en su legajo personal; (xii) para que informe si conoce que tareas desarrollaba el personal civil de inteligencia del Destacamento 142; (xiii) para que indique si estuvo entre 1976 y 1977 en la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga; (xiv) para que detalle la manera en que tuvo acceso a la acusación fiscal y como supo que existía una orden de detención en su contra.

El encartado respondió las preguntas formuladas por el Ministerio Fiscal manifestando que: a la pregunta (i) que si prestó servicios; respecto de las preguntas (ii) a (viii) y preguntas (xi), (xii) y (xiv) se ampara en su derecho a no contestar; a la pregunta (ix) (x) y (xiii) que respecto a la funciones que cumplía refiere a que las mismas están detalladas en el descargo por escrito que presentó en este acto.

2.13.- Declaración de Marcelo Godoy

Al prestar declaración indagatoria el encartado manifiesta que a fines del año 1975 más precisamente mediados de diciembre, egresó de la Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacional, con asiento en Jesús María provincia de Córdoba, con el grado de cabo del escalafón general. Que recién en el año 1980 fue ascendido por la superioridad al grado de Sargento, lo que puede corroborarse en su legajo personal.

Afirma que, si bien fue destinado al Destacamento móvil 1 de Campo de Mayo, desconoce totalmente las imputaciones que se le realizan, como a las personas que manifiestan conocerlo por el apodo de "Indio". Indica que jamás tuvo ese apodo, y que las veces que se le ordenó viajar a la provincia de Tucumán, cumplió tareas de operativo de control de ruta, custodia de la estación de trenes y nada más. Que desconoce totalmente lo que se menciona de los Centros Clandestinos y la detención de personas.

Manifiesta que hay documentación que obra en su legajo personal respecto a que no tenía grado de Sargento ni pertenecía a ningún equipo de inteligencia ni nada por el estilo. Indica que la escasa jerarquía del primer año de cabo no permite tener acceso a ningún tipo de información o actividades de personal con mayor jerarquía.

Que el Ministerio Público Fiscal solicita efectuar al encartado las siguientes preguntas: (i) para que indique el encartado si prestó servicios como miembro del Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo de Gendarmería Nacional en esta provincia; (ii) si durante su permanencia en esta provincia, donde tenía constituido su domicilio, donde residía; (iii) si custodiaba las casas de militares ubicadas en Villa Mariano Moreno o en el Arsenal Miguel de Azcuénaga; (iv) para que indique quienes integraban los Destacamentos Móviles, cuantos efectivos tenían, y como eran elegidos éstos; (v) para que indique quienes eran sus superiores y si tuvo subordinados; (vi) para que indique como se efectuaba la rotación dentro de los destacamentos móviles; (vii) para que especifique en que lugar prestó

servicios; (viii) para que indique si Gendarmería nacional realizaba tareas de inteligencia en la zona de operaciones de Tucumán; (ix) para que indique si Gendarmería Nacional participaba de la comunidad informativa o de alguna instancia de comunicación de información suministrada por algún órgano de inteligencia; (x) para que indique si conoció o supo de la existencia de Lugares de reunión de detenidos en Tucumán; (xi) realizaba tareas Gendarmería en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, y en su caso, que tipo de tareas realizaba; (xii) conoció o tuvo bajo su mando a los gendarmes Antonio Cruz y Omar Torres; (xiii) estuvo Ud. destinado en algún momento a la Compañía de Arsenales 5 Miguel de Azcuénaga; (xiv) para que indique si conoce a las siguientes personas: Montes de Oca, La Fuente, Godoy; Palomo; Guemes; Barraza y si conoce que funciones cumplían en Gendarmería Nacional al momento de los hechos; (xv) conoce o conoció a Adolfo Moore y/o a Fernando Torres, y en su caso, en que circunstancias; (xvi) si conoce o escucho nombrar a Víctor Fernando Alderete, María Teresa Rodríguez Román de Fiat, Nora Alicia Cajal, Margarita Laskowsky y/o Ángel Adolfo Mendes Brander.

Cedida la palabra al Sr. Godoy, manifiesta que se remite a lo ya declarado con anterioridad, amparándome en el derecho de abstención que habilita el derecho de defensa.

2.14.- Declaración de Celso Barraza.

Al momento de prestar declaración indagatoria el encartado niega todas las acusaciones que se le efectúan. Aclara que al momento de los hechos que se le imputan no ejercía la condición de Primer Alférez de Gendarmería Nacional.

Que en el año 1976 fue ascendido a la jerarquía de Alférez, e indica que hay un error en la consigna del nombre del destacamento móvil el cual era de Jesús María no de Villa María.

Que se desempeñó como oficial de personal del Destacamento de Jesús María, desde septiembre de 1975 al mes de Diciembre de 1976, en ese lapso de tiempo fue asignado en dos oportunidades a la provincia de Tucumán, la primera de ellas aproximadamente en los meses de Octubre y Noviembre de 1975 –momento en que ostentaba la jerarquía de Sub Alférez que es el primer grado del escalafón jerárquico-, desempeñándose en la localidad de Anta Muerta donde estaban alojados en unos establecimientos de la Universidad Nacional de Tucumán, que desconoce si aún existen. Que en dicho lugar realizaban controles de ruta en la intersección del acceso al lugar distante a unos 400 mts., esos controles eran temporales.

Que en una segunda oportunidad fue comisionado en Tucumán entre los meses de Mayo a Junio de 1976, que en esa oportunidad la tarea asignada era realizar custodias de edificios públicos, estación de trenes; y parte del personal destinado a la custodia del monoblok de oficiales de la Brigada que quedaba próximo al lugar del Comando de Brigada en el cual estábamos alojados.

Que no se desempeñó en ninguna oportunidad como Jefe del elemento del Destacamento Móvil 2, asignado a Tucumán, atento su jerarquía y antigüedad en la fuerza, -Sub Alférez en 1975 y Alférez en el primer año en el grado en 1976-.

USO OFICIAL

Manifiesta que Gendarmería Nacional cuando asignaba efectivos a Tucumán lo hacia en base a una sección comandada por un oficial antiguo y un segundo oficial, que era su caso, y que integraba el pelotón comando de esa sección compuesta en total por aproximadamente 34 hombres.

Aclara que se desempeñaba como auxiliar o integrando el pelotón comando. Por lo dicho nunca estuvo ni conoció el Arsenal Miguel de Azcuénaga ya que nunca concurrió al mismo.

En el año 1977 indica que no se desempeñó en el Móvil 2, a fines de 1976 salió su pase a la Escuela de Suboficiales donde prestó servicios durante todo el año 1977, desempeñándose como Oficial Instructor y profesor de los aspirantes a Cabo, dichos antecedentes figuran en su legajo personal. Que las comisiones a Tucumán, en las dos oportunidades en que asistió, duraron aproximadamente 40 días cada una de ellas.

Menciona que al ex gendarme Omar Torres no lo conoce ni nunca prestó servicios con él.

El Ministerio Publico Fiscal solicita se le efectúen al encartado las siguientes preguntas: 1) Para que diga quienes eran sus superiores, en sus dos comisiones en Tucumán. 2) Para que diga si quienes eran comisionados a Tucumán recibían algún tipo de entrenamiento específico. 3) Si conoció, conoce o tuvo bajo su mando, a Antonio Cruz.

Cedida la palabra al encartado este manifiesta que no contestará preguntas.

2.15.- Declaración de Ernesto Alais

Al momento de prestar declaración indagatoria, el encartado presenta un descargo por escrito y aclara expresamente que las fechas en que prestó servicio en esta provincia corresponden al período comprendido entre 27 de Diciembre del año 1975 y hasta el 18 de Diciembre de 1977, fecha en la cual entregué el mando del Regimiento.

Que el Ministerio Publico Fiscal solicita se le pregunte al encartado si responderá preguntas a dicho Ministerio, a lo que el encartado responde que no desea contestar preguntas, remitiéndose a lo declarado en este acto.

Que conforme surge de su presentación por escrito, el Sr. Alais niega terminantemente haber intervenido de manera alguna en los ilícitos que de amplísima manera se le imputan.

Indica que fue designado por un Gobierno Democrático Jefe del Regimiento de Infantería 19 en la Provincia de Tucumán, asignándome bajo las órdenes del Comando de Brigada con sede en la ciudad de Tucumán, la lucha en el monte contra grupos subversivos que pretendían el dominio territorial del suelo tucumano. Que esa fue la misión que cumplió durante el desarrollo del Operativo Independencia ordenado por un Gobierno Democrático de signo justicialista, sin que jamás fuera designado a cargo de la llamada área 321.

Que atento a la actividad desplegada como Jefe del Regimiento 19 de Infantería, y las tareas propias que tal investidura requería en la época (lucha armada en el monte) resulta imposible su participación en los hechos descriptos en la imputación.

Manifiesta que no estuvo a cargo del área 321, no estuvo bajo su mando la policía de la Provincia de Tucumán, ni ningún otra fuerza de seguridad allí establecida, tampoco estuvo bajo sus órdenes el Arsenal Miguel de Azcuénaga, que conforme a cualquier organigrama militar jamás se encuentra bajo la órbita de un Regimiento.

La Jefatura de la Policía al momento de hacerse cargo del Regimiento de Infantería 19 estaba bajo las órdenes de un oficial de mayor antigüedad que la suya, y éste nunca estuvo bajo sus órdenes, como tampoco lo estuvo quien lo reemplazó en su cargo.

El Arsenal Miguel de Azcuénaga dependía directamente de la Brigada y las operaciones en el monte no sólo estaban asignadas al Regimiento que él dirigía, sino que tenían zonas de operaciones diferentes con diferentes unidades militares.

Considera que todas estas afirmaciones son de fácil comprobación para V.S., pues se encuentran agregadas al expediente o se pueden requerir su comprobación a diferentes organismos del Estado.

En primer lugar, debe tenerse presente que en el propio informe de la CONADEP se lee "...en Tucumán el ejército se encontraba en zona de operaciones contra la guerrillas, existiendo especial cuidado en evitar la vinculación fáctica entre los grupos clandestinos que actuaban en los C.C.D. y la cara oficial de las Fuerzas Armadas." (Nunca Más, p. 214, 215 Eudeba, 6ta. Ed.).

USO OFICIAL

Afirma el encartado que nunca participó de ningún procedimiento ilegal, el combate llevado adelante junto con sus subordinados se enmarcó dentro de legalidad, sin que existieran variaciones en esa actuación luego de iniciado el gobierno de facto.

Asimismo, tales extremos se corroborarían en el hecho que ninguno de los trabajos de investigación realizados por los organismos de derechos humanos establece la existencia de un centro clandestino de detención en el ámbito del Regimiento 19.

Respecto al área 321 por la cual se lo pretende responsabilizar, en el propio informe "Nunca Más" se afirma que su control correspondía a la V Brigada con sede en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y adjudica su dirección a personas que jamás se desempeñaron como Jefes del Regimiento de Infantería 19 que él comandaba.

Tampoco se ha señalado en dicho informe ni en el libro "Memoria Debida" de José Luis Andrea Mohr, que alguno de los centros clandestinos de detención que allí se señalaran dependiera del Jefe del Regimiento, sino que los mismos se trataban de unidades policiales u otras unidades que dependían directamente de la V Brigada, según estas publicaciones.

Manifiesta que la Jefatura del Regimiento de Infantería 19 de Tucumán nunca tuvo a su cargo el área 321, durante su gestión como jefe de Unidad.

En esta Provincia existía una zona de operaciones en la que participaban unidades de todo el país, todas ellas bajo las órdenes de la Brigada que tenía su asiento en la misma ciudad de San Miguel de Tucumán.

Afirma asimismo, que no surge de las actuaciones ninguna imputación concreta en su contra, que los hechos que allí se mencionan habrían ocurrido fuera del ámbito del

Regimiento que tuve a su cargo, y los lugares de detención allí mencionados nunca habrían estado bajo su responsabilidad.

Manifiesta que la imputación que se le efectúa es absolutamente contradictoria y en ningún momento se establece cual es el grado de autoría o participación que se le imputa, no explicándose como desde su condición de Jefe de Regimiento tenía el dominio de los hechos sobre actos que habrían sido llevados adelante por personal militar que nunca estuvo a su cargo e incluso era de mayor antigüedad.

2.16. Declaración indagatoria de José Carlos Sowinski.

El imputado niega todas las acusaciones. Manifiesta expresamente que no fue Jefe del Destacamento Móvil 2 de Villa María, (textualmente dice: *creo que sería el de Jesús María*), porque en ese entonces no existía Destacamento en Villa María. Asimismo declara que no podría haber ejercido como jefe por la jerarquía que ostentaba en ese entonces, que era la de Alférez, ya que para dicho cargo se requiere el Grado de Comandante Principal.

Con relación a las fechas que se le imputan el imputado dice no recordar cuales fueron en las que ha concurrido a esta provincia, ya que viajaba seguidamente a la provincia de Misiones, y para eso acumulaba licencias de 10 días con la licencia anual.

Con relación a la actividad que desarrollaba con el personal de Gendarmería cuando venían a la capital de Tucumán eran las de custodiar los barrios militares, edificios militares, plantas de aguas, estaciones de ferrocarril y otros objetivos, como estaciones de servicios en determinadas circunstancias. Que eso es todo lo que puede declarar respecto a la imputación efectuada.

El Ministerio Público Fiscal solicitó que se le efectúen al encartado las siguientes preguntas: (i) para que indique el encartado si prestó servicios como miembro del Destacamento Móvil 2 de Jesús María de Gendarmería Nacional en esta provincia entre los períodos comprendidos entre 1975 y 1976; (ii) si durante su permanencia en esta provincia, donde tenía constituido su domicilio, donde residía; (iii) si custodiaba las casas de militares ubicadas en Villa Mariano Moreno o en el Arsenal Miguel de Azcuénaga; (iv) para que indique quienes integraban los Destacamentos Móviles, cuantos efectivos tenían, y como eran elegidos éstos; (v) para que indique quienes eran sus superiores y si tuvo subordinados; (vi) para que indique como se efectuaba la rotación dentro de los destacamentos móviles; (vii) para que especifique en que lugar prestó servicios; (viii) para que indique si Gendarmería nacional realizaba tareas de inteligencia en la zona de operaciones de Tucumán; (ix) para que indique si Gendarmería Nacional participaba de la comunidad informativa o de alguna instancia de comunicación de información suministrada por algún órgano de inteligencia; (x) para que indique si conoció o supo de la existencia de Lugares de reunión de detenidos en Tucumán; (xi) realizaba tareas Gendarmería en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, y en su caso, que tipo de tareas realizaba; (xii) conoció o tuvo bajo su mando a los gendarmes Antonio Cruz y Omar Torres; (xiii) estuvo Ud. destinado en algún momento a la Compañía de Arsenales 5 Miguel de Azcuénaga; (xiv) para que indique si conoce a las siguientes personas: Montes de Oca, La Fuente, Godoy;

Palomo; Guemes; Barraza y si conoce que funciones cumplían en Gendarmería Nacional al momento de los hechos; (xv) conoce o conoció a Adolfo Moore y/o a Fernando Torres, y en su caso, en que circunstancias.

Cedida la palabra al Sr. Sowinski, sostuvo que se remitía a lo declarado, amparándose en el derecho de abstención que habilita el derecho de defensa.-

2.17. Declaración indagatoria de Hugo Enzo Soto.

El imputado niega los cargos que se le formulan y expresa desconocer los hechos leídos.

Manifiesta que si fue jefe de la Compañía Arsenales 5 en la fecha que se consigna, pero tenía el grado no de Teniente Coronel, como figura, sino de Mayor (año 1974), continuando en el mismo cargo hasta que se fue.

Con relación a la subunidad de cual era responsable, aclara el encartado que el "Arsenal Miguel de Azcuénaga" era lo que existía en un predio de aproximadamente 350 hectáreas y pertenecía a la Dirección General de Fabricaciones Militares. Que cuando dicha unidad deja de pertenecer a la Dirección de Fabricaciones Militares y pasa al Ejército, se crea la "Compañía de Arsenales 5" la que abarcaba sólo un predio de aproximadamente 6 hectáreas configuradas por el conjunto de depósitos y el edificio de Jefatura. La distribución del predio es aclarada mediante croquis que se adjunta a fs. 6543.

Que el resto de todo el predio del antiguo Arsenal era dependiente de la V Brigada de Infantería, y abarcaba el barrio de oficiales que esta al comienzo y todo el terreno que no comprende los edificios ya enunciados y los polvorines.

Informa que quien lo pone en funciones fue el General (f) Muñoz, quien firmo los inventarios de posesión de los depósitos y de la jefatura (Compañía de Arsenales 5). Indica que sobre el resto del predio tenía jurisdicción la V Brigada la que estuvo a cargo de Muñoz (1974), provisoriamente Menéndez (como 20 días), luego el Gral. Vilas (1975), y en el año 1976 se hace cargo el Gral Bussi y como Segundo el entonces Coronel Cattaneo.

Manifiesta además que en virtud de la munición que existía en el polvorín, la seguridad era dispuesta directamente por el Cte. de la V Brigada y era una sección que rotaba de las diferentes unidades temporariamente. Indica que eso ya funcionaba así durante todo el año 1975.

Particularmente remarca que en el año 1976, cree que en el mes de abril, el Gral Bussi le comunica que ponía tropas de Gendarmería en un sector al norte del predio de Arsenales, hacia el camino a Salta, distante de la Compañía. Arsenales 5, con una entrada independiente. Su ubicación en marcada en el mapa que se adjunta a fs. 6544.

Que el encartado toma conocimiento de tal novedad porque, al igual que con los polvorines, ellos debían conocer donde se apostaba gente de Ejército en el predio, para que haya conocimiento y ubicación de tropas del ejército, porque tenían gran cantidad de armamento, material óptico, había vehículos (sobre todo camiones).

USO OFICIAL

Explicado entonces la diferencia entre la Compañía de Arsenales 5 y el Arsenal Miguel de Azcuénaga, manifiesta su deseo de hablar sobre las funciones que cumplían, las que eran eminentemente técnicas, función denominada “logística”

Al respecto manifiesta que la Compañía contaba con 4 (cuatro) oficiales y con, aproximadamente, 40 (cuarenta) suboficiales, 50 (cincuenta) civiles y 100 (cien) soldados.

Las funciones que se cumplían eran tareas de: incorporación de soldados, tareas administrativas de legajos de personal de oficiales y suboficiales y del personal civil; tarea de finanzas que la asumía un oficial de intendencia que era el responsable de todas las compras referidas a la subsistencia del personal en la Compañía, los elementos necesarios para su funcionamiento y fundamentalmente las compras del área logística.

La función de operaciones la cumplía otro de los oficiales a cargo, el que se dedicaba a la instrucción de los soldados en la faz militar y también como operadores logísticos, era responsable de las planificaciones de todas las actividades, incluida la de seguridad del cuartel.

Indica que él cumplía la función logística, atento su calidad de Capitán Ingeniero Militar, siendo responsable de las actividades de abastecimiento: adquisición de bienes, partes, componentes y repuestos; la recepción de los mismos y su control de calidad, la ubicación en los depósitos y la identificación de los mismos.

Por otra parte el imputado afirma que era el responsable del mantenimiento de los efectos de Arsenales de la Brigada V, en sus aspectos de reparaciones correctivas o preventivas y era responsable de los inventarios ante la dirección de Arsenales y de la Brigada. En función de la gran cantidad de actividades que cumplían cada uno de los miembros del staff militar, indica que si bien las mismas eran ejecutadas por suboficiales y agentes civiles, en su 90% personal técnico, los responsables siempre eran los Jefes de la Subunidad.

Asimismo manifiesta que teniendo en cuenta que en el operativo iniciado en 1975 concurrieron unidades de todo el Ejército, el trabajo logístico se incrementó inmensamente porque ya había que proveer, reparar, conservar muchos más bienes que en épocas normales. Declara seguidamente que la actividad desarrollada era una actividad netamente técnica, y no se realizaban tareas de inteligencia ni tareas operacionales. Asimismo dice que nunca la Compañía de Arsenales 5 realizó otra actividad fuera de la mencionada.

Manifiesta que los responsables logísticos eran observados severamente si un fusil no funcionaba en un enfrentamiento, porque decían que no había sido reparado adecuadamente al igual que si un camión se paraba y dejaba de cumplir una misión. Paralelamente, si había algún mal uso de partidas, que podía caer en una malversación de fondos, también era su responsabilidad. Deja constancia expresa que cuando se proveía munición la Compañía administraba las cuentas de los diferentes tipos de munición, que correspondían a la Dirección de Arsenales y que correspondía a la V Brigada de Infantería. Quienes les ordenaban proveerla al usuario correspondiente, y en ese caso, cuando llegaba ese usuario, éste era acompañado a los depósitos de polvorines con la debida autorización

de la Brigada. Del mismo modo ocurría al desear ocupar vivienda en el Barrio Militar que debía autorizar el Comando de Brigada quien era su administrador. Por ese motivo sostiene acabadamente, que nunca la Compañía de Arsenales 5 realizó otra actividad fuera de la que acabo de detallar anteriormente y que el declarante jamás cometió ningún delito y mucho menos de lesa humanidad, ni tampoco tomo conocimiento de que alguno de sus subordinados lo haya hecho.

El Ministerio Público solicita se le realicen las siguientes preguntas al encartado: *(i) para que describa como era la custodia o guardia perimetral del predio del Arsenal, y en su caso, que fuerzas se encargaban de dicha custodia o guardia; (ii) para diga si en el período de su revista como jefe de la Compañía Arsenales habían personas que en esa dependencia cumplían con el servicio militar obligatorio; en caso afirmativo para que diga de que oficial dependía esas personas; (iii) para que diga si conoce, conoció o recuerda al Tte. Arturo Innocenti; (iv) para que diga si conoce, conoció o recuerda a Federico Adolfo Furth; (v) para que diga si conoce, conoció o recuerda a Julio Omar Luna; (vi) para que diga todo lo que recuerde sobre la comunicación de Antonio Bussi en abril del 76 a la que aludió, específicamente, por que vía fue esa comunicación y que fue lo que concretamente se dijo; (vii) para que diga si a partir de abril de 1976 con la instalación de esa unidad de Gendarmería nacional al norte del predio del Arsenal a la que alude, se produjo mayor movimiento de tropas o camiones en esa dirección; si escuchó disparos en esa dirección; si percibió que se realizaban incineraciones o quemas en ese sector; (viii) para que diga si durante los primeros meses de 1976 se acantonaron o desplegaron tropas del Ejército o de Gendarmería en frente del predio de la Compañía de Arsenales 5; (xi) para que diga si conforme la descripción de sus tareas recibió o recibía alguna orden relativa a las actividades que se realizaban en ese sector al norte del predio, tales como provisión de logística, insumos, alimentos, reparaciones, etc.*

Con relación a las preguntas efectuadas por el Ministerio Publico Fiscal, el imputado manifiesta: (i) desconozco la custodia del predio Arsenal porque no era mi responsabilidad y lo manejaba la Brigada; (ii) si eran los aproximadamente 100 soldados que en cada uno de los años de mi gestión la Superioridad me asignaba, y dependían de los dos oficiales más jóvenes de los cuatro cuyas funciones describí en mi declaración, en el año 1976 recuerdo al Tte. Innocenti, y en el año 1975 recuerdo al Tte. Schwab; (iii) da por respondida con lo expresado anteriormente; (iv) que si conocía a Federico Adolfo Furth, hizo el servicio militar en el año 1975 y se fue de baja a comienzos de 1976 y mucho tiempo después se enteró que había desaparecido, cosa que lamentó muchísimo porque durante su gestión en la subunidad cumplía con la tarea de gestionar las comunicaciones que teníamos desde la subunidad con los escalones logísticos móviles, en razón de sus conocimientos en ingeniería electrónica y de la confianza que él me depositaba; (v) no; (vi) normalmente las comunicaciones eran verbales y comunicaban por alguno de sus oficiales la existencia de la misma; (vii) digo que los movimientos desde comienzo del año 1975 eran notablemente superiores a lo normal, de efectivos que pasaban de todas las unidades

USO OFICIAL

por razones logísticas al teatro de operaciones; en cuanto a los disparos o incineraciones no percibí nada; (viii) no lo recuerdo, en virtud de que como sostuve en mi declaración teníamos la cabeza en las múltiples actividades que realizábamos; (ix) digo que recibía de todas las fuerzas de tareas, sin poder discriminar de donde provenía.

2.18. Declaración indagatoria de Adolfo Tomás Güemes.

El encartado niega todos los cargos que se le imputan, particularmente aquellos que se le imputan como autor material.

Indica que durante el año 1976 la Agrupación Salta, a cargo del Comandante Mayor San Julián lo comisiona por orden de la Dirección Nacional a la Brigada de Tucumán, mediante un radio telegrama de la Dirección Nacional de Gendarmería que decía que el Segundo Comandante Güemes quedaba comisionado al Comando de Brigada de San Miguel de Tucumán.

Que cuando llega a Tucumán se presenta ante el Coronel Cattaneo, quién le pregunta a que venía y quién lo había designado, informándole sobre el radio telegrama de la Dirección Nacional que decía que lo comisionaban por 60 días.

Que frente a tales circunstancias el Coronel Cattaneo lo consigna a hacer un estudio topográfico, sobre la carta topográfica , respecto de la zona de Alberdi, Concepción y otras poblaciones, para que cuando arribe Gendarmería tengan todos los datos y detalles respecto de: distancias en la zona entre las poblaciones, posibilidades de alojamiento para las tropas, cursos de agua importantes, caminos y sendas importantes y poblaciones que estén totalmente alejadas de los centros poblados, a fin de que Gendarmería efectúe rastrillajes (o sea actividad conjunta de varias patrullas) controles de ruta y toda otra actividad que implique conocer las zonas no exploradas.

Que en cumplimiento de tal cometido trabajaba de lunes a viernes en esa tarea y los viernes a las tres de la tarde viajaba a Salta a ver a su familia regresando el lunes al mediodía.

Indica que nunca tuvo personal a su cargo, lo que consta en las órdenes y en los radiotelegramas, es más que su grado era el oficial, el más joven y de menor jerarquía en la Agrupación Salta, lo que también figura en su legajo, lo que le impedía realizar actividad operativa alguna, siendo su tarea pura y exclusivamente la que se le asignó.

Que cuando terminó su comisión se fue y presentó su informe a su Jefe de Comisión en la ciudad de Salta, Comandante Mayor San Julián, cree que dejó una copia en Tucumán.

Respecto a la segunda oportunidad en que regresó a Tucumán, fue como parte del Escuadrón San Ramón, que tenía su asiento en una ciudad de Juan Bautista Alberdi, ciudad cercana a Concepción, dicho Escuadrón estaba bajo las órdenes del Comandante Principal Héctor Giovanini, y a él lo designaron como único oficial de la Agrupación Salta debido a que había realizado con anterioridad el trabajo topográfico, a efectos de orientar a toda la fuerza del escuadrón el que estaba conformado por personas que formaban parte del Destacamento Móvil 2 de Rosario.

La tarea del Escuadrón era la de patrullajes y controles de ruta desde Alberdi hasta la Cocha. La Brigada les ordenaba cada 3 o 4 días hacer rastrillajes por zonas; se elegía una zona y se efectuaba el rastrillaje comunicándonos por radio con el puesto de Comando que estaba en Alberdi el cuál se comunicaba a su vez con la Brigada, para por ejemplo informar sobre algún vehículo que no era de la zona, o era dudosa su patente o alguna persona indocumentada, es decir toda la tarea que es propia de Gendarmería.

Que en el Escuadrón estuvo asignado 60 días seguidos, atento a que era un Escuadrón Operativo es decir que realizaba tareas relativas a la comisión de delitos, y en el supuesto de detenerse a alguna persona durante un operativo se lo pasaba inmediatamente al Comando de la Brigada. Eran tareas propias de la función policial.

Cedida la palabra al Ministerio Publico Fiscal este solicita se le efectúen las siguientes preguntas al encartado: (i) Para que diga si prestó servicio en el Destacamento de Inteligencia 142 de Tucumán; (ii) Para que diga si Gendarmería Nacional realizaba inteligencia y en su caso, cuales eran esas tareas; (iii) Para que responda si él era oficial de Inteligencia y que significa la sigla S2; (iv) Para que diga si Gendarmería Nacional participaba de la Comunidad Informativa y en su caso si sabe quién era el oficial de enlace de Gendarmería Nacional; (v) Para que diga el encartado si conoció o supo de la existencia de Lugares de Reunión de Detenidos en al Provincia; (vi) Para que diga si en los rastrillajes que realizaban efectuaron detenciones y en su caso a donde eran dirigidos los detenidos y como se efectuaban dichos traslados; (vii) Para que diga si estuvo destinado en algún momento o si fue a la Compañía de Arsenales N° 5 Miguel de Azcuénaga; (viii) Si conoce o conoció al los ex gendarmes Antonio Cruz y Omar Torres; (ix) Si conoció o conoce a las siguientes personas: Rivero, La Fuente, Sowinski, Palomo y Montes de Oca y en su caso si sabe que funciones cumplían estas personas al momento de los hechos en Gendarmería Nacional; (x) Para que diga si conoce o conoció a la Sra. María Cristina Rodríguez Román de Fiad y en su caso en qué circunstancias la conoció, que tipo de relación mantuvo con ella y si recibió alguna propiedad suya y en su caso en que concepto. (xi) Si conoce o conoció a la Sra. Nora Cajal.

Con relación a las preguntas efectuadas por el Ministerio Publico Fiscal, el imputado manifiesta: (i) No presté servicios; (ii) No lo sé yo era un oficial subalterno, no tenía información ni capacidad de acceso a esos niveles para saber si se hacía actividad informativa o inteligencia; (iii) Yo no era oficial de inteligencia y esa sigla significa Oficial de Informaciones; (iv) No lo sé, ni tampoco si había un oficial de enlace, yo estaba en un trabajo específico que es lo que declaré respecto a mi actividad topográfica de reconocimiento del terreno; (v) No supe de ninguno; (vi) Yo no presencié ni participé en ninguna; (vii) No, nunca; (viii) no los conocí; (ix) No los conozco y no se cuales eran sus funciones; (x) no la conozco ni la conocí; (xi) no la conozco ni la conocí.

2.19. Declaración indagatoria de Luis Orlando Varela

USO OFICIAL

Manifiesta el encartado que en el año 1975 realizó el curso básico de inteligencia en la Capital Federal recibiéndose como especialista en el área de inteligencia y solicitando ser destinado en la provincia de Tucumán en el Destacamento de Inteligencia 142.

Atento lo expresado indica que no pudo desempeñarse como “Segundo Jefe” de un Destacamento de Inteligencia por su carencia de experiencia, por ser novato o no idóneo.

Informa que en la Escuela de Inteligencia se recibe educación teórica y que nunca antes había estado destinado en una Unidad de Inteligencia.

Aclara que si bien entiende cuando se le expresa “CCD” que se trata de “centro clandestino de detención”, indica que en el léxico del Ejército Argentino y conforme se menciona en todos los reglamentos militares, sólo existieron Lugares de Detención de Detenidos.

Que al momento de ingresar a la unidad de inteligencia se desempeñó como Jefe de la Sección Comando y Servicios, según consta en su Legajo personal, función que desempeñó hasta el 15 de octubre de 1977 cuando pasó a desempeñarse como Jefe de la Primera Sección Ejecutiva.

Menciona que las actividades propias en la Sección Comando y Servicios a la que fue destinado, por su falta de experiencia eran: el control del mantenimiento de los vehículos, del armamento, de las radios, de las máquinas de escribir, la provisión de munición, la ejecución de tiro de todas las armas para comprobar el buen funcionamiento de las mismas, etc.

Además explica que las actividades que desarrolló a partir del 15 de octubre de 1977, fue como Jefe de la Primera Sección Ejecutiva. Dicha actividad fue la de proveer conocimiento a las unidades militares sobre las actividades de contrainteligencia que debían realizarse, por ejemplo: no concurrir del lugar de trabajo a la casa o viceversa por el mismo camino y en el mismo horario. Indica como claro ejemplo el asesinato del Mayor Humberto Antonio Viola por concurrir en forma habitual a la casa de sus padres. Aclara para quienes no conozcan que las organizaciones terroristas de esa época, principalmente Montoneros y ERP, realizaban trabajo de reunión de información –inteligencia- sobre el personal militar y policial. Ejemplos de la falta de aplicación de estos conceptos fueron muchos, y conocidos en la ciudad de Tucumán, especialmente de un policía que concurrió a tomar contacto con un informante en la zona del Hospital Centro de Salud y el agente fue asesinado por la persona con la que debía tomar contacto (año 1976).

Los otros conceptos sobre contrainteligencia se vinculaban con la utilización del personal femenino de las organizaciones terroristas nombradas anteriormente y que terminaban asesinando al personal policial.

En conclusión indica que la actividad de contrainteligencia implicaba prevenir el futuro accionar subversivo sobre las unidades militares de la V Brigada. Deja constancia también que diez años después de 1976, o sea 1986 y 1987, se desempeñó en unidades militares radicadas en la ciudad de Tucumán (Comando de Brigada de Infantería V y como Jefe del Cuerpo de Cadetes del Liceo Militar), no habiendo tenido ningún problema

referido a escraches de ningún tipo en ningún momento, porque siempre fue una persona que no se escondió de nadie ni por nada.

Lo afirmado viene a colación porque considera que las imputaciones que se le hacen en estos momentos, cuando han pasado 34 años de los sucesos, podrían haberse manifestado en su retorno a Tucumán entre los años 1986/1987.

En particular niega haber conocido o haber tomado conocimiento de los antecedentes de Juan de Dios Gómez, por lo tanto desconoce todos los sucesos que se dicen haber sucedido o visto, no compartiendo en absoluto las acusaciones que se le hacen al respecto.

Niega haber conocido o haber tomado conocimiento de los antecedentes de Enrique Godoy, por lo tanto desconoce todos los sucesos que se dicen haber sucedido o visto, no compartiendo en absoluto las acusaciones que se le hacen al respecto.

Niega haber conocido o haber tomado conocimiento de los antecedentes de José Almerico, por lo tanto desconoce todos los sucesos que se dicen haber sucedido o visto, no compartiendo en absoluto las acusaciones que se le hacen al respecto.

Expresa que respecto a todos los hechos sobre los que se lo acusa, niega haberlos conocido o haber tomado conocimiento de ellos y por lo tanto todos los sucesos que se dicen haber sucedido o visto, no comparte en absoluto las acusaciones que se le hacen al respecto por lo expresado precedentemente cuando dijo que era el Jefe de la Sección Comando y Servicios, y posteriormente Jefe de la Primera Sección Ejecutiva.

USO OFICIAL

Con respecto a Gustavo Adolfo Fochi, niega terminantemente su participación en la detención y hasta de su muerte, según las acusaciones que se le imputan porque nunca, reitera, un personal no idóneo de una unidad de inteligencia o carente del conocimiento de las mínimas actividades de inteligencia, puede haber formado parte de la detención de esa persona y posterior muerte de la misma, y además porque por el cargo que tenía es improbable su participación.

Además agrega que el Destacamento de Inteligencia 142, no realizó ningún tipo de actividades ilegales de las que se mencionan aquí.

Para finalizar efectúa una cita textual de un prestigioso abogado argentino en el momento de su graduación: *"Hoy mi juramento como abogado es respetar y hacer respetar las leyes y la constitución nacional, manteniendo siempre mi primer juramento, a mi patria. Como ya lo dijera Coutoure en los mandamientos del abogado "tu deber es luchar por el derecho, pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia"*. Luego aclara que fue, es y morirá como soldado del Ejército Argentino.

Cedida la palabra a Ministerio Público Fiscal solicita efectuar las siguientes preguntas al encartado: *(i) para que detalle si en el curso básico de inteligencia al que hizo mención fue capacitado en contrainteligencia, interpretación de imágenes y como interrogador; (ii) para explique en la medida de lo posible las razones por las cuales solicitó su traslado a Tucumán; (iii) teniendo en cuenta lo que en el lenguaje militar se llamó "lucha contra la subversión": cuales eran las actividades de inteligencia en la zona*

de operaciones de Tucumán; si sabe que fuentes de información eran utilizadas en la zona de operaciones; si quienes producían informes técnicos de inteligencia; si puede explicar que significa inteligencia táctica; (iv) si conoce o puede explayarse acerca de lo que significa técnicamente el llamado "ciclo de inteligencia" (dirección /reunión/ procesamiento/ difusión); (v) quienes eran sus superiores jerárquicos; (vi) para que diga si conoce, y en su caso, que funciones tenían en el Destacamento de Inteligencia 142: De Urquiza, Torres, Vaccaro, Ojeda Fuentes y Moore; (vii) con relación a la referencia que hizo a lugares de detención de detenidos, para que explique si conoce cual era el objeto o razón de ser de tales lugares, si quienes se encargaban de los mismos, y si conoció alguno; (viii) si en algún momento entre 1976/ enero 1978, estuvo en el Arsenal Miguel de Azcuénaga; (ix) si cuando estuvo en Tucumán entre 1986/1987 según relató, cumplió funciones en algún momento en el Juzgado de Instrucción Militar que funcionaba en el Comando de la V Brigada.

No obstante la oposición del abogado defensor, aconsejando al encartado que no responda las preguntas del Ministerio Fiscal, el encartado manifiesta su voluntad de responder.

Seguidamente se le leen las preguntas de la Fiscalía a las que el Sr. Varela responde: (i) si, es la contrainteligencia una actividad normal que se debe desarrollar en el área de inteligencia, y se refiere a contrarrestar la información –inteligencia efectuada por el enemigo terrorista subversivo, en este caso-; referido a la interpretación de imágenes se trata de la interpretación de imágenes aéreas. En otra oportunidad hice el curso de interpretación de imágenes aéreas y me capacité en la República de Francia, y también en el manejo de los elementos técnicos que había adquirido Argentina en ese país antes de la guerra de Malvinas. Y con respecto a los interrogatorios, también es una actividad propia del área de inteligencia pero en ningún reglamento militar figura que para efectivizar la misma se deba emplear la tortura física; (ii) mi traslado a la provincia de Tucumán, fue una elección personal y por la antigüedad en el resultado del curso (orden de mérito), y además por ser tucumano, y conocer perfectamente la situación caótica que vivía mi patria chica. (iii) quiero dejar bien en claro que en Tucumán no existió una simple "lucha" sino que fue una "guerra" contra la subversión, y digo esto porque las que iniciaron la guerra no declarada fueron las organizaciones terroristas subversivas y se lo puede ver en todos las revistas que ellas producían. En el ámbito de la ciudad de Tucumán y por supuesto en toda la provincia de Tucumán se realizaban tareas de inteligencia, con la finalidad de lograr el orden, la paz en mi provincia; las actividades de inteligencia que desarrollaba el destacamento en su zona de responsabilidad (Tucumán) eran exclusivamente, la reunión de información que se efectuaba a cientos de ciudadanos. Las fuentes de información son todas las personas o grupos de personas o lugares físicos de donde se extraía la información, llámese "juan perez" o "sindicato" o "una universidad, un ingenio", etc. Inteligencia táctica es aquella reunión de información transformada en inteligencia, para su uso en la zona donde se esta operando. (iv) mas o menos esta contestado en la misma

pregunta, comenzamos con la reunión de información en base a una o varias personas sobre un mismo tema, se la procesa –compara- con otras informaciones antiguas o actuales y de allí surge la inteligencia que se va a proveer a quien la solicito (comando del ejército, comando de la brigada, etc.); (v) mi superior jerárquico fue el Teniente Coronel González Brea, como jefe del destacamento de inteligencia 142, y él Mayor Caffarena, quien se desempeñaba como segundo Jefe del Destacamento (1976); en el año 1977 estuvo como jefe el Teniente Coronel Busso; (vi) Si los conozco a todos, no en profundidad, porque en el Ejército y más estando en Tucumán, nos conocíamos todos. No recuerdo el cargo que ocupaban, son más modernos que yo y vinieron en otras fechas. Yo ya a fines de diciembre de 1977 ya no estaba en Tucumán (por uso de licencia por mudanza y luego licencia anual) siendo destinado a la Escuela de Guerra en Capital Federal. (vii) el lugar de reunión de detención sirve para que en el futuro se pueda rectificar o ratificar la información producida por el detenido, se lo tiene al detenido (detenido por una causa) y en base a otras informaciones o a información emitida desde otros detenidos, se logra llegar a la verdad respecto a la causa de detención de la persona detenida. En el caso de los lugares de reunión de detenidos las causas en las que estaban involucrados los detenidos eran diversas y hasta en distintos lugares, es decir hacía falta constatar la veracidad de los dichos de la persona detenida. Los lugares de reunión de detenidos estaban en el sur de la provincia en las diferentes unidades de combate que allí estaban. Las causas tenían que ver con portación de armas, compra excesiva de alimentos, porque los vecinos declaraban que vieron a esa persona ingresar a los montes y regresaban a la semana. No conocí ninguno y desconozco quien se encargaban de los mismos, dependían de las unidades de combate que estaban en el monte y que se relevaban cada dos o tres meses, ingresando unidades de todo el país. (viii) en ningún momento estuve en el Arsenal Miguel de Azcuénaga porque no era mi actividad normal a desarrollar en el Destacamento, yo trabajaba dentro de la Unidad de Inteligencia porque era el Jefe de Comando y Servicios, en la calle 25 de mayo; (ix) no preste servicios en el juzgado militar.

USO OFICIAL

2.20. Declaración indagatoria de Luis Daniel De Urquiza

Afirma el encartado en primer lugar que, la fecha establecida como 22 de Diciembre de 1977 no es la fecha en que asumió sus funciones en Tucumán sino la fecha en que su asignación al Destacamento 142 fue publicada en el Boletín Reservado del Ejercito. Que el Destacamento 142 que se encontraba ubicado en calle 25 de Mayo y Av. Sarmiento, en el predio del Ejercito.

Que dicho traslado se efectivizó los primeros días de Febrero de 1978 habida cuenta que otorgaban 15 días para el traslado y a continuación le fue impuesta al suscripto la licencia anual de 30 dias , lo que implica que recién se radicó en Tucumán el 1 o 2 de Febrero de 1978.

Informa que cuando toma noticia de la acusación en su contra, procedió a informarse, básicamente a través de Internet, sobre los ilícitos perseguidos penalmente dentro de lo que se denomina o designa como “Causas de Derechos Humanos”.

De dicha información se advierte que en todas estas causas hay la llamada prueba de contexto donde entre otros parámetros se fija el accionar reprochable y perseguible penalmente como ejecutado sobre grupos y sectores sociales determinados, desarrollando sobre eso el concepto de Genocidio y Lesa Humanidad, con enjundia. Esos grupos/sectores sociales aparecen materializados en personas emblemáticas (personas físicas) de conocida trayectoria militante en el campo de las cuestiones sociales y políticas, diría que muy conocidas, inclusive integrantes de organizaciones políticas militares, de actuación pública y notoria entre 1973 y 1975. Esto se habría desarrollado según su exegesis personal en dos etapas la primera alrededor de octubre de 1973 hasta fines de 1975 de manera esencialmente violenta caracterizada siempre según su entender por la presencia en la vía pública de los elementos que reprimían. La segunda etapa se habría desarrollado sobre intelectuales o formadores de opinión desde mediados de 1975 hasta mediados de 1976, desde tal punto de vista que amerita mayor extensión.

Luego de esta búsqueda, indica que encontró que el Sr. Saade Saieg nunca estuvo en ninguna actividad política social o cultural, y que si no fuera por su triste condición de desaparecido, no estaría en Internet. Lo cual a su entender parece incongruente que sea motivo, su persona física, de un secuestro por una pandilla de delincuentes, dentro de la tremenda violencia ideológica y cultural que se vivía, habida cuenta que emerge de la prueba de contexto traída al caso.

Aclara que su grado al momento de los hechos que se le imputan era el de Teniente Primero y efectivamente revistaba en el Destacamento de Inteligencia 142, el cuál se hallaba inmerso en el conflicto de público y notorio con la hermana Nación de Chile.

Que en tales momentos no existía otra actividad a la referida. La llamada lucha contra la subversión estaba ausente en cualquier manifestación que se pueda decir o suponer en cuanto a directivas o actividades no había ninguna al respecto.

Indica que en el año 1975 el general Acdel Vilas dijo que había derrotado a la subversión lo mismo fue reiterado públicamente por el Gral. Videla, y en el año 1978 que le afecta, cesó la llamada Operación Independencia que había comenzado en Febrero de 1975.

Remarca con relación al conflicto limítrofe con Chile y la escalada del mismo, que a partir de septiembre de dicho año se produjo una movilización (disposición del potencial nacional para la guerra) que continuó hasta abril de 1979. No había ningún Centro Clandestino de Detención, ni actividades afuera del edificio que tuvieran que ver con otra cosa que no sea el conflicto con Chile. El mismo incluía la relación con países del marco regional en la idea que una vez desatado el conflicto todos los países limítrofes podían actuar de una forma o de otra, acá debo apelar al secreto militar que está eximido por el Poder Ejecutivo Nacional para causas de Derechos Humanos.-

Indica que no tenía personal dependiente de él, que su jefe era el Capitán Ramón Alberto Ojeda Fuentes, que le era absolutamente ajeno el tal Arsenal Miguel de Azcuénaga.

Paralelamente respecto a la imputación sobre Luis Alberto Soldati cumple en hacer notar que el mencionado revistaba en otra unidad militar y no tenía ningún contacto

con el encartado, manteniendo lo dicho referente a que no había directiva respecto a la llamada lucha contra la subversión, la cual en el contexto traído como prueba se había dado por finalizada, de público y notorio.

Sobre el soldado Soldati corresponde sea interrogado quien era su Jefe, el jefe del Arsenal o su Jefe de Compañía que tiene que saber, debiendo existir un expediente al respecto. Destaca que ni estaba ni había ninguna actividad contra la población prevista en directiva alguna, que todo eso había sido dado por superado, y al soldado Soldati no lo conoce, ni conoce los hechos pertinentes a su lamentable desaparición.

El Ministerio Público Fiscal solicita se le efectúen al encartado las siguientes preguntas: (i) Para que diga si era Jefe de situación general y Jefe de la primera sección de Ejecución del Destacamento de Inteligencia 142 de Tucumán. En su caso que implicaba esta *Jefatura y cuales eran sus funciones. (ii) Si el encartado podría realizar un croquis del Organigrama del Destacamento 142; (iii) Si le consta que hubo una lucha contra la subversión en su caso cuál era el rol que desempeñaba Inteligencia del Ejército en la misma; (iv) Existieron directivas normativas y ordenanzas generales en materia de inteligencia con relación con la lucha contra la subversión; (v) En su formación como miembro de inteligencia tuvo conocimiento de la RE 9-51 "Instrucción de lucha contra elementos subversivos" IGM 1976 y RC16-15 "La unidad de Inteligencia" Jefatura II-Inteligencia del EMGE, 1973; (vi) Que significa la sigla AEI. (vii) Cuales eran las fuentes de Información más frecuentes en la lucha contra la subversión; (viii) Si se realizaban informes escritos de la tarea desarrollada y a donde se remitían los mismos; (ix) Que es la Comunidad Informativa o de Información y quienes la componían en Tucumán; (x) Si conoció o conoce a las siguientes personas: Torres, Vaccaro, Varela y Moore, en su caso que funciones desempeñaban dentro del destacamento 142. (xi) Supo si existía personal civil de Inteligencia del destacamento 142, en su caso que tareas desarrollaban los mismos y de quién dependían. (xii) Si puede decir el encartado cual fue el objeto de su viaje a Chile y a Perú en el año 1977; (xiii) Si tiene o tuvo alguna relación con él Segundo Comandante de la Quinta Brigada Alberto Luis Cattaneo; (xiv) Detalle la manera como tuvo acceso o conocimiento a que existía una orden de detención en su contra y del mismo modo cuando accedió a tomar conocimiento del Requerimiento Fiscal.*

El encartado respondió las preguntas del Ministerio Fiscal manifestando que: (i) al momento de los hechos, año 1978 el suscripto no era Jefe de la Primera Sección Ejecución, recién lo fue en 1980, en ese momento el Jefe de la misma era Alberto Ramón Ojeda Fuentes y además todo el esfuerzo del Destacamento el Ejército y el país estaba avocado a la escalada del conflicto con Chile, la totalidad de las directivas (las cuales estaban clasificadas por quién hubiese emitido el documento en orden a lo que marcaba la legislación) para todos los organismos y elementos del estado, civiles y militares respondían a esa finalidad, con distintas misiones en organismos civiles y militares impuestas, autoimpuestas o deducidas, en orden a la especificidad de los organismos civiles y militares. Tengo presente Migraciones, Vialidad Nacional y Aduana, a como se hayan

USO OFICIAL

llamado en aquél momento. Las Directivas mencionadas sustituían con funciones ad hoc las estructurales con la teleología puesta de manifiesto. En esa situación el suscripto llevaba Chile, considerando tal afirmación exenta del secreto militar por ser de Público y notorio la situación que se vivió; (ii) que pide disculpas y dispensas y cumple en hacer saber como de fácil obtención por requerimiento, en la estructura militar el Organigrama fehaciente y veraz, reiterando que la organización estaba alterada por la situación expuesta ut supra (Conflicto con Chile): (iii) Objetando por conciencia el término *lucha contra la subversión* cumplo en considerarla de público y notorio, a la parte siguiente respondo no existían directivas de alguna índole sobre tal cuestión. Al momento del máximo espiral de violencia el suscripto se hallaba fuera del campo de interés de la conducción que se menciona. Asimismo la frase "rol del ejército" excede el marco de la función y grado del suscripto al momento de los hechos; (iv) al momento de los hechos no existía ninguna, todas las directivas estaban destinadas al conflicto con Chile; (v) a la primer parte de la pregunta contesta que no y expone los planes en ejército y en toda organización se hacen para el año subsiguiente, habiendo cursado el suscripto la Escuela de Inteligencia del Ejercito en el año 1977 la citada publicación no había sido incorporada a la currícula, sin obstar por ello que haya estado por ello incorporada en el año 1978. Que tal publicación estaba destinada a los jefes de Unidad de Inteligencia en los cursos o cursillos que se dan cuando son nombrados, los cuales se hacían para todos los que eran nombrados jefes o elementos y unidades u organismos; (vi) que significa Aptitud Especial Inteligencia, la cual tuvo el suscripto desde fines de 1977 hasta 1986, donde dejó de tenerla por libre decisión; (vii) que reitera que el Destacamento de Inteligencia en la fecha de los hechos no tenia ninguna ingerencia en la lucha contra la subversión y en lo que refiere a la tarea del suscripto era tarea de total ajenidad para el mismo, dado el cúmulo de tareas que implicaba el conflicto con Chile y su escalada, lo cual debe ser considerado como fenómeno macro político; (viii) que en el marco del conflicto con Chile el tráfico de informes era intenso, pautado en las mismas Directivas; (ix) que desconoce y a continuación explica que en el marco del conflicto con Chile estaba todo organizado y estructurado de acuerdo a las directivas que refiere, lo cual debía estar especificado sobre todo con relación a los organismos civiles del Estado Nacional a través de las llamadas "Instrucciones de Coordinación" en aquellos documentos que así lo tengan en su estructura. Se produjo en un momento dado la requisa masiva de vehículos civiles y las vialidades nacionales, provinciales y el arma de Ingenieros del Ejercito establecían convenios de cooperación y todo ese material fue arrimado a la zona de la cordillera a lugares determinados que tenían que ver con el planeamiento previsto; (x) que si tiene conocimiento y trato con Horacio Vaccaro compañero de promoción y amigo, él tenía la logística del Destacamento habida cuenta que fue destinado al mismo como refuerzo por la cuestión de Chile, vino porque había rendido en la escuela Superior Técnica del Ejercito y al no ingresar, cuando eso pasa queda a disposición de Jefatura 1 Personal para ser destinado, habiéndolo sido a ese destacamento, estudió durante todo el año e ingresó a fines de ese año al mencionado instituto y egresó en el año 1982 como Ingeniero

Militar. Torres me refiero a Fernando Torres y Varela no estaban en el Destacamento a la fecha de los hechos que se me imputan. Respecto a Moore no lo tengo presente en este momento; (xi) si existían están en la ley y dependían del jefe del Destacamento. Las tareas que esas personas realizaban eran internas de la unidad vinculadas al tema del conflicto con Chile; (xii) fue un viaje de estudio con todo el personal del curso de la escuela de Inteligencia; (xiii) fue mi suegro, ya en situación de retiro al momento de los hechos que se me imputan; (xiv) el 22 de Septiembre próximo pasado en horas de la madrugada me llama el teniente Coronel Ojeda Fuentes y me dice que lo habían detenido en su domicilio en Villa Lugano ciudad de Bs. As., por una orden de detención proveniente de Tucumán y requiere mis servicios profesionales, en ese momento se encontraba en Aeroparque a disposición de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Me dispongo a salir, toman contacto conmigo los familiares, en este caso la hermana y allí me informa que lo llevan a la Alcaldía de los Tribunales de la Ciudad de Bs. As., eso era el día Jueves, así las cosas voy a la mañana por temas perentorios de procuración hasta Mercedes provincia de Bs As. y estando allí me dice que lo trasladaban a Marcos Paz y ya en Marcos Paz me dice que yo también estaba en la lista, yo me sorprendo y estando afuera de mi casa mi hijo me dice que me habían traído una notificación yo le digo que la reciba, y al rato vuelve el notificador y mi hijo le informa que estaba en provincia a lo que el notificador le dice que si ya viajo a Tucumán mejor y que se presente espontáneamente; y a partir de ahí empecé a averiguar y organicé mis responsabilidades profesionales allá y me vine a Tucumán , avisando que venía a Tucumán a la Defensoría , llegué el sábado, me presenté el martes y me fijaron la fecha para hoy.

USO OFICIAL

2.21. Declaración indagatoria de Augusto Leonardo Neme

El encartado niego rotundamente todo lo que se le imputa, y afirma que su grado en la Brigada era el de Mayor y no el de Teniente Coronel.

Indica que siempre usó uniforme y casco mientras estuvo en Tucumán, jamás ropa de civil, ya que se castigaba con 15 días de arresto por orden del General Bussi a quién no usara el uniforme correctamente. Que nunca usó sobrenombres o alias en su vida militar.

Manifiesta que en el poco tiempo que estuvo en la zona de operaciones no tuvo personal a su cargo ni responsabilidad sobre ningún tipo de organización u elemento. Que durante su estadía la misma consistió en una pasantía de pocos meses porque venía de estar cursando el segundo año en la Escuela Superior de Guerra. Que se presentó ante el Estado Mayor de la V Brigada de Infantería a fines junio de 1976 y quedó trabajando en la ciudad de Tucumán hasta fines de julio de 1976.

Aclara que fue designado Segundo jefe del Destacamento 142 en marzo de 1979 cuando ya no existía la zona de operaciones y se retiró del mismo en noviembre de 1980, lo que puede ser constatado en su legajo personal.

Que su función en el Comando de la Brigada en 1976 consistía en confeccionar la Carta de situación de la Brigada y también tenía que supervisar el funcionamiento de la red radioeléctrica externa de la Brigada. Que en agosto de 1976 fue designado para realizar la

misma tarea (confeccionar la Carta de Situación) en la zona de operaciones, tarea anexa a la carta, como por ejemplo llevar el estado de obras de la acción cívica que realizaba el comando y atender los problemas personales que algunos vecinos planteaban como por ejemplo familiares que se peleaban, personas que solicitaban comida, ropa, remedios ladrillos, y cosas por el estilo que trataban de solucionar, mientras estábamos en Nueva Baviera, donde revistaba el Comando de Operaciones Sur .

Destaca que el Comando a pesar de estar rodeado de un alambre tejido tenía varios lugares de acceso y no era un bunker, era abierto al público, acercándose muchas personas a pedir solución a sus problemas. Además en forma permanente se realizaban exposiciones a personalidades, instituciones Universidades, personas del mundo de los deportes, etc, a quienes se les informaba en detalle las acciones que se desarrollaban. Las exposiciones las realizaba siempre el Coronel Arrechea eventualmente él colaboraba, estas exposiciones muchas veces concluían con un almuerzo porque se tenían que retirar durante el día de la zona de operaciones porque se temían emboscadas por parte de los elementos de la guerrilla.

Que durante 1979 y 1980 se desempeñó como segundo Jefe del Destacamento de Inteligencia y no existía la zona de operaciones ni existía subversión, siendo su función principal la de atender el funcionamiento de la Unidad de Inteligencia que estaba orientada básicamente a apoyar al gobierno proporcionándole algún tipo de información que pedía y a mantener actualizada la situación con Chile.

Niega rotundamente las imputaciones que le efectúan, ni haber estado nunca en el Arsenal Miguel de Azcuénaga el que incluso en la actualidad no conoce. Informa que el Coronel Arrechea ordenó que ningún miembro del Comando podía visitar las Unidades de la Brigada V de Infantería, que dicho Coronel era celoso al mando e imponía una estricta disciplina del secreto y sancionaba a quién la trasgrediera, incluso en el comando no permitía que se comentara lo que cada uno hacía.

El Ministerio Público Fiscal solicita se le efectúen al encartado Neme las siguientes preguntas: *(i) Para que diga si en el ex Ingenio Nueva Baviera o en puesto Comando Táctico habían personas detenidas, habida cuenta lo declarado por Ariel Rolando Valdivieso, en declaración indagatoria de fecha reciente; (ii) Para que diga si conocía de la existencia de las fuerzas de tarea del Regimiento 19 que actuaban en la zona de operaciones; (iii) Para que diga si puede aclarar quienes eran los demás oficiales que conformaban el estado Mayor de la V Brigada de Infantería; (iv) Para que informe si fue citado previamente por los hechos acaecidos en Tucumán, por algún otro Tribunal; (v) Para que diga si conoce o conoció a Nora Alicia Cajal; (vi) Para que diga si conoce o conoció a una persona apodada "Ganso" de la Localidad de Tafí Viejo Tucumán; (vii) Para que informe si actuó como Ministro Interventor en al provincia de Catamarca; (viii) Para que diga si tuvo formación especifica en Inteligencia*.

El encartado responde a las preguntas formuladas por el Ministerio Fiscal manifestando: (i) que solicita se le ponga a la vista la declaración Indagatoria de Valdivieso

y teniéndola a la vista responde que No había personas detenidas allí. Nunca vi a nadie que estuviera detenido en ningún lugar del puesto de Comando ya que mi función era manejar las actividades de la carta de situación y la acción cívica; (ii) que sí, que ello estaba graficados en la carta de situación y era expuesto a todo el público que concurría a recibir la exposición o sea la exposición de la situación que vivía la zona de operaciones. Además esto era público, o sea que había fuerzas de tarea y equipos de combate en la zona de operaciones que los mismos actuaban como patrullas, que además se realizaban controles de ruta, patrullajes en el monte, etc., estas actividades propias de donde se había puesto una zona de operaciones. Cada unidad del Tercer cuerpo del ejercito mandaba personal para formar la estructura de la zona de operaciones, por ejemplo del regimiento 20 de Infantería (de Jujuy) del Grupo de Artillería 5, los paracaidistas de Córdoba, El regimiento 19 de Infantería y a cada uno se le asignaba un destino o sector territorial bajo su responsabilidad y quien disponía ese lugar para cada uno era el Coronel Arrechea; (iii) que NO después de 41 años no recuerda; (iv) que no que nunca fue citado ni prestó declaración indagatoria; (v) No la conozco; (vi) No tampoco lo conozco; (vii) El encartado responde Si fui designado como Ministro de Economía desde marzo de 1976 a Junio de dicho año, y junto con otros compañeros míos de la escuela de Guerra que ocuparon ministerios en esa Provincia y otras provincias de la republica; (viii) que hizo un curso de Inteligencia, en el cual durante un año, recibíamos formación específica solicitando se oficie al estado Mayor general del Ejército para que informe las asignaturas que en dicho curso se enseñan.

USO OFICIAL

2.22. Declaración indagatoria de José Eloy Mijalchyk

Manifiesta el encartado en primer lugar que nunca fue párroco de la Iglesia Cristo Obrero de la Iglesia Cristo Obrero de Tafí Viejo de Tucumán, sino de San José Obrero de El Colmenar, desde 1972 hasta la fecha.

Que sobre lo restante afirma que nunca entró al Arsenal Militar ni a ningún cuartel, sino hasta el año 1982 cuando lo nombran capellán auxiliar del Regimiento 19 de Infantería. Que no podía ingresar a los cuarteles porque no era su función, por lo tanto pide que se oficie al Arzobispado de Tucumán y al Obispado castrense para que certifiquen el tiempo que figura respecto a mis funciones.

Indica el encartado que nunca podría haber ingresado a los cuarteles, sin consentimiento de la autoridad eclesiástica correspondiente, porque pondría hasta su sacerdocio en peligro, porque carecía de jurisdicción y según el Código de Derecho Canónico, de haber actuado sin jurisdicción podría haber realizado actos inválidos, ilícitos o nulos, lo cual hubiera sido causa de suspensión canónica.

El Ministerio Público Fiscal solicita se le formulen al encartado las siguientes preguntas*: (i) para que si puede el encartado nos ilustre sobre la posición de la Iglesia tucumana con respecto a la llamada lucha contra la subversión; (ii) cual era su posición personal respecto a la llamada lucha contra la subversión; (iii) si en su comunidad religiosa se recibieron denuncias por desapariciones o secuestros; (iv) si habían órdenes o instrucciones del Arzobispado relativas a como actuar en estos casos; (v) si conoce si hubo*

religiosos católicos secuestrados o que hayan sido víctima de ilícitos por parte de las fuerzas de seguridad o militares; (vi) si en su rol religioso tuvo contacto con las autoridades militares de la época; (vii) si conoció o estuvo con los religiosos Tortolo, Bonamin, José Menestrina y Eduardo Mc Kinnon, en las visitas de éstos a Tucumán en el año 1976; (viii) si conoce o conoció a María Angélica Mazzamuto de Romero, Félix Viterbo Corbalán y/o Norma del Carmen Monteros y en caso afirmativo si puede explayarse al respecto; (ix) si denunció alguna vez algún hecho relacionado con posibles "elementos subversivos" como eran llamados en ese entonces.

Cedida la palabra al encartado, el mismo responde a las preguntas formuladas manifestando: (i) yo no le puedo decir absolutamente nada porque en esos años yo me hacía cargo recién de la parroquia en la cual estoy, donde comencé viviendo en un rancho con una jurisdicción muy grande para atender y con muchas necesidades. En la práctica en esos años yo pase mucho tiempo en el campo, que era jurisdicción mía. (ii) nunca tuve una posición personal remitiéndome a lo anterior; (iii) que en mi comunidad no se recibieron denuncias, solo la de este hombre Corbalán que vivía en el Colmenar, al cual no conocí, incluso más me dijeron que ni siquiera era católico sino evangélico; (iv) nunca; (v) no conozco; (vi) de ninguna manera; (vii) conocía que el Sr. Tortolo fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, pero al resto no los conozco; (viii) no conozco a María Angélica Mazzamuto ni a Norma Monteros, respecto a Corbalán me remito a lo ya respondido; (ix) nunca, sé que existe un papelito que anda dando vuelta por ahí pero eso no tiene nada que ver.

2.23. Declaración indagatoria de Miguel Alfredo Manuel Paz

Manifiesta el encartado que en la imputación figura que cumplió funciones desde el año 1975 al 1978 cuando en realidad estuvo desde enero de 1975 hasta diciembre de 1976 fecha en la cuál es trasladado a Buenos Aires.

Que con relación al funcionamiento del Ejército o su organización, esta el Estado Mayor General del Ejército, cuerpos del ejército y para abajo siguen las Brigadas y en su caso particular él pertenecía al Regimiento que a su vez depende de la Brigada.

Que cuando la Presidente de la Nación ordena la intervención de las Fuerzas Armadas dicta un decreto que fija las misiones que debía cumplir el Ejército y a partir de ese documento empezaron a actuar.

Quiere aclarar a los efectos de la presente declaración, que el Regimiento 19 de Infantería en el cual él revistó entre los años 1975/1976 se organizaba en fuerzas de tarea para cumplir la orden de la presidenta de la nación o comandanta en jefe.

El Regimiento organizaba fuerzas de tarea que eran organizaciones de combate y las instalaba en lugares que establecía la Brigada, que en su caso particular estaba asignado a la fuerza de tarea de Santa Lucia, en ese lugar estuvo varios meses, sin poder precisar cuales pues había relevo en el lugar lo que implica que venía otra fuerza de tarea que reemplazaba a la que estaba, normalmente cada tres meses, pero el periodo en que permanecía en el lugar la misma fuerza de tarea podía variar.

Informa que él operó en Santa Lucia, en particular advierte que en el libro La Base de Lucia Mercado lo nombran varias veces con relatos que no son a su entender comprometedores para su persona, ya que dicen por ejemplo menciones protocolares más que otra cosa como que recibió a la presidenta de la Nación, o que recibió a un comandante para dar novedades de la base de combate.

Manifiesta que sus funciones eran la de Jefe de Fuerza de Tarea, las funciones como tal eran las de patrullaje en el monte y en los cañaverales, instalación de emboscada, todo ello en busca del guerrillero; también acciones cívicas que consistían en por ejemplo arreglo de las escuelas, de hospitales, colaborar con la Iglesia.

En particular en Santa Lucia había un Club que era un lugar en el cual mataron a un encargado de un bar, que en ese club fijaban objetivos para que la gente fuera al club y no anduviera por el pueblo, organizamos campeonatos de fútbol en la zona, todo ello para que la población se entretuviera con la ayuda de empresas de la zona, se organizaron campeonatos de básquet también y bailes para la población a efectos de que la misma se reúna allí, en esas reuniones se les daba consejos sobre la familia y que los jóvenes anduvieran por el camino que debían andar.

USO OFICIAL

Respecto a las operaciones militares que desarrollaba una fuerza de tarea, el empleo era de pequeñas fracciones de la fuerza de tarea no de toda ella, la acción era por secciones en diferentes lugares donde sospechábamos en los que podían estar los guerrilleros, una fuerza de tarea en total podía tener entre 200 o 250 hombres, incluido en ellos todos, cocinero enfermeros y soldados. Cuando la fuerza de tarea tenía prisioneros teníamos la orden expresa de tenerlos 24 hs., porque no pueden operar las fuerzas con lastre atrás, o sea que se hacía inteligencia con el prisionero, armas, equipo, como estaban físicamente si tenían plata o no, inmediatamente cumplido ese lapso se comunicaba que había un detenido al puesto de Comando de la Zona Sur de Famailla, pues no teníamos comunicación directa con San Miguel de Tucumán, y en el lapso de 24 hs. se enviaba un camión a Famailla y luego el prisionero era derivado, sin saber adonde porque todo era muy dinámico.

Que desconoce como operaba la retaguardia. Nosotros teníamos una zona de acción desde las Cumbres de Mala Mala hasta la cola del dique Frontal, pero de ese territorio lo que más se operaba era de la ruta 38 hacia la Montaña, el resto eran zonas sin importancia salvo que se les informe que había algún movimiento raro se enviaba una patrulla y en su caso se informaba si había novedades.

Respecto de las personas que figuran en la imputación no recuerdo conocer sus nombres, de todas formas nosotros concurríamos a las casas de las personas en Santa Lucia para contenerlas mantenerlas tranquilas e informarles que no íbamos contra la población, que no pongan en peligro a sus hijos que no anden por los senderos ya que una patrulla militar los podía detener.

Aclara que no era exclusiva la búsqueda del guerrillero sino negarle la entrada al pueblo al guerrillero a través de la acción cívica: reuniendo a la población en el club y visitando casa por casa -esas visitas a veces las hacía él-.

Respecto de Fote que aparece acá quiere aclarar que decían que operaba en la zona de San José pero nunca lo vio ni lo conoció. Que sabía que existía un tal Bombo Avalos que cree que lo detuvieron en Bs. As. Pero no lo conoció ni lo vio nunca. Aclara además que Caspinchango estaba dentro de la zona de Santa Lucía creo que ahora es pueblo Berdina, los límites eran del río Caspinchango al Sur y del río los Sosa al Norte, y de la cola del Frontal a las cumbres del Mala Mala, prácticamente llegábamos hasta la ruta 157. Que su fuerza de tarea se limitaba a realizar la función delimitada a la misma en la zona asignada.

El Ministerio Público Fiscal solicita se le formulen al encartado las siguientes preguntas: *(i) Para que indique cuales fueron los destinos que tuvo desde 1975 a 1980; (ii) Para que diga que tareas de inteligencia se realizaban en la zona de operaciones del R 19 o el 142 de inteligencia; (iii) Que era un S2 en la zona de operaciones y diga si hubo uno en su fuerza de Tarea; (iv) Si conocía en su función las directivas, normativas u ordenanzas generales en materia de inteligencia en relación a la lucha contra la subversión RE9-51 "Instrucción de lucha contra elementos subversivos", IGM 1976, RC-16-15 "La unidad de Inteligencia", Jefatura 2- inteligencia del EMGE 1973; (v) Para que diga si sabe si existía un LRD en la Base Santa Lucia. (vi) Que otras fuerzas de tareas prestaban servicios en la zona de operación durante 1975 / 1977; (vii) Tenia el regimiento 19 tareas de control de la población en el sur de la provincia; (viii) Como se llamaba su fuerza de Tarea; (ix) Con que otra fuerzas de tarea se relevaba su grupo de tarea (x) Quienes realizaban los operativos de detención o que fuerzas participaban en dichos operativos; (xi) Supo o tuvo conocimiento de "excesos" de sus subordinados con respecto a los destinos en la base de Santa Lucia, en su caso qué medidas se tomaban.; (xii) Durante el tiempo que Ud. estuvo en Santa Lucia quien estaba a cargo de Famailla; (xiii) Si conoció o recuerda a Manuel Humberto Suarez, Julio Guillermo Suarez, Francisco Monasterio, Antonio Monasterio, José Agustín Racedo, Alcira Ochoa de Racedo, René Quinteros, Juan Manuel Quinteros y los hermanos Ramón Ricardo José Agustín y Chacho Lizárraga. (xiv) Si conoce quienes eran sus superiores si conoce a las siguientes personas Alias, Colotti, Neme, Valdivieso, Trucco y que funciones cumplían los mismos o que grado revistaban.*

Formuladas las preguntas al encartado este manifestó: (i) En 1975 y 76 en el Regimiento 19 de Infantería, desde 1977 al estado Mayor General del Ejercito, en 1978 Colegio Militar de la Nación, 1979 vine a fundar el Liceo Militar General Lamadrid, 1980 me mantuve en el liceo allí estuve hasta 1983; (ii) en cuanto al R 19 la tarea de inteligencia de una fuerza de tarea es inteligencia de combate o sea es sacar de la mera observación de un combatiente el estado del equipo o uniforme armamento y todo lo que pueda llevar arriba el hombre eso hace a la inteligencia de combate y por medio de informantes del lugar

uno sabia por donde andaban los guerrilleros a los efectos de programar operaciones militares, generalmente el informante era por ejemplo, el que manejaba un tractor. Y respecto al 142 existió pero ninguna relación ni funcional ni orgánica tenía con la fuerza de tarea, este destacamento dependía de la Brigada; (iii) el S2 es inteligencia y todas las fuerzas de tareas tienen S2 pero no era un especialista en inteligencia, era un oficial que se lo nombraba para hacer inteligencia por dos meses entonces recorría los equipos de combate, quiero aclarar que la fuerza de tarea tenía dos equipos de combate uno estaba en Caspinchango y el orto en Santa Lucia; (iv) Yo de los reglamentos militares en este momento no recuerdo pero si eran reglamentos reservados para determinados niveles a nosotros no llegaban no los conozco. Respecto a la jefatura 2 del Estado Mayor esa si existía pero no se quienes eran los jefes; (v) que allí en toda la zona no existió un LRD y conforme a lo expresado en mi declaración era imposible pues al prisionero solo se lo podía tener en la zona 24 horas y después salía de la zona; (vi) yo puedo hablar hasta el 76 y el relevo era el Regimiento de Infantería de Monte 28 de Tartagal. La cantidad de efectivos que pertenecían a la fuerza de tarea era de 200 que cumplían la función y 200 hombres que descansaban para reemplazar posteriormente a esta. A su vez como ya dije de enero a febrero el Regimiento 19 y luego marzo abril reemplazaba el 28 y de mayo a junio reemplazaba nuevamente el grupo que había descansado del R 19, esto solo a modo de ejemplo. Quiero aclarar que cada zona tenía su fuerza de tarea por ejemplo hasta concepción, como Fronterita, Lules, etc.; (vii) No, salvo que se considere sur la zona de operaciones; (viii) primero se llamó Aconquija y después cuando lo matan a Berdina pasó a llamarse así; (ix) que se remite a lo contestado en las preguntas anteriores; (x) las detenciones las hacían los propios grupos de tareas, en el combate se trata de tomar prisioneros, a los fines de poder obtener información. Con nosotros no operaban otras fuerzas operaba el ejercito solo; (xi) que no se cometieron excesos con los prisioneros, y de haber ocurrido ello yo sería responsable pero no se cometieron excesos además como ya dije solo se los tenía 24 hs.; (xii) que pasaron muchas personas recuerda a un tal coronel Díaz del cual n o recuerda el nombre, (xiii) que no recuerda esos nombres el único que le suena es el apellido Racedo pero ese es un apellido de la zona y Monasterio me suena a un apellido de Tafo del Valle; (xiv) Alais era Jefe de Regimiento 19 durante 1976 y 77 fue su jefe de Regimiento en 1976. A Colotti cuando yo me voy a Bs As. Colotti viene en mi reemplazo como segundo jefe en el año 1977. A Neme lo conozco pero allí en mi zona de operaciones no estuvo, que haya estado en otro lugar en Tucumán no me consta. Valdiviezo y Trucco eran oficiales de mi Fuerza de Tarea eran Jefes de Equipos de Combate.

3. Marco Histórico.-

Conforme fuera ya analizado en numerosos pronunciamientos por este magistrado que fueran confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán (“Vargas Aignasse”; “Coronel” y conexas; “Carloni de Campopiano” y conexas entre otras) y también fuera valorado como demostrado por el Tribunal Oral Federal en lo Criminal y Correccional de Tucumán (causa “Vargas Aignasse” y “Jefatura de Policía” –Causa

USO OFICIAL

Coronel y conexas-)"*durante el período 1975/1983, se suspendieron en forma absoluta las garantías de los ciudadanos y se limitó substancialmente el ejercicio de derechos individuales, implementándose un sistema de violencia desde el Estado hacia la ciudadanía caracterizado por la ilegitimidad, la desmesura, la impunidad, y el absoluto desprecio por la dignidad humana y los derechos fundamentales de la persona, inscribiéndose dicho accionar dentro de una práctica que la doctrina ha definido como "terrorismo de estado"*

Conforme tal afirmación, resultaría demostrado que el accionar de las fuerzas armadas durante el período 1975/1983 no respondió o excedió lo dispuesto por los decretos presidenciales emitidos en el año 1975 por María Estela Martínez de Perón, invocados por los encartados en su defensa (Declaración indagatoria de Valdiviezo, Trucco, Alais, Varela, Paz).-

Respecto a la existencia de una "guerra" (declaración indagatoria de Trucco, Alais, Varela y Paz) calificada como "no convencional" (declaración indagatoria de Ariel Orlando Valdiviezo) cabe considerar que, en consonancia con lo expresado en los párrafos anteriores, que durante el período comprendido entre los años 1975 y 1983 la situación existente en nuestro país no podría calificarse como "guerra", en tanto dicho concepto exige la existencia de fuerzas armadas oficiales y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas (Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra). La concurrencia de tales condiciones no fue acreditada en ningún momento por las defensas ni por los encartados.

Paralelamente, cabe referir a que, tampoco la declaración de estado de sitio habilita la realización de cualquier acción en perjuicio de la ciudadanía, ni menos aún garantiza la impunidad de acciones tipificadas, al momento de su comisión, como delitos (considerando que el Código Penal no fue derogado durante la vigencia del estado de sitio).-

En forma concordante con lo sostenido, el art. 23 de la C.N. establece que durante la suspensión excepcional de garantías constitucionales, no podrá el presidente de la República "*condenar por sí ni aplicar penas, su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la nación si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino"*.-

Por consiguiente, corresponde desestimar los argumentos relativos al contexto de guerra y/o a la existencia de órdenes constitucionales y/o a la vigencia de estado de sitio, como justificativo del accionar puesto en marcha por las Fuerzas Armadas y de seguridad contra la población civil, durante los años 1975/1983.

3.1. Delitos comunes y delitos contra la humanidad. Juzgamiento y sanción de los delitos contra la humanidad. Derecho interno y derecho internacional.-

Por "delitos comunes" se considera aquellas conductas que se encuentran tipificadas en normas que integran el ordenamiento penal objetivo material, componente del

derecho interno de cada Estado. Tales acciones delictivas se encuentran codificadas en el Código Penal de la Nación, en las leyes penales especiales o en las normas penales de leyes comunes, sancionados por el Congreso Nacional en virtud de las atribuciones concedidas por el art. 75 inc. 12 de la C.N.-

Paralelamente, los delitos denominados "de lesa humanidad" encuentran su tipificación en el ordenamiento penal internacional consuetudinario (ius cogens) o convencional (tratados, convenciones, pactos, etc.) y tipifican aquellas conductas que afectan indistintamente a todas personas en cuanto miembros de la comunidad internacional, transformando a sus perpetradores en enemigos del género humano (Cfr. Causa “Vargas Aignasse” citada).

En lo que hace a la persecución, juzgamiento y castigo de los delitos contra la humanidad se sostuvo que “*la comunidad internacional, a través de la Asamblea General de la O.N.U. de la que Argentina es Estado miembro desde el 28 de octubre de 1945 cuando ratificó la Carta de Naciones Unidas (art. 110.4 de la Carta) manifestó en forma concluyente su interés en el juzgamiento y sanción de los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, al convenir la creación del Tribunal Militar Internacional encargado del juicio y castigo de los principales criminales de guerra del Eje europeo, acuerdo que fuera firmado en Londres el 8 de agosto de 1945 junto con el Estatuto anexo al mismo (Tribunal y Estatuto de Nüremberg)”*.

USO OFICIAL

Con fecha 9 de diciembre de 1948, entendiendo consensuado que el genocidio es un delito de derecho internacional contrario al espíritu y fines de las Naciones Unidas y que el mundo civilizado condena, la Asamblea General de la ONU aprueba la "Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio", la cual es ratificada por nuestro país con fecha 9 de abril de 1956, mediante decreto ley 6286/56.

Paralelamente, con fecha 12 de agosto de 1949 se aprueban los Convenios de Ginebra (I, II, III, IV) todos los cuales contemplan en su art. 3, disposiciones básicas aplicables a todo conflicto armado, sea éste de carácter internacional o interno. Argentina ratifica los cuatro Convenios de Ginebra con fecha 18 de setiembre de 1956, asumiendo obviamente, los compromisos internacionales en ellos estipulados.

Es decir que, al correr del año 1960, la comunidad internacional se había manifestado en forma clara y unánime respecto a la necesidad de juzgamiento y sanción del delito de genocidio, de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.

Al tenor de las consideraciones precedentes, y como fuera motivo de jurisprudencia pacífica y concordante, podemos sostener que los crímenes de lesa humanidad constituyen delitos del derecho penal internacional que se caracterizan por su alto grado de lesividad, poniendo en peligro concreto de lesión o lesionando bienes indispensables para la preservación de la especie humana.

De acuerdo al derecho penal internacional (consuetudinario o convencional) se configura un delito de lesa humanidad cuando se ejecutan hechos delictivos comunes

(privación de libertad, torturas, violación, abusos, homicidio, etc.) en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.

Consecuentemente, perpetrar un solo comportamiento tipificado como delito por el derecho penal común puede constituir un crimen contra la humanidad si se ejecuta en un determinado contexto, es decir, si se ajusta al modelo de la comisión generalizada o sistemática.

De la descripción precedente, podemos distinguir un *elemento material*: los crímenes deben cometerse en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil; y un *elemento subjetivo*: el acusado debió haber sabido que sus actos se ajustaban a dicho patrón (se cometían en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil) (Cfr. Causa n° 45709 "Vargas Aignasse").

Analizando la presente causa a la luz de los conceptos vertidos, corresponde observar que en la misma se investigan hechos delictivos tipificados en nuestro ordenamiento interno (violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos, delitos sexuales, homicidio, asociación ilícita) perpetrados en el contexto de un ataque sistemático puesto en marcha desde el Estado, contra la población civil (de la que las víctimas formaban parte), consecuentemente corresponde calificar tales hechos como "crímenes contra la humanidad".-

Acorde a la perspectiva expuesta y considerando la tipificación de los delitos investigados como de lesa humanidad, cabe afirmar a su respecto que los mismos -conforme normas y principios del derecho internacional consuetudinario (ius cogens) vigentes en nuestro ordenamiento jurídico por expreso mandato de la Constitución Nacional, desde el año 1853 (ex art.. 102 y actual art.118)- no son pasibles de prescripción, amnistías, indultos e imponen límites a la cosa juzgada: Fallos "Urteaga" (Fallo 321:2767), "Hagelin" (Fallo 326:3268), "Videla" (Fallo 326:2805), "Arancibia Clavel" (Fallo 327:3312), "Simón Julio" (Fallo 328:2056), "Derecho Rene" (Fallo 330:3074), "Mazzeo" (Fallo 330:3248).-

4.- Cuestiones fácticas particulares.

4.1. Centro Clandestino de Detención en el Arsenal Miguel de Azcuénaga.

Que de conformidad con la descripción efectuada por el MPF al ampliar el requerimiento de instrucción, y la prueba incorporada en la presente causa, puede afirmare que el "Arsenal Miguel de Azcuénaga" es una unidad militar que se encuentra ubicada en las afueras de la ciudad de San Miguel de Tucumán, sobre ruta nacional nº 9, en la que, a la fecha de los hechos denunciados habría existido un centro clandestino de detención.

Según relatos concordantes, el centro clandestino referido habría comenzado a funcionar en los primeros meses del año 1976, y allí habrían sido alojadas personas secuestradas de sus domicilios, o en la vía pública, muchas de las cuales habrían sido alojadas primeramente en otros centros clandestinos de la provincia, en forma previa a ser trasladadas al Arsenal.-

Que conforme descripciones coincidentes de imputados en la causa, el Arsenal Miguel de Azcuénaga era un predio de aproximadamente 350 hectáreas que pertenecía originariamente a la Dirección de Fabricaciones Militares. Que cuando dicho predio habría pasado a depender del Ejército, se habría creado la "Compañía de Arsenales 5" (con funciones logísticas), la que habría ocupado geográficamente sólo 6 hectáreas y habría estado conformada por los depósitos y el edificio de la Jefatura. El resto del predio (terreno; barrio de oficiales y polvorines) habría pasado a defender de la V Brigada de Infantería. (Declaración y croquis de Hugo Enzo Soto, fs. 6517/6544; declaración de Pedro Caballero 5329/5354)

Que se encontraría demostrado que el acceso al centro clandestino se habría encontrado dispuesto a unos 2 Km. distante de la entrada principal de la unidad militar "Compañía de Arsenales 5". Que para su ingreso debía recorrerse una calle de tierra paralela a la ruta nacional Nº 9 (en dirección a Salta) y se accedía al campo clandestino a través de una tranquera. Que dicho lugar habría estado a cargo de la V Brigada de Infantería y custodiado por Gendarmería –Puesto de Guardia 1-. (Declaración de Juan Martín, fs. 151/153, Declaración de Hugo Enzo Soto fs. 6517/6544).

USO OFICIAL

Que de conformidad con el testimonio de sobrevivientes que estuvieron alojados en dicho centro clandestino, una vez transpuesta la tranquera por un camino de tierra se llegaba a la edificación donde habría funcionado el centro clandestino.

Dicha edificación estaba cercada por alambre tejido y en dicho ámbito habría existido una carpa perteneciente a la guardia de Gendarmería Nacional -Puesto de Guardia nº 2-. La edificación estaba dividida en dos sectores (galpones) uno de los cuales, en su sector derecho, contaba con cuatro espacios que habrían funcionado como baños, cocina y lugar para la guardia. Ambos galpones habrían estado dividido en dos y a su vez cada una de las divisiones subdividida en boxes de material y madera, donde eran alojados los detenidos en un número cercano al de 30 o 40 simultáneamente, quienes iban rotando. Los "box", "tabiques" o "celdas" habrían tenido una altura de aproximadamente 1,5 metros de lado y otro tanto de alto, y en cada uno de ellos habría sido ubicado uno de los/las detenidos/as, a quienes se le asignaba el número correspondiente a dicho "box". En un los cuatro ángulos del terreno cercado habrían existidos cuatro casillas prefabricadas que habrían funcionado como salas de interrogatorio y tortura. (Testimonios de Juan Martín –en particular croquis de fs. 228 expte. n° 1921/04-, Federico Alderete Soria, Alberto Argentino Augier, María Angélica Mazzamuto, entre otros).-

De la descripción efectuada, a la luz de la prueba obrante en la causa, puede concluirse que el centro clandestino que habría funcionado en el predio del Arsenal Miguel de Azcuénaga se configuraría como un centro de detención emblemático y funcionalmente determinante en el cumplimiento del plan de represión puesto en marcha en la provincia de Tucumán, habiendo funcionado como destino final del circuito represivo, característica ésta que fuera introducida por la querella y que exige un análisis particular.

*** Circuito represivo.**

Que a fs 1.869/1.966 obra agregada presentación efectuada por la Dra. Laura Figueroa, querellante en la presente causa, mediante la cual plantea la caracterización del centro clandestino Arsenal Miguel de Azcuénaga, como último eslabón de un circuito represivo constituido por todos los centros clandestinos que existieron en la provincia de Tucumán.

Específicamente, en la presentación referida, se afirma que en el centro clandestino Arsenal se ejecutaban las decisiones tomadas en cuanto a la suerte de los detenidos-desaparecidos, ya sea liberándolos, asesinándolos o trasladándolos al Penal de Villa Urquiza o a alguna otra unidad penitenciaria para su futura liberación.

Que conforme la estructura funcional detallada por la querella, de la prueba existente se corroborarían dos extremos fácticos: (i) numerosos detenidos que se encontraban alojados en otros centros clandestinos de la provincia habrían sido trasladados a Arsenal Miguel de Azcuénaga y, (ii) que este centro clandestino habría operado como lugar en el cual se ejecutaban las decisiones tomadas por las autoridades en cuanto a la suerte de los detenidos.

Que a entender de la querella la hipótesis expuesta se confirmaría no sólo por la corroboración de los traslados referidos sino además en el hecho de que, las personas que habrían sido llevadas directamente a Arsenales, también habrían conocido allí su destino final.

Que consecuentemente con lo afirmado, la querella sostiene que en el CCD que funcionó en el Arsenal Miguel de Azcuénaga se ejecutaban las ordenes tomadas por las autoridades represivas con relación a la situación particular de cada detenido, tanto de aquellos que habrían sido trasladados desde otros CCD, respondiendo a la existencia del circuito represivo en cuestión, como de aquellos que habrían sido llevados directamente a aquel CCD.

Tanto el MPF (en su presentación de fecha 13 de abril del año 2.009 obrante a fs. 4.564/4.603), como la querella representada por los letrados Emilio Guanini y Julia Vitar (en su presentación de fecha 8 de junio del año 2.009 obrante a fs. 4.760/4.797) receptan la hipótesis de la querella representada por la letrada Figueroa.

A fin de valorar la hipótesis introducida, se considera imprescindible efectuar una valoración de la prueba respecto al traslado de detenidos clandestinos y a cual fuera su destino.

Que en tal sentido se advierte que en 45 de los 98 casos que conforman la base fáctica del requerimiento fiscal y su ampliación, se constata el traslado de víctimas desde diferentes centros clandestinos que habrían funcionado en la provincia (Jefatura de Policía, El Reformatorio, El Motel, Ex Ingenio Nueva Baviera, Base Militar de Santa Lucía, base militar que funcionó en Caspichango, EUDEF, Brigada de Investigaciones) hacia el centro clandestino que habría operado en el Arsenal Miguel de Azcuénaga.

Que en dichos casos, luego de la reclusión de las víctimas en el centro clandestino que habría funcionado en Arsenales, no se constata prueba relativa a nuevos traslados, lo

que asentaría la hipótesis relativa a que, en dicho centro, se habrían ejecutado decisiones finales.

Paralelamente, respecto a los 53 casos donde surgiría que las víctimas habrían sido directamente trasladadas al centro clandestino que habría funcionado en Arsenales –es decir sin pasar previamente por otro CCD-, también se puede observar que allí se habría ejecutado su destino final, atento a que conforme la prueba emergente de tales causas, no se constatan traslados posteriores, a excepción de aquellas víctimas sobre las que se habría decidido su puesta a disposición del Poder Ejecutivo, lo que en habría implicado su "visibilización" mediante su traslado y reclusión en el Penal de Villa Urquiza o en otras unidades penitenciarias, para procederse con posterioridad a su liberación (en este sentido casos número 75, 76, 77, 78, 79, 84, y 85).

Consecuentemente con lo expuesto, cabe concluir que se encontraría corroborado en la presente causa la existencia de un circuito represivo conformado por diferentes centros clandestinos de detención que habrían funcionado en la provincia de Tucumán, entre los cuales el centro clandestino de detención del Arsenal Miguel de Azcuénaga habría funcionado como lugar final dentro del circuito, en tanto habría sido en dicho centro donde se habrían ejecutado las decisiones finales respecto de las víctimas detenidas clandestinamente.

Las conclusiones precedentes se encuentran respaldadas por el plexo probatorio incorporado en la presente causa, tanto respecto del contexto de producción de los hechos que se investigan (Prueba General), como de los hechos particulares conexos al presente universo procesal (Prueba específica), todo de conformidad al detalle que se expone a continuación:

(i) Prueba General:

* Presentación efectuada por la CONADEP por ante la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán en el año 1.984, agregada a fs. 17/36 de la causa "*Carloni de Campopiano, Adelaida Celina p/privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Campopiano Julio Cesar*". En dicha oportunidad se expone, con relación al CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga, que *"(…) En esta Compañía funcionó un centro clandestino de detención, al cual eran trasladados los detenidos ubicados en los otros campos de concentración (…)"*. Al momento de hacer referencia al CCD que habría operado en el ex Ingenio Nueva Baviera, se dice *"(…) Al igual que en los demás centros de detención la estadía de las detenidos en el lugar era por muy poco tiempo (…) Gran parte de ellos eran trasladados al Arsenal "Miguel de Azcuénaga" (…)"*.

En el mismo sentido que la presentación aludida anteriormente se pronuncia el auto de procesamiento dictado por este Juzgado Federal de Tucumán Nº 1 en fecha 29 de octubre del año 2.003 en contra de Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, agregado en copia certificada a fs. 2.809/2.834 de la presente causa.

***** Testimonio del ex gendarme Antonio Cruz LEG 4636 CONADEP (agregado a fs. 1.838/1853 de la presente causa). El testigo da cuenta de que un circuito represivo

USO OFICIAL

determinado en el sentido en análisis fue “Escuelita de Famaillá” – “El Motel” – “El reformatorio” – “Arsenal Miguel de Azcuénaga”.

* Testimonio de Juan Martín, en el cual el aludido da cuenta de haber sido trasladado por diversos CCD, como así también haber sido testigo del traslado de otros detenidos-desaparecidos, atento a que pudo ver a muchos de ellos en los distintos CCD en los cuales estuvo detenido. Este testigo dijo *“(…) había casos en que los detenidos eran trasladados a otros campos, requerido en vinculación con otro caso. Habitualmente, existían dos formas de realización de tales traslados. Una de ellas era en forma individual (…) Existía también otro tipo de traslado. Se realizaban en forma colectiva, en grupos de 5 a 10 personas (…) Las órdenes de traslado, tanto individuales como colectivos, provenían directamente del Comando de la V Brigada de Infantería (…)”* (declaración efectuada en la ciudad de Madrid, España, en fecha 30 de octubre del año 1.984).

Con relación a las personas que se encontraban detenidas en el ex Ingenio Nueva Baviera, el testigo dijo: *“(…) Los prisioneros alojados allí en esa fecha, fueron trasladados: unos al “L.R.D.” de la Compañía de Arsenales, otros a la Jefatura General de Policía (…)”* (declaración efectuada en la ciudad de Madrid, España, en fecha 30 de octubre del año 1.984).

* Presentación efectuada en fecha 1/02/06 por Osvaldo Humberto Pérez, en la cual textualmente dice: *“(…) De los secuestrados que se encontraban en el reformatorio recuerdo a (…). Junto a todos estos nos trasladaron luego de 40 días más o menos a otro Centro de exterminio llamado “El Arsenal”. Allí al poco tiempo mataron a casi todos (…)”*.

(ii) Prueba Específica:

Paralelamente a la prueba referida, los extremos antes mencionados analizados en el presente acápite, se pueden corroborar mediante la prueba específica que surge de los 98 casos que conforman la presente causa. A continuación se detallan los 45 hechos en los que hubo algún traslado en el sentido en análisis. Los 53 casos restantes, en los cuales las víctimas habrían sido llevadas directamente a Arsenal sin pasar previamente por otro CCD, también cuentan con prueba específica en ese sentido.

*Luis Alfonso Holmquist (CASO 1): Luis Alfonso Holmquist habría sido secuestrado y trasladado al CCD Jefatura de Policía, y con posterioridad trasladado al CCD llamado “Reformatorio” y finalmente habría sido trasladado al CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde fue visto y reconocido por Juan Martín. Al día de la fecha la víctima permanece desaparecida.

*Enrique Raúl Fernández (CASO 2): Enrique Raúl Fernández habría sido secuestrado y trasladado al CCD Jefatura de Policía. Atento la prueba que surge de la causa existen indicios suficientes de que luego habría sido trasladado al CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga, lugar en el cual habría sido asesinado.

*Ana Cristina Corral (CASO 3): La víctima habría sido secuestrada y llevada al CCD Jefatura de Policía de Tucumán, donde la habrían interrogado y torturado hasta el mes

de agosto de 1.976, registrándose su ingreso y su "disposición final", conforme surge de la prueba agregada en la causa. Posteriormente habría sido trasladada al CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde fue vista y reconocida por el ex gendarme Omar Torres. En dicho CCD habría sido asesinada.

*Oscar René Nieva y Ernestina Teresa Yackel (CASOS 7 y 8): Ambos habrían sido secuestrados y llevados al CCD "El Reformatorio". Yackel habría pasado como detenida clandestina en varios centros de detención, para luego haber sido llevada al CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga, lugar en el cual fue liberada.

*Pedro Rondoletto, María Cenador de Rondoletto, Silvia Margarita Rondoletto, Jorge Osvaldo Rondoletto y Azucena Bermejo de Rondoletto (CASOS 15, 16, 17, 18 y 19): Las cinco víctimas habrían sido trasladadas al CCD Jefatura de Policía de Tucumán, donde son vistos e identificados por Juan Martín como detenidos clandestinos en el mes de diciembre de 1976. Posteriormente habrían sido trasladados al CCD Arsenales Miguel de Azcuénaga,

Pedro Rondoletto y Jorge Osvaldo Rondoletto habrían sido fusilados en el CCD Arsenales.

Al día de hoy María Cenador de Rondoletto, Silvia Margarita Rondoletto y Azucena Bermejo de Rondoletto, como así también del hijo/a que esperaba ésta última (que habría nacido en cautiverio) continúan desaparecidos

*Rosario Argañaraz y Miguel Alberto Argañaraz (CASOS 21 y 22): Miguel Alberto y Rosario Argañaraz habrían sido llevados detenidos a un *lugar de detención que tenía piso con mosaicos*. El 9 de enero de 1977 habrían sido conducidos hasta la escuela 201 de Buena Vista, donde permanecieron detenidos. Rosario Argañaraz fue visto por última vez en marzo de 1977 en la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga, al día de hoy continúa desaparecido. Miguel Alberto habría sido liberado desde el CCD Arsenal.

*René Manuel Quinteros (CASO 26): René Quinteros habría sido secuestrado y trasladado en un primer momento al CCD Ex Ingenio Nueva Baviera. Posteriormente, el 7 de agosto de 1976, habría sido trasladado en un camión al CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga, para luego ser liberado desde dicho lugar.

*María Isabel Jiménez de Soldati (CASO 30): La víctima habría sido trasladada a la Jefatura de policía de Tucumán y de allí al CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga. Al día de la fecha continúa desaparecida.

*Ana María Sosa de Reynaga y Ángel Vicente Manfredi (CASOS 34 y 35): Primeramente las víctimas habrían sido llevadas a la Jefatura de Policía donde permanecieron detenidas, y luego habrían sido trasladadas al CCD de Arsenal Miguel de Azcuénaga. A la fecha ambos continúan desaparecidos.

*Damián Octavio Márquez (CASO 38): La víctima habría estado detenido en Jefatura de policía, y luego habría sido trasladado al Arsenal Miguel de Azcuénaga. Al día de la fecha continúa desaparecido.

USO OFICIAL

*Juan Faustino Rodríguez y Pedro Ricardo Rodríguez (CASOS 39 y 40): Ambos habrían sido trasladados primeramente al CCD Ex Ingenio Nueva Baviera, posiblemente hasta marzo de 1977. Posteriormente habrían sido llevados al CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga. Al día de la fecha ambas víctimas continúan desaparecidos.

*Nemesio Humberto Barrionuevo (CASO 44): Nemesio H. Barrionuevo habría sido trasladado al CCD Jefatura de Policía de Tucumán, registrándose su ingreso y su "disposición final" conforme surge de la prueba agregada en la causa. A principios de abril de 1976 habría sido trasladado al CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga. Al día de la fecha continúa desaparecido.

*Enrique Godoy (CASO 47): Habría sido secuestrado y trasladado a la Base militar del ex Ingenio Santa Lucía. Luego habría sido trasladado al CCD de Arsenal Miguel de Azcuénaga, lugar desde el cual habría sido liberado.

*Benigno Alberto Pereyra (CASO 49): Benigno Alberto Pereyra habría sido trasladado primeramente al CCD del Ex Ingenio Nueva Baviera, en Famaillá. Luego habría sido llevado al CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga. Al día de la fecha continúa desaparecido.

*Osvaldo José Gregorio Giribaldi (CASO 54): La víctima habría sido llevado primeramente al CCD llamado "El Reformatorio". Luego habría sido trasladado al CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga. Al día de la fecha permanece desaparecido.

*Julio Arnaldo Del Castillo (CASO 64): Una vez secuestrado habría sido trasladado al CCD de la Escuela Universitaria de Educación Física (EUDEF), y luego al CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga. Al día de la fecha permanece desaparecido.

*Enrique Alberto Sánchez (CASO 65): Presuntamente habría sido secuestrado y llevado al CCD de la Escuela de Educación Física de la UNT (EUDEF). Posteriormente habría sido trasladado al CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga. Al día de la fecha continúa desaparecido.

*Gustavo Adolfo Fochi (CASO 66): La víctima habría estado detenida en el CCD "El Reformatorio".

*Rodolfo Hugo Lerner (CASO 68): Primero lo habrían llevado al CCD Arsenal. En su condición de secuestrado, Lerner habría sido trasladado al CCD de Ex Ingenio Nueva Baviera, donde habría sido "exhibido" por Antonio Bussi ante los integrantes del estado mayor del Ejército y de otras fuerzas. Posteriormente habría sido llevado nuevamente al CCD Arsenal. Al día de la fecha permanece desaparecido.

*Santos Aurelio Chaparro (CASO 74): Entre enero y marzo de 1976 habría estado detenido en la Jefatura de Policía de Tucumán, en la Escuela de Educación Física (EUDEF) y en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, lugar desde el cual habría sido liberado.

*Gloria del Valle Iñiguez y Ramón Brizuela (CASOS 75 y 76): Ambos habrían sido trasladados a diversos CCD, para en última instancia terminar secuestrados en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Gloria del Valle Iñíguez habría sido trasladada al penal de

Villa Urquiza, y de ahí a Villa Devoto donde habría sido puesta a disposición del PEN. Ambos habrían sido liberados posteriormente.

*Alfredo Antonio Coronel, Ercilia Dolores Carabajal y Blanca Hoyos (CASOS 77, 78 y 79): Las víctimas habrían sido secuestradas y "alojadas" en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, para luego ser llevadas al penal de Villa Urquiza. Habrían sido trasladadas a distintas unidades penitenciarias de Buenos Aires, para luego ser liberados.

*Julio Ricardo Abad (CASO 80): En un primer momento habría sido trasladado a dependencias del Ingenio Nueva Baviera y posteriormente al Arsenal Miguel de Azcuénaga, lugar desde el cual habría sido asesinado.

*Víctor Fernando Alderete (CASO 82): Habría sido secuestrado y llevado a la Escuela de Educación Física de la UNT (EUDEF), y luego al Arsenal Miguel de Azcuénaga, lugar desde el cual habría sido liberado.

*Diana Elsa Fabio (CASO 84): La víctima habría sido secuestrada y conducida a la Jefatura de Policía, y luego habría sido llevada al CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga. En Arsenales habría tomado contacto con Ángel Manfredi y Ana María Sosa relatándole ésta última que ambos habían sido secuestrados en La Colonia del Ingenio Concepción y habían pasado por la Jefatura de Policía antes de ser llevados al Arsenal. Posteriormente habría sido trasladada al penal de Villa Urquiza, para luego ser liberada.

*Juan Manuel Quinteros (CASO 85): Habría sido trasladado a la base militar asentada en instalaciones del Ex Ingenio Santa Lucía y luego a la de Caspinchango. Posteriormente habría sido llevado al Arsenal Miguel de Azcuénaga. Luego habría sido llevado al Penal de Villa Urquiza y de Sierra Chica, para su posterior liberación.

*María Angélica Mazzamuto de Romero, Roberto Romero y Antonio Raúl Romero (CASOS 86, 87 y 88): Habrían sido llevados a un centro de detención que podría ser la Jefatura de Policía o la Brigada de Investigaciones. Posteriormente Antonio Romero habría sido llevado a otro centro de detención, para luego ser trasladado a Arsenal Miguel de Azcuénaga.

Las víctimas, luego de estar detenidas en el CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga, habrían sido liberadas.

*Julio Guillermo Suárez (CASO 89): La víctima habría sido secuestrado en dos oportunidades: En la primera habría estado detenido en la Base Militar de Santa Lucía, Jefatura de Policía o al Comando de la V Brigada de Infantería, y el Arsenal Miguel de Azcuénaga, para luego ser liberado. En la segunda oportunidad en que fue secuestrado habría sido llevado al centro clandestino del Ex Ingenio Nueva Baviera, y luego al CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga. Posteriormente fue liberado.

*Manuel Humberto Suárez (CASO 90): Manuel Humberto Sánchez habría sido secuestrado y trasladado a la Base Militar del Ex Ingenio Santa Lucía, y luego al CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga, y desde allí habría sido liberado. Habría sido secuestrado nuevamente siendo trasladado primero al Ex Ingenio Nueva Baviera, y desde allí a otro lugar que no habría podido reconocer. Posteriormente fue liberado.

USO OFICIAL

*María Candelaria Moyano (CASO 92): Habría sido secuestrada y llevada a la Base Militar de Santa Lucía, y luego al Arsenal Miguel de Azcuénaga. Posteriormente habría sido liberada.

*Ángel Adolfo Méndez Brander y María Margarita Laskowski (CASOS 94 y 95): Las víctimas habrían sido llevados, primeramente, al centro clandestino "Reformatorio". A fines de junio o julio de 1976, Laskowski y Méndez habrían sido trasladados al Arsenal Miguel de Azcuénaga. Posteriormente María Margarita Laskowski habría sido liberada. Al día de la fecha Ángel Adolfo Méndez Brander permanece desaparecido.

Que conforme se sostuviera ut supra, en los 53 casos restantes, que junto a los 45 a los que se acaba de hacer referencia conforman los hechos investigados en la presente causa, las víctimas habrían sido llevadas directamente luego de su secuestro, al CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga, lugar en el cual habrían sido asesinadas, o trasladadas a otro lugar para su asesinato, o trasladadas a alguna unidad penitenciaria para su futura liberación.

Consecuentemente, con el nivel de probabilidad que habilita esta etapa procesal, se considera que la hipótesis introducida por la querella representada por la letrada Figueroa, relativa a la existencia de un circuito de represión en el cual el centro clandestino Arsenales funcionaba como el lugar donde se definía el destino de las personas detenidas clandestinamente, se encuentra suficientemente corroborada, a la luz de la prueba particular y general descripta precedentemente.

4.2.- Intervención funcional del Destacamento de Inteligencia 142.

Según se desprende del Informe presentado por el Programa Verdad y Justicia dependiente del Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, e incorporado como prueba en la presente causa: "La subzona 32 pertenecía a la Zona III del 3er. Cuerpo del Ejercito, el cual tuvo jurisdicción sobre las provincias de Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Jujuy. En esta Subzona en el área 321 operaba el Destacamento de Inteligencia 142 con sede en Tucumán; a su cargo estaba la sección de Inteligencia Santiago del Estero, que a su vez dependía de la Brigada de Infantería V de Tucumán."

Paralelamente se indica en la investigación referida que "*la inteligencia militar es una actividad específica cumplida por unidades especiales como parte integrante de las Fuerzas Armadas. Su tarea es recoger información acerca del oponente para luego de ser procesada, lograr que las operaciones a realizar lo sean con éxito. Esa recolección de información es muy importante a efectos de proveer datos exactos racionales y recientes para hacer un uso eficiente de recursos. Generalmente la inteligencia militar abarca aspectos de actividad política, económica, diplomática y demográfica del considerado oponente" … "En la situación particular de la dictadura militar, el oponente era interno y el criterio utilizado como parte de la Doctrina de Seguridad Nacional se materializó sobre organizaciones políticas y sociales de nuestro país."*

Continúa el informe referido argumentando que "*ésta tarea fue especializada y requirió contar con personal entrenado táctica y psicológicamente, la cuál se realizaba de*

modo encubierto a fin de no ser detectada por los considerados oponentes; así las víctimas denunciaron sistemáticamente que quienes los detuvieron estaban camuflados, vestidos de civil; etc.”. Indica además el informe que los destacamentos de Inteligencia del Ejército se encontraban compuestos por oficiales, suboficiales, integrantes de las fuerzas de seguridad y personal civil de inteligencia, para luego manifestar que *“A los fines de la actuación de estos grupos operativos que integraban los destacamentos de inteligencia del Ejercito existía normativa disponible a la cuál se ajustaron los criterios de actuación de las mismas las cuales se denominaron directivas.”… “Las unidades de inteligencia habrían diseñado y controlado el accionar represivo, seleccionado blancos, determinando el orden de mérito de los detenidos, asignando destino, siguiendo un patrón operacional que está descrito en sus reglamentos.”*

Con relación a los reglamentos, especifica el informe que *“el Reglamento ROP-30 5 (Ex RCA-15-8) refería en su capitulo HIV Sección I Prisioneros de Guerra, Reunión y Evacuación aludiendo en su art. 4008 al registro, clasificación e interrogatorio de inteligencia para la selección de lo prisioneros; en el art. 4010 establece que el interrogatorio de Inteligencia para seleccionar a los prisioneros de guerra en la zona de combate será responsabilidad del oficial de inteligencia (GA/S2), en el art. 4012 se ordena que el personal de las unidades de inteligencia militar que opere en apoyo de las fuerzas, será responsable de conducir los interrogatorios de los prisioneros en la zona de combate. En la Sección 2 el art. 4015 refiere que las unidades (tropas de captura), desarmarán, separarán y registrarán a los prisioneros en busca de documentos de valor militar; en el art. 4017 dice los prisioneros de guerra serán separados tan pronto como sea posible especialmente por su jerarquía y serán entregados a la policía militar, en los lugares de reunión establecidos por las tropas capturantes.”*

Por otra parte informa que el Reglamento RC 16- 1 Inteligencia Táctica, define como “enemigo real”: “*al adversario concreto definido que posee capacidad para oponerse al logro de los propios objetivos, mediante el empleo de sus fuerzas”* y como “enemigo potencial”: “*cada persona, grupo humano, nación o bloque de naciones que sin constituir un enemigo real eventualmente puede oponerse al logro de los propios objetivos mediante el empleo de cualquier medio o procedimiento…”*, surgiendo de éste reglamento otros conceptos como los de “fuente”: “*toda persona cosa o actividad de la que emana información*”; y el de “Reunión de Información”: “*actividad de ejecución abierta o subrepticia que consiste en la explotación sistemática de las fuentes y la trasmisión de la información obtenida*”.

Todas las descripciones precedentes, habrían sido refrendadas en el Reglamento de Organización de Funciones de los Estados Mayores RC 3-1 que establece: *“…el Jefe de Inteligencia será el principal miembro del Estado Mayor, que tendrá la responsabilidad primaria sobre los aspectos relacionados con el enemigo…”*

Pone en relieve también el informe lo dispuesto mediante Reglamento RE 9-51 Instrucción de lucha contra elementos subversivos donde se incluyen definiciones y

USO OFICIAL

conceptos de “subversión” entendiendo por tal a *“la acción clandestina o abierta insidiosa o violenta que busca la alteración o la destrucción de los criterios morales y la forma de vida de un pueblo, con la finalidad de tomar el poder e imponer desde él una nueva forma basada en una escala de valores diferentes”*; y “contra subversión” definida como el *“conjunto de medidas acciones y operaciones que desarrollan las fuerzas legales en todos los campos de conducción nacional a través de sus elementos componentes (Instituciones, organismos del Estado Fuerzas de seguridad y Fuerzas Policiales), a fin de eliminar las causas y superar las situaciones que hubieren dado origen a la reacción subversiva y neutralizar o aniquilar el aparato político militar del enemigo*”.

De acuerdo con el informe y la documentación adjuntada por el Programa Verdad y Justicia, y cuyas principales conclusiones fueran relevadas en los párrafos precedentes, el accionar de las FFAA durante la dictadura militar se habría desarrollado en el contexto de un plan sistemático sustentado en órdenes y directivas precisas que fueron reglamentadas, entre las que corresponde mencionar las siguientes: RC 3-1 Organización y funcionamiento de los estados Mayores, RC 9-1 Operaciones contra elementos Subversivos, RC 9-51 Instrucción de Lucha contra Elementos Subversivos, RC 10-51 Instrucción para Operaciones de Seguridad, RC 16- 1 Inteligencia Táctica, RC 16-2 Inteligencia de Combate en la Unidad, RC-3 Inteligencia de Orden de Batalla, RC 16-5.

También al tenor del informe relevado, en todos estos reglamentos existía una expresa constancia de las directivas que debían cumplir oficiales y suboficiales aptos en inteligencia e interrogación, que habrían sido entrenados para esa tarea, es decir oficiales que, conforme sus fojas de servicio habrían adquirido el AEI (Aptitud Especial de Inteligencia).

El informe remarca que conforme surge de documentación existente en el Archivo Nacional de la Memoria (Fondo Documental de la CONADEP), en el área 321- cuya unidad responsable era el Regimiento 19 con sede en Tucumán- existieron mas de 30 centros clandestinos de detención y entre ellos el que funcionaba en la Compañía de Arsenales 5 Miguel de Azcuénaga.

En tal sentido, con referencia a los centros clandestinos, el informe cita declaraciones realizadas en la causa Suárez Mason (Causa 1170- Año 2005- Cuerpo XIV fs. 2770) por el general de Brigada José Montes quien fuera, en el año 1976, Comandante de la Subzona Capital Federal, dependiente del Primer Cuerpo del Ejército, quien afirmó que: *“1) Los llamados LRD eran lugares acondicionados para alojar en forma transitoria a los detenidos…2.- Los emplazamientos de los LRD eran mantenidos en total reserva por razones de seguridad. En cuanto al personal que los operaba, por doctrina esto era mantenido en un hermético secreto, para lo cual utilizaban nombres de encubrimiento. 3. La seguridad exterior de estos LRD era brindada por la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal Nacional en algunos casos… y por personal de gendarmería Nacional en otros… 4. Los LRD eran operados exclusivamente por personal técnico de inteligencia…”*

Por otro lado el informe menciona las declaraciones brindadas por el Gral. de Brigada Alberto Alfredo Valín (causa Suárez Mason N° 1170- Año 2005- Cuerpo 002 fs. 268/269) quien fuera Jefe del Batallón 601 y entre 1978779 Jefe de Inteligencia del estado mayor General del ejército, quien preguntado por la actuación del Batallón 601 en la lucha contra la subversión respondió: *"… que el Comandante en Jefe dispuso en octubre de 1975 una orden para la constitución de la organización de información de inteligencia en el país y todo lo atinente a su régimen , funcionamiento y manejo. Que esto se debió a que existía una falta en el aprovechamiento de la inteligencia, en la cantidad y calidad. Como consecuencia de dicha orden se creo un sistema completo que incluía a través de la jefatura 2 y el Batallón de Inteligencia 601 la creación de un organismo integrado por representantes de todos los servicios de inteligencia importantes del país, al cual todos los organismos debían apoyar y contribuir con sus medios y por similitud cada Comandante de zona, subzona del país debía constituir bajo su comando y en todos aquellos lugares de su jurisdicción en que hubiera comunidades informativas, pequeñas centrales de reunión de información que satisficieran sus necesidades y aportaran lo conveniente a la central de reunión de información , organizada por el batallón de inteligencia 601…"*

USO OFICIAL

De conformidad con la información relevada en el informe sobre el Destacamento 142, resultaría presuntamente demostrado entonces que el Comandante en Jefe del Ejército habría establecido un sistema de centralización de la información con relación a la tarea de inteligencia que se realizaba en el país, a través de canales reglamentados, y tales reglamentos establecían comunidades informativas, correspondientes a las áreas de control operacional, y también centrales de reunión que correspondían a las zonas y subzonas en que fue dividido el país. Se habría establecido así un "canal técnico" a través del cual se aportaba la información a la central de reunión de inteligencia de las máximas autoridades de las FFAA y de Seguridad, quienes eran las encargadas de elaborar y analizar la información.

A fs. 227 de la causa principal, Juan Martín declara que: *"… En cuanto a los secuestros, interrogatorios y torturas de los prisioneros, eran realizados por personal del Destacamento 142 de Inteligencia."* , y a fs. 235 agrega *"…Los interrogadores pertenecían al Destacamento 142 de Inteligencia. Eran oficiales y suboficiales del Ejército, y personal civil adscripto, que se desempeñaban como "agentes de inteligencia. Posteriormente, habiendo sido trasladado ya a la Jefatura, pude identificar a dos miembros del Destacamento. Uno que aparentemente era el Jefe, y que uno de sus apellidos era Ventura, y tenía el grado de Capitán. Otro, del mismo grado, a quien había visto ya en Nueva Baviera, era llamado allí "Capitán Mur", aunque en Jefatura, ya vestido de civil, oí mencionar como el capitán Medina."*

Luego de cotejar la investigación desarrollada por el Programa Verdad y Justicia respecto del funcionamiento del Destacamento 142, con los testimonios obrantes en la presente megacausa, cabe colegir que a partir de la información recolectada por los organismos de inteligencia, se procedía a su análisis por los Jefes a cargo y luego se

decidían los operativos de secuestros, cumpliendo así los objetivos establecidos en los reglamentos militares de persecución y aniquilamiento.

En este circuito de inteligencia, una persona ("fuente de información") cuya adscripción a una organización político-militar o a alguno de sus aliados permanentes o circunstanciales se sospechaba, era llevada a un lugar de reunión de detenidos a fin de ser interrogada ("reunión de información mediante interrogatorio: explotación de la fuente"). La información que emanaba de esta actividad era interpretada por personal idóneo y comunicada al nivel de comando para volver a operar sobre otras personas, previa detección, identificación y fijación de la nueva fuente.

Durante la vigencia del plan de represión, todo Cuerpo de Ejército en cuanto Comando de Zona de Seguridad, tuvo bajo su dependencia al menos un Destacamento de Inteligencia (así la Zona I el Destacamento 101, la Zona II el 121, la Zona III el 142 y la Zona V el 181).

De la descripción técnico reglamentaria y las consecuencias relatadas por quienes sobrevivieron al circuito represivo, parecería que quienes estaban capacitados para llevar a cabo la crucial tarea de extracción de la información, interpretación de la misma, comunicación de sus resultados a los niveles operacionales y resguardo de la misma, pertenecieron al Destacamento 142.-

Conforme lo expuesto quedaría demostrado, con el nivel de probabilidad que habilita esta etapa procesal, que al momento de los hechos habría existido una estrecha relación entre el personal de los destacamentos de inteligencia y determinados centros clandestinos de detención, siendo aquellos los encargados de "explotar" las "fuentes de información" detenidas en los centros.-

Sólo quienes integraban esas estructuras de inteligencia podían extraer el "máximo provecho" a la información que generaban, inmediatamente a través del canal de comando y mediatamente usando el canal técnico de inteligencia. En este último caso, con auxilio de la red nacional de inteligencia conformada por todos los destacamentos, las jefaturas y el Batallón de Inteligencia 601 una "fuente" fijada en una jurisdicción lejana podía llegar a ser aprovechada por aquella que originalmente la necesitaba.-

Cabe referir finalmente a que de varios testimonios prestados en la presente causa, dan cuenta de cómo en los hechos las directivas mencionadas se cumplían y como el circuito de "secuestro-interrogatorio-extracción de la información-secuestro" funcionaba.

Así, Osvaldo Pérez al prestar declaración testimonial, menciona haber visto en ese lugar, entre muchas otras personas, a un par de detenidos llamados Fortunato Leandro Fote y José Luis Maldonado, lo que fuera corroborado por el testimonio de Juan Martín Martín. Tanto Fote como Maldonado habrían sido detenidos en Buenos Aires y luego trasladados al centro clandestino que funcionaba en el Arsenal. Tal evidencia demostraría que los organismos de inteligencia que funcionaban en zonas de Buenos Aires sabían que en Tucumán estas personas eran buscadas, lo que hace presumir la existencia de una red nacional de información ("canal técnico"). El traslado de detenido desde otras provincias

hacia Tucumán, se corrobora en varios de los hechos investigados en autos, como es el caso del traslado de los hermanos Cantos desde Santiago del Estero hasta Tucumán.-

Los oficiales a cargo del Destacamento 142 habrían tenido además, con relación a Gendarmería Nacional, una relación de mando. Los gendarmes obedecían las órdenes de quienes aparecen mencionados en los relatos de sobrevivientes y testigos como "interrogadores" o "personal del ejército". Sobre el particular, un sobreviviente señala que los gendarmes se referían a ellos como "los jefes" (Testimonio de Julio Guillermo Suárez en la causa Suárez Julio Guillermo s/ Privación Ilegitima de la Libertad y otros delitos expte. 256/08).

A la luz de la prueba relevada precedentemente, puede presumirse que habría existido una relación de dependencia técnica entre las autoridades del Destacamento 142 y el centro clandestino montado en el Arsenal Miguel de Azcuénaga de Tucumán, en tanto el eje de la tarea que se habría llevado a cabo en dicho centro (interrogatorios, reuniones de información, organización de los datos, detección, identificación y fijación, etc.) no podría haberse desarrollado sin la intervención de aquella estructura técnica que tenía el conocimiento, los medios, el bagaje documental y las relaciones con estructuras similares en el resto del país ("canal técnico" mediante).-

Consecuentemente cabe concluir que existiría prueba suficiente para presumir que el Destacamento de Inteligencia 142 habría intervenido en el plan de represión puesto en marcha por el Ejército entre 1975/1983 en la provincia de Tucumán y, en particular, que dicho organismo habría tenido una función de gran relevancia en el centro clandestino que habría funcionado en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, habiendo asumido la tarea de "explotar" las "fuentes de información" es decir interrogar a las personas detenidas clandestinamente hasta la obtención de nuevos datos que permitan identificar nuevos enemigos, sobre quienes retomar el circuito "secuestro-interrogatorio-extracción de la información-secuestro".-

2.3. Intervención funcional del Regimiento 19

En el marco del Operativo Independencia, la Comandancia del III Cuerpo del Ejército a través de la Vª Brigada de Infantería de Tucumán, impuso un despliegue permanente de unidades militares en localidades del sur de la provincia, en las donde se presumía la existencia de una fuerte actividad de organizaciones guerrilleras.

Tales fuerzas de tareas establecieron "Bases" en distintas localidades del interior de la provincia, incidiendo en las actividades de las comunidades, y permaneciendo en actividad hasta que las autoridades militares dieron por culminado el llamado "Operativo Independencia" en el año 1978.

Conforme la prueba recolectada en la causa, tres bases militares habrían tenido estrecha relación con el plan de represión y, específicamente, con el centro clandestino que habría funcionado en el Arsenal, ellas fueron: (i) la Base de Santa Lucía, ubicada en el interior del Departamento Monteros, en los predios e instalaciones del Ex Ingenio azucarero Santa Lucia; (ii) la Base de Caspinchango, también en el interior Departamento

USO OFICIAL

Monteros; y (iii) la Base de Nueva Baviera (ésta habría entrado en actividad a partir de 1976, luego del desmantelamiento del centro clandestino que habría funcionado en la Escuela Diego de Rojas de Famaillá) establecida en dependencias de otro ex ingenio azucarero del mismo nombre a unos 2 Km. al este de la ciudad de Famaillá.-

Dichos asentamientos habrían estado a cargo del Regimiento 19 de Infantería de Tucumán, reforzado sólo en el año 1975 por elementos del Regimiento de Infantería de Monte 28 de Tartagal. A partir de 1976 y hasta 1978, el Regimiento 19 habría controlado estas bases con la colaboración de fuerzas policiales y de Gendarmería Nacional.

Con relación a la estructuración de las Bases, afirma el encartado Camilo Colotti que *durante el Operativo Independencia operaron de 4 a 6 fuerzas de tareas, que cada fuerza de tarea contaba con dos equipos de combate (un equipo de tiradores y uno de refuerzos), que el Regimiento 19 para operar en el monte formó una fuerza de tarea que se llamó "Teniente Berdina" que dependía directamente del Comando táctico de la V Brigada: Respecto a los lugares de reunión de detenidos (Nueva Baviera y Arsenales) éstos no tenían nada que ver con la fuerza de tarea "Berdina". Que el Gral. Bussi era quien controlaba personalmente que los detenidos fueran inmediatamente trasladados al puesto de Comando de la V Brigada* (fs. 5400/5408).

Sobre la fuerza de tareas "Berdina", el encartado Ariel Orlando Valdiviezo informa al prestar declaración indagatoria *que tenía dos equipos de combate, uno en Santa Lucía y otro en Caspinchango. Que respecto a la base en Caspinchango, esta realizaba operaciones tácticas e inteligencia para el combate, en particular se sacaba información de la población y en el terreno a efectos operativos. Que con relación a los detenidos, éstos eran mandados inmediatamente ante la superioridad* (fs. 5475/5492).

Respecto a la función de las bases militares en el interior de la provincia, además de la realización de acciones "antisubversión", habría incluido el control permanente sobre la población de los alrededores: los vecinos eran rigurosamente censados, constantemente controlados, se realizaban continuos allanamientos en sus viviendas, se debía avisar la entrada o salida de familiares o conocidos, etc. Puede afirmarse que tales bases militares habrían tenido un dominio completo sobre todos los acontecimientos de esos poblados.

Tal incidencia sobre la población se encontraría corroborada por la descripción efectuada por el encartado Miguel Alfredo Manuel Paz quien al prestar declaración indagatoria afirma que "*nosotros concurríamos a las casas de las personas en Santa Lucia para contenerlas mantenerlas tranquilas e informarles que no íbamos contra la población, que no pongan en peligro a sus hijos que no anden por los senderos ya que una patrulla militar los podía detener. Quiero aclarar que no era exclusiva la búsqueda del guerrillero sino negarle la entrada al pueblo al guerrillero mediante justamente la acción cívica reuniendo a la población en el club y visitando casa por casa esas visitas a veces las hacía yo, no derivaba a otro"* (fs. 7578/7589).

Paralelamente, los Jefes de las Bases militares habrían tenido facultades para proceder a la detención de personas ante cualquier sospecha de "colaborar" con los

movimientos armados que eventualmente se hallaban operando en las cercanías. (Informes de la Comisión Bicameral de la Legislatura de Tucumán e Informe CONADEP)

La detención de personas a efectos de su interrogatorio y, posterior derivación a Lugares de reunión de detenidos (conforme la jerga militar) a efectos de obtener mayor información, habría sido corroborada por Miguel Alfredo Manuel Paz quien declara que "*Cuando la fuerza de tarea tenía prisioneros teníamos la orden expresa de tenerlos 24 hs., porque no pueden operar las fuerzas con lastre atrás, o sea se hacía inteligencia con el prisionero, armas, equipo, como estaban físicamente si tenían plata o no, inmediatamente cumplido ese lapso comunicábamos por parte que había un detenido al puesto de Comando de la Zona sur de Famailla, pues yo no tenía comunicación directa con San Miguel de Tucumán, y en el lapso de 24 hs. se enviaba un camión a Famailla y no sé a donde derivaban de allí al prisionero, pero todo era muy dinámico"* (fs. 7578/7589).

Consecuentemente con lo expuesto, de la prueba obrante en la causa respecto a las funciones del Regimiento 19 –a través de sus bases militares y fuerzas de tareas-, resultaría que en sus ámbitos de incidencia se habría procedido a la detención de personas y a su interrogatorio y, en el supuesto de estimarse conveniente, las "fuentes de información" habrían sido trasladadas a centros clandestinos como el que habría funcionado en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, a fin de agotar la fuente.-

Algunas víctimas sobrevivientes, que fueron secuestradas en el interior de la provincia y trasladadas al centro clandestino que habría funcionado en el Arsenal, confirman en sus testimonios el modus operandi de las unidades del Regimiento 19 de Infantería.-

Paralelamente la descripción de tal metodología represiva se encontraría respaldada por los testimonios de ex conscriptos del Ejército que revistaron en distintas compañías y bases militares y asimismo en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, como es el caso de Juan Antonio Araya, quien cumpliera con el servicio militar obligatorio en el Regimiento 19 de Infantería a partir de la puesta en marcha del Operativo Independencia y durante el año 1976 en la denominada "Zona de Operaciones".

Araya describe que las acciones de detención de las víctimas eran llevadas adelante por los Jefes de Compañía y dice *"…Al llegar a un pueblo se detuvieron frente a una comisaría, de donde salieron tres hombres que vestían uniformes policiales hablaron con el jefe del grupo el Tte 1º Pérez Cometo, el cual también era Jefe de la compañía en la que revistaba (…). Luego de charlar entre ellos, el Tte Pérez Cometo, les comunicó que se encontraban en la localidad de La Florida, departamento Cruz Alta, y mostrando una lista que le habían dado los policías, le dijo que tenían que efectuar procedimientos en varias casas de la zona y llevarse a 9 personas"*. (Testimonio ante Comisión Bicameral de Juan Antonio Araya en causa "Araya Juan Antonio S/ denuncia por Secuestro y Desaparición de Ramón Benito Araya" Expte. Nº 400.509/07).-

En igual sentido señala el ex conscripto Domingo Antonio Gerez que: "*los militares salían de noche a realizar operativos de secuestros, en esa oportunidad el*

USO OFICIAL

exponente era chofer de los militares que iban a los operativos… estuvo dieciséis meses en la Zona de Operaciones. A los operativos iban siempre los jefes de compañía como el Teniente 1° Valdivieso, el Teniente Onetto, el Suboficial o sargento Zurita y que antes de ir a realizar los secuestros, tomaban whisky de tal manera que iban alcoholizados. Al llegar a un domicilio rompían las puertas, entraban, sacaban a la gente y la llevaban detenida a la Base de Caspinchango". (Declaración testimonial de Domingo Antonio Jerez a fs. 169/170 de causa "Actuaciones complementarias de Quinteros René Manuel s/ Su denuncia por privación ilegítima de la libertad, torturas y otros delitos" Expte. Nº 400.309/06, y artículo periodístico "Yo vi a Bussi matar prisioneros a garrotazos" a fs. 2168 /2173 de la presente causa, Expte. nº 443/84)

Con relación al traslado de detenidos desde las bases militares al centro clandestino que habría funcionado en el Arsenal, el ex gendarme Antonio Cruz relata que en varias oportunidades fue comisionado junto a otros gendarmes a buscar personas en el centro clandestino del Ex Ingenio Nueva Baviera, lo que se hacía en un camión Unimog de Agua y Energía, o bien en una ambulancia civil, así como otros vehículos "operativos" provistos por la V Brigada (Testimonio de Antonio Cruz ante Conadep a fs. 128/134 y 1.838/1.853, Expte. Nº 443/84).

Paralelamente corren agregados en la causa testimonios de personas que afirman haber visto a personal del Regimiento 19 en el centro clandestino que habría funcionado en el Arsenal. Así, el ex conscripto Francisco Orlando Heredia afirma haber identificado, durante el tiempo en que cumplió funciones en la Compañía de Arsenales 5, al teniente 1° Ariel Rolando Valdiviezo de la Cía. B del Regimiento 19 de Infantería, como una de los oficiales que asiduamente estaba en ese lugar y también en Nueva Baviera, describiéndolo como una persona de quien se decía que *"estaba entrenado para matar"* (Testimonio en causa: "Heredia Francisco Orlando s/su denuncia por privación ilegitima de la libertad y otros delitos" Expte. nº 631/08).

En el mismo sentido Nora Alicia Cajal identifica como uno de los represores del centro clandestino Arsenal, durante el año 1976, al entonces Mayor Augusto Leonardo Neme, a pesar de que para dicha fecha el mismo revistaba como oficial del Estado Mayor del puesto táctico de Comando de la Vª Brigada de Infantería en el sur de la provincia de Tucumán, dentro del Regimiento 19 de Infantería.-

Por consiguiente, de la prueba relevada precedentemente, resultaría presuntamente demostrada la existencia de una vinculación estrecha entre los grupos que operaban en la "Zona de Operaciones" pertenecientes al Regimiento 19 de Infantería y la dinámica represiva montada en torno al Arsenal Miguel de Azcuénaga.

2.4. Intervención funcional de Gendarmería Nacional.-

Conforme la Ley 19349 vigente al momento de los hechos, Gendarmería Nacional era definida como una *"fuerza de seguridad militarizada, dependiente del Comando en Jefe del Ejército* (art. 1), contando entre sus funciones con la facultad de *"intervenir para reprimir la alteración del orden público, o cuando éste se vea subvertido, o cuya magnitud*

sobrepase las posibilidades de control de las fuerzas policiales, o cuando adquiera las características de guerrilla, en cualesquiera de sus formas" (art. 3 inc.i), para ello en caso de *"conmoción interior o de guerra el Comando en Jefe del Ejército podrá asignar a Jefaturas y Unidades de Gendarmería Nacional al Comando Militar correspondiente según su zona de actuación"*.-

Los "Destacamentos Móviles" de Gendarmería Nacional fueron creados con el propósito de prevenir disturbios o motines en las principales ciudades argentinas. Al menos dos de estas unidades habrían sido asignadas entre 1976/1977 al Comando de la Va Brigada de Infantería de Tucumán, revistando funciones en centros clandestinos que habrían funcionado en la provincia, principalmente en el centro clandestino que habría funcionado en el Arsenal, ellos fueron: *el DM1 de Campo de Mayo (Buenos Aires)* y el *DM2 de Jesús María (Córdoba)*. Estos grupos fueron integrados por personal destinado a diversos puntos del país.

Conforme el testimonio de Juan Martín, los miembros de los Destacamentos Móviles que cumplían funciones en el centro clandestino Arsenal eran *"grupos especializados en la lucha 'antisubversiva' en las zonas rurales, que recibieron entrenamiento en Campo de Mayo y Jesús María (Córdoba) ... se especializó personal en la represión política"*.

Por otra parte el ex gendarme Cruz declara que, previo cumplir tareas en Tucumán, fueron efectivamente entrenados para combatir la guerrilla y que se les inculcaba que *"todos los guerrilleros eran enemigos"*.

Tanto el ex gendarme Cruz como el ex gendarme Torres, coinciden en sus declaraciones al indicar que, luego de pasar por un proceso de selección conducido por los comandantes de la fuerza, un número de alrededor cuarenta efectivos era destinado al centro clandestino Arsenal por periodos de 45 días, luego de los cuales eran relevados por un grupo similar perteneciente a otros destacamentos móviles. Cada contingente se dividía en tres grupos para hacer guardias de "veinticuatro a cuarenta y ocho horas" en el Arsenal.

Paralelamente de los testimonios obrantes en la causa quedó establecido que el principal rol de Gendarmería en el plan de represión, fue el traslado y custodia de detenidos y la seguridad de centros clandestinos de detención, actividades cumplidas bajo órdenes del Ejército, lo que se encuentra además corroborado mediante el informe emitido por la CONADEP (Informe "Nunca Más").

El rol de vigilancia, seguridad y control interno por parte de Gendarmería en Arsenales es descripto prácticamente sin excepciones de los testimonios de los sobrevivientes (quienes estaban en contacto permanente con gendarmes en esta función) y es confirmado y detallado en las declaraciones de los ex gendarmes Antonio Cruz y Omar Eduardo Torres, y al momento de prestar declaración indagatoria en la presente causa, también por las afirmaciones del encartado Hugo Enzo Soto.

Así, Alberto Argentino Augier relata que *"el personal de vigilancia estaba constituido por dos grupos, uno los de la guardia interna, formada por cuatro gendarmes,*

USO OFICIAL

uno de ellos jefe de guardia, que usaban látigos y armas cortas (pistolas); el otro, la guardia externa a cargo de los alambrados y la entrada y salida de vehículos, portaban armas largas y tenían perros". También Alejandro Federico Alderete Soria señala que *"los guardias pertenecían todos a Gendarmería y eran de otras provincias, como ser de Chaco, Entre Ríos o Corrientes, que era personal joven"*.

Todos los testimonios de sobrevivientes serían contestes en este punto: Gendarmería era la fuerza encargada de la vigilancia del centro clandestino que habría funcionado en el Arsenal Miguel de Azcuénaga y en tal rol habría tenido contacto directo con los prisioneros. En el testimonio de Omar Torres el personal de Gendarmería concurría solamente para seguridad de los prisioneros y quienes hacían los allanamientos eran del Ejército y también personal de la policía provincial y de la federal.

Por otra parte Antonio Cruz hace referencia a la función de traslado de detenidos que le competía a su fuerza, particularmente desde el Ex Ingenio Nueva Baviera hacia el Arsenal. Indica además que la función de seguridad era particularmente severa y estricta en el centro clandestino Arsenal, con un régimen diferenciado con relación a los demás centros clandestinos de la provincia.

Conforme el testimonio del testigo Juan Martín, Gendarmería tenía un dominio de los prisioneros que le permitía realizar otros hechos que agravaban las condiciones en que se encontraban los detenidos, refiere en este sentido a que *"era notorio que la guardia tenía cierta libertad de movimientos para que sus integrantes actuaran personalmente sobre los prisioneros (…) lo que daba lugar a arbitrariedades (…) como por ejemplo, en palizas a los prisioneros, realización de ejercicios físicos violentos, así como algunas violaciones cometidas contra las prisioneras"*.

Además de la tarea de seguridad interna y perimetral, Gendarmería habría tenido un comprobado protagonismo en el desarrollo de otras acciones cruciales; en tal sentido surgen testimonios sobre la participación de algunos de sus efectivos en las torturas e interrogatorios de los detenidos, llevadas adelante conjuntamente con personal militar y civil del Destacamento 142 de Inteligencia del Ejército.

En este sentido manifiesta el testigo Torres que eran gendarmes quienes cumplían con la función específica de organizar y ejecutar el ocultamiento de los cadáveres de quienes eran asesinados en las dependencias del centro clandestino, siguiendo órdenes de personal militar. Dicha tarea, habría resultado fundamental a fin de garantizar impunidad para los ejecutores, lo que se encuentra corroborado en la dificultad que existe a la fecha para determinar el destino final de los cuerpos de las víctimas desaparecidas (fs. 1493/1507).

Paralelamente, el testigo Osvaldo Pérez sitúa a algunos oficiales de la gendarmería (segundo comandante Sabbadini), como integrantes del grupo que denomina "IPG" (interrogadores de prisioneros de guerra), que estaba al mando del entonces Jefe del Destacamento 142 Eugenio González Breard (f) y de su "segundo", Capitán Varela o "Vargas", (a) "Naso". (Declaración de fs. 4005/4010 Expte 443/84)

También afirma Pérez que entre los miembros de los distintos grupos de tareas o patotas que operaban dentro del centro clandestino, personal subalterno especial de Gendarmería Nacional tomaba parte de las sesiones de torturas. (Declaración de fs. 4005/4010 Expte. 443/84)

El ex gendarme Torres por su parte hace mención de estas otras tareas de Gendarmería y menciona que el Segundo Comandante Carlos Alberto Lafuente era el enlace con la Va. Brigada de Infantería en Tucumán, que este oficial de enlace era quien coordinaba todos los centros clandestinos en la provincia de Tucumán y que participaba de las ejecuciones en el centro clandestino Arsenal (fs. 1485/1486 Expte 443/84). Tal afirmación es compartida por el testigo Osvaldo Pérez quien también identifica como parte del denominado "Consejo" (órgano compuesto por jefes de las distintas fuerzas que funcionaba en el Comando de la Quinta Brigada) al Jefe de Gendarmería. Conforme su relato, éste órgano tomaba las decisiones acerca del destino final de los detenidos, significando en la mayoría de los casos el exterminio físico de los mismos (fs. 4005/4010)

Al respecto cabe considerar lo afirmado por el imputado Roberto Heriberto Albornoz en la audiencia oral de la causa "Jefatura de Policía" (Expte 795/04), quien habló de la llamada "Comunidad informativa" que presidía el 2° Comandante de la Va. Brigada de Infantería de Tucumán la cual estaba conformada, entre otras autoridades, por comandantes de Gendarmería Nacional.-

A la luz de los antecedentes relevados, este magistrado se encuentra en condiciones de concluir que existiría un seria presunción respecto a la intervención de Gendarmería Nacional en el plan de represión puesto en marcha por el Ejército entre 1975/1983 en la provincia de Tucumán y, en particular, que dicha fuerza de seguridad habría tenido una función relevante en el centro clandestino que habría funcionado en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, habiendo asumido la tarea de vigilancia y el control de las instalaciones del centro y el de las personas allí detenidas, asegurando su permanencia allí y su sometimiento a condiciones de detención particularmente vejatorias.-

2.5. Intervención funcional de la Compañía de Arsenal 5

Conforme surge de declaraciones concordantes de los imputados Caballero y Soto (quienes cumplieron función de Jefe de la Compañía Arsenales 5), dentro del Arsenal Miguel de Azcuénaga funcionaba la Compañía de Arsenales 5, la cual dependía de la V Brigada de Infantería y tenía una función móvil –no territorial-, centrada en el mantenimiento y abastecimiento de armas y municiones, consecuentemente con lo cual su Director debía tener grado de Coronel y ser Ingeniero Militar (Declaración de Pedro Caballero)

Hugo Enzo Soto afirma sobre el particular que la Compañía de Arsenales 5 contaba, aproximadamente con 4 (cuatro) oficiales, 40 (cuarenta) suboficiales, 50 (cincuenta) civiles y 100 (cien) soldados.

Que la Compañía cumplía funciones de personal, de operaciones y de logística. La función de personal estaba a cargo del oficial más moderno, y consistía en la tarea de

USO OFICIAL

incorporación de soldados, tareas administrativas de legajos de personal de oficiales y suboficiales y del personal civil; y tareas de finanzas. La función de operaciones implicaba la instrucción de los soldados en la faz militar y también como operadores logísticos, era responsable de las planificaciones de todas las actividades incluida la de seguridad del cuartel. Finalmente, la función logística la cumplía un Capitán Ingeniero Militar responsable de las actividades de abastecimiento en el concepto de adquisición de bienes, partes, componentes y repuestos; la recepción de los mismos y su control de calidad, la ubicación en los depósitos y la identificación de los mismos, con tarjetas identificatorias.

La gran cantidad de actividades que se cumplían en la Compañía Arsenales 5, eran dirigidas por miembros del staff militar y ejecutadas por suboficiales y agentes civiles, en su 90% técnicos, quienes respondían al Jefe de la Subunidad (Declaración de Hugo Soto de fs 6517/6544)

Respecto al rol de los Jefes del Arsenal 5, Julio Omar Luna refiere a que*"... vio en una ocasión en el taller o sección talabartería que funcionaba en Arsenales se confeccionaban bolsas anilladas de color verde para guardar cadáveres de personas que los militares habían matado. Cada bolsa tenía la capacidad para contener tres cuerpos, estas bolsas después las arrojaban al cementerio del Norte para su posterior cremación… que esto lo sabe por comentarios de un oficial que trabajaba dentro del Arsenal y que le explicó la función que tenían las bolsas., mientras él veía como las cortaban y armaban. Que en ese tiempo el jefe de Arsenales era el Mayor Soto y el ordenaba la fabricación de las bolsas... Que el Mayor Soto iba habitualmente a su casa los viernes y sábados por la noche porque era muy amigo de su padre. Que su padre y el Mayor Soto siempre hablaban de la cárcel que había en Arsenal Miguel de Azcuénaga la que quedaba en dirección Noroeste del predio militar, y que le consta que allí había personas detenidas que eran torturadas y asesinadas luego… Que en Arsenales había un galpón el cual vio personalmente que allí se exponían diferentes clases de materiales indumentaria y vehículos de personas desaparecidas y asesinadas. En unos tablones colocaban los uniformes de combate, armas, calzado, etc. Que se incautaban durante los allanamientos que hacían los militares. Estos elementos estaban en exhibición para cuando iban de inspección los altos mandos del ejército como el Gral Bussi o el Gral. Menéndez…"* (Declaración de fecha 07/04/2009 a fs. 4604 a 4606, Expte. 443/84).

Paralelamente, en la descripción del centro clandestino de detención que efectúa Juan Martín refiere a que *"... Avanzando desde Tucumán en dirección norte, el ingreso al campo se producía aprovechando el acceso al portón de la Compañía de Arsenales…Aproximadamente en el centro del cuadrado había dos viejos polvorines, separados entre sí por unos 10 metros de distancia: se trataba de dos construcciones de mampostería cuyas superficies interiores paredes, techos, pisos estaban recubiertas de brea. La dimensión aproximada de cada polvorín era de 20 metros de largo por 5 de ancho, y 3 de alto. En estas construcciones estábamos alojados los prisioneros, sin distinción de sexos, en compartimientos estrechos: 1,20 metros de algo por 1,50 de*

profundidad, y 1 metro de ancho. En el polvorín ubicado más al norte, estos tabiques eran de madera. En el otro de mampostería. Las estrechas dimensiones no eran arbitrarias: fueron diseñadas así para controlar a los prisioneros en todo momento, ya estuvieran acostados o de pie. En la puerta de cada polvorín había en forma continua un gendarme de guardia, quien además recorría el pasillo interior (ver plano) cada cuarto de hora. En cada polvorín había capacidad para 40 detenidos (20 por lado). Es decir, la capacidad de alojamiento del "L.R.D." era de 80 personas."

Sobre la distribución geográfica del Arsenal Miguel de Azcuénaga, el imputado Hugo Enzo Soto al momento de prestar declaración indagatoria confeccionó un croquis sobre una copia del sector extraída del Google Map, la cual corre a fs. 6544.

Al tenor de los antecedentes expuestos, resultaría posible que la Compañía de Arsenales 5 haya mantenido la función técnica y operativa, concentrada en el abastecimiento y reparación de armamentos, adiestramiento de soldados que cumplían servicio militar obligatorio y la substanciación de tareas administrativas vinculadas con el personal. Que conforme tal descripción se presume que, dentro de la estructura funcional del Ejército, la Compañía Arsenales 5 podría no haber intervenido directa o mediatamente en la comisión de los delitos perpetrados al amparo del plan de represión.

USO OFICIAL

No obstante, parecería inverosímil que los responsables de la Compañía Arsenales 5 hayan desconocido la existencia del centro clandestino que se habilitó en el predio del Arsenal, por lo que existiría una presunción respecto a que los Jefes a cargo de la Compañía Arsenales 5, sin haber intervenido directamente con la actividad de dicho centro, habrían colaborado en el mantenimiento de la clandestinidad de dicho centro, contribuyendo a ocultar la perpetración de los delitos que allí se habría cometido.-

5. Calificación legal.

El suscripto considera que, de acuerdo a la prueba obrante en la causa, los hechos investigados en autos se adecuarían a los tipos penales de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones, torturas, abuso deshonesto y violación sexual, homicidios y en el delito de asociación ilícita agravada, todos en concurso real (art. 151, art. 144 bis inc 2 –ley 146161-, art. 144 tercero segundo párrafo –ley 14616-; art. 119 y 127 del CP según ley 11.221 y 21.338; art. 80 incisos 2, 6 y 7, y art. 210 y 210 bis; art. 45 y 55, todos del Código Penal y normativa internacional vigente a la fecha de los hechos)

5.1.- Violación de domicilio (art. 151 del C.P.).-

En el delito de violación de domicilio, el bien jurídico protegido en los artículos 150 y 151 del Código Penal se encuentra en el derecho constitucional enmarcado en la privacidad e intimidad del domicilio de las personas. (art. 18 de la CN).

Posando sobre tal derecho una garantía judicial, la privacidad sólo podrá ser menoscabada por resolución judicial fundada. Dicho principio constitucional mantiene su vigencia inclusive durante el estado de sitio.

Conforme los antecedentes fácticos obrantes en autos se considera que el ingreso al domicilio de las víctimas por personas que revestían la calidad de funcionarios públicos,

en detrimento de las formas establecidas por ley, configuraría el comportamiento tipificado en el art. 151 del C.P en tanto reprime la violación del domicilio descripta en el art. 150 del C.P. cometida por funcionarios públicos.

Introducidos en el estudio de la tipificación de la conducta descripta en el art. 151 del Código Penal, corresponde en primer lugar determinar la configuración de los elementos del tipo objetivo y subjetivo.

La conducta específica debe dirigirse a la realización de un allanamiento de domicilio en forma arbitraria, es decir, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de exclusión, por lo que el consentimiento del interesado funcionaría como causal de atipicidad.

En los casos sub-examen, cuando se produjo ingreso a los domicilios donde se encontraban las victimas el mismo se efectuó en forma violenta, sin orden judicial habilitante, y sin la concurrencia de circunstancias autorizadas por la ley.

El ingreso a un domicilio mediante el uso de armas de fuego, por un grupo de individuos integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad, configura el delito de violación de domicilio por allanamiento ilegal.

Paralelamente, tanto las personas que “ejecutaron” la orden de allanamiento como aquellas que emitieron la misma, actuaron con conocimiento y voluntad de realizar la conducta descripta por la norma penal, por lo que corresponde atribuirles la comisión del tipo subjetivo doloso.

Por consiguiente, el proveyente entiende que existen elementos de convicción suficientes para tener por acreditado, con el nivel de probabilidad que habilita esta etapa del proceso, que la conducta descripta en el art. 151 del Código Penal habría sido perpetrada en perjuicio de: HOLMQUIST Luis Adolfo, CORRAL Ana Cristina, CAMPOPIANO César Gustavo, MEDINA Celia Georgina, NIEVA Oscar René, YACKEL Ernestina Teresa; BARRIONUEVO Mario, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, IRAMAIN María Trinidad, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, GÓMEZ Juan de Dios, GODOY Enrique, DÍAZ Manuel Julio, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, YAÑEZ Rafael Vitalino, SÁNCHEZ María Teresa, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, FOCHI Gustavo Adolfo, MORALES Reyes Humberto, GONZÁLEZ Humberto Alfredo; LORENZO LERMA Andrés Héctor, CHAPARRO Santos Aurelio, IÑÍGUEZ Gloria del Valle, BRIZUELA Ramón, CORONEL Alfredo Antonio, CARABAJAL Ercilia Dolores, HOYOS Blanca, ALDERETE SORIA

Alejandro Federico, ALDERETE Víctor Fernando, QUINTEROS Juan Manuel, MAZZAMUTO DE ROMERO María Angélica, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria, HAZURÚN Teresita Cándida, MÉNDEZ BRANDER Ángel Adolfo, LASKOWSKI María Margarita, CANTOS Luis.

5.2.-Privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones.-

Los hechos endilgados a los imputados configurarían también el delito de privación ilegítima de la libertad con apremios o vejaciones (art. 144 bis inc. 1 y 2 del C.P.-ley 14616-).-

A partir del análisis de la prueba recolectada en autos puede inferirse que la detención ilegal de las víctimas en el centro clandestino de detención (o Lugares de Reunión de Detenidos, conforme la terminología usada por el Ejército) que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, les habría impedido disponer de su libertad personal.

En cuanto a la existencia de motivación legal para la detención, el art. 144 bis del Código Penal, reprime la conducta del funcionario público, que con abuso de sus funciones o sin las formalidades previstas por la ley, privare a alguien su libertad personal.

USO OFICIAL

El fundamento de la punibilidad de la privación ilegítima de la libertad gestada por un funcionario público, reside en el menoscabo de la libertad personal. Por tanto en el tipo objetivo debe destacarse el elemento normativo de la ilegalidad de la privación de la libertad, también llamado elemento normativo de recorte.

Requiere por tanto, a nivel objetivo, que la privación de la libertad no cuente con el consentimiento del sujeto pasivo a la restricción de sus movimientos, o se trate de una imposición no habilitada dentro de los parámetros generales de las causas de justificación, o que existiendo dichas causas de justificación, el sujeto prive de la libertad de modo abusivo, yendo más allá de la necesidad justificada o por medio de procedimientos prohibidos por la ley. (Carlos Creus. Derecho Penal. Parte Especial. Tomo I. p. 298 y sig. Ed. Astrea).

La privación ilegal de la libertad es un delito material que se consuma cuando, el impedimento físico o la libre actividad corporal de la víctima, se produce con suficiente significación como para mostrar la voluntad del sujeto activo dirigida hacia el ataque a la libertad.

Siendo que la conducta se encuentra estructurada como delito comisivo, requiere al menos de un autor que realice la acción positiva de privar de la libertad a una persona, que hasta ese momento disfrutaba de la disponibilidad de ese bien jurídico. Es un delito de realización instantánea. (Cfr. Rafecas Daniel, Delitos contra la libertad cometidos por funcionarios públicos, “Delitos contra la libertad” coordinadores. Luis F. Niño- Stella M. Martínez, Editorial Ad- Hoc, Buenos Aires, 2003, Pag. 160).

Las conductas atribuidas a los imputados se corresponderían al tipo legal analizado, por cuanto los encartados -en cumplimiento del plan sistemático de represión- incluyeron a las víctimas en los listados de personas a detener y/o abatir, disponiendo a tales efectos la privación ilegítima de su libertad, lo que fuera ejecutado, en algunos

supuestos en forma personal –integrantes de grupos de tarea o unidades de combate- y en otros por subordinados.

Las órdenes emitidas a tal efecto por las autoridades militares, surgieron del ejercicio de un poder de facto, en alzamiento contra el orden constitucional y en cumplimiento de planes y directivas militares, presentándose en tal condición como sustancialmente ilegítimas.

Paralelamente, el mecanismo usual al momento de los hechos era el alojamiento de las personas secuestradas en centros clandestinos organizados y dirigidos por las fuerzas militares, y custodiados por fuerzas de seguridad.

Conforme surge de las denuncias formuladas y demás pruebas en autos, luego de la detención inicial, las víctimas fueron vistas detenidas en el centro clandestino organizado en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde habrían padecido condiciones crueles e inhumanas de cautiverio.

Dichos tratos comenzaban por condiciones de higiene y salubridad escasas, falta de atención médica mínima, falta o escasez de alimentación (comida podrida, servida en tarros de lata), lo que como señalan varios testimonios, hacía que fueran frecuentes epidemias de bronquitis, diarreas, deshidrataciones y ataques de locura de los detenidos a causa del dolor, así como plagas de piojos (cfr. Testimonio de Juan Martín, Alberto Argentino Augier y Andrés Lorenzo Lerma).

En este lugar los prisioneros permanecían con los ojos vendados y maniatados, incluso por períodos de meses. El régimen de privación de libertad de forma diaria comenzaba a las 6 de la mañana e incluía la realización compulsiva de ejercicios físicos de muy difícil realización por la deteriorada salud de los cautivos; castigos con látigo a quienes no podían completarlos; períodos prolongados en que los cautivos eran obligados a permanecer parados de cara a la pared; una sola salida diaria al baño, lo que ocasionaba que muchos de ellos se orinaran o defecaran en sus celdas.

A estas condiciones, se le sumaba sometimiento a todo tipo de vejaciones y golpes por parte de quienes los custodiaban, que además los obligaban a llevar adelante conductas degradantes y humillantes, como el caso de ser obligados a defecar en el campo circundante al galpón y a limpiarse arrastrándose en el pasto, "*como perros*" (Testimonio de Osvaldo Pérez), lo que era celebrado por sus captores.

Según Ernesto Cruz existía lo que los guardias llamaban "*El trencito de la alegría*" que consistía en colocar en fila india a los secuestrados para ir al baño, tomándose de la cintura los unos a otros y el primero aferrado al garrote del gendarme de turno.

Lorenzo Lerma relata que al estar vendados a veces percibían que había un guardia cerca, que se quedaba minutos mirando qué hacían sin que ellos pudieran estar seguros de su presencia.

De los antecedentes relatados, podemos extraer como conclusión que las prácticas aberrantes realizadas contra las personas detenidas clandestinamente por parte de agentes del Estado, amparados en la vigencia del terrorismo de estado imperante en nuestro país a

la fecha de los hechos, configuraron prima facie la agravación de las condiciones de detención por la aplicación de vejaciones y apremios ilegales.

Por consiguiente, se considera que existen recolectados en autos elementos de convicción suficientes para tener por acreditado, en esta etapa del proceso, la perpetración de la conducta descripta en el art. 144 bis incisos 1 y 2 del C.P. –ley 14616- en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, FERNÁNDEZ Enrique Raúl, CORRAL Ana Cristina, CAMPOPIANO César Gustavo, MEDINA Celia Georgina, CAMPOPIANO Julio César, NIEVA Oscar René, YACKEL Ernestina Teresa; BARRIONUEVO Mario, BARRIONUEVO Antonia del Valle, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, SOLDATI Luis Alberto, IRAMAIN María Trinidad, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, DÍAZ MACÍAS Enrique Gonzalo, AUGIER Alberto Argentino, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, SAADE SAIEG Antonio Naief, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, SOSA DE REYNAGA Ana María, MANFREDI Ángel Vicente, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, FOTE Fortunato Leandro, MÁRQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, JUSTO Héctor Oscar, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, ACUÑA Baltasar, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, GÓMEZ Juan de Dios, GODOY Enrique, DÍAZ Manuel Julio, PEREYRA Beningno Alberto, ALARCÓN Rina Rosa, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, FÜRTH Federico Adolfo, GIRIBALDI Osvaldo José Gregorio, FALÚ Luis Eduardo, GONZÁLEZ Hernán Eugenio, VACA RUBIO Raúl Alberto, RODRÍGUEZ ROMÁN DE FIAD María Cristina, YAÑEZ Rafael Vitalino, SAFAROV Víctor Hugo, SÁNCHEZ María Teresa, ARCHETTI Armando, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, FOCHI Gustavo Adolfo, MORALES Reyes Humberto, LERNER Rodolfo Hugo, CARRERAS Juan Francisco, GONZÁLEZ Humberto Alfredo; LORENZO LERMA Andrés Héctor, PASTORI Juan Carlos, CRUZ Ernesto José Segundo, CHAPARRO Santos Aurelio, IÑÍGUEZ Gloria del Valle, BRIZUELA Ramón, CORONEL Alfredo Antonio, CARABAJAL Ercilia Dolores, HOYOS Blanca, ABAD Julio Ricardo, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, ALDERETE Víctor Fernando, CAJAL Nora Alicia del Valle, FABIO Diana Elsa, QUINTEROS Juan Manuel, MAZZAMUTO DE ROMERO María Angélica, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria, HAZURÚN Teresita Cándida, MÉNDEZ BRANDER Ángel Adolfo, LASKOWSKI María Margarita, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Luis, CANTOS Germán.

5.3.- Torturas agravadas.-

USO OFICIAL

Corresponde determinar si los hechos investigados configuran el delito de aplicación de torturas, tormentos físicos y sufrimientos psíquicos.-

A partir de la sentencia dictada por la Excma. Cámara Federal en el marco del juicio de la causa n° 13/84, se ha ido gestando la idea de que, la realización en forma simultánea y continua de prácticas aberrantes sobre personas detenidas deben ser consideradas como tormentos a la luz del art. 144 ter, primer párrafo del Código Penal, tanto en su redacción conforme ley 14.616 (1958), como en su actual redacción de acuerdo al texto dispuesto por ley 23.097 (1984).

No obstante la ley 14.616 establecía una pena de 3 a 15 años de reclusión o prisión para el delito de imposición de tormentos a un perseguido político (segundo párrafo).

En el año 1984 la ley 23.097 elevó las penas del delito de tormentos fijando una escala de 8 a 25 años de reclusión o prisión para todo supuesto de tormento aplicado por un funcionario público a una persona privada de su libertad, esto es, sea o no perpetrado en perjuicio de un perseguido político.

La ley 23.097 al elevar los montos de pena aplicables, tanto en su máximo como en su mínimo, prevé sin duda condiciones de punibilidad más graves para el imputado, de tal modo que si se juzgaran los hechos investigados en los términos fijados por esa ley posterior, la escala penal aplicable sería de 8 a 25 años de pena privativa de libertad.

En consecuencia, corresponde analizar la conducta atribuida a los encartados, conforme la ley vigente al momento del hecho y desechar la aplicación de la ley ex post facto más gravosa (en igual sentido, causa 14216 Suárez Mason. Resolución de fecha 20 de octubre de 2005. Juzgado Federal n° 3 de Capital Federal).

En lo que respecta a la definición del concepto nuclear del tipo penal de tortura –el cual no presenta variaciones relevantes-, el art. 1 de la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes (1984), dispone que: *se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas*.

Paralelamente, en el ámbito interamericano se dictó la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura (adoptada en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de diciembre de 1985 en el decimoquinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA y ratificada por Argentina con fecha 31 de marzo de 1989), la que establece en su art. 2 primera parte que "*se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o*

mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica".

Haciéndose eco de los conceptos vertidos en los instrumentos internacionales precedentes, por ley 23.097 se describe el tipo objetivo del delito de torturas en el inciso 3 del art. 144 ter como la imposición de graves sufrimientos físicos o síquicos sin requerir exigencias subjetivas especiales diferentes al dolo o fines ulteriores (Cfr. Rafecas Daniel, ob. cit. p. 204).

Trasladando los conceptos vertidos al caso de marras, de conformidad con la prueba substanciada, resultaría demostrado que en el centro clandestino que habría funcionado en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, los/as detenidos/as clandestinos habrían sido víctimas del delito de torturas.

Conforme relatos coincidentes de los sobrevivientes (en este sentido Alberto Argentino Augier Humberto Suárez; Julio Guillermo Suárez; Enrique Godoy; René Manuel Quinteros; Andrés Lorenzo Lerma) los/as detenidos/as eran interrogados mediante la aplicación de *picana eléctrica* en diferentes partes del cuerpo especialmente sensibles como genitales, lengua, párpados, pechos, oídos, etc; que para tales fines eran atados a la estructura metálica de una cama ("parrilla") y en ocasiones mojados u obligados a beber agua para mejorar la conductividad de la electricidad en su cuerpo y aumentar de esa manera el dolor; que también se les aplicaba la técnica del *"submarino"*, conforme la cual se sumergía al detenido con las manos atadas a la espalda en un tacho con agua, excrementos y orines, hasta producirles asfixia, aplicando incluso electricidad en el tacho, lo que llevó a la muerte de muchos de los cautivos (Cfr. testimonio de Juan Manuel Quinteros); también se realizaba el llamado *"enterramiento", "pozo" o "arbolito"*, método particularmente atroz por el cual las personas en poder de sus captores eran enterradas desnudas, dejando solamente su cabeza fuera de un pozo cavado en la tierra, que previamente era mojado a fin de compactarlo, lo que provocaba en la persona una pérdida absoluta de manejo de su cuerpo, grandes dolores, fuertes calambres e infecciones en la piel de toda índole, produciéndose en muchos casos la muerte por tétanos (Cfr. testimonios de Julio Ricardo Abad, Víctor Hugo Safarov y José Luis Maldonado)-.

Otra técnica de tortura descripta por los sobrevivientes era el denominado *"arrastre"* que consistía en atar a los prisioneros a un tractor que se ponía en marcha y éstos resultaban muy lastimados por el suelo irregular, plagado de espinas y desniveles; asimismo se realizaba el *colgamiento de los detenidos* de una barra ubicada a unos tres metros de altura, sin poder tocar el suelo con los pies, lo que desgarraba sus músculos, o bien de ganchos que se colocaban en la pared del edificio del CCD, a veces de sus testículos (Caso de Juan de Dios Gómez, según el testimonio de Enrique Godoy); también se impartía a los prisioneros golpes en todo el cuerpo, los que en ocasiones producía

USO OFICIAL

severos deterioros en la salud de los detenidos (caso Julio Arnaldo del Castillo), simulacros de fusilamiento y otras acciones igualmente devastadoras.-

Los castigos físicos de los responsables del centro clandestino eran acompañados de sofisticadas torturas psicológicas, induciendo a los detenidos a colaborar, careándolos unos con otros para producir “quiebres”, amenazándolos a ellos o a sus familiares y en muchos casos torturando a personas enfrente de familiares cercanos o a propósito de éstos y de sus actividades (Caso de María Angélica Mazzamuto, quien era interrogada sobre las actividades de su esposo, también el de César Gustavo Campopiano, quien era interrogado por su hermano Julio; entre muchísimos otros), o enfrentándolos a sus parejas (Caso de Nora Alicia Cajal y Juan Carlos Pastori), compañeros (caso de Victor Fernando Alderete, careado con Julio Arnaldo del Castillo; o el caso de Andrés Lorenzo Lerma con Juan Carreras) o vecinos (Caso de Antonio Romero con Leandro Fote).

Paralelamente, también se encontraría corroborado en la causa, que las mujeres fueron víctimas de violaciones sexuales, las que se habrían consumado como práctica y no en forma individual o esporádica, por lo que corresponde una valoración independiente la que se substanciará en el apartado siguiente.

Consecuentemente con el relato precedente, cabe concluir que los tormentos constatados sobre las personas detenidas clandestinamente en el centro clandestino Arsenal, se produjeron en forma sistemática, simultánea y continúa, se realizaron intencionalmente como medio intimidatorio a efectos de obtener supuestas confesiones, ocasionando a sus víctimas sufrimientos físicos y mentales.

Además corresponde advertir que al momento de los hechos, las Fuerzas Militares y de Seguridad seleccionaron a las víctimas dentro del grupo de población que calificaron como *“la subversión”*, al que consideraron compuesto tanto por personas con alguna afiliación o afinidad política, como por aquellas que -sin intervención en partidos o grupos políticos- tenían alguna vinculación con reclamos o reivindicaciones sociales, o bien por quienes simplemente mantenían relaciones personales con personas vinculadas a la actividad política o social.

Por consiguiente se considera que, al tenor de la prueba obrante en la causa, existen elementos de convicción suficientes en esta etapa procesal para entender que las acciones delictivas perpetradas en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, FERNÁNDEZ Enrique Raúl, CORRAL Ana Cristina, CAMPOPIANO César Gustavo, MEDINA Celia Georgina, NIEVA Oscar René, YACKEL Ernestina Teresa; BARRIONUEVO Mario, BARRIONUEVO Antonia del Valle, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, SOLDATI Luis Alberto, IRAMAIN María Trinidad, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, AUGIER Alberto Argentino,

JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, SAADE SAIEG Antonio Naief, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, SOSA DE REYNAGA Ana María, MANFREDI Ángel Vicente, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, FOTE Fortunato Leandro, MÁRQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, JUSTO Héctor Oscar, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, ACUÑA Baltasar, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, GODOY Enrique, DÍAZ Manuel Julio, PEREYRA Benigno Alberto, ALARCÓN Rina Rosa, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, FÜRTH Federico Adolfo, GIRIBALDI Osvaldo José Gregorio, FALÚ Luis Eduardo, GONZÁLEZ Hernán Eugenio, VACA RUBIO Raúl Alberto, RODRÍGUEZ ROMÁN DE FIAD María Cristina, YAÑEZ Rafael Vitalino, SÁNCHEZ María Teresa, ARCHETTI Armando, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, MORALES Reyes Humberto, LERNER Rodolfo Hugo, CARRERAS Juan Francisco; LORENZO LERMA Andrés Héctor, PASTORI Juan Carlos, CRUZ Ernesto José Segundo, CHAPARRO Santos Aurelio, IÑÍGUEZ Gloria del Valle, BRIZUELA Ramón, CORONEL Alfredo Antonio, CARABAJAL Ercilia Dolores, HOYOS Blanca, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, ALDERETE Víctor Fernando, CAJAL Nora Alicia del Valle, FABIO Diana Elsa, QUINTEROS Juan Manuel, MAZZAMUTO DE ROMERO María Angélica, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria, HAZURÚN Teresita Cándida, LASKOWSKI María Margarita, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Luis, CANTOS Germán, en su condición de detenidos/as clandestinos/as, configuran prima facie el delito de torturas agravadas, previsto y penado en el art. 144 ter, primer y segundo párrafo del C.P (ley 14616).

USO OFICIAL

5.4. Torturas seguidas de muerte (art. 144 ter tercer párrafo –ley 14616-).

El tercer párrafo del art. 144 ter conforme ley 14616 del C.P., tipifica una agravante del tipo penal de torturas, la que se configura cuando, a consecuencia de los tormentos, se produce la muerte de la víctima.

Sostiene la doctrina que el resultado muerte se trataría de un resultado preterintencional y que en cuanto tal, incluiría los resultados culposos como dolosos (Creus, Derecho Penal Parte Especial, t.I, p. 330).

Para otro sector de la doctrina el resultado muerte debe poder ser imputado tanto objetiva como subjetivamente a la imposición de torturas, lo que exige desde el punto de vista subjetivo que el homicidio lo sea a título de dolo aunque sea eventual (Donna, Derecho Penal Parte General, t. IIA, p. 198).

Del análisis de la prueba obrante en las causa conexas a la presente, surge demostrado presuntamente el delito de torturas seguidas de muerte en perjuicio de Julio César CAMPOPIANO, Juan de Dios GOMEZ, Enrique Gonzalo DIAZ MACIAS, Víctor SAFAROV, Humberto Alfredo GONZALEZ, Gustavo Adolfo FOCHI, Julio Ricardo ABAD y Ángel Adolfo MÉNDEZ BRANDER.

5.5. Delitos Sexuales: Abuso y Violación (art. 119 y 127 del CP según ley 11.221 y 21.338).-

(i) Delitos sexuales en el contexto del plan de represión (1975/1983).

De la lectura de los hechos endilgados a los encartados y de la prueba ofrecida y producida en la presente megacausa, surgen numerosos relatos en donde se efectúan referencias, o denuncias directas, respecto a la comisión de delitos sexuales.-

Tal situación se encontraría además corroborada a través del testimonio de Juan Martín, quien al referirse a las condiciones de detención en Campo de Concentración LRD Arsenales afirma que *"En el "L.R.D." era notorio que la guardia tenía cierta libertad de movimientos para que sus integrantes actuaran personalmente sobre los prisioneros. Esto daba lugar a muchas arbitrariedades de todo tipo, mayores aún de las que se cometieron en este régimen, que se ha destacado por unas condiciones represivas de excepción. Estas arbitrariedades consistían, por ejemplo, en palizas a los prisioneros, realización de ejercicios físicos violentos, así como algunas violaciones cometidas contra las prisioneras, en la etapa del interrogatorio, en el período de aislamiento en las salas de torturas"* (Expte. 1921/04 fs. 231)

La comisión de delitos sexuales en el contexto del terrorismo de estado vigente en nuestro país entre 1975/1983 fue relevada por la CONADEP y plasmada en su informe, donde se documentaron la comisión de homicidios, violaciones sexuales, torturas, extorsiones, saqueos y otros graves delitos perpetrados en el marco de la persecución política e ideológica (Informe CONADEP "Nunca Más").

Al momento de iniciarse el juicio penal a las Juntas Militares (causa 13/84), el Ministerio Público Fiscal efectuó una selección de los casos denunciados y documentados por la CONADEP (700 de 8.000 denuncias relevadas), y formuló acusación por la ejecución de un plan represivo dirigido desde el Estado contra la población civil en cumplimiento del cual se habían perpetrado delitos de privación ilegítima de libertad, torturas y homicidio (Moreno Ocampo Luis, Entrevista sobre el Juicio a las Juntas. Memoria Abierta, Buenos Aires 2010, www.memoriaabierta.org.ar).

No obstante el marco de la acusación, la Cámara Federal al emitir sentencia consideró demostrado que "*las órdenes impartidas dieron lugar a la comisión de un gran número de delitos de privación de libertad, a la aplicación de tormentos y a homicidios. Asimismo, se ha evidenciado que en la ejecución de los hechos, los subordinados cometieron otros delitos que no estaban directamente ordenados, pero que podían considerarse consecuencia natural del sistema adoptado*" (Sentencia Causa 13/84, Capítulo Séptimo, Punto 1).

Pocos años después, cuando el gobierno constitucional decide ocluir las investigaciones penales por delitos cometidos durante el terrorismo de estado, se dicta la Ley de Obediencia Debida n° 23521, la que en su art. 2 establecía que la presunción de haber obrado en virtud de obediencia debida no será aplicable a delitos de *violación, sustracción y ocultamiento de menores, sustitución de estado civil y apropiación extorsiva*

de bienes. Durante el debate parlamentario, los legisladores justificaron la exclusión de tales delitos atento a su condición de *actos atroces*. (Citado por Barbuto Valeria y Moreyra María Julia, *"Los procesos de reparación y la violencia sexual contra las mujeres en Argentina",* SIN TREGUA, Políticas de reparación para mujeres víctimas de violencia sexual durante dictaduras y conflictos armados, Humanas, Chile 2008)

Durante la vigencia de las leyes de impunidad (1987/2004), sólo se iniciaron acciones penales por el delito de sustracción y ocultamiento de menores y algunas pocas por apropiación de bienes.

Los delitos sexuales denunciados por las víctimas en sus testimonios, no fueron objeto de acción penal habiendo permanecido invisibilizados hasta fechas recientes (Cfr. Sentencia del Tribunal Oral de Santa Fe en la causa "Barcos" (n° 43/08) donde se analiza el delito de violación sexual como una forma del delito de tormento; Sentencia del Tribunal Oral de Mar del Plata en la causa "Molina" (n° 2086/10) donde se considera probado que en el marco del plan sistemático de represión era habitual que las mujeres ilegítimamente detenidas en centros clandestinos fueran sometidas sexualmente por sus captores o guardianes, afirmando en consecuencia que los actos de violencia sexual no constituyeron hechos aislados ni ocasionales sino que formaron parte de prácticas sistemáticas y generalizadas).-

Tal situación fue debidamente advertida por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) quien recomendó al Estado argentino que adopte medidas proactivas para hacer públicos, enjuiciar y castigar los incidentes de violencia sexual perpetrados durante la pasada dictadura, en el marco de los juicios por crímenes de lesa humanidad, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1820/2008 del Consejo de Seguridad y que se concedan reparaciones a las víctimas (Observaciones Finales, 46° Período de Sesiones, del 12 al 30 de julio de 2010, punto 26).

Consecuentemente, este magistrado considera que el análisis de la comisión de delitos sexuales en la presente megacausa, resulta imperativo a la luz de la obligación internacional de investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos a cargo del Estado Argentino (art. 1.1. de la CADH).-

(ii) Delitos sexuales en la jurisprudencia internacional.

La violencia contra una persona en base a su género y especialmente la violencia sexual dirigida contra mujeres y niñas no es un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad, no obstante la adopción de medidas tendientes a su investigación y juzgamiento en el ámbito internacional y en los ámbitos nacionales se ha emprendido con seriedad recién a fines del S XX.

Con anterioridad, los delitos de género fueron considerados como daños colaterales a la guerra y su persecución fue dejada en segundo planto, lo que aparejaba la impunidad de sus autores.

La percepción de la gravedad de estos delitos y de sus consecuencias negativas en la reinserción de mujeres victimas de violencia en conflictos armados internacionales e

USO OFICIAL

internos, fue visibilizada a partir del trabajo efectuado por los Tribunales Penales Internacionales Ad Hoc para Ruanda y la ex Yugoslavia, quienes plasmaron, investigaron y juzgaron los actos de violencia con base en género y de índole sexual, imponiendo un avance sumamente importante en la lucha contra la impunidad por crímenes basados en el género.

En particular cabe referir a la causa *"Prosecutor v. Akayesu"* del TPIR, es considerado un hito en lo que hace a la justicia de género, en tanto se erigió como la primera condena internacional en la que se reconoce la violación y la violencia sexual como actos constitutivos de genocidio, definiendo en forma amplia violación sexual como *invasión física de naturaleza sexual*, y estableciendo que desnudez forzada califica como forma de tratamiento inhumano (Caso No. ICTR-96-4-T –Cámara de Juicio-, Octubre 2, 1998)

Tal definición amplia fue mantenida en un primer momento por el TPIY -causa *"Prosecutor v. Celebici"*-, pero con posterioridad en el caso *"Prosecutor v. Furundzija"*, dio una nueva definición, estableciendo que los elementos objetivos del crimen de violación son : *"i) Penetración sexual, incluso leve de a) la vagina o ano de la victima por el pene del perpetrador u otro objeto utilizado por el perpetrador, o b) de la boca de la victima por el pene del perpetrador, u otro objeto.; ii) Bajo coerción o fuerza o amenaza contra la victima o una tercera persona"* .

Este pronunciamiento generó un amplio debate en torno a la interpretación del crimen de violación, situación que fue abordada por el TIPR en la causa *"Prosecutor v. Muesma"*, donde luego de analizar las definiciones existentes, concluyó que la definición dada en Akayesu era preferible por su amplitud.

No obstante el TPIY en el caso *"Prosecutor v. Kunarac"*, optó nuevamente por la definición dada en Furundzija añadiendo un nuevo ámbito de discusión relativo al aspecto del consentimiento en los casos de violación, al considerar que para que no se configure violación, *el consentimiento debía ser dado voluntariamente como resultado de la libre voluntad de la victima evaluada en el contexto de las circunstancias existentes*.

La Sala de Apelación al estudiar este caso por vía recursiva, fue mas allá y consideró que *"hay factores mas allá de la fuerza que podrían dar lugar a un acto de penetración sexual no consensual o no voluntario por parte de la victima , reducir el enfoque a la fuerza o amenaza de esta podría permitir a los perpetradores eludir responsabilidades por la actividad sexual a la que la otra parte no ha consentido por tomar ventaja de las circunstancias coercitivas sin depender de la fuerza física."*

Señalo además que *"las circunstancias que daban lugar a los cargos de violación como crímenes de lesa humanidad o de guerra serán casi universalmente coercitivas de manera que el verdadero consentimiento no seria posible"*.

Finalmente con la sentencia del TPIR en el caso *"Prosecutor v. Muhimana"* se arribó a un consenso conceptual al señalarse que la definición dada en la causa Akayesu y los elementos establecidos en el caso Kunarac no eran incompatibles o sustancialmente

diferentes en su aplicación: mientras que Akayesu se refería en términos generales a una invasión física de naturaleza sexual, en Kunarac la decisión se centró en articular los parámetros que deberá reunir una invasión física de naturaleza sexual para que se constituya violación.

Los delitos sexuales y la justicia de género, en forma paralela al desarrollo jurisprudencial referido, también fueron objeto de estudio y análisis en el sistema interamericano en años recientes.

La Comisión Interamericana de DDHH, se expidió respecto de la violación sexual en dos Informes: *(i) Informe sobre Haiti de 1995*: donde sostuvo que los actos de violencia contra las mujeres califican como delitos de lesa humanidad cuando son utilizados como arma para infundir terror; (*ii) Informe s/Perú de 1996*: en donde, luego de definir la violación sexual como "todo acto de abuso físico y mental perpetrado como acto de violencia", lo calificó como forma del delito de tortura.

Paralelamente la Corte Interamericana de DDHH cuenta a la fecha con dos pronunciamientos relevantes sobre violencia de género y delitos sexuales: *"Castro Castro c. Perú"* (2006) y *"Campo Algodonero c. México"* (2008).

La perspectiva de género se introduce por primera vez en la jurisprudencia de la Corte IDH a través de la sentencia de fondo emitida en la causa "Castro Castro".

La Corte IDH, en el caso citado considera demostrado que durante los conflictos armados internos e internacionales las partes que se enfrentan utilizan la violencia sexual contra las mujeres como un medio de castigo y represión. La utilización del poder estatal para violar los derechos de las mujeres en un conflicto interno además de afectarles a ellas en forma directa puede tener como objetivo causar un efecto en al sociedad a través de esas violaciones o dar un mensaje o lección.

En el apartado 306 de sus considerandos, afirma la Corte que las mujeres privadas de libertad en el penal Castro Castro *"…además de recibir un trato violatorio de su dignidad personal, también fueron víctimas de violencia sexual, ya que estuvieron desnudas y cubiertas con tan solo una sábana, estando rodeadas de hombres armados, quienes aparentemente eran miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Lo que califica este tratamiento de violencia sexual es que las mujeres fueron constantemente observadas por hombres"*. La Corte, siguiendo la línea de la jurisprudencia internacional y tomando en cuenta lo dispuesto en la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belén do Para), consideró que *"la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno"*.

Y en el apartado 311 la Corte reconoce *"que la violación sexual de una detenida por un agente del Estado es un acto especialmente grave y reprobable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente. Asimismo, la violación sexual es una experiencia sumamente traumática que puede tener severas*

USO OFICIAL

consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima "humillada física y emocionalmente", situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas"

Paralelamente, en la causa "Campo Algodonero" la Corte IDH avanza sobre los conceptos vertidos en el precedente citado y establece la responsabilidad del Estado por *"haber permanecido indiferente frente a una situación crónica de violencia… ante la existencia de una cultura de discriminación contra la mujer"*. Para la Corte IDH el Estado es responsable por los actos cometidos por particulares atento su condición de garante respecto del riesgo de violencia basada en género: *teoría del riesgo creado* (art. 7 de la Convención de Belén do Pará).

A la luz de los antecedentes citados, puede concluirse que la jurisprudencia internacional e interamericana se presenta como un punto de inflexión en el desarrollo de los delitos sexuales como delitos de lesa humanidad, advirtiéndose sólo algunas disidencias al momento de precisar su tipificación: algunos fallos u opiniones postularon su condición de delito de lesa humanidad autónomo, y otros lo valoraron como una forma del delito de tortura.

(iii) Delitos sexuales: tipificación en el ámbito internacional.-

Con relación a la tipificación de los delitos sexuales como delitos internacionales, el *IV Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra* (Aprobado el 12 de agosto de 1949 por la Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra, celebrada en Ginebra del 12 de abril al 12 de agosto de 1949. Entrada en vigor: 21 de octubre de 1950. Ratificado por Argentina en 1958), establece en su art. 27 que:

"*Las personas protegidas tienen derecho, en todas las circunstancias, a que su persona, su honor, sus derechos familiares, sus convicciones y prácticas religiosas, sus hábitos y sus costumbres sean respetados. Siempre serán tratadas con humanidad y protegidas especialmente contra cualquier acto de violencia o de intimidación, contra los insultos y la curiosidad pública.*

Las mujeres serán especialmente protegidas contra todo atentado a su honor y, en particular, contra la violación, la prostitución forzada y todo atentado a su pudor.

Habida cuenta de las disposiciones relativas al estado de salud, a la edad y al sexo, todas las personas protegidas serán tratadas por la Parte en conflicto en cuyo poder estén con las mismas consideraciones, sin distinción alguna desfavorable, especialmente por lo que atañe a la raza, a la religión o a las opiniones políticas.

No obstante, las Partes en conflicto podrán tomar, con respecto a las personas protegidas las medidas de control o de seguridad que sean necesarias a causa de la guerra"

Paralelamente, el *Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados*

internacionales (Protocolo I) del 8 de junio de 1977, en su art. 75 relativo a "Garantías Fundamentales", establece en su inciso 2 que:

"Están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar los actos siguientes, ya sean realizados por agentes civiles o militares:

a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular:

i) el homicidio;

ii) la tortura de cualquier clase, tanto física como mental;

iii) las penas corporales; y

iv) las mutilaciones;

b) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor;

c) la toma de rehenes;

d) las penas colectivas; y

e) las amenazas de realizar los actos mencionados.

Consecuentemente con las normas citadas, a la fecha de comisión de los hechos que se investigan en la presente causa, los delitos sexuales contra las mujeres, se encontraban tipificados como delitos internacionales (crímenes de guerra), y en tal carácter, imprescriptibles conforme lo establecido por la *Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de 1968,* de acuerdo con la cual los crimenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son actos lesivos que deben ser prevenidos y sancionados por los Estados, sin perjuicio de que los mismos no se encuentren tipificados en el derecho interno de los Estados.

Sin perjuicio de lo afirmado cabe referir a que, como fuera desarrollado en el apartado 3.1, la calificación de un delito como de lesa humanidad, exige la corroboración de un contexto: *la existencia de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil por agentes del estado o personas que actúan con su aquiescencia.* Consecuentemente, los delitos sexuales cometidos en el contexto descripto, califican como delitos de lesa humanidad.

En tal sentido y como fuera desarrollado en el Juicio a las Juntas, el plan de represión ejecutado por la dictadura militar habilitó la comisión de ilícitos que no estaban directamente ordenados, pero que podían considerarse consecuencia natural del sistema de clandestinidad adoptado (Sentencia causa 13/84 capítulo séptimo).

De lo expuesto cabe concluir que, durante la vigencia del terrorismo de estado, la violencia de género no fue producto de desviaciones particulares, sino ejercida en forma sistemática como el resto de los delitos investigados, por lo que corresponde ingresar al análisis de la prueba incorporada en la presente megacausa a efectos de verificar la comisión o no de las conductas descriptas en los tipos penales de abuso deshonesto y violación sexual.

(iv) Delitos sexuales: Mérito probatorio en la presente causa.

USO OFICIAL

Del análisis de los hechos investigados y de la prueba incorporada en la presente megacausa, los que fueran oportunamente descriptos y exhibidos a los imputados y a sus defensas al momento de substanciarse las declaraciones indagatorias, surgen testimonios en los que se afirman o describen situaciones que encuadrarían en los tipos penales de abuso sexual y violación sexual, vigentes al momento de comisión de los hechos (art. 119 y 127 del CP según ley 11.221 y 21.338).

Que a efectos de resguardar los derechos de las víctimas, toda referencia a las mismas se realizará mediante la mención de las iniciales de su nombre

A continuación se detallan los casos y la prueba relevada en el sentido referido:

* Hechos que perjudicaron a A. V. B. (Expte. nº 817/07)

A.V.B. declara que "*Fue manoseada y ultrajada sexualmente por el primer alférez de Gendarmería Celso Alberto Barraza (a) "Beto", lo que fue observado por Teresita Hazurún. A principios de diciembre, el día 5 o 6, fue llevada a la sala de torturas, colocándola en una cama sin colchón y aplicándole picana eléctrica en los pies y los pechos, golpeándola bárbaramente con un cinto que tenía una enorme hebilla de metal, que le dejó en carne viva los glúteos y los pechos; al tratar de gritar le tapaban la boca, aumentando así su sufrimiento. El día 7 u 8 de diciembre fue sacada desnuda a campo abierto y fue obligada a permanecer con las piernas abiertas, lo que la hizo sentir nuevamente humillada y degradada. A la mañana siguiente la devolvieron al pabellón donde la tenían aun desnuda y prohibiéndole cerrar las piernas*" (fs. 3/4; fs. 18/20 y fs. 2.157 de Expte. nº 443/84)

* Hechos que perjudicaron a G.V.I. (Expte. n° 839/07 y sus Actuaciones Complementarias).

G.I. declara con fecha 26 de julio de 2005: "*CONTESTA… Además de todo esto fue víctima de violaciones sexuales en varias oportunidades. Víctor Sánchez la violó repetidas veces, él solo. En otras oportunidades fueron dos o tres hombres que cree que eran los mismos torturadores, estas violaciones sexuales pasaron únicamente cuando estaba detenida en Arsenales"* (fs. 42).

* Hechos que perjudicaron a N.A.V.C. (Expte. 443/84).

N.C. quien se encontraba embarazada de dos meses, declara que "*Al llegar al Arsenal le vendaron los ojos dejándola largo tiempo bajo el sol; luego la llevaron a una habitación donde la interrogaron bajo tortura y la violaron… En una oportunidad la sacaron y la llevaron a una casilla de madera para picanearla; dos días después de ocurrido ese hecho, comenzó a sangrar y se le produjo un aborto…"*. La víctima describe la llegada de gendarmes de San Juan afirmando que "*uno de ellos me acosaba sexualmente y por no acceder me paraba a la hora de la siesta hasta que perdía el conocimiento*" (fs.1722/1728 de la causa 443/84).

* Hechos que perjudicaron a D.E.F. (Expte. 443/84)

D.E.F. declara que *"…En una oportunidad sus captores la llevaron a una casilla situada a unos 10 metros del galpón en el que era obligada a permanecer, donde la*

forzaron a desnudarse y la acostaron sobre un elástico metálico de una cama esposándola con las piernas y los brazos abiertos para aplicarle "picana" eléctrica en diferentes partes de su cuerpo, mientras era interrogada acerca de los integrantes del centro de estudiantes de la Facultad de Arquitectura, leyéndole comunicados de prensa que había firmado en asambleas estudiantiles de años anteriores. Durante su permanencia en el CCD fue torturada al menos dos veces por día, lo que ocurría también con el resto de los detenidos …Uno de los guardias a quien llamaban "El Indio" le manifestó a la víctima que los guardias del lugar eran de Gendarmería Nacional y los interrogadores del Ejército. Un día la llevaron a la habitación de torturas y la desnudaron diciéndole que "el General" estaba allí. Al llevarla de nuevo al lugar "el Indio" le dijo que sería liberada … Los días se sucedían con una rutina similar hasta que en una oportunidad se me tiró un guardia encima diciendo que me mataba si gritaba, mientras me manoseaba alevosamente, grité que me soltara y lo hizo y se fue. Cuando cambió la guardia se me arrimó el "Indio" y me preguntó lo que había pasado diciéndome que les cuente a los interrogadores. Cuando ellos llegaron me sacaron al sol y mientras tomaban mate me preguntaban lo ocurrido, les relaté con terror pues no sabía si era peor, me llevaron de vuelta y no me torturaron. Al otro día vino un gendarme y me dijo que estaba el "General", me metió en la habitación de torturas y me dijeron que me desvista, yo estaba parada, luego completamente desnuda me ordenaron que girara varias veces. Imprevistamente me hicieron vestir, no hablaron una palabra y el "Indio" me llevó de vuelta. Después le conté a Ana María Sosa lo ocurrido y pensamos que el general debía ser Bussi" (fs. 1404/1409).

USO OFICIAL

* Hechos que perjudicaron a B.H. (Expte n° 809/07).

B.H. declara que *"cuando entran a mi casa eran muchas personas y reconozco por escuchar su voz a Pecho y Tabla (Sánchez), me meten en un auto en el piso del asiento de atrás, me golpean y me ponen en la cara el miembro sexual de ellos mientras me agredían … Que una semana antes de mi secuestro una noche un grupo de personas armadas con cara tapada ingresaron a mi domicilio y se llevan secuestrada a mi hermana menor de 12 años de edad a quién amenazan, torturan y la violan, ello sucedió en la Comisaría de la Florida donde se encontraba Sánchez, estuvo allí toda la noche. Al otro día vuelve a su casa con la ropa sucia, aterrorizada bajo la amenaza de que no cuente nada, de lo contrario le pondrían una bomba en su casa"* (fs. 57 vlta.)

También declara la víctima que *"en una oportunidad en que la ponen contra la pared, Sánchez le dice que si hubiera aceptado ser su amante esto no le habría sucedido… Sánchez le apoya sobre la espalda un elemento eléctrico que le producía golpes de corriente mientras la torturaba y se burlaba de ella, la acariciaba la manoseaba, la besaba…"*. (fs. 58)

Paralelamente a fs. 66 de la causa referida, Santos Aurelio Chaparro declara que *"una chica a la que la llamaban la Petisa, de nombre Inés, ella estaba parada frente a él desnuda, le mostró como le habían cortado los pezones y le dijo que la acababan de violar, tenía moretones en todo el cuerpo"*.

* Hechos que perjudicaron a M.I.J.S. (Expte. nº 1.595/5).

Baltazar Acuña declara respecto de M.I.J.S. que *"…Una noche uno de los guardias intentó violarla, lo que la afectó mucho y les dijo a sus compañeras de cautiverio que sabía quién había sido y lo denunciaría, produciéndose entre los guardias del CCD cierto revuelo"* (fs. 437).-

Al tenor de la prueba relevada, corresponde concluir que se presume configurado en la presente causa la comisión del delito de violación sexual (art. 119 del CP según ley 11.221 y 21.338) en perjuicio de *G.V.I., N.C y B.H.*; y la comisión del delito de abuso deshonesto (art. 127 del CP según ley 11.221 y 21.338) en perjuicio de *A.V.B., D.E.F. y M.I.J.S.*, habiéndose corroborado que tales delitos fueron cometidos en forma sistemática en el marco del plan de represión vigente en el país entre 1975/1983, reservándose el análisis de la atribución de responsabilidad penal para el apartado siguiente (Apartado 6 Participación Criminal)

5.6.- Homicidio Agravado

Conforme la prueba existente en la causa, resultaría demostrado que el accionar de las fuerzas policiales y militares durante la vigencia del terrorismo de estado, se caracterizó por el secuestro, la detención clandestina y la desaparición física de miles de ciudadanos/as. Dicho accionar se habría efectuado de manera sorpresiva y mediante la suspensión de todas sus garantías constitucionales, privándolos de cualquier posibilidad defensiva y dejándolos a merced de la arbitrariedad y el abuso criminal del poder.

En particular resultaría demostrado por los testimonios recabados en la causa que, en el centro clandestino Arsenales, se realizaban los fusilamientos de detenidos llevados desde otros centros clandestinos de detención, cuyos cuerpos habrían sido incinerados y enterrados en los alrededores (hipótesis en los casos de Leandro Fote, Ana Corral, Pedro y Jorge Osvaldo Rondoletto, Humberto Alfredo González, Trinidad Iramain.)

Según declaración del ex gendarme Cruz, en los fondos del campo estaba ubicado un pozo de unos 6 metros de largo por 6 metros de ancho y 3 metros de profundidad donde se arrojaban los cadáveres de los asesinados (fs. 21/22, Expte. n° 753/83).

Paralelamente, de las declaraciones de los ex gendarmes Torres y Cruz surgiría que el personal de Gendarmería asignado al centro era el encargado de cremar y enterrar los cuerpos de los detenidos, los que, en más de una oportunidad, eran incinerados aun estando con vida. Según el ex Gendarme Omar Eduardo Torres, en los pozos se colocaba leña, gomas de automóviles, aceite y aproximadamente cada quince días se mataba entre quince y veinte personas. Los fusilamientos se producían en horas de la noche, participando de ellos oficiales de alta jerarquía como Antonio Bussi ("Torres Omar Eduardo S/Testimonio ante CONADEP" Expte 593/87.).

Estos fusilamientos eran oídos por los prisioneros, incrementando de esta manera, si es posible, su sufrimiento. Muchos relatos son coincidentes en afirmar que los detenidos sobrevivientes podían percibir desde el CCD el "olor a carne quemada" (Testimonio de Blanca Nélida Hoyos).-

Por consiguiente las particularidades descriptas, es decir las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que las víctimas fueron desaparecidas, la ausencia de información sobre su paradero, el tiempo transcurrido, y la prueba relativa a la ejecución de detenidos en el centro clandestino Arsenales, habilitarían la presunción cierta de su muerte conforme la descripción típica emergente del art. 80 del C.P. en sus inciso 2, 6 y 7 del CP, en tanto supondría de parte de los perpetradores un accionar con alevosía, con la concurrencia de dos o más personas y ejercido por funcionarios de seguridad en abuso de sus funciones.-

A la luz de tales argumentos y ante la desaparición física de las víctimas y la ausencia de evidencias a la fecha que indiquen su paradero, se presume configurado el delito de homicidio calificado, tipificado en el art. 80 incisos 2, 6, y 7 del C.P., en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, FERNÁNDEZ Enrique Raúl, CORRAL Ana Cristina, NIEVA Oscar René, BARRIONUEVO Mario, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, ARGAÑARAZ Rosario, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, SOLDATI Luis Alberto, IRAMAIN María Trinidad, CORBALÁN Félix Viterbo, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, SAADE SAIEG Antonio Naief, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, SOSA DE REYNAGA Ana María, MANFREDI Ángel Vicente, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, FOTE Fortunato Leandro, MÁRQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, DÍAZ Manuel Julio, PEREYRA Benigno Alberto, ALARCÓN Rina Rosa, FÜRTH Federico Adolfo, GIRIBALDI Osvaldo José Gregorio, FALÚ Luis Eduardo, GONZÁLEZ Hernán Eugenio, VACA RUBIO Raúl Alberto, YAÑEZ Rafael Vitalino, SANCHEZ María Teresa, ARCHETTI Armando, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, MORALES Reyes Humberto, LERNER Rodolfo Hugo, CARRERAS Juan Francisco, PASTORI Juan Carlos, CORONEL Alfredo Antonio, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Luis, CANTOS Germán.

5.7.- Asociación Ilícita agravada.-

Los encartados fueron imputados como integrantes del plan criminal puesto en marcha desde el Estado, lo que configuraría a su respecto la conducta descripta en el tipo penal de asociación ilícita agravada (art. 210 y 210 bis del Código Penal vigente).-

Al tiempo de producirse los hechos que se investigan en la presente causa, conforme se determinó oportunamente, las fuerzas armadas, siguiendo un plan predeterminado, destituyeron a las autoridades constitucionales de la República, relegando a texto supletorio la Constitución Nacional e instaurado un proceso de represión que conculcó todas las garantías individuales de los ciudadanos.

USO OFICIAL

Los imputados en la presente causa, desde los cargos que detentaban, formaron parte de dicho aparato organizado de poder, por lo que se estima cumplido el primer requisito de formar parte de la organización.

En cuanto al número mínimo de partícipes en autos se encuentra acreditado que los hechos delictivos investigados fueron cometidos en el marco de un plan criminal de represión que, presidido por las Juntas Militares, se ejecutó a través de la estructura militar de las fuerzas armadas y las policías federal y provincial, con un número de participantes que, entre autores directos, autores por dominio del hecho y cómplices, fue múltiple.

De acuerdo a lo normado por el art. 210 bis se configura asociación ilícita, mediante el cumplimiento de dos de los siguientes requisitos: (i) estar integrada por diez o más individuos (ii) poseer una organización militar o de tipo militar (iii) tener estructura celular (iv) disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo (v) operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país. (vi) estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad (vii) tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior (viii) recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos.

En autos se encuentran suficientemente acreditados tres de esos requisitos, sin hacer consideraciones sobre los restantes: la presencia de la organización de tipo militar (fuerzas armadas y policía de la provincia de Tucumán), el que la misma estuviese compuesta por uno o más oficiales de las fuerzas armadas o de seguridad, y el disponer de armas de guerra.

Por lo expuesto se considera que la conducta endilgada a los imputados tipifica el delito de asociación ilícita agravada conforme los términos de los art. 210 y 210 bis del Código Penal, encontrándose cumplimentados los tipos objetivo y subjetivo, en calidad de autores directos (art. 45 del C.P.).

5.8.- Contexto del crimen de genocidio.-

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada en la III Asamblea General de las Naciones Unidas en abril de 1948, y ratificada por la Nación Argentina por Decreto Ley 6286/56, en abril de 1956, establece en su artículo II que *"En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo".-*

Se sostiene que la discusión habilitada en el mundo del derecho sobre el concepto de genocidio, se habría ido delineando en torno a la definición aportada por Naciones Unidas en forma unánime en el año 1946 (Resolución 96/1) conforme la cual se define

genocidio como un modo de aniquilamiento de un grupo de población como tal. (Feierstein Daniel, “El genocidio como práctica social”, FCE, p. 49 y ss.).-

En tal dirección y analizando el caso argentino, coincidimos con el sector doctrinario que considera que la caracterización de “grupo nacional” es válida para analizar los hechos sucedidos en Argentina, dado que los perpetradores se propusieron destruir un determinado tramado de las relaciones sociales en un Estado para producir una modificación lo suficientemente sustancial que alteró la vida en su conjunto. Analizando la inclusión del término “en todo o en parte” emergente de la definición de la Convención de 1948, es posible sostener que el grupo nacional argentino ha sido aniquilado “en parte” y en una parte lo suficientemente sustancial como para alterar las relaciones sociales al interior de la propia nación. (Feierstein Daniel Ob. Cit. p. 51).-

El Estado Argentino al momento de los hechos, identificó y definió un grupo de población como “la subversión”. Dicho conglomerado estaba compuesto tanto por grupos políticos (grupos de izquierda peronista y no peronista), grupos políticos militares con afiliaciones similares y también por muchas personas que si bien no tenían intervención ninguna en partidos o grupos políticos, estaban involucradas en la lucha social (activistas gremiales, estudiantiles, barriales, trabajadores sociales, docentes, profesionales, etc.). Lo que tuvo en común dicho grupo, conforme la caracterización del perpetrador, fue su desafío al pensamiento “occidental cristiano” (Feierstein Daniel, Ob. Cit., p. 64).-

USO OFICIAL

Como prueba de lo considerado corresponde citar la Orden del día denominada *“La rebelión. Plan del Ejército contribuyente al plan de seguridad nacional”*, dictada el 9 de enero de 1976 por el Ejército Argentino, cuya finalidad fue el establecimiento de *“las operaciones necesarias para asegurar la destitución del gobierno y facilitar la asunción del gobierno militar mediante: ... la detención de personas del ámbito político, económico y jurídico que deban ser juzgadas. La determinación del grupo a detener incluía expresamente a dirigentes políticos, gremiales, funcionarios públicos y delincuentes económicos y subversivos*”. (Cfr. Causa “Vargas Aignasse”, Sentencia de fecha 15 de agosto de 2004, Exma. Cámara de Apelaciones de Tucumán).-

Se considera, por consiguiente, que durante el terrorismo de estado vigente en nuestro país durante los años 1975/1983, las fuerzas armadas y de seguridad intentaron destruir total o parcialmente a una parte sustancial del grupo nacional argentino, mediante la matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que habrían de acarrear su destrucción física, total o parcial; y el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.-

Que las formas utilizadas para desmembrar y aniquilar el grupo de ciudadanos seleccionado fueron los secuestros, el interrogatorio bajo tormentos, la clandestinidad y la eliminación de las víctimas. Tal metodología fue idéntica en todo el territorio de la Nación y prolongada en el tiempo.-

Que tales circunstancias se encontrarían corroboradas por numerosas pruebas, correspondiendo destacar un informe elaborado por Alberto Luis Cattaneo agregado en la causa caratulada "Vargas Aignasse Guillermo s/ secuestro y desaparición" (Expte Nro 262/76), en el que consigna, entre las diversas acciones a realizar de particular significación para el "hecho político" a concretar, la orden emitida por la Junta de Comandantes Generales de "detener a partir del día 'D' a la hora 'H'" a todas aquellas personas que signifiquen un peligro cierto para el desarrollo de las acciones militares necesarias para la toma del poder. En el mismo documento se determino las "caracterización" de las personas a detener, las "prioridades", la constitución de "equipos especiales militares" y/o "comisiones especiales" para su ejecución y los "lugares de detención" de dichas personas. (fs 60/64 de la causa citada).-

Desde tales evidencias puede concluirse que la "reorganización nacional" que buscaba la dictadura desde su propia denominación como "Proceso de Reorganización Nacional", no se agotó en su sentido político sino que perseguía un quiebre y una trasfiguración total de los modos de construcción de identidades al interior del territorio, una reconstrucción de las relaciones sociales que afectaba la moral, la ideología, la familia y las instituciones. Es decir que no se trató solamente de eliminar a quienes integraban una o varias fuerzas políticas, se intentaba transformar a la sociedad toda, aniquilando a quienes encarnaban un modo de construcción de identidad social y eliminando -material y simbólicamente- la posibilidad de pensarse socialmente de otro modo.(Feierstein Daniel, Ob. Cit, p.53).-

Trasladando los conceptos vertidos a la situación fáctica emergente de autos, corresponde afirmar que la calificaciones y hechos ocurridos en el caso concreto utilizadas por las fuerzas militares y de seguridad para identificar al grupo u organizaciones a "aniquilar", no fue una identidad innata o adquirida por tales personas mediante un acto voluntario de identificación. Fue definitivamente, una calificación impuesta arbitrariamente por el represor para desarticular un grupo o sector nacional que no compartía la metodología impuesta o podría entorpecer el desarrollo del plan puesto en marcha por la Junta Militar.-

Consecuentemente se concluye que los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas, violación y abuso sexual, y homicidio calificado cometidos en perjuicio de las víctimas en autos, configurarían el marco del delito de Genocidio, tipificado en el derecho penal internacional.-

6. Participación Criminal.-

El Ministerio Público Fiscal imputa los hechos denunciados e investigados en la presente causa, a los Sres. Marcelo Omar Godoy, Celso Alberto Barraza, Tomás Adolfo Guemes, Roberto Heriberto Albornoz, Juan Carlos Benedicto en calidad de autores materiales; a los Sres. Pedro Orlando Caballero, Camilo Angel Colotti, Horacio Alberto Vaccaro, Adolfo Ernesto Moore, Carlos Eduardo Trucco, Ernesto Rivero, Ramón Alfredo Ojeda Fuentes, Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, Fernando Torres, Ernesto Alais, José

Carlos Sowinski, Hugo Enzo Soto, Tomás Adolfo Güemes, Luis Daniel De Urquiza, Augusto Leonardo Neme, y Miguel Alfredo Manuel Paz, en calidad de autores mediatos; a los Sres. Ariel Orlando Valdivieso y Luis Orlando Varela en calidad de autores materiales y mediatos; y al Sr. José Eloy Mijalchyk en calidad de partícipe secundario.-

Luego de analizada la prueba producida, se considera pertinente revisar la atribución de responsabilidad penal efectuada por el Ministerio Público Fiscal, particularmente desde el cargo y la función que ejercía cada imputado al momento de los hechos, el ámbito donde la misma se desarrollaba y su incidencia en la ejecución del plan de represión puesto en marcha por las Fuerzas Armadas.-

6.1. Autoría Material.

Autor de un delito es quien realiza el tipo penal dominando la ejecución que puede efectuar por sí mismo (autoría directa o inmediata), conjuntamente de acuerdo con otros (coautoría) o a través de otros (autoría mediata).

En el sistema del Código Penal argentino la descripción de las modalidades de la autoría y participación delictiva encuentran su configuración legal en las normas de los arts. 45 y 46 de dicho texto.

USO OFICIAL

Específicamente, respecto a los autores (art. 45 C.P.) se distingue el autor material "aquel que tomase parte en la ejecución del hecho", de los autores por determinación "aquellos que hubieren determinado a otro a cometer el hecho".

Paralelamente cabe consignar que la moderna doctrina penal asienta sus categorías de autor, luego de superados los criterios subjetivos-objetivos, en el dominio del hecho o del suceso: *es autor, quien domina el hecho, quien retiene en sus manos el curso causal y que por tanto puede decidir sobre el sí y el como del hecho, quien tiene la posibilidad de decidir la configuración central del acontecimiento*. (Zaffaroni, Alagia, Slokar; Manual de Derecho Penal Parte General, Ediar, 2005, Capítulo 24)

Trasladando los argumentos precedentes a la presente causa, puede presumirse, con el nivel de probabilidad que habilita esta etapa procesal, que:

(i) Los encartados Barraza Celso Alberto, Godoy Marcelo Omar, Benedicto Juan Carlos, Guemes Tomas, Colotti Camilo Angel, Moore Adolfo Ernesto, Alais Ernesto, Ariel Orlando Valdivieso, Carlos Eduardo Trucco, Ernesto Rivero, Ramón Alfredo Ojeda Fuente, Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, Fernando Torres, José Carlos Sowinski, Luis Orlando Varela, Augusto Leonardo Neme y Miguel Alfredo Manuel Paz, de conformidad con los cargos y las funciones que cumplieron durante la substanciación del plan sistemático de represión puesto en marcha por las Fuerzas Armadas, habrían intervenido en la comisión del delito de asociación ilícita agravada en calidad de autores directos (art. 45 del C.P.).-

(ii) De acuerdo con la prueba obrante en la causa, en particular los testimonios prestados por sobrevivientes, se considera que se encontraría presuntamente demostrada la intervención de *Celso Alberto Barraza*, en la comisión de delito de abuso sexual en perjuicio de A.V.B. (caso 10) y del delito de homicidio calificado en perjuicio de Pedro

Rondoletto y Jorge Osvaldo Rondoletto (casos 15 y 18) en calidad de autor material (art. 45 del CP).

(iii) Con relación a *Godoy Marcelo Omar*, de conformidad con la prueba obrante en autos, se encontraría presuntamente demostrada su intervención en la comisión de los delitos de privación ilegítima de libertad y tormentos en perjuicio de Víctor Fernando Alderete (caso 82), Nora Alicia del Valle Cajal (caso 83), y María Cristina Román de Fiad (caso 58), en calidad de autor material (art. 45 del C.P.).

(iv) Respecto de *Albornoz Roberto Heriberto*, de conformidad con las pruebas testimoniales incorporadas en autos, se encontraría presuntamente demostrada su intervención en la comisión del delito de privación ilegal de libertad con apremios y vejaciones en perjuicio de Juan Faustino Rodríguez (caso 39) Pedro Ricardo Rodríguez (caso 40), José Antonio Cano (caso 63), María Angélica Mazzamuto de Romero, Roberto Romero y Antonio Raúl Romero (casos 86, 87 y 88), y del delito de tormentos en perjuicio de María Angélica Mazzamuto de Romero y Antonio Raúl Romero (casos 86 y 88), en calidad de autor material (art. 45 del C.P.).

(v) Con relación a *Benedicto Juan Carlos*, de conformidad con las pruebas testimoniales incorporadas en autos, particularmente las declaraciones prestadas por Osvaldo Pérez y Nora del Valle Cajal, se encontraría presuntamente demostrada su intervención en la comisión del delito de tormentos en perjuicio de Adolfo Méndez Brander, Margarita Laskowski (CASOS 94 y 95) y Gustavo Adolfo Fochi (CASO 66) y en la comisión del delito de homicidio en perjuicio de Gustavo Adolfo Fochi (CASO 66), en calidad de autor material (art. 45 del CP).

(vi) Respecto al encartado *Guemes Tomás:* Que de la prueba obrante en la causa, se encontraría demostrado que Nora Cajal identifica entre el personal de Gendarmería que interrogaba a los prisioneros a un gendarme que apodaban “Moreno”. Paralelamente María Cristina Román de Fiad manifiesta que “Moreno” era el alias del gendarme Tomás Adolfo Güemes. (Declaración de Nora Cajal de fs. 1726/1728 del Expte. 443/84; Declaración de Román de Fiad de fs. 148/150 del Expte. 1410/05). Consecuentemente con la prueba testimonial referida, se considera que se encontraría presuntamente demostrada la intervención de Tomás Adolfo Güemes en la comisión de los delitos de privación ilegítima de libertad y tormentos en perjuicio de Nora Alicia del Valle Cajal (caso 83), en calidad de autor material (art. 45 del CP).

(v) Respecto a *Luis Orlando Varela* el MPF lo acusa en calidad de autor material en la comisión de los delitos de privación ilegítima de libertad y tormentos en perjuicio de Enrique Godoy (CASO 47), Adolfo Méndez Brander y María Margarita Laskowski (CASOS 95 y 96) y del delito de homicidio calificado en perjuicio de Gustavo Adolfo Fochi (CASO 66). No obstante, de la prueba ofrecida a tal efecto surgiría la identificación de un “Capitán” de apellido “Vargas”, o “Varela” que habría actuado como “segundo” del Jefe del Destacamento 142 (Declaración de Osvaldo Pérez de fs. 4005/4010) , lo que indicaría su relación funcional dentro del Destacamento, siendo insuficiente a fines de

entender demostrada su intervención directa en la comisión de los delitos que habrían perjudicado a Godoy (caso 47), Fochi (caso 66), Méndez Brander (caso 94) y Laskowski (caso 95).

(vi) En igual sentido cabe referir a la imputación de <u>*Ariel Rolando Valdiviezo*</u> quien es indicado como autor material en la comisión de los delitos de privación ilegítima de libertad y tormentos en perjuicio de Enrique Godoy (CASO 47), Adolfo Méndez Brander y María Margarita Laskowski (CASOS 95 y 96) y del delito de homicidio calificado en perjuicio de Gustavo Adolfo Fochi (CASO 66). De la prueba relevada, se advierte que quienes identifican a Valdiviezo, lo indican como un oficial del Ejército con funciones de mando o jefatura (Declaración de Godoy de fs. 2 y ss y fs. 16 y ss. Expte. n° 1553/05) lo que demostraría su relación funcional dentro del Regimiento 19, pero sería insuficiente para entender demostrada su intervención directa o material en los hechos endilgados.

6.2.- Autoría Mediata.

En particular, la autoría mediata o indirecta, aparece cuando el agente se vale de otro que actúa pero no comete el injusto sea porque actúa sin tipicidad objetiva, sin dolo, o justificadamente. En el marco de tales conceptos, Roxin elaboró la tesis de que existe otra forma de autoría donde el dominio del hecho se da por fuerza de un aparato organizado de poder, sosteniéndose en que los conceptos usuales no son aplicables cuando se trata de crímenes de estado, de guerra y de organización en los que el determinador y el determinado cometen el mismo delito, siendo decisivo el carácter fungible del último, que puede ser cambiado a voluntad como si se tratara de un artefacto mecánico: *cuanto más alejado de la víctima y de la conducta lesiva esta el ejecutor, más cerca está entonces de los órganos ejecutivos de poder lo que le proporciona mayor dominio del hecho* (Zaffaroni, Alagia, Slokar; Manual de Derecho Penal Parte General, Ediar, 2005, Capítulo 24)

Consecuentemente, conforme la teoría expuesta, para determinar si una persona actuó como autor mediato en virtud de dominio de la organización, es necesario demostrar que el imputado ejercía un cargo y cumplía funciones con capacidades decisorias dentro de la organización, y que en tal condición habría intervenido en los hechos delictivos en tanto estos habrían sido perpetrados *"por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso"*, y su responsabilidad deviene "*… en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando: a) hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber, que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y b) no hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento*" (art. 28 del Estatuto de Roma).

Aplicado al caso que nos ocupa, puede afirmarse que los testigos/víctimas que declararon en autos son claros y coincidentes en afirmar que entre abril de 1976 y hasta 1978 funcionaba dentro de la jurisdicción del Arsenal Miguel de Azcuénaga dependiente de

USO OFICIAL

la V Brigada de Infantería lo que se conoce en la jerga militar como un lugar de reunión de detenidos “L.R.D.”, en donde de manera generalizada y sistemática se alojaba en condiciones inhumanas a personas previamente secuestradas y torturadas, y en donde se habría definido el destino final de las mismas.

Para determinar la responsabilidad penal por autoría mediata, corresponde entonces indagar si, atento el cargo y la función que ejercían los imputados y al ámbito donde esta se desarrollaba, puede presumirse que habrían tenido intervención en la comisión de los comportamientos delictivos corroborados en autos, por haber ejercido el dominio sobre los mismos a través del *dominio de la organización*.-

En tal sentido se advierte que el Ministerio Público Fiscal formuló su acusación contra todos los encartados no identificados como autores materiales, en el marco de la autoría mediata.

No obstante, a entender de este magistrado y de conformidad con la información emergente de sus legajos personales, se advierte que no todos los imputados habrían detentado grados o ejercido funciones de mando en la estructura jerárquica vertical vigente en los organismos dependientes o integrantes del Ejército.

Por consiguiente, corresponde valorar la situación particular de cada imputado en el ámbito donde prestó servicios, para dilucidar la cuestión planteada.

6.2.1 Destacamento 142: Los encartados Luis Daniel De Urquiza, Adolfo Ernesto Moore, Ramón Ojeda Fuentes, Fernando Torres, Horacio Vaccaro, Luis Orlando Varela y Augusto Neme se encuentran imputados como autores mediatos por los cargos y funciones que habrían ejercido en el Destacamento de Inteligencia 142.

Que sobre el particular se advierte que, ninguno de los encartados mencionados habría ejercido la Jefatura del Destacamento atento a que, de la prueba recolectada en la causa, durante los años 1975/1976 el Jefe del Destacamento 142 fue *Eusebio Gustavo González Bread y Arnaldo Rodolfo Pedro Busso*, y durante los años 1977/1978 fue *Arnaldo Rodolfo Pedro Busso y Alejandro Raúl Rivas*.

Que tales personas no se encuentran imputadas en la presente causa (presumiéndose su fallecimiento atento información brindada por el MPF y por lo declarado por varios de los encartados al momento de prestar declaración indagatoria).

Que conforme la prueba substanciada en la presente causa, quien ejercía la Jefatura del Destacamento 142, habría sido quien funcionaba como “enlace” de dicha dependencia con la “Comunidad Informativa”, y con el “Comando de Operaciones Tácticas” ámbitos éstos conformados por las máximas autoridades del Ejército, Fuerza Aérea, Policía (Federal y Provincial), Gendarmería Nacional y otros organismos, ámbitos éstos donde se habrían decidido las medidas ejecutivas y operativas pertinentes a fin consumar el plan de represión puesto en marcha por las Fuerzas Armadas. (Cfr. Informe Destacamento 142 del Programa Verdad y Justicia, Declaración testimonial de Juan Martín Expte. 1921/04).

Ahora bien, no obstante corroborarse que ninguno de los encartados que revistieron funciones en el Destacamento 142 habrían cumplido la función de "Jefe" de dicho organismo, de la prueba recolectada en la causa surgiría que algunos de los miembros del Destacamento habrían ejercido funciones de mando, lo que acreditaría, presuntamente, su poder de decisión respecto de las acciones puestas en marcha en el contexto del plan de represión vigente.

En tal situación se encontrarían Augusto Leonardo Neme, quien al momento en que ocurrieron los hechos que se investigan en autos, revestía el cargo de Mayor en el Comando de la V Brigada de Infantería y habría estado asignado a la "zona de operaciones" conforme sus propios dichos; al Capitán Luis Orlando Varela, quien habría cumplido funciones de Jefe Sección Comando Servicios y luego Jefe de la Primera Sección Ejecución, ambos en el Destacamento 142, entre el 23 de diciembre de 1975 hasta el 27 de noviembre de 1977; y al Capitán Adolfo Ernesto Moore, quien cumplió funciones de Jefe del Grupo AEI del Destacamento 142 entre el 3 de enero de 1977 al 22 de febrero de 1979).

*** AUGUSTO LEONARDO NEME**: Considerando que la V Brigada de Infantería habría sido el organismo del Ejercito a cargo del centro clandestino que habría funcionado en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, y que el encartado Neme habría ejercido un cargo con funciones de mando dentro de dicha estructura, corresponde a su respecto tener por acreditada, con el nivel de probabilidad que habilita esta etapa procesal, su intervención en calidad de autor mediato en la comisión de los delitos de ***(i) Violación de domicilio (art. 151 del CP)*** en perjuicio de Argañaraz Rosario, Argañaraz Miguel Alberto, Quinteros René Manuel, Fote Fortunato Leandro, Godoy Enrique, Adad Julio Ricardo*;* Suarez Julio Guillermo***; (ii) Privación ilegítima de libertad con apremios y/o vejaciones (art. 144 bis inciso 1 y 2 ley 14616)*** en perjuicio de Argañaraz Rosario, Argañaraz Miguel Alberto, Quinteros René Manuel, Fote Fortunato Leandro, Godoy Enrique, Adad Julio Ricardo, Suarez Julio Guillermo, Pereyra Benigno; Lerner Rodolfo Hugo, Quinteros Juan Manuel, Suarez Manuel Humberto, Monasterio Francisco Carlos, Moyano María Candelaria*; **(iii) Torturas agravadas (art. 144 ter primer y segundo párrafo, Ley 14616)*** en perjuicio de Argañaraz Rosario, Argañaraz Miguel Alberto, Quinteros René Manuel, Fote Fortunato Leandro, Godoy Enrique, Abad Julio Ricardo, Suarez Julio Guillermo, Pereyra Benigno; Lerner Rodolfo Hugo, Quinteros Juan Manuel, Suarez Manuel Humberto, Monasterio Francisco Carlos, Moyano María Candelaria*; **(iv) Torturas seguidas de muerte (art. 144 ter tercer párrafo)*** en perjuicio de Abad Julio Ricardo; y ***(v) Homicidio agravado (art. 80 inc. 2, 6 y 7 del CP)*** en perjuicio de Lerner Rodolfo Hugo, delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado.

*** LUIS ORLANDO VARELA:** De acuerdo con el testimonio de Osvaldo Pérez el Capitán Varela ("Capitán" de apellido "Vargas", o "Varela") es reconocido como oficial a cargo de "fuerzas de tareas" dentro del Destacamento 142 (Declaración de Osvaldo Pérez de fs. 4005/4010), lo que supone que, en los hechos, habría ejercido poder de mando o decisión respecto al accionar represivo, por consiguiente corresponde tener por

USO OFICIAL

presuntamente acreditada su intervención en calidad de autor mediato en la comisión de los delitos de ***(i) Violación de domicilio (art. 151 del CP)*** en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, CORRAL Ana Cristina, CAMPOPIANO César Gustavo, MEDINA Celia Georgina, NIEVA Oscar René, YACKEL Ernestina Teresa; BARRIONUEVO Mario, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, IRAMAIN María Trinidad, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, GÓMEZ Juan de Dios, GODOY Enrique, DÍAZ Manuel Julio, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, YAÑEZ Rafael Vitalino, SÁNCHEZ María Teresa, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, FOCHI Gustavo Adolfo, MORALES Reyes Humberto, GONZÁLEZ Humberto Alfredo; LORENZO LERMA Andrés Héctor, CHAPARRO Santos Aurelio, IÑÍGUEZ Gloria del Valle, BRIZUELA Ramón, CORONEL Alfredo Antonio, CARABAJAL Ercilia Dolores, HOYOS Blanca, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, ALDERETE Víctor Fernando, QUINTEROS Juan Manuel, MAZZAMUTO DE ROMERO María Angélica, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria, HAZURÚN Teresita Cándida, MÉNDEZ BRANDER Ángel Adolfo, LASKOWSKI María Margarita, CANTOS Luis; ***(ii) Privación ilegítima de libertad con apremios y/o vejaciones (art. 144 bis inciso 1 y 2 ley 14616)*** en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, FERNÁNDEZ Enrique Raúl, CORRAL Ana Cristina, CAMPOPIANO César Gustavo, MEDINA Celia Georgina, CAMPOPIANO Julio César, NIEVA Oscar René, YACKEL Ernestina Teresa; BARRIONUEVO Mario, BARRIONUEVO Antonia del Valle, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, IRAMAIN María Trinidad, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, DÍAZ MACÍAS Enrique Gonzalo, AUGIER Alberto Argentino, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, SOSA DE REYNAGA Ana María, MANFREDI Ángel Vicente, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, FOTE Fortunato Leandro, MÁRQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, JUSTO Héctor Oscar, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, ACUÑA Baltasar, BARRIONUEVO Nemesio Humberto,

ALMERICO José, GÓMEZ Juan de Dios, GODOY Enrique, DÍAZ Manuel Julio, PEREYRA Benigno Alberto, ALARCÓN Rina Rosa, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, FÜRTH Federico Adolfo, GIRIBALDI Osvaldo José Gregorio, FALÚ Luis Eduardo, GONZÁLEZ Hernán Eugenio, VACA RUBIO Raúl Alberto, RODRÍGUEZ ROMÁN DE FIAD María Cristina, YAÑEZ Rafael Vitalino, SAFAROV Víctor Hugo, SÁNCHEZ María Teresa, ARCHETTI Armando, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, FOCHI Gustavo Adolfo, MORALES Reyes Humberto, LERNER Rodolfo Hugo, CARRERAS Juan Francisco, GONZÁLEZ Humberto Alfredo; LORENZO LERMA Andrés Héctor, PASTORI Juan Carlos, CRUZ Ernesto José Segundo, CHAPARRO Santos Aurelio, IÑÍGUEZ Gloria del Valle, BRIZUELA Ramón, CORONEL Alfredo Antonio, CARABAJAL Ercilia Dolores, HOYOS Blanca, ABAD Julio Ricardo, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, ALDERETE Víctor Fernando, CAJAL Nora Alicia del Valle, FABIO Diana Elsa, QUINTEROS Juan Manuel, MAZZAMUTO DE ROMERO María Angélica, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria, HAZURÚN Teresita Cándida, MÉNDEZ BRANDER Ángel Adolfo, LASKOWSKI María Margarita, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Luis, CANTOS Germán; ***(iii) Torturas agravadas (art. 144 ter primer y segundo párrafo, Ley 14616)*** en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, FERNÁNDEZ Enrique Raúl, CORRAL Ana Cristina, CAMPOPIANO César Gustavo, MEDINA Celia Georgina, NIEVA Oscar René, YACKEL Ernestina Teresa; BARRIONUEVO Mario, BARRIONUEVO Antonia del Valle, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, IRAMAIN María Trinidad, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, AUGIER Alberto Argentino, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, SOSA DE REYNAGA Ana María, MANFREDI Ángel Vicente, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, FOTE Fortunato Leandro, MÁRQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, JUSTO Héctor Oscar, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, ACUÑA Baltasar, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, GODOY Enrique, DÍAZ Manuel Julio, PEREYRA Benigno Alberto, ALARCÓN Rina Rosa, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, FÜRTH Federico Adolfo, GIRIBALDI Osvaldo José Gregorio, FALÚ Luis Eduardo, GONZÁLEZ Hernán Eugenio, VACA RUBIO Raúl Alberto, RODRÍGUEZ ROMÁN DE FIAD María Cristina, YAÑEZ Rafael Vitalino, SÁNCHEZ María Teresa, ARCHETTI Armando, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, MORALES Reyes Humberto, LERNER Rodolfo Hugo, CARRERAS Juan Francisco; LORENZO LERMA Andrés Héctor,

USO OFICIAL

PASTORI Juan Carlos, CRUZ Ernesto José Segundo, CHAPARRO Santos Aurelio, IÑÍGUEZ Gloria del Valle, BRIZUELA Ramón, CORONEL Alfredo Antonio, CARABAJAL Ercilia Dolores, HOYOS Blanca, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, ALDERETE Víctor Fernando, CAJAL Nora Alicia del Valle, FABIO Diana Elsa, QUINTEROS Juan Manuel, MAZZAMUTO DE ROMERO María Angélica, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria, HAZURÚN Teresita Cándida, LASKOWSKI María Margarita, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Luis, CANTOS Germán; ***(iv) Torturas seguidas de muerte (art. 144 ter tercer párrafo del CP)*** en perjuicio de Julio César CAMPOPIANO, Juan de Dios GOMEZ, Enrique Gonzalo DIAZ MACIAS, Víctor SAFAROV, Humberto Alfredo GONZALEZ, Gustavo Adolfo FOCHI, Julio Ricardo ABAD y Ángel Adolfo MÉNDEZ BRANDER; y ***(iv) Homicidio agravado (art. 80 inc. 2, 6 y 7 del CP)*** en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, FERNÁNDEZ Enrique Raúl, CORRAL Ana Cristina, NIEVA Oscar René, BARRIONUEVO Mario, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, ARGAÑARAZ Rosario, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, IRAMAIN María Trinidad, CORBALÁN Félix Viterbo, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, SOSA DE REYNAGA Ana María, MANFREDI Ángel Vicente, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, FOTE Fortunato Leandro, MÁRQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, DÍAZ Manuel Julio, PEREYRA Benigno Alberto, ALARCÓN Rina Rosa, FÜRTH Federico Adolfo, GIRIBALDI Osvaldo José Gregorio, FALÚ Luis Eduardo, GONZÁLEZ Hernán Eugenio, VACA RUBIO Raúl Alberto, YAÑEZ Rafael Vitalino, SÁNCHEZ María Teresa, ARCHETTI Armando, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, MORALES Reyes Humberto, LERNER Rodolfo Hugo, CARRERAS Juan Francisco, PASTORI Juan Carlos, CORONEL Alfredo Antonio, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Luis, CANTOS Germán; delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado.

*** ADOLFO ERNESTO MOORE:** Juan Martín afirma en su declaración que *"Los interrogadores pertenecían al Destacamento 142 de Inteligencia y eran oficiales y suboficiales del Ejército, y personal civil adscripto que se desempeñaban como "personal de inteligencia". Posteriormente, habiendo sido trasladado ya a la Jefatura pude identificar a dos miembros del Destacamento. Uno que aparentemente era el Jefe y que uno de sus apellidos era Ventura y tenía el grado de Capitán. Otro, del mismo grado, a quien había visto ya en Nueva Baviera era llamado allí "Capitán Mur", aunque en Jefatura, ya vestido de civil, oí mencionar como Capitán Medina"* (fs. 160 Expte. 1921/04)

Tales afirmaciones hacen suponer, con el grado de probabilidad que habilita esta etapa procesal, que Adolfo Moore, en los hechos, habría ejercido poder de mando o decisión dentro del Destacamento 142 con relación al accionar represivo, por consiguiente corresponde tener por presuntamente acreditada su intervención en calidad de autor mediato en la comisión de los delitos de ***(i) Violación de domicilio (art. 151 del CP)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, BERÓN Oscar Rafael, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, ALMERICO José, GODOY Enrique, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, CANTOS Luis; ***(ii) Privación ilegítima de libertad con apremios y/o vejaciones (art. 144 bis inciso 1 y 2 ley 14616)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, SOLDATI Luis Alberto, AUGIER Alberto Argentino, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, SAADE SAIEG Antonio Naief, BERÓN Oscar Rafael, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, MÁRQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, JUSTO Héctor Oscar, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, ACUÑA Baltasar, ALMERICO José, GODOY Enrique, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, ARCHETTI Armando, CRUZ Ernesto José Segundo, ABAD Julio Ricardo, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, CANTOS Luis, CANTOS Germán; ***(iii) Torturas agravadas (art. 144 ter primer y segundo párrafo, Ley 14616)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, SOLDATI Luis Alberto, AUGIER Alberto Argentino, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, SAADE SAIEG Antonio Naief, BERÓN Oscar Rafael, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, MÁRQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, JUSTO Héctor Oscar, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, ACUÑA Baltasar, ALMERICO José, GODOY Enrique, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, ARCHETTI Armando, CRUZ Ernesto José Segundo, ABAD Julio Ricardo, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, CANTOS Luis, CANTOS Germán; ***(iv) Torturas seguidas de muerte (art. 144 ter del CP)*** en perjuicio de Julio Ricardo ABAD; y ***(iv) Homicidio agravado (art. 80 inc. 2, 6 y 7 del CP)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, SOLDATI Luis Alberto, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, SAADE SAIEG Antonio Naief, BERÓN Oscar Rafael, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, MÁRQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, ALMERICO José, ARCHETTI Armando, CANTOS Luis; delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado.

Finalmente, respecto de los encartados Luis Daniel De Urquiza, Ramón Ojeda Fuentes, Fernando Torres y Horacio Vaccaro, no encontrándose demostrado a la fecha que

USO OFICIAL

hayan revestido funciones que les hayan permitido ejercer dominio sobre la organización, su intervención no podría ser valorada en el marco de una autoría mediata, sin perjuicio de una evaluación de su accionar, en otro ámbito de intervención.-

6.2.2. Regimiento 19: Los encartados Ernesto Alais, Camilo Colotti, Miguel Alfredo Manuel Paz, Ariel Rolando Valdiviezo y Carlos Trucco se encuentran imputados como autores mediatos por los cargos y funciones que cumplían en el Regimiento 19.

Que atento la información emergente de los legajos personales, al momento de los hechos que se investigan en autos, los encartados ejercían los grados y las funciones que se mencionan a continuación: Ernesto Alais con el grado de Teniente Coronel ejerció el cargo de Jefe del Regimiento 19 entre el 16 de diciembre de 1975 y el 5 de diciembre de 1977; Camilo Colotti con el grado de Mayor de Infantería ejerció el cargo de Segundo Jefe del Regimiento 19 entre el 3 de diciembre de 1975 y el 9 de febrero de 1979; Miguel Alfredo Manuel Paz con el grado de Mayor de Infantería, ejerció el cargo de Segundo Jefe del Regimiento 19 entre el 11 de diciembre de 1974 al 14 de diciembre de 1976 habiendo ejercido la Jefatura de la Fuerza de tareas "Aconquija"; Ariel Rolando Valdiviezo con el grado de Teniente Primero presta servicios en el Regimiento 19 entre el 1975 y 1979, como Jefe del Equipo de Combate en la zona de operaciones de Caspichango y Santa Lucía, ascendiendo en el año 1977 al grado de Capitán; y Carlos Trucco con el grado de Teniente Primero, cumplió funciones en el Regimiento 19 específicamente en la Fuerza de tareas "Aconquija" entre 9 de enero de 1975 hasta el 16 de octubre de 1977.

Consecuentemente, atento las funciones y cargos cumplidos, y a la relación funcional del Regimiento 19 con el plan de represión y con los detenidos clandestinos alojados en el centro que habría funcionado en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, puede concluirse, con el grado de probabilidad que habilita esta etapa procesal que, los encartados Ernesto Alais, Camilo Colotti, Miguel Alfredo Manuel Paz y Ariel Rolando Valdiviezo, conocieron o tuvieron la obligación de conocer el carácter criminal y el contexto generalizado y sistemático en que fueron cometidos los delitos de *violación de domicilio, privación ilegítima de libertad con apremios y/o vejaciones, torturas, torturas seguidas de muerte*, y *homicidios agravados*, que se investigaron en autos; y a pesar de ello se puede tener por descartado -conforme a las pruebas merituadas- que los imputados hayan tomado alguna disposición a su alcance para evitar, investigar, sancionar, denunciar, o al menos informar a un superior la criminalidad de estos actos; resultando de esta manera penalmente responsables en calidad de autores mediatos por los delitos investigados en autos, con el grado de probabilidad que habilita esta etapa procesal, conforme la imputación que se individualiza a continuación:

*** ALAIS ERNESTO:** se lo considera autor mediato de los delitos de ***(i) Violación de domicilio (art. 151 del CP)*** en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, CORRAL Ana Cristina, CAMPOPIANO César Gustavo, MEDINA Celia Georgina, NIEVA Oscar René, YACKEL Ernestina Teresa; BARRIONUEVO Mario, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES

Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, IRAMAIN María Trinidad, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, GÓMEZ Juan de Dios, GODOY Enrique, DÍAZ Manuel Julio, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, YAÑEZ Rafael Vitalino, SÁNCHEZ María Teresa, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, FOCHI Gustavo Adolfo, MORALES Reyes Humberto, GONZÁLEZ Humberto Alfredo; LORENZO LERMA Andrés Héctor, CHAPARRO Santos Aurelio, IÑÍGUEZ Gloria del Valle, BRIZUELA Ramón, CORONEL Alfredo Antonio, CARABAJAL Ercilia Dolores, HOYOS Blanca, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, ALDERETE Víctor Fernando, QUINTEROS Juan Manuel, MAZZAMUTO DE ROMERO María Angélica, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria, HAZURÚN Teresita Cándida, MÉNDEZ BRANDER Ángel Adolfo, LASKOWSKI María Margarita, CANTOS Luis; ***(ii) Privación ilegítima de libertad con apremios y/o vejaciones (art. 144 bis inciso 1 y 2 ley 14616)*** en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, FERNÁNDEZ Enrique Raúl, CORRAL Ana Cristina, CAMPOPIANO César Gustavo, MEDINA Celia Georgina, CAMPOPIANO Julio César, NIEVA Oscar René, YACKEL Ernestina Teresa; BARRIONUEVO Mario, BARRIONUEVO Antonia del Valle, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, IRAMAIN María Trinidad, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, DÍAZ MACÍAS Enrique Gonzalo, AUGIER Alberto Argentino, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, SAADE SAIEG Antonio Naief, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, SOSA DE REYNAGA Ana María, MANFREDI Ángel Vicente, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, FOTE Fortunato Leandro, MÁRQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, JUSTO Héctor Oscar, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, ACUÑA Baltasar, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, GÓMEZ Juan de Dios, GODOY Enrique, DÍAZ Manuel Julio, PEREYRA Benigno Alberto, ALARCÓN Rina Rosa, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, FÜRTH Federico Adolfo, GIRIBALDI Osvaldo José Gregorio, FALÚ Luis Eduardo, GONZÁLEZ Hernán Eugenio, VACA RUBIO Raúl Alberto, RODRÍGUEZ ROMÁN DE FIAD María Cristina, YAÑEZ Rafael Vitalino,

USO OFICIAL

SAFAROV Víctor Hugo, SÁNCHEZ María Teresa, ARCHETTI Armando, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, FOCHI Gustavo Adolfo, MORALES Reyes Humberto, LERNER Rodolfo Hugo, CARRERAS Juan Francisco, GONZÁLEZ Humberto Alfredo; LORENZO LERMA Andrés Héctor, PASTORI Juan Carlos, CRUZ Ernesto José Segundo, CHAPARRO Santos Aurelio, IÑÍGUEZ Gloria del Valle, BRIZUELA Ramón, CORONEL Alfredo Antonio, CARABAJAL Ercilia Dolores, HOYOS Blanca, ABAD Julio Ricardo, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, ALDERETE Víctor Fernando, CAJAL Nora Alicia del Valle, FABIO Diana Elsa, QUINTEROS Juan Manuel, MAZZAMUTO DE ROMERO María Angélica, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria, HAZURÚN Teresita Cándida, MÉNDEZ BRANDER Ángel Adolfo, LASKOWSKI María Margarita, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Luis, CANTOS Germán; ***(iii) Torturas agravadas (art. 144 ter primer y segundo párrafo, Ley 14616)*** en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, FERNÁNDEZ Enrique Raúl, CORRAL Ana Cristina, CAMPOPIANO César Gustavo, MEDINA Celia Georgina, NIEVA Oscar René, YACKEL Ernestina Teresa; BARRIONUEVO Mario, BARRIONUEVO Antonia del Valle, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, IRAMAIN María Trinidad, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, AUGIER Alberto Argentino, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, BERÓN Oscar Rafael, SOSA DE REYNAGA Ana María, MANFREDI Ángel Vicente, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, FOTE Fortunato Leandro, MÁRQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, JUSTO Héctor Oscar, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, ACUÑA Baltasar, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, GODOY Enrique, DÍAZ Manuel Julio, PEREYRA Benigno Alberto, ALARCÓN Rina Rosa, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, FÜRTH Federico Adolfo, GIRIBALDI Osvaldo José Gregorio, FALÚ Luis Eduardo, GONZÁLEZ Hernán Eugenio, VACA RUBIO Raúl Alberto, RODRÍGUEZ ROMÁN DE FIAD María Cristina, YAÑEZ Rafael Vitalino, SÁNCHEZ María Teresa, ARCHETTI Armando, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, MORALES Reyes Humberto, LERNER Rodolfo Hugo, CARRERAS Juan Francisco; LORENZO LERMA Andrés Héctor, PASTORI Juan Carlos, CRUZ Ernesto José Segundo, CHAPARRO Santos Aurelio, IÑÍGUEZ Gloria del Valle, BRIZUELA Ramón, CORONEL Alfredo Antonio, CARABAJAL Ercilia Dolores, HOYOS Blanca, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, ALDERETE Víctor Fernando, CAJAL Nora Alicia del Valle, FABIO Diana Elsa, QUINTEROS Juan Manuel, MAZZAMUTO DE

USO OFICIAL

ROMERO María Angélica, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria, HAZURÚN Teresita Cándida, LASKOWSKI María Margarita, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Luis, CANTOS Germán; ***(iv) Torturas seguidas de muerte (art. 144 ter tercer párrafo Ley 14616)*** en perjuicio de Julio César CAMPOPIANO, Juan de Dios GOMEZ, Enrique Gonzalo DIAZ MACIAS, Víctor SAFAROV, Humberto Alfredo GONZALEZ, Gustavo Adolfo FOCHI, Julio Ricardo ABAD y Ángel Adolfo MÉNDEZ BRANDER*;* y ***(iv) Homicidio agravado (art. 80 inc. 2, 6 y 7 del CP)*** en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, FERNÁNDEZ Enrique Raúl, CORRAL Ana Cristina, NIEVA Oscar René, BARRIONUEVO Mario, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, ARGAÑARAZ Rosario, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, IRAMAIN María Trinidad, CORBALÁN Félix Viterbo, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, BERÓN Oscar Rafael, SOSA DE REYNAGA Ana María, MANFREDI Ángel Vicente, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, FOTE Fortunato Leandro, MÁRQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, DÍAZ Manuel Julio, PEREYRA Benigno Alberto, ALARCÓN Rina Rosa, FÜRTH Federico Adolfo, GIRIBALDI Osvaldo José Gregorio, FALÚ Luis Eduardo, GONZÁLEZ Hernán Eugenio, VACA RUBIO Raúl Alberto, YAÑEZ Rafael Vitalino, SÁNCHEZ María Teresa, ARCHETTI Armando, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, MORALES Reyes Humberto, LERNER Rodolfo Hugo, CARRERAS Juan Francisco; PASTORI Juan Carlos, CORONEL Alfredo Antonio, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Luis, CANTOS Germán; delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado**.**

*** COLOTTI CAMILO ANGEL** se lo considera autor mediato en la comisión de los delitos de ***(i) Violación de domicilio (art. 151 del CP)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, CANTOS Luis; ***(ii) Privación ilegítima de libertad con apremios y/o vejaciones (art. 144 bis inciso 1 y 2 ley 14616)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, FOTE Fortunato Leandro, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, PEREYRA Benigno Alberto, ABAD Julio Ricardo, CANTOS Luis; ***(iii) Torturas agravadas (art. 144 ter primer y segundo párrafo, Ley 14616)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, FOTE Fortunato Leandro, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, PEREYRA Benigno Alberto, CANTOS Luis ***; (iv) Torturas seguidas de muerte (art. 144 ter tercer párrafo)*** en perjuicio de Julio Ricardo ABAD; y ***(iv) Homicidio agravado (art. 80 inc. 2, 6 y 7 del CP)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, FOTE Fortunato Leandro,

RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, PEREYRA Benigno Alberto, CANTOS Luis; delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado**.-**

*** PAZ MIGUEL ALFREDO MANUEL,** se lo considera autor mediato en la comisión del delito de ***(i) Violación de domicilio (art. 151 del CP)*** en perjuicio de Quinteros Rene Manuel, Godoy Enrique, Quinteros Juan Manuel, Suarez Julio Guillermo, Suarez Manuel Humberto, Monasterio Francisco Carlos, Moyano María Candelaria; ***(ii) Privación ilegítima de libertad con apremios y/o vejaciones (art. 144 bis inciso 1 y 2 ley 14616)*** en perjuicio de Quinteros Rene Manuel, Fortunato Leandro Fote, Godoy Enrique, Pereyra Benigno Alberto, Lerner Rodolfo Hugo, Abad Julio Ricardo, Quinteros Juan Manuel, Suarez Julio Guillermo, Suarez Manuel Humberto, Monasterio Francisco Carlos, Moyano María Candelaria; ***(iii) Torturas agravadas (art. 144 ter primer y segundo párrafo, Ley 14616)*** en perjuicio de Quinteros Rene Manuel, Fortunato Leandro Fote, Godoy Enrique, Pereyra Benigno Alberto, Lerner Rodolfo Hugo, Abad Julio Ricardo, Quinteros Juan Manuel, Suarez Julio Guillermo, Suarez Manuel Humberto, Monasterio Francisco Carlos, Moyano María Candelaria; ***(iv) Torturas seguidas de muerte (art. 144 ter tercer párrafo)*** en perjuicio de Abad Julio Ricardo; y ***(iv) Homicidio agravado (art. 80 inc. 2, 6 y 7 del CP)*** en perjuicio de Fortunato Leandro Fote, Pereyra Benigno Alberto, Lerner Rodolfo Hugo; delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado

*** VALDIVIEZO ARIEL ROLANDO** se lo considera autor mediato en la comisión de los delitos de ***(i) Violación de domicilio (art. 151 del CP)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, QUINTEROS René Manuel, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, GODOY Enrique, QUINTEROS Juan Manuel, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria; ***(ii) Privación ilegítima de libertad con apremios y/o vejaciones (art. 144 bis inciso 1 y 2 ley 14616)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, FOTE Fortunato Leandro, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, GODOY Enrique, PEREYRA Benigno Alberto, LERNER Rodolfo Hugo, ABAD Julio Ricardo, QUINTEROS Juan Manuel, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria; ***(iii) Torturas agravadas (art. 144 ter primer y segundo párrafo, Ley 14616)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, FOTE Fortunato Leandro, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, GODOY Enrique, PEREYRA Benigno Alberto, LERNER Rodolfo Hugo, QUINTEROS Juan Manuel, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria***; (iv) Torturas seguidas de muerte (art. 144 ter tercer párrafo)*** en perjuicio de Julio Ricardo ABAD; y ***(iv) Homicidio agravado (art. 80 inc. 2, 6 y 7 del CP)***

en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, FOTE Fortunato Leandro, PEREYRA Benjamín, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, LERNER Rodolfo Hugo; delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado**.-**

*** TRUCCO CARLOS,** de la prueba obrante en la causa puede colegirse a su respecto que, sin bien no se encuentra acreditado que formalmente el encartado haya ejercido la Jefatura de una fuerza de tareas en la estructura del Regimiento 19, revistiendo a la fecha en que ocurrieron los hechos un grado militar de menor jerarquía, de la prueba agregada en la causa "Suarez" (caso 89, Expte. 256/08, fs. 7/8) surgiría que el encartado habría sido reconocido como uno de los oficiales del ejército a cargo de la Base de Santa Lucía, lo que supone que, en los hechos, habría ejercido poder de mando o decisión respecto al accionar represivo en Caspichango y Santa Lucía, consecuentemente se lo considera autor mediato en la comisión del delito de ***(i) Violación de domicilio (art. 151 del CP)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, QUINTEROS René Manuel, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, GODOY Enrique, QUINTEROS Juan Manuel, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria; ***(ii) Privación ilegítima de libertad con apremios y/o vejaciones (art. 144 bis inciso 1 y 2 ley 14616)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, FOTE Fortunato Leandro, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, GODOY Enrique, PEREYRA Benigno Alberto, LERNER Rodolfo Hugo, ABAD Julio Ricardo, QUINTEROS Juan Manuel, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria; ***(iii) Torturas agravadas (art. 144 ter primer y segundo párrafo, Ley 14616)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, FOTE Fortunato Leandro, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, GODOY Enrique, PEREYRA Benigno Alberto, LERNER Rodolfo Hugo, QUINTEROS Juan Manuel, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria***; (iv) Torturas seguidas de muerte (art. 144 ter tercer párrafo)*** en perjuicio de Julio Ricardo ABAD; y ***(iv) Homicidio agravado (art. 80 inc. 2, 6 y 7 del CP)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, FOTE Fortunato Leandro, PEREYRA Benjamín, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, LERNER Rodolfo Hugo; delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado.

6.2.3. Gendarmería Nacional*:* Valorando la situación de los encartados que pertenecieron a Gendarmería Nacional, acusados por el Ministerio Público Fiscal, se advierte que el único que habría revestido un grado de Oficial con capacidad de mando, atento la estructura jerárquica de dicha fuerza, es el Comandante de Gendarmería Carlos La

USO OFICIAL

Fuente, quien a la fecha no pudo ser habido, encontrándose pendiente una orden de detención a su respecto.

Consecuentemente, considerando las funciones que habría desempeñado Gendarmería (cfr. Punto 2.4) en el centro clandestino que habría funcionado en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, y que los acusados Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, Ernesto Rivero, José Carlos Sowinski y Tomás Adolfo Güemes, al momento de los hechos habrían detentado grados inferiores en la línea de Oficiales de Gendarmería, su intervención no podría ser valorada en el marco de una autoría mediata, sin perjuicio de la evaluación de su accionar, en otro ámbito de intervención.

6.2.4. Compañía de Arsenales 5: Los encartados Pedro Osvaldo Caballero y Hugo Enzo Soto, con el rango de Mayor del Ejército, habrían cumplido función de Jefe de la Compañía de Arsenales 5, unidad militar que conforme la prueba recolectada en la causa cumplía una función técnica y operativa, sin haberse acreditado a la fecha que tal organismo militar haya asumido función alguna en la organización del centro clandestino que habría funcionado en el predio del Arsenal Miguel de Azcuénaga.

No obstante, conforme fuera ya valorado, no resulta verosímil que los encartados hayan desconocido la existencia de dicho centro clandestino, y desde tal presunción puede colegirse que los encartados habrían colaborado en el mantenimiento de la clandestinidad del centro de detención que habría funcionado en el predio del Arsenal Miguel de Azcuénaga, permitiendo de tal manera el funcionamiento de la garantía de impunidad vigente.

El art. 277 del C.P., sin perjuicio de las modificaciones legales de su texto, tipifica el delito de encubrimiento, como delito independiente que requiere como presupuesto una acción delictiva previa en la cual el autor no haya participado de ninguna manera. Implica una conducta de ayuda al autor de un delito por actos posteriores a la comisión, sin previo acuerdo y con la intención de sustraerlo a la administración de justicia. (Donna Edgardo, Derecho Penal, Parte Especial, T. III, Ed. Rubinzal Culzoni, p. 461 y ss.).-

Desde tal perspectiva, considerando las funciones que revestían los encartados Caballero y Soto, existiría una clara presunción respecto a que habrían actuado como encubridores, al haber colaborado con los autores o partícipes de los delitos denunciados en autos, a fin de que éstos eludan las investigaciones de la autoridad y se sustraigan a la acción de la misma (art. 277 del CP -ley 21338-).-

6.3. Participación Necesaria y Secundaria (arts. 45 y 46 del C.P.)

En el sistema del Código Penal argentino la descripción de las modalidades de la autoría y participación delictiva encuentran su configuración legal en las normas de los arts. 45 y 46 de dicho texto.-

Específicamente, el art. 45 del C.P. distingue como autor material, aquel que tomase parte en la ejecución del hecho, de los cómplices primarios, considerados como aquellos que prestan al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse.-

Es importante la distinción por cuanto, los cómplices primarios son aquellos sujetos que han prestado una colaboración imprescindible en la etapa de preparación del delito, no calificando su responsabilidad en la de un coautor, atento a que su aporte es previo al comienzo de ejecución de la acción típica, careciendo de dominio sobre el hecho. (Cfr. Righi, Fernández "Derecho Penal, La ley. El delito. El proceso y la pena", Hammurabi, p. 297 y ss.).

El cómplice primario, participa en un hecho ajeno, es decir que se halla en una posición secundaria respecto del autor. El hecho principal le pertenece al autor no al partícipe, éste no realiza el tipo principal sino un tipo dependiente de aquel. Su colaboración podrá consistir en una conducta de inducción (determinar a otro para que realice el tipo penal) o de colaboración (presta alguna ayuda a quien realiza el tipo penal). El desvalor de la participación procede del desvalor del hecho principal, no es un desvalor autónomo. (Cfr. Mir Puig Santiago, Derecho Penal. Parte General, Lección 15, p. 383 y ss.)

Mientras la participación secundaria, contenida en el art. 46 del C.P. penaliza la conducta de quienes cooperaren de cualquier otro modo a la ejecución del hecho, y los que presten una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores. De la confrontación del texto legal del art 46 con el referido a la participación primaria del art. 45 in fine del C.P. se advierte que la participación secundaria se configura por exclusión con relación al concepto de partícipe primario, en tanto este tipo de complicidad es definida por la norma como aquella sin la cual el hecho no habría podido cometerse. Ergo la participación secundaria es aquel aporte a la realización del hecho principal sin la cual el hecho igualmente habría de ser cometido.-

Así lo ha referenciado la jurisprudencia al expresar *"Admitiendo tanto la categoría de cómplice necesario como la de no necesario, la cooperación como aporte, resulta menester parar mientes en la pauta según la cual la ley efectuaba la diferenciación: conforme la eficacia del aporte. Así la fórmula del art. 45 del C.P. que alude a "los que prestaren al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse" impone una ponderación que no puede efectuarse en abstracto. En este sentido, el criterio adecuado para la asignación al aporte del cómplice de un valor tal que sin el mismo no habría podido cometerse el delito en la forma en que fue perpetrado estriba en calificar como necesarios solo a los aportes aprovechados por los autores o coautores en el tramo estrictamente ejecutivo, de acuerdo a la modalidad concreta llevada a cabo."* (T.S. Córdoba. Sala Penal. 30/8/01. Quiroga, Hernán Javier y otros s/ R. de Casación. Citado por Código Penal. T. II. Baigún- Zaffaroni pag. 195. Ed. Hammurabi)

6.3.1. Destacamento 142: Situación de Ramón Ojeda Fuentes, Fernando Torres, Luis De Urquiza y Horacio Vaccaro.

Al tenor de la prueba relevada en la causa se considera que, aquellos imputados que no ejercían a la fecha de los hechos grados de mando en el Ejército (Teniente Coronel, General de División, General de Brigada, Coronel Mayor, Coronel, Teniente Coronel o Mayor) pero que contando con capacidades especiales –aptitud especial de inteligencia-,

USO OFICIAL

realizaron tareas específicas dentro del Destacamento de Inteligencia 142 en cumplimiento del plan de represión, habrían intervenido en la comisión de los delitos investigados en autos en calidad de partícipes necesarios (art. 45 del C.P.).

A la luz de tal criterio, cabe valorar la situación de Ramón Ojeda Fuente (con el grado de Capitán, Jefe del Grupo Situación Subversión del Destacamento 142 entre el 20 de diciembre de 1976 hasta diciembre de 1979); Fernando Torres (con el grado de Capitán, Jefe de la Primera Sección Ejecución y luego Jefe de Grupo Situación General, ambos del Destacamento 142, entre el 15 de octubre de 1975 al 27 de diciembre de 1977); Luis Daniel De Urquiza (con el grado de Teniente Primero, Jefe de Situación General Primera Sección del Destacamento 142 entre el 3 de febrero de 1978 hasta 1980) y Horacio Vaccaro (con el grado de Teniente Primero, asignado al Destacamento 142 entre el 13 de febrero de 1978 al mes de abril de 1979).

De los antecedentes remarcados, corresponde concluir con el grado de probabilidad que habilita esta etapa procesal, que los encartados Ramón Ojeda Fuente y Fernando Torres, quienes acreditan en sus legajos AEI, habrían intervenido en calidad de partícipes necesarios en la ejecución del plan de represión y, en particular, en la ejecución de las conductas delictivas que perjudicaron a los/las detenidos/as clandestinos alojados en el centro clandestino que habría funcionado en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, todo de conformidad con la imputación que se formula a continuación:

* **RAMÓN ALFREDO OJEDA FUENTE** se lo considera partícipe necesario en la comisión del delito de ***(i) Violación de domicilio (art. 151 del CP)*** en perjuicio de CORRAL Ana Cristina; DÍAZ SARAVIA José Horacio, RONDOLETTO Pedro, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, MEDINA GUTIERREZ Ángel Alfonso, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, GODOY Enrique, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, MAZZAMUTO DE ROMERO María Angélica, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, HAZURÚN Teresita Cándida, CANTOS Luis; ***(ii) Privación ilegítima de libertad con apremios y/o vejaciones (art. 144 bis inciso 1 y 2 ley 14616)*** en perjuicio de CAMPOPIANO Julio, CORRAL Ana Cristina, DÍAZ SARAVIA José Horacio, RONDOLETTO Pedro, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, SOLDATI Luis Alberto, AUGIER Alberto Argentino, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, SAADE SAIEG Antonio Naief, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, MEDINA GUTIERREZ Ángel Alfonso, FOTE Fortunato Leandro, MARQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, JUSTO Héctor Oscar, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, ACUÑA Baltasar, ALMERICO José, GODOY Enrique, PEREYRA Benigno Alberto, ALARCÓN Rina Rosa, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, ARCHETTI Armando,

CARRERAS Juan Francisco, CRUZ Ernesto José Segundo, ABAD Julio Ricardo, CAJAL Nora, ALDERETE SORIA Alejandro, MAZZAMUTO DE ROMERO María Angélica, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, HAZURÚN Teresita Cándida, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Luis, CANTOS Germán. ***(iii) Torturas agravadas (art. 144 ter primer y segundo párrafo, Ley 14616)*** CORRAL Ana Cristina, DÍAZ SARAVIA José Horacio, RONDOLETTO Pedro, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, SOLDATI Luis Alberto, AUGIER Alberto Argentino, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, SAADE SAIEG Antonio Naief, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, MEDINA GUTIERREZ Ángel Alfonso, FOTE Fortunato Leandro, MARQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, JUSTO Héctor Oscar, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, ACUÑA Baltasar, ALMERICO José, GODOY Enrique, PEREYRA Benigno Alberto, ALARCÓN Rina Rita, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, ARCHETTI Armando, CARRERAS Juan Francisco, CRUZ Ernesto José Segundo, CAJAL Nora, ALDERETE SORIA Alejandro, MAZZAMUTO DE ROMERO María Angélica, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, HAZURÚN Teresita Cándida, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Luis, CANTOS Germán; ***(iv) Torturas seguidas de muerte (art. 144 ter del CP)*** en perjuicio de CAMPOPIANO Julio, ABAD Julio Ricardo; y ***(iv) Homicidio agravado (art. 80 inc. 2, 6 y 7 del CP)*** en perjuicio de CORRAL Ana Cristina, DÍAZ SARAVIA José Horacio, RONDOLETTO Pedro, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, SOLDATI Luis Alberto, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, SAADE SAIEG Antonio Naief, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, MEDINA DE GUTIERREZ Ángel, FOTE Fortunato Leandro, MARQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, ALARCÓN Rina Rosa, ARCHETTI Armando, CANTOS Luis, CANTOS Germán; delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado.

*** FERNANDO TORRES** se lo considera partícipe necesario en la comisión del delito de ***(i) Violación de domicilio (art. 151 del CP)*** en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, CORRAL Ana Cristina, CAMPOPIANO César Gustavo, MEDINA Celia Georgina, NIEVA Oscar René, YACKEL Ernestina Teresa; BARRIONUEVO Mario, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, IRAMAIN María Trinidad, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles,

USO OFICIAL

BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, GÓMEZ Juan de Dios, GODOY Enrique, DÍAZ Manuel Julio, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, YAÑEZ Rafael Vitalino, SÁNCHEZ María Teresa, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, FOCHI Gustavo Adolfo, MORALES Reyes Humberto, GONZÁLEZ Humberto Alfredo; LORENZO LERMA Andrés Héctor, CHAPARRO Santos Aurelio, IÑÍGUEZ Gloria del Valle, BRIZUELA Ramón, CORONEL Alfredo Antonio, CARABAJAL Ercilia Dolores, MAZZAMUTO DE ROMERO María Angélica, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria, HAZURÚN Teresita Cándida, MÉNDEZ BRANDER Ángel Adolfo, LASKOWSKI María Margarita, CANTOS Luis; ***(ii) Privación ilegítima de libertad con apremios y/o vejaciones (art. 144 bis inciso 1 y 2 ley 14616)*** en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, FERNÁNDEZ Enrique Raúl, CORRAL Ana Cristina, CAMPOPIANO César Gustavo, MEDINA Celia Georgina, CAMPOPIANO Julio César, NIEVA Oscar René, YACKEL Ernestina Teresa; BARRIONUEVO Mario, BARRIONUEVO Antonia del Valle, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, IRAMAIN María Trinidad, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, DÍAZ MACÍAS Enrique Gonzalo, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, SOSA DE REYNAGA Ana María, MANFREDI Ángel Vicente, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, FOTE Fortunato Leandro, MÁRQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, JUSTO Héctor Oscar, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, ACUÑA Baltasar, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, GÓMEZ Juan de Dios, GODOY Enrique, DÍAZ Manuel Julio, PEREYRA Benigno Alberto, ALARCÓN Rina Rosa, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, FÜRTH Federico Adolfo, GIRIBALDI Osvaldo José Gregorio, FALÚ Luis Eduardo, GONZÁLEZ Hernán Eugenio, VACA RUBIO Raúl Alberto, RODRÍGUEZ ROMÁN DE FIAD María Cristina, YAÑEZ Rafael Vitalino, SAFAROV Víctor Hugo, SÁNCHEZ María Teresa, ARCHETTI Armando, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, FOCHI Gustavo Adolfo, MORALES Reyes Humberto, LERNER Rodolfo Hugo, CARRERAS Juan Francisco, GONZÁLEZ Humberto Alfredo; LORENZO LERMA Andrés Héctor, CRUZ Ernesto José Segundo, CHAPARRO Santos Aurelio, IÑÍGUEZ Gloria del Valle, BRIZUELA Ramón, CORONEL Alfredo Antonio, CARABAJAL Ercilia Dolores, ABAD Julio Ricardo, CAJAL Nora Alicia del Valle, FABIO Diana Elsa, MAZZAMUTO DE ROMERO María Angélica, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria, HAZURÚN

USO OFICIAL

Teresita Cándida, MÉNDEZ BRANDER Ángel Adolfo, LASKOWSKI María Margarita, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Luis, CANTOS Germán; ***(iii) Torturas agravadas (art. 144 ter primer y segundo párrafo, Ley 14616)*** en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, FERNÁNDEZ Enrique Raúl, CORRAL Ana Cristina, CAMPOPIANO César Gustavo, MEDINA Celia Georgina, NIEVA Oscar René, YACKEL Ernestina Teresa; BARRIONUEVO Mario, BARRIONUEVO Antonia del Valle, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, IRAMAIN María Trinidad, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, SOSA DE REYNAGA Ana María, MANFREDI Ángel Vicente, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, FOTE Fortunato Leandro, MÁRQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, JUSTO Héctor Oscar, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, ACUÑA Baltasar, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, GODOY Enrique, DÍAZ Manuel Julio, PEREYRA Benigno Alberto, ALARCÓN Rina Rosa, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, FÜRTH Federico Adolfo, GIRIBALDI Osvaldo José Gregorio, FALÚ Luis Eduardo, GONZÁLEZ Hernán Eugenio, VACA RUBIO Raúl Alberto, RODRÍGUEZ ROMÁN DE FIAD María Cristina, YAÑEZ Rafael Vitalino, SÁNCHEZ María Teresa, ARCHETTI Armando, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, MORALES Reyes Humberto, LERNER Rodolfo Hugo, CARRERAS Juan Francisco; LORENZO LERMA Andrés Héctor, CRUZ Ernesto José Segundo, CHAPARRO Santos Aurelio, IÑÍGUEZ Gloria del Valle, BRIZUELA Ramón, CORONEL Alfredo Antonio, CARABAJAL Ercilia Dolores, CAJAL Nora Alicia del Valle, FABIO Diana Elsa, MAZZAMUTO DE ROMERO María Angélica, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria, HAZURÚN Teresita Cándida, LASKOWSKI María Margarita, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Luis, CANTOS Germán; ***(iv) Torturas seguidas de muerte (art. 144 ter tercer párrafo)*** en perjuicio de Julio César CAMPOPIANO, Juan de Dios GOMEZ, Enrique Gonzalo DIAZ MACIAS, Víctor SAFAROV, Humberto Alfredo GONZALEZ, Gustavo Adolfo FOCHI, Julio Ricardo ABAD y Ángel Adolfo MÉNDEZ BRANDER; y ***(iv) Homicidio agravado (art. 80 inc. 2, 6 y 7 del CP)*** en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, FERNÁNDEZ Enrique Raúl, CORRAL Ana Cristina, NIEVA Oscar René, BARRIONUEVO Mario, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, ARGAÑARAZ

Rosario, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, IRAMAIN María Trinidad, CORBALÁN Félix Viterbo, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, SOSA DE REYNAGA Ana María, MANFREDI Ángel Vicente, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, FOTE Fortunato Leandro, MÁRQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, DÍAZ Manuel Julio, PEREYRA Benigno Alberto, ALARCÓN Rina Rosa, FÜRTH Federico Adolfo, GIRIBALDI Osvaldo José Gregorio, FALÚ Luis Eduardo, GONZÁLEZ Hernán Eugenio, VACA RUBIO Raúl Alberto, YAÑEZ Rafael Vitalino, SÁNCHEZ María Teresa, ARCHETTI Armando, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, MORALES Reyes Humberto, LERNER Rodolfo Hugo, CARRERAS Juan Francisco, CORONEL Alfredo Antonio, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Luis, CANTOS Germán; delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado.

*** LUIS DANIEL DE URQUIZA:** Conforme surge de la acusación efectuada por el Ministerio Público Fiscal, el encartado es indicado como autor mediato en la comisión de los delitos que habrían perjudicado a Luis Soldati (caso 24) y Antonio Saade Saieg (caso 31).

Que conforme surge de su legajo personal, De Urquiza habría asumido sus funciones en el Destacamento 142 con fecha 3 de febrero de 1977 y habría cumplido las mismas en el edificio sito 25 de mayo y España.

Consecuentemente siendo que el presunto secuestro de Antonio Saade Saieg se habría producido con fecha 16 de enero de 1978 (fecha en la que el encartado aún no había sumido funciones en el Destacamento 142), y que el secuestro de Luis Soldati –hecho ocurrido el 18 de mayo de 1978-, se habría producido en el ámbito del Arsenal Miguel de Azcuénaga, mientras la víctima cumplía el servicio militar obligatorio, se considera que no existirían elementos suficientes para procesar o sobreseer al encartado por los hechos endilgados, ello sin perjuicio de continuarse con la investigación a su respecto.

*** HORACIO VACCARO: Pedido de Sobreseimiento:** Que a fs. 7264/7277 la defensa de Horacio Vaccaro solicita su sobreseimiento en la presente investigación por considerar que se encontraría configurada la causa establecida en el art. 336 inciso 4 del CPPN.

Afirma la defensa que el Sr. Vaccaro toma posesión del cargo asignado en el Destacamento 142 recién a partir del 13 de febrero de 1978 y no desde el 30/12/77, como sostiene la acusación, circunstancia que consta en su legajo personal. Que consecuentemente con dicha circunstancia, la imputación de los hechos que perjudicaron al Sr. Saade Saieg (ocurridos el día 16/01/78) no correspondería a su respecto.

Que con relación a las funciones que habría cumplido en el Destacamento 142 indica la defensa que el Sr. Vaccaro no poseía Aptitud Especial de Inteligencia (AEI) por lo cual no pudo haber realizado tarea de inteligencia alguna. Que tal circunstancia constan en

su legajo personal y fue corroborada por el informe emitido por el Ejercito Argentino obrante a fs.7055/7059), como así también por las declaraciones del encartado Moore.

Informa la defensa que existía una incompatibilidad entre la función de inteligencia con las funciones que competen a un Ingeniero militar. En este sentido indica que la intención de Vaccaro siempre fue la de ingresar a la Escuela Superior Técnica del Ejército (ver BRE Nº 4738), pero que al no podido ingresar en el año 1978 -por no alcanzarle el promedio- quedo fuera de los pases generales anuales, pasando a integrar la lista de "oficiales disponibles".

Que en dicho carácter es designado de manera transitoria al Destacamento 142 en Tucumán (ver BRE Nº 4749).

Manifiesta la defensa, que conforme surge de la prueba incorporada en la causa, a fin del año 1978 postuló para un nuevo examen (ver BRE Nº 4795), el cual fuera suspendido por el conflicto con Chile, substanciándose recién en el mes de abril del 1979, momento en el que rindió y aprobó dicho examen.

Que con relación a su asignación al Destacamento 142, informa la defensa que atento a la excepcionalidad y transitoriedad de tal destino, Vaccaro fue asignado a cumplir funciones relacionadas con el control de bienes patrimoniales en el edificio ubicado en calle 25 de mayo y España: actualización de inventario de bienes patrimoniales, control y supervisión de las modificaciones, mejoras o adecuaciones del mismo, actualización de los planos del edificio, etc.

Que con posterioridad, fue asignado a cumplir actividades relacionadas con el conflicto con Chile.

Informa la defensa que, en el ejercicio de sus funciones, el imputado no tenía personal a su cargo, no tenía capacidad de dar órdenes ni facultades decisorias, por lo cual no se le puede imputar delito alguno a título de autor mediato.

En particular remarca la defensa que el lugar de trabajo de Vaccaro siempre fue el edificio ubicado en calles 25 de mayo y España, sin que hubiera prestado servicios alguno en el Arsenal Miguel de Azcuénaga.

Que tales extremos se encontrarían corroborados por los dichos de los encartados Moore y De Urquiza, al prestar declaración indagatoria.

Consecuentemente con lo expuesto rechaza la defensa la imputación efectuada a Vaccaro remarcando que sus funciones en el D142 fueron de carácter administrativo, no habiendo cumplido en ningún momento funciones jerárquicas vinculadas con tareas de inteligencia.

Remarca la defensa que el sólo hecho de haber sido formalmente asignado al Destacamento 142, no hace responsable a su pupilo de los delitos cometidos en el ámbito de ese Destacamento, y que una conclusión diferente supondría establecer responsabilidades penales de carácter objetivo.

Por consiguiente, con relación a las dos imputaciones efectuadas a Vaccaro, manifiesta la defensa que: (i) Respecto al caso de Saade Saieg: Al momento del hecho el

USO OFICIAL

imputado no se encontraba prestando funciones en el D142. Ni siquiera se puede imputar el hecho a título de autoría mediata, ya que el funcionario de licencia queda suspendido en sus funciones (cita Núñez s/CPPN y fallo en causa CCD “Arsenal Miguel de Azcuénaga”, con relación al sobreseimiento de Bussi en casos de Soldati y Saieg); (ii) Con relación al caso de Luis Soldati: De la prueba incorporada en la causa, surge que Soldati habría sido visto por última vez en el Arsenal, por lo cual se presume que habría sido secuestrado allí, consecuentemente, siendo que Vaccaro no tenía ninguna vinculación con el Arsenal, no correspondería imputación alguna a su respecto por dicho hecho.

Corrida vista del pedido de sobreseimiento y de la prueba ofrecida por la defensa de Vaccaro al Ministerio Público Fiscal, presenta dictamen manifestando que no le corresponde expedirse al respecto, remitiéndose a lo ya expresado al formular la acusación, e indicando que es competencia de éste magistrado resolver el mérito del pedido, conforme arts. 334 y ss. CPPN, al momento de resolver la situación procesal del encartado.-

Por lo que oídas las partes y valorando la prueba de descargo incorporada por la defensa de Horacio Vaccaro con posterioridad a su declaración indagatoria a efectos de corroborar su versión de los hechos, corresponde entender probado con el grado de verosimilitud que habilita esta etapa procesal que:

(i) Horacio Vaccaro no poseía a la fecha de los hechos endilgados, ni con posterioridad, Aptitud Especial de Inteligencia (AEI), por lo que no podría haber asumido funciones o actividades de inteligencia durante su asignación al Destacamento 142.

(ii) Que conforme declaraciones coincidentes de los encartados que afirman haber conocido a Vaccaro (Moore, De Urquiza), éste habría realizado tareas técnicas ajenas a la tarea de inteligencia, desempeñando las mismas en el edificio sito en calle 25 de mayo y España.

(iii) Que conforme las licencias corroboradas en su legajo personal, a la fecha en que ocurrieron los hechos que habrían perjudicado a Antonio Saade Saieg, el encartado Vaccaro no había aún asumido las funciones asignadas en el Destacamento 142.

(iv) Finalmente respecto a la imputación efectuada por el Ministerio Público Fiscal, con relación a Luis Alberto Soldati, cabe referir a que su secuestro se habría producido mientras la víctima se encontraba cumpliendo con el servicio militar obligatorio en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde habría ingresado con fecha 17 de marzo de 1978, cumpliéndolo con regularidad hasta el 18 de mayo de 1978, momento en el cual habría desaparecido sin conocerse su paradero (caso 24).

Consecuentemente, siendo que no se encuentra corroborado en autos que el Sr. Vaccaro haya cumplido funciones en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, ni que haya realizado tareas relacionadas con conscriptos, corresponde concluir que el encartado no habría tenido vinculación con los hechos que perjudicaron a Luis Soldati.-

Al tenor de las conclusiones precedentes, no habiéndose manifestado oposición fiscal a las pruebas ofrecidas y producidas por la defensa del Sr. Horacio Vaccaro con posterioridad a su declaración indagatoria, este magistrado considera que corresponde

sobreseer al Sr. Horacio Vaccaro respecto de la imputación efectuada a su respecto con relación a los casos 24 y 31, por no haberse recolectado a la fecha elementos de convicción que hagan presumir su intervención funcional o material en la comisión de los delitos que habrían perjudicado a Luis Soldati y a Antonio Saade Saieg (art. 336 inciso 4 del CPPN).-

6.3.2. Gendarmería Nacional.

Atento la función que habría ejercido Gendarmería al momento de los hechos (Cfr. punto 2.4.), se presume que las delegaciones que arribaron a la provincia habrían sido asignadas a cumplir diferentes funciones en el marco del "Operativo Independencia", encontrándose presuntamente acreditada la de vigilancia y control del centro clandestino que habría funcionado en el Arsenal Miguel de Azcuénaga y, en particular, la colaboración prestada en el mantenimiento de la privación ilegítima de libertad y en la comisión de apremios y vejaciones en perjuicio de los detenidos/as clandestinos alojados en dicho centro .-

Paralelamente, de la prueba recolectada en la causa surgiría que de los gendarmes imputados que no revistieron grados de mando o jefaturas ni fueron indicados como autores materiales por víctimas sobrevivientes, los encartados Alberto Rafael Montes de Oca, Tomás Güemes y José Sowinski, habrían sido reconocidos entre los custodios del centro clandestino que habría funcionado en el Arsenal (Declaración de Osvaldo Pérez de fs. 4005/4010 de la causa 443/84; Declaración de Antonio Cruz de fs. 128/134 del expte 443/84; Declaración de María Cristina Román de Fiad de fs. Declaración de fs. 148/149 Expte. n° 1410/05); en tanto Ernesto Rivero contaría en su legajo con diplomas de honor por su participación activa en la "lucha contra la subversión".

Consecuentemente se considera que los encartados intervinieron en la comisión del delito de privación ilegítima de libertad con apremios y vejaciones (art. 144 bis incisos 1 y 2 del CP –ley 14016-) en calidad de partícipes necesarios (art. 45 del C.P.) conforme imputación que se detalla a continuación:

*** MONTES DE OCA ALBERTO RAFAEL** habría intervenido en calidad de partícipe primario en la comisión del delito de privación ilegítima de libertad con apremios y vejaciones (art. 142 bis inciso 1 y 2 del CP) en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, FERNÁNDEZ Enrique Raúl, CORRAL Ana Cristina, NIEVA Oscar René, YACKEL Ernestina Teresa; BARRIONUEVO Mario, BARRIONUEVO Antonia del Valle, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, IRAMAIN María Trinidad, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, SOSA DE REYNAGA Ana María, MANFREDI Ángel Vicente, FOTE Fortunato Leandro, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, JUSTO Héctor Oscar, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, GÓMEZ Juan de Dios, GODOY Enrique, DÍAZ Manuel Julio, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, FÜRTH Federico Adolfo, GIRIBALDI Osvaldo José Gregorio, SÁNCHEZ María Teresa, ARCHETTI Armando, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, FOCHI Gustavo Adolfo, MORALES Reyes Humberto, LERNER Rodolfo

USO OFICIAL

Hugo, LORENZO LERMA Andrés Héctor, CRUZ Ernesto José Segundo, IÑÍGUEZ Gloria del Valle, BRIZUELA Ramón, CORONEL Alfredo Antonio, CARABAJAL Ercilia Dolores, HOYOS Blanca, ABAD Julio Ricardo, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, ALDERETE Víctor Fernando, FABIO Diana Elsa, QUINTEROS Juan Manuel, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria, HAZURÚN Teresita Cándida, MÉNDEZ BRANDER Ángel Adolfo, LASKOWSKI María Margarita, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Luis, CANTOS Germán, delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado.

*** GUEMES TOMAS ADOLFO** habría intervenido en calidad de partícipe primario en la comisión del delito de privación ilegítima de libertad con apremios y vejaciones (art. 142 bis inciso 1 y 2 del CP) en perjuicio de CORRAL Ana Cristina, CAMPOPIANO César, MEDINA Celia, CAMPOPIANO Julio, BARRIONUEVO Antonia del Valle, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, IRAMAIN María Trinidad, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, DIAZ MACIAS Enrique Gonzalo, AUGIER Alberto Argentino, SOSA DE REYNAGA Ana María, MANFREDI Ángel Vicente, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, ALMERICO José, GÓMEZ Juan de Dios, GODOY Enrique, DÍAZ Manuel Julio, PEREYRA Benigno Alberto, FALU Luis Eduardo, GONZÁLEZ Hernán Eugenio, VACA RUBIO Raúl Alberto, RODRÍGUEZ ROMÁN DE FIAD María Cristina, YAÑEZ Rafael Vitalino, SAFAROV Víctor Hugo, SÁNCHEZ María Teresa, CANO José Antonio, SÁNCHEZ Enrique Alberto, FOCHI Gustavo Adolfo, LERNER Rodolfo Hugo, CARRERAS Juan Francisco, GONZÁLEZ Humberto Alfredo, LORENZO LERMA Andrés Héctor, CHAPARRO Santos Aurelio, HOYOS Blanca, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, CAJAL Nora, SUÁREZ Julio Guillermo, CANTOS Germán, delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado.

*** RIVERO ERNESTO** habría intervenido en calidad de partícipe primario en la comisión del delito de privación ilegítima de libertad con apremios y vejaciones (art. 142 bis inciso 1 y 2 del CP) en perjuicio de CORRAL Ana Cristina, CAMPOPIANO César Gustavo, MEDINA Celia Georgina, CAMPOPIANO Julio César, YACKEL Ernestina Teresa; BARRIONUEVO Mario, BARRIONUEVO Antonia del Valle, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, IRAMAIN María Trinidad, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, DÍAZ MACÍAS Enrique Gonzalo, AUGIER

Alberto Argentino, SOSA DE REYNAGA Ana María, MANFREDI Ángel Vicente, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, FOTE Fortunato Leandro, JUSTO Héctor Oscar, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, ALMERICO José, GÓMEZ Juan de Dios, GODOY Enrique, DÍAZ Manuel Julio, PEREYRA Benigno Alberto, ALARCÓN Rina Rosa, GIRIBALDI Osvaldo José Gregorio, FALÚ Luis Eduardo, GONZÁLEZ Hernán Eugenio, VACA RUBIO Raúl Alberto, RODRÍGUEZ ROMÁN DE FIAD María Cristina, YAÑEZ Rafael Vitalino, SAFAROV Víctor Hugo, SÁNCHEZ María Teresa, SÁNCHEZ Enrique Alberto, FOCHI Gustavo Adolfo, MORALES Reyes Humberto, LERNER Rodolfo Hugo, CARRERAS Juan Francisco, GONZÁLEZ Humberto Alfredo; LORENZO LERMA Andrés Héctor, PASTORI Juan Carlos, CRUZ Ernesto José Segundo, CHAPARRO Santos Aurelio, IÑÍGUEZ Gloria del Valle, BRIZUELA Ramón, CORONEL Alfredo Antonio, CARABAJAL Ercilia Dolores, HOYOS Blanca, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, CAJAL Nora Alicia del Valle, FABIO Diana Elsa, QUINTEROS Juan Manuel, SUÁREZ Manuel Humberto, MOYANO María Candelaria, MÉNDEZ BRANDER Ángel Adolfo, LASKOWSKI María Margarita, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Germán, delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado

*** JOSE SOWINSKI** habría intervenido en calidad de partícipe primario en la comisión del delito de privación ilegítima de libertad con apremios y vejaciones (art. 142 bis inciso 1 y 2 del CP) en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, FERNÁNDEZ Enrique Raúl, CORRAL Ana Cristina, NIEVA Oscar René, YACKEL Ernestina Teresa; BARRIONUEVO Mario, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, FÜRTH Federico Adolfo, GIRIBALDI Osvaldo José Gregorio, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, FOCHI Gustavo Adolfo, MORALES Reyes Humberto, LERNER Rodolfo Hugo, CHAPARRO Santos Aurelio, IÑÍGUEZ Gloria del Valle, BRIZUELA Ramón, CORONEL Alfredo Antonio, CARABAJAL Ercilia Dolores, HOYOS Blanca, QUINTEROS Juan Manuel, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MOYANO María Candelaria, MÉNDEZ BRANDER Ángel Adolfo, LASKOWSKI María Margarita, delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado

6.3.3. Ampliación de Requerimiento de Instrucción: Situación del Capellán José Eloy Mijalchyk.

Que a fs. 6638/6640 el Ministerio Público Fiscal amplia requerimiento de instrucción en la presente mega causa, respecto la presunta responsabilidad penal a título de partícipe del Sr. José Eloy Mijalchyk, con relación a los hechos delictivos que se habrían producido en perjuicio de Félix Viterbo Corbalán (CASO 27, privación ilegítima de la libertad y tormentos, homicidio calificado), María Angélica Mazzamuto de Romero, Roberto Romero y Antonio Raúl Romero (CASOS 86, 87 y 88, privación ilegitima de la libertad y tormentos en las tres ocasiones).

USO OFICIAL

Afirma el Sr. Fiscal Federal, que el imputado habría colaborado con los autores mediatos y materiales de los delitos investigados en la presente causa en su condición de párroco de la Iglesia Cristo Obrero de Tafí Viejo y "capellán de hecho" del centro clandestino que habría operado en el Arsenal Miguel de Azcuénaga.

Que la imputación en cuestión es fundamentada por el Sr. Fiscal sobre la siguiente prueba: (i) Declaración de Magdalena Rufina Díaz de Corbalán ante Comisión Bicameral a fs. 2 a 4 y su ratificación judicial a fs. 134 de la causa "Corbalán Félix Viterbo s/privación ilegítima de la libertad" Expte. nº 1.180/5; (ii) Descargo por escrito y Declaraciones de Osvaldo Humberto Pérez en la presente causa principal, Expte. nº 443/84, en el que menciona a Mijalchyk como una de las personas que visitaba con asiduidad el CCD Arsenal; (iii) Denuncia de Norma del Carmen Monteros, a fs. 10/11 de causa caratulada: "Monteros Norma del Carmen s/su denuncia" Expte. n° 1.303/08 donde menciona que José Eloy Mijalchyk tuvo una intervención en el fallecimiento de Jorge Isidro Monteros, evitando que la familia viera su cadáver; (iv) Copias certificadas de Legajo Personal producido por el Obispado Castrense de la República Argentina, Capellanía Mayor del Ejército, a fs. 24 a 79 del Expte. n° 1.303/08; (v) Declaración testimonial de María Angélica Mazzamuto de fecha 28/09/2005 ante Juzgado Federal nº 1 obrante a fs. 1858/1860 de la presente causa principal, Expte. nº 443/84; (vi) Testimonio de María Angélica Mazzamuto ante Comisión Bicameral de Tucumán. (Legajo 330-C- 84) a fs. 8 de causa "Corbalán Félix Viterbo s/Privación ilegitima de la libertad" Expte. nº 401.180/5, acumulada jurídicamente a la presente; (vii) Copias certificadas de documento extraído de Jefatura de Policía de Tucumán en el que se da noticia de un informe del imputado al Servicio de Informaciones Confidenciales de la Policía de Tucumán, a fs. 227 del expediente formado por el Tribunal Oral Federal de Tucumán.

A los fines de analizar la imputación efectuada en autos contra el Sr. Mijalchyk, corresponde a criterio del suscripto y a efectos de su correcta ponderación, analizar la prueba de cargo detalladamente.

Que en la declaración de fecha 28 de setiembre del año 2.005, María Angélica Mazzamuto, sobreviviente del centro clandestino Arsenales, afirma que: *"(…) en otro momento se produjo la visita del cura José Mijalchyk, de la parroquia de "El Colmenar", y era capellán del Ejército, se lo sentía pararse en algunos boxes, consolar a algunos y exhortarlos a hablar con toda sinceridad con la gente del Ejército; yo lo conocía muy bien porque el cura había ido en misión evangélica a la escuela en la que yo era directora (…)"* (fs. 1.858/1.860 de la causa 443/84)

Que mediante declaración de fecha 7 de agosto de 1984, Magdalena Rufina Díaz de Corbalán a fs. 2/3 de la causa Corbalán, textualmente se dice: *"(…) La compareciente hace mención de que el capellán en el Arsenal para la fecha del secuestro de su esposo era el cura José Mijalchic (…) este era llamado habitualmente "el padre Pepe", no sabe su actual paradero, mejor dicho si sabe, puesto que actualmente está a cargo de la Capilla*

del Colmenar (…)". (fs. 2/3 causa "Corbalán", ratificada en fecha 19 de junio del año 2.007 a fs. 6.632 de la causa principal).

Que mediante presentación efectuada en fecha 1 de febrero de 2.006, Osvaldo Humberto Pérez afirma que: *"(…) También visitaba el campo un cura que vestía con ropa de calle pero se le distinguía por el cuello blanco redondo"* (agregada a fs. 42/49 de la causa "Fochi, Gustavo Adolfo s/Su Secuestro y Desaparición", Expte. 1.884/04)

Que a fs. 6.637 de la causa principal corre agregado copia de un informe sobre *"personas sospechosas"*, presuntamente remitido por Mijalchyk al Servicio de Informaciones Confidenciales de la Policía de Tucumán, el cual daría cuenta de que el imputado habría cumplido funciones de informante para la policía provincial.

Que mediante contestación de oficio nº 1.100, el Arzobispado de Tucumán informa que Mijalchyk se desempeñó entre los años 75 y 83 como párroco de la parroquia San José Obrero de El Colmenar, Las Talitas, Dpto. Tafí Viejo, circunstancia esta que se corresponde con lo señalado por el imputado en su declaración indagatoria y con los dichos de la Sra. María Angélica Mazzamuto, citados ut supra.

Que respecto a su designación como capellán castrense, al tenor del informe emitido por el Obispado Castrense, Mijalchyk es designado mediante Resolución OCA 1294 como capellán del Regimiento 19 en el año 1982 (informe de fs. 7747/7760).

Que dicho nombramiento se produce a partir de una presentación espontánea de Mijalchyk, en el mes de marzo de 1982, donde solicita ser nombrado capellán auxiliar del Ejército, con el consentimiento del Obispo Diocesano (fs. 6577 de las presente actuaciones).

En su declaración indagatoria, Mijalchyk afirma que nunca ingresó a los cuarteles del ejército con anterioridad al año 1982, momento en lo nombran capellán auxiliar del Regimiento 19 de Infantería, indicando que no podría haber ingresado a los cuarteles sin consentimiento de la autoridad eclesiástica correspondiente, porque habría puesto en peligro su sacerdocio, en tanto de haber actuado sin jurisdicción podría haber realizado actos inválidos, ilícitos o nulos, lo cual hubiera sido causa de suspensión canónica.

Atento lo manifestado por el capellán en su defensa, la valoración de su versión de los hechos nos exige indagar sobre la normativa que regulaba la relación institucional entre la Iglesia Católica Argentina y las Fuerzas Armadas, al momento de los hechos, como así también analizar cuál fue la posición institucional de la Iglesia Católica frente al accionar de las Fuerzas Armadas entre 1975/1983, para poder concluir si un sacerdote podría haber sido pasible de sanciones, en caso de realizar tareas o prestar algún servicio en el ámbito castrense, sin una autorización específica.

En tal dirección cabe referir primero a que, con fecha 28 de junio de 1957 se firma con la Santa Sede el Acuerdo "Sobre jurisdicción castrense y asistencia religiosa a las fuerzas armadas", el cual fue ratificado por el gobierno nacional el 5 de julio de 1957, y erigido oficialmente por el Sumo Pontífice el 8 de julio de ese mismo año. (Cfr. Informe del Obispado Castrense de Argentina, obrante a fs. 7747/7760).

USO OFICIAL

Dicho acuerdo en su artículo 1º expresa: *"La Santa Sede constituye en Argentina un Obispado Castrense para atender el cuidado espiritual de los Militares de Tierra, Mar y Aire"*. A su turno el artículo 2 establecía: *"El Servicio Religioso Castrense está integrado por el Obispo Castrense, tres Capellanes Mayores para las Fuerzas respectivamente de Tierra, Mar y Aire, y los Capellanes Militares de dichas fuerzas"*. Otro punto de interés es el establecido en el artículo 10 en donde se disponía que: *"La jurisdicción del Obispo Castrense y de los Capellanes es personal, se extiende a todos los militares de Tierra, Mar y Aire en servicio activo, a sus esposas, hijos, familiares y personal doméstico que conviven con ellos en los establecimientos militares, a los cadetes de las instituciones de formación y aspirantes de los institutos de suboficiales y a todos los religiosos y civiles que de manera estable viven en los hospitales militares o en otras instituciones o lugares reservados a los militares"* (www.culto.gov.ar)

El Vicario Castrense durante la vigencia del gobierno de facto en nuestro país fue el Arzobispo de Paraná, monseñor Adolfo Servando Tórtolo, quien fue designado por Pablo VI el 8 de julio de 1975 y se mantuvo en el cargo hasta su renuncia, por razones de salud, el 30 de marzo de 1982.

Cuando se produce el golpe de estado en marzo de 1976, Adolfo Tortolo, Arzobispo de Paraná, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y vicario de las Fuerzas Armadas, llamó a *"cooperar"* positivamente a la restauración del espíritu nacional considerando *"... una grave obligación de conciencia que no puede soslayarse con palabras, sino que debe enfatizarse con hechos"*. Inclusive, en su carácter de presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, llegó a defender en las asambleas episcopales el uso de la tortura, extrayendo argumento de teólogos y pontífices medievales (Diario La Nación, 25 de marzo de 1976, "Posición de la Iglesia ante el nuevo gobierno"; www.nuncamas.org/formularios)

La posición del Vicario Castrense respecto a la actuación de las Fuerzas Armadas durante el Operativo Independencia, y luego durante la vigencia del golpe de estado en nuestro país, quedó asentada en actos oficiales y declaraciones de los representantes eclesiásticos, que se consideran de público y general conocimiento, entre los que cabe mencionar a título de ejemplo las siguientes: (i) La presencia de Tortolo y otras autoridades del Episcopado en la asunción de Videla como Presidente de facto, y de los obispos de las provincias en las asunciones de los respectivos interventores militares (Diario La prensa, 31 de marzo de 1.976; Martín Obregón, "Entre la cruz y la espada. La Iglesia católica durante los primeros años del Proceso", Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, 2.005, p.58); (ii) Constancia del encuentro entre el nuncio Laghi y el interventor militar de la provincia de Tucumán, Antonio D. Bussi, en el mes de junio del año 1.976 en la provincia de Tucumán (Boletín oficial del Episcopado N° 1021 de fecha 15 de julio de 1.976); (iii) constancia del encuentro entre el interventor militar de la provincia de Tucumán, Antonio D. Bussi y Adolfo Tortolo, el capellán mayor del Ejército José

Menestrina y el capellán del III Cuerpo del Ejército Eduardo McKinnon (Boletín oficial del Episcopado N° 1034 de fecha: 14 de octubre de 1.976).

Conforme los antecedentes relevados podría colegirse que, producido el golpe militar en marzo de 1.976, la cúpula institucional de la Iglesia Católica Argentina se habría constituido en un actor relevante en la legitimación del proceso político y social impuesto por el gobierno de facto, e inclusive habría prestado colaboración para garantizar la ejecución del plan puesto en marcha por las Fuerzas Armadas –ignorando denuncias de los familiares y omitiendo interceder para determinar el destino de las personas que desaparecían-.

Conforme tal contexto, y fuera de los actos de cultos que exigen tener jurisdicción para su validez, resulta probable que la cúpula institucional de la Iglesia Católica al momento de los hechos, haya consentido o visto con beneplácito, que sus párrocos colaboren con las autoridades militares en el cumplimiento de lo que se consideraba la restauración del espíritu nacional.

Tales evidencias debilitan los argumentos vertidos en su defensa por el capellán José Mijalchick, y fortalecen la prueba de cargo substanciada en el presente causa a su respecto, por los que al tenor de la prueba testimonial relevada se considera acreditado con el nivel de probabilidad que habilita esta etapa procesal que José Eloy Mijalchik habría colaborado en la comisión de los delitos de privación ilegítima de libertad y tormentos en perjuicio de **Félix Viterbo Corbalán** (CASO 27), **María Angélica Mazzamuto de Romero, Roberto Romero y Antonio Raúl Romero** (CASOS 86, 87 y 88) en calidad de partícipe secundario.

USO OFICIAL

6.4. Participación criminal en la comisión de delitos sexuales.

Los delitos sexuales, específicamente, el delito de violación, fueron tradicionalmente definidos como “delitos de propia mano” en razón de considerarse que se requería para su comisión la realización corporal, es decir *“que sólo pueden ser llevados a cabo mediante la propia ejecución corporal de las acciones típicas”* (ROXIN, C., Autoría y dominio del hecho en Derecho Penal, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 1998, p.443).

La calificación de los delitos contra la libertad sexual como delitos de propia mano, si bien puede considerarse como mayoritaria, se encuentra actualmente cuestionada en la doctrina, particularmente desde quienes defienden la teoría objetivo material del dominio del hecho, y sobre la base de una adecuada concepción del bien jurídico protegido.

En tal sentido, se ha considerado que, detrás de la concepción de que sólo puede ser autor quien obtiene el “beneficio” sexual y no todos los demás que hayan realizado conductas también previstas en el tipo, por división de funciones (como pueden ser la fuerza o la intimidación), parece subyacer la idea de que estos delitos exigen la presencia de placer, lascivia o fines o móviles de contenido libidinoso que, por propia definición, sólo pueden contemplarse de manera individual. (Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Dir. Zaffaroni y Baigún, Hammurabi, 2007, Artículos 118 y 119 a cargo de Javier De Luca y Julio López Casariego, p. 471 y ss)

Tal idea resulta errónea, atento a que los delitos sexuales no se caracterizan por el "placer" o "rédito" sexual de un sujeto, sino por el *ultraje sexual de la víctima*, por una *afectación a su libertad sexual.*

Conforme tal perspectiva, autor de este delito será quien domine el hecho, es decir, quien tenga el poder de decidir o determinar la configuración central del acontecimiento, porque puede detener o proseguir la realización del suceso íntegro; y partícipes serán quienes realicen aportes sin ese poder. Consecuentemente, cabe concluir que la figura penal admite todas las formas de autoría (individual, mediata, coautoría paralela y funcional) y participación (complicidad e instigación) (Cfr. Javier De Luca y Julio López Casariego, Ob. Cit).

Al tenor de la posición expuesta, la circunstancia relativa a la no individualización del o los autor/es material/es de los delitos sexuales que se habrían perpetrado en el centro clandestino que habría funcionado en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, no nos impediría analizar la existencia de otras formas de participación criminal.-

En tal cometido cabe reparar en primer lugar en que, en la sentencia emitida en la Causa 13/84 "Juicio a las Juntas Militares", la Cámara Federal de Apelaciones entendió demostrado que las Fuerzas Armadas, durante la vigencia del gobierno de facto, ordenaron una manera de luchar contra "la subversión terrorista" que básicamente consistió en: *"a) capturar a quienes pudieran resultar sospechosos de tener vínculos con la subversión de acuerdo con los informes de inteligencia; b) conducirlos a lugares situados dentro de las unidades militares o bajo su dependencia; c) una vez allí interrogarlos bajo tormentos a fin de obtener mayores datos posibles acerca de otras personas involucradas; d) someterlos a condiciones de vida inhumanas con el objeto de quebrar su resistencia moral; e) efectuar todo lo descripto anteriormente en la clandestinidad más absoluta, para lo cual los secuestradores debían ocultar su identidad y realizar los operativos preferentemente en horas de la noche, las víctimas debían permanecer totalmente incomunicadas, con los ojos vendados y se debía negar a cualquier autoridad, familiar o allegado, la existencia del secuestrado y la de eventuales lugares de alojamiento; f) amplia libertad de los cuadros inferiores para determinar la suerte del aprendido, que podía ser luego liberado, puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, sometido a proceso militar o civil, o bien eliminado físicamente"* (Capítulo Séptimo, Punto 1, Sentencia Causa 13/84).

Además, la Cámara Federal de Apelaciones consideró que integraba el sistema ordenado la *garantía de impunidad a los ejecutores*, impidiendo que los órganos legales de prevención de delitos interfirieran en la realización de los procedimientos, negando y ocultando la realidad de los hechos ante los pedidos de los jueces, organizaciones, familiares y gobiernos extranjeros, efectuando remedos de investigaciones sobre lo que ocurría y utilizando el poder estatal para persuadir a la opinión pública local y extranjera de que las denuncias eran falsas y que respondían a una campaña orquestada de desprestigio del gobierno. Que dicho marco de situación habría habilitado que los subordinados cometieran otros delitos que no estaban directamente ordenados, pero que podían

considerarse consecuencia natural del sistema adoptado (Capítulo Séptimo, Punto 1, Sentencia Causa 13/84).

Conforme tales conceptos podría concluirse, en primer lugar, que los delitos sexuales cometidos por subordinados contra detenidos/as clandestinos/as, si bien no habrían conformado el conjunto de ilícitos directamente ordenados por las Fuerzas Armadas, si habrían conformado el conjunto de delitos a producirse como *consecuencia natural* de la clandestinidad del sistema y de la garantía de impunidad vigente.

En dicho marco cabe afirmar que aquellos imputados que poseían capacidad de decisión conforme su ubicación en la cadena de mandos, tanto de las Fuerzas Armadas como de las fuerzas de seguridad, habrían prestado una colaboración imprescindible para la comisión de tales ilícitos al amparo de tres decisiones que sí habrían conformado directamente el plan criminal: (i) la clandestinidad de la detenciones; (ii) la autorización relativa a que los/las detenidos/as clandestinos sufran condiciones inhumanas a fin de quebrar su resistencia moral; (iii) la garantía de impunidad para los ejecutores.-

Ello por cuanto, tales decisiones supusieron la creación de un peligro legalmente desaprobado que, de cara al bien jurídico "libertad sexual", implicó un ataque por causación accesoria. (Roxin Claus, La Teoría del Delito en la discusión actual, Ed. Grijley, 2007, "Acerca del fundamento penal de la participación" p. 485 y ss.).

Considerando la situación de aquellos encartados respecto de los cuales se encontraría presuntamente demostrada su intervención en los hechos investigados en calidad de autores mediatos, se concluye que, conforme los hechos endilgados a cada uno de ellos por el MPF, resultarían responsables penalmente, en calidad de partícipes necesarios:

(i) Ernesto Alais, en su condición de jefe del Regimiento 19, por la comisión del delito de violación sexual (art. 119 del CP según ley 11.221 y 21.338) en perjuicio de G.V.I., N.C. y B.H; y del delito de abuso deshonesto (art. 127 del CP según ley 11.221 y 21.338) en perjuicio de A.V.B, D.F. y M.I.J.S.

(ii) Varela Luis Orlando: en su condición de Jefe de "fuerzas de tareas" del Destacamento 142, por la comisión del delito de violación sexual (art. 119 del CP según ley 11.221 y 21.338) en perjuicio de G.V.I., N.C. y B.H; y del delito de abuso deshonesto (art. 127 del CP según ley 11.221 y 21.338) en perjuicio de A.V.B, D.F. y M.I.J.S.

(iii) Moore Adolfo Ernesto, en su condición de Jefe de la Sección AEI del Destacamento 142 por la comisión del delito de de abuso deshonesto (art. 127 del CP según ley 11.221 y 21.338) en perjuicio de M.I.J.S.

7. Medidas cautelares.

7.1. Dictamen Fiscal.

Que mediante decreto de fecha 19 de noviembre del corriente año, agregado a fs. 7.590 de la presente causa, se corre vista al Ministerio Público Fiscal a efectos de que se expida "*sobre la procedencia del encarcelamiento preventivo"* de los imputados Pedro Osvaldo Caballero, Juan Carlos Benedicto, Camilo Ángel Colotti, Ariel Rolando

USO OFICIAL

Valdivieso, Carlos Eduardo Trucco, Ernesto Rivero, Ramón Ojeda Fuente, Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, Fernando Torres, Marcelo Omar Godoy, Celso Alberto Barraza, José Carlos Sowinski, Tomás Adolfo Güemes, Augusto Leonardo Neme y Adolfo Ernesto Moore, quienes se encuentran detenidos en sus domicilios, así como *"del mantenimiento o no de la situación de libertad"* en que se encuentran hasta el acto de resolverse su situación procesal los imputados Horacio Vaccaro, Hugo Enzo Soto, Luis Orlando Varela, Luís Daniel De Urquiza, José Eloy Mijalchyk y Miguel Alfredo Manuel Paz.

Que, asimismo, se solicita al MPF que en caso de solicitar el dictado de prisión preventiva para alguno de los imputados, demuestre las circunstancias concretas que, en cada caso particular, permitan presumir la existencia del riesgo procesal, conforme lo requerido por la normativa aplicable a los efectos del dictado de esa medida cautelar concreta.

Que a fs. 7.678/7.694 corre agregada la presentación efectuada por el MPF en contestación a la vista referida, presentación en la cual, a dichos del Sr. Fiscal Federal, se *"(…) verifica en primer lugar si hay verosimilitud en la existencia de los hechos y la participación de los imputados. Luego se determina si existe respecto de ellos presunción legal de fuga. Seguidamente, se analiza si en el caso existe además presunción de que los imputados, en caso de permanecer en libertad, entorpecerán el avance del presente proceso. Por último, se analizarán circunstancias y antecedentes personales, caso por caso, para determinar si existen elementos que refuercen o debiliten las presunciones que se pudieran haber verificado previamente, profundizando el análisis respecto de algunas de ellas"*.

Manifiesta el Sr. Fiscal que la libertad durante el proceso no es un principio ilimitado, que la ley procesal a través del instituto de la prisión preventiva busca asegurar el cumplimiento efectivo de la penal, conciliando el derecho de libertad del individuo con el interés general de no facilitar la impunidad.

Que a criterio del MPF, las detenciones producidas y las que eventualmente se pudieran concretar responden a una larga y enjundiosa investigación que viene produciéndose desde el año 1.983 hasta la fecha, que tiene como resultado una robusta y diversa base probatoria que da sostén a la calificación de verosimilitud aplicable a la participación criminal de los encartados.

Que en ese sentido recuerda que, a la hora de describir los hechos, realizar las imputaciones y fundamentar los pedidos de detención, se consideraron al menos 50 legajos de denuncias de víctimas o sus familiares formados por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), al menos 40 legajos formados por la Comisión Bicameral de la Honorable Legislatura de Tucumán creada a efectos de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia durante el terrorismo estatal, al menos 76 acciones de habeas corpus presentadas entre 1975/1984 ante la justicia federal por familiares de las víctimas y agregadas en autos, y más de 160 declaraciones testimoniales producidas en diferentes instancias judiciales y ante distintas instituciones en

relación a los hechos investigados, algunas de ellas con relatos pormenorizados y circunstanciados de sobrevivientes y ex miembros de fuerzas de seguridad.

Además, afirma el MPF que constan en el expediente los extractos pertinentes de los legajos personales de cada uno de los imputados o bien de las copias de su asignación funcional, en donde es posible confirmar su revista y la dependencia en la que cumplieron funciones, lo que de manera concluyente los ubica en el tiempo y el lugar de los hechos. También refiera a la existencia de reconocimientos judiciales y extrajudiciales, croquis y fotografías del lugar en el que se produjeron los hechos.

Que, como consecuencia de lo antedicho, a criterio del MPF los elementos de convicción son contundentes en torno a cada uno de los hechos planteados, al contexto en que tuvieron lugar y al rol desempeñado por cada uno de los encartados.

Que en lo que respecta a la presunción *(iuris tantum)* de peligro de fuga, el Sr. Fiscal Federal hace alusión a lo establecido por el art. 312, inc. 1º C.P.P.N., de donde surge un criterio normativo-objetivo de la pena en expectativa en abstracto y la posibilidad de la ejecución condicional de la condena.

Que, conforme lo dicho, referencia que resulta necesario revisar la calificación legal de los hechos atribuidos a cada uno de los imputados, la que surge de la resolución de fecha 2 de septiembre de 2.010 obrante a fs. 7.595/7.599, en la que se ordena sus detenciones. De esa resolución surge que a Celso Alberto Barraza, Marcelo Omar Godoy, Juan Carlos Benedicto, Guillermo Francisco López Guerrero, Hugo Enzo Soto, Augusto Leonardo Neme, Miguel Alfredo Manuel Paz, Ariel Rolando Valdiviezo, Carlos Eduardo Trucco, Luis Daniel De Urquiza, Adolfo Ernesto Moore, Ramón Alfredo Ojeda Fuentes, Fernando Torres, Horacio Alberto Vaccaro, Luis Orlando Varela, Tomás Adolfo Güemes, Carlos Alfredo Lafuente, Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, Benito Palomo, Ernesto Rivero y José Carlos Sowinski se les imputa *prima facie*, conforme el requerimiento fiscal, ser autores directos o mediatos, penalmente responsables, de los delitos previstos en los arts. 151, 144 bis inc. 2° (Ley 14.616), 144 ter 1° y últ. párrafo (Ley 14.616), 79, 80 incisos 2, 6 y 7, 210 y 210 bis del Código Penal.

Que afirma el MPF que lo mismo puede decirse de los imputados Camilo Ángel Colotti, Roberto Heriberto Albornoz, Pedro Osvaldo Caballero y Ernesto Arturo Alais, quienes ya se encontraban, previo a la citación efectuada en la presente causa, a disposición del Juzgado Federal n° 1.

Que, como consecuencia de dichas imputaciones, el Ministerio Público Fiscal resalta que la escala penal aplicable en caso de que se condene a los imputados anteriormente aludidos, aun considerando la posibilidad de excluir las agravantes y admitir atenuantes, tendrá un piso de 8 años de prisión, y que resulta altamente improbable la ejecución condicional de las eventuales penas dictadas en contra de los mismos.

Que con relación a José Eloy Mijalchyk y atento la imputación efectuada en su contra y el grado de participación que se le adjudique en los hechos investigados,

USO OFICIAL

manifiesta el MPF que eventualmente podría operarse pena en expectativa de ejecución condicional.

Que a criterio del MPF, la presunción legal aludida se encuentra reforzada por diversos datos e informes relacionados específicamente con las investigaciones de los presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Argentina durante el terrorismo de estado de los años 70.

Que en ese sentido el Sr. Fiscal Federal recuerda que conforme información producida por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación, la cantidad de prófugos registrados a nivel nacional asciende a más de 50 imputados.

Indica además que, la experiencia recogida durante su actividad ilegal, la pertenencia a estructuras de poder donde, aún hoy, conservan influencia, y el dato objetivo relativo a la existencia de un gran porcentaje de prófugos que tardan años en encontrarse, son serios fundamentos para afirmar la existencia de peligrosidad procesal.

Manifiesta que, a fs. 7.614, obra agregado un informe en tal sentido, en el que la Policía de Seguridad Aeroportuaria indica que existen al menos 21 imputados prófugos en nueve provincias de los que tiene noticia ese organismo.

Que según lo dicho por el MPF, la presunción anteriormente aludida se complementa con una larga serie de circunstancias fácticas y personales de los imputados, específicamente relacionadas con el requisito procesal exigido para la prisión preventiva, el entorpecimiento de la investigación.

Que en ese sentido el MPF considera que no resulta arbitraria la presunción de que quien está imputado de estos delitos gravísimos previstos también por el derecho de gentes, en caso de ser puesto en libertad, atentará contra los fines del proceso. Dicha conjetura encuentra su fundamento, conforme el art. 319 CPPN en el indicio emergente del marco en que se produjeron los hechos que se investigan, en donde se arbitraron medios para asegurar la impunidad futura, consecuentemente, dicho afán de sustraerse al juzgamiento podría tener una secuela posterior al otorgarse la libertad al procesado. Tal ha sido la doctrina marcada por nuestro máximo tribunal nacional *(“Nicolaides Cristino s/incidente de excarcelación”, Fallos 327:496).*

Que a los efectos de demostrar tales extremos el MPF hace referencia a dos aspectos que demuestran otras tantas circunstancias concretas de la presente causa que hacen necesaria la aplicación durante este proceso de medidas cautelares restrictivas de la libertad, habida cuenta de que ellas revelan el peligro de continuarse con el entorpecimiento de estas investigaciones. Por un lado (i) el dominio actual del hecho en el caso de las desapariciones forzadas de personas, y por otro (ii) que las causas han sido obstaculizadas por los imputados y existe el riesgo cierto de que esta situación continúe en el futuro.

Que el primer aspecto aludido se relaciona, conforme lo dicho por el Sr. Fiscal Federal, con la capacidad de los imputados de ocultar los rastros de los ilícitos y *“(…) la*

información relativa al destino de aquellas personas que se encuentran desaparecidas (…)" (ver Juzgado Federal n° 1, Dr. Daniel Bejas, Auto de procesamiento en causa: "Jefatura de Policía CCD s/secuestros y desapariciones (Segundo Grupo)" Expte. n° 795/04, sentencia de fecha 9 de Junio de 2.010). En este sentido no resultaría prudente otorgar la excarcelación a personas que tienen en su poder la posibilidad de mantener en ejecución el delito.

Que remarca que las presentes investigaciones tienen, entre otras, la finalidad de establecer que las personas que se encuentran en condición de desaparecidas, fueron asesinadas, hecho cuya corroboración supondría un agravamiento de las imputaciones.

Que es así que al día de la fecha y merced a los esfuerzos de ocultamiento de la verdad de los imputados antes, durante y después de los hechos objeto de la presente causa, no ha sido posible conocer el destino final de Luis Alfonso Holmquist, Enrique Raúl Fernández, Ana Cristina Corral, Julio César Campopiano, Oscar René Nieva, Mario Barrionuevo, José Horacio Díaz Saravia, Teresa Mercedes Guerrero, Carlos Raúl Osores, Pedro Rondoletto, María Cenador de Rondoletto, Silvia Margarita Rondoletto, Jorge Osvaldo Rondoletto, Azucena Bermejo de Rondoletto, María Celestina González Gallo, Rosario Argañaraz, Víctor Hugo González Toledo, Luis Alberto Soldati, María Trinidad Iramain, Félix Viterbo Corbalán, Enrique Gonzalo Díaz Macías, María Isabel Jiménez de Soldati, Antonio Naief Saade Saieg, Juan Carlos Bustamante, Oscar Rafael Berón, Ana María Sosa de Reynaga, Ángel Vicente Manfredi, Ángel Alfonso Medina Gutiérrez, Fortunato Leandro Fote, Damián Octavio Márquez, Juan Faustino Rodríguez, Pedro Ricardo Rodríguez, Nemesio Humberto Barrionuevo, José Almerico, Juan de Dios Gómez, Manuel Julio Díaz, Benigno Alberto Pereyra, Rina Rosa Alarcón, Federico Adolfo Fürth, Osvaldo José Gregorio Giribaldi, Luis Eduardo Falú, Hernán Eugenio González, Raúl Alberto Vaca Rubio, Rafael Vitalino Yañez, Víctor Hugo Safarov, María Teresa Sánchez, Armando Archetti, José Antonio Cano, Julio Arnaldo Del Castillo, Enrique Alberto Sánchez, Gustavo Adolfo Fochi, Reyes Humberto Morales, Rodolfo Hugo Lerner, Juan Francisco Carreras, Humberto Alfredo González, Juan Carlos Pastori, Alfredo Antonio Coronel, Julio Ricardo Abad, Ángel Adolfo Méndez Brander, Anabel Beatriz Cantos, Luis Cantos y Germán Cantos.

Que asimismo el MPF invoca, a fin de respaldar la presunción de entorpecimiento del proceso, diversos antecedentes y circunstancias personales de los imputados, como ser, haber adquirido la AEI (Aptitud Especial de Inteligencia), lo cual daría cuenta de una capacidad especial que podría ampliar las oportunidades y capacidades de un imputado a la hora de entorpecer una investigación judicial en curso; la tenencia de armas algunas de las cuales son de uso civil restringido; formar parte de la dirección y control de empresas de seguridad privada; etc.

Que en este punto corresponde coincidir con el Ministerio Público Fiscal, en cuanto a que los lugares que ocupaban los encartados en la institución estatal que detentaba el poder a la fecha de los hechos, supuso una situación de dominio no sólo frente a la

USO OFICIAL

comisión de delitos aberrantes sino también en el ocultamiento de los rastros y de la información relativa al destino de aquellas personas que se calificaron como desaparecidas.-

Que la perduración en el tiempo de la situación de poder afirmada, se corrobora ante la imposibilidad de acceder a información cierta sobre el destino de numerosos ciudadanos/ciudadanas argentinas, lo que supone a la fecha el mantenimiento de dominio de los encartados sobre los hechos investigados.

Que el MPF cita jurisprudencia que viene a respaldar el razonamiento referido, y asimismo, deja sentado que el art. 319 C.P.P.N. establece expresamente la obligación del juez de observar *la "objetiva y provisional valoración de las características del hecho"* a los efectos de denegar una excarcelación. En consideración a ello y a las características de los hechos imputados tal como se describen, concluye en que existe un riesgo cierto de que los imputados estando en libertad contribuyan a mantener ese estado de cosas.

Que tal conclusión se encuentra respaldada en lo que respecta específicamente a los hechos investigados en la presente causa, por dos circunstancias: primero, que existe en curso una investigación orientada a detectar y eventualmente a exhumar cadáveres en el lugar en que funcionaba el CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga. Tales actuaciones, que tramitan por ante el Juzgado Federal nº 2 de Tucumán *("Compañía de Arsenales M. de Azcuénaga Investigación s/localización de fosas comunes", Expte. nº 563/05),* en caso de tener el éxito esperado, agravarían las figuras legales aplicables al caso, además de eventualmente constatar la producción de otros ilícitos y de clarificar de manera directa las modalidades de actuación del sistema estatal clandestino del terrorismo de estado. Por lo que existiría un interés concreto de parte de los imputados en la presente causa en que dicha investigación no avance; y en segundo lugar, que los imputados confluían en la llamada "Comunidad Informativa de Inteligencia" a fin de decidir el destino de las personas privadas de su libertad y, consecuentemente, conocen, han ocultado y continuarán ocultando de permanecer en libertad, el destino dado a las mismas.

Que en lo que respecta al segundo aspecto el Sr. Fiscal Federal manifiesta que es un dato esclarecedor que por diferentes medios, algunos violentos y otros con pretensión de legalidad aparente, las agencias estatales involucradas en el terrorismo de Estado han intentado impedir la acción de la justicia para el esclarecimiento y sanción de los crímenes de la dictadura. Así, cabe recordar: la ley N° 22.924 de autoamnistía; los alzamientos militares de Pascuas de 1987; la sanción de las leyes de impunidad conocidas como "Ley de Punto Final" y "Ley de Obediencia Debida"; los indultos del año 1.989; la actuación del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en la investigación de causas por delitos cometidos durante el terrorismo estatal, que en Tucumán fue llevada adelante por el Juzgado de Instrucción Militar n° 76; intervención del imputado Tte. Cnel. Fernando Torres, en una de los reconocimientos judiciales que se produjeron en los predios del Arsenal Miguel de Azcuénaga con testigos directos (en los años 1985 y 1987). A efectos de

reforzar la presente argumentación el MPF cita jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal y de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

Que asimismo el MPF manifiesta que a la hora de merituar el valor de las presunciones previamente analizadas es necesario considerar que en el balance debe entrar el especial deber estatal de investigar graves violaciones a derechos humanos, realizar un debido proceso y sancionar a los responsables.

Que a su vez y luego de hacer referencia a los argumentos generales anteriormente citados, el MPF efectúa un análisis detallado de la situación procesal de cada imputado, haciendo alusión a aquellos aspectos que a su criterio vienen a reforzar las presunciones ya referidas a fin del dictado de medidas cautelares y solicitando las medidas cautelares que estima corresponde dictar mediante auto de procesamiento.

Que conforme los argumentos citados precedentemente el MPF solicita lo siguiente:

(i) Con relación a **Roberto Heriberto Albornoz, Pedro Osvaldo Caballero, Ernesto Arturo Alais y Camilo Ángel Colotti**, se remite a lo que se ha considerado en cada una de las causas en las que se acordó una modalidad de libertad o prisión preventiva respecto de cada uno de ellos, no resultando del análisis efectuado la necesidad o posibilidad de modificar dicha situación.

(ii) Que con relación a **Juan Carlos Benedicto, Augusto Leonardo Neme, Ariel Rolando Valdiviezo, Fernando Torres y Adolfo Ernesto Moore**, existen pruebas concluyentes sobre su autoría en los hechos por los que son imputados y el rol que cumplieron en la organización criminal cuyo accionar se investiga, consecuentemente con los argumentos vertidos en el punto 1 solicita se proceda a aplicar prisión preventiva a su respecto, la que corresponde sea de cumplimiento en una unidad penitenciaria dentro de la jurisdicción de su S.S., mientras dure el presente proceso y dentro de los plazos legales de dicha medida excepcional.

(iii) Que en el caso de **Augusto Neme**, en atención a su especial estado de salud y su edad, el Sr. Fiscal Federal manifiesta que resulta aplicable de manera excepcional la modalidad domiciliaria de detención (art. 32 inc d. Ley 24.660).

(iv) Que con relación a **Celso Alberto Barraza, Omar Marcelo Godoy, Carlos Eduardo Trucco, Ramón Alberto Ojeda Fuente, Tomás Adolfo Güemes, Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, Ernesto Rivero y José Carlos Sowinski**, sobre similares argumentos a los explicitados en el punto 1, solicita el MPF se proceda aplicar prisión preventiva a su respecto, la que en aplicación del principio de excepcionalidad y teniendo especialmente en cuenta sus condiciones y antecedentes personales, resulta admisible sea ordenada en modalidad domiciliaria.

(v) Que con relación a **Miguel Alfredo Manuel Paz y Horacio Alberto Vaccaro**, cuya libertad fuera ordenada en contra del dictamen de este Ministerio Público Fiscal, sobre similares argumentos a los explicitados en el punto 1 solicita se revoque respecto de ellos su actual situación de libertad y se disponga su encarcelamiento cautelar, el cual por

USO OFICIAL

aplicación del principio de excepcionalidad y teniendo especialmente en cuenta sus condiciones y antecedentes personales -especialmente en el caso de Paz su avanzada edad y su estado de salud-, así como su situación previa de libertad, resulta admisible sea ordenada en modalidad domiciliaria.

(vi) Que con relación a **Hugo Enzo Soto, Luis Daniel De Urquiza y Luis Orlando Varela**, existen pruebas concluyentes sobre su autoría en los hechos por los que son imputados y el rol que cumplieron en la organización criminal cuyo accionar se investiga, no obstante considera el Ministerio Público Fiscal que oportunamente prestó su conformidad al pedido de la defensa de excarcelación (Soto) y de exención de prisión (De Urquiza y Varela) en consideración de que dicha resolución habría de permitir una mejor evaluación del resultado de las declaraciones indagatorias y de la reunión de información personal relativa a los imputados a fines de determinar su situación una vez que se ordenara su eventual procesamiento. En el caso de Soto la Fiscalía tomó nota además de su colaboración con la investigación, así como de su edad y situación personal. De todo ello, de sus circunstancias personales y de una aplicación coherente del principio de excepcionalidad y conf. art. 312 1er. Párr. CPPN, **solicita se confirme la situación de libertad de Hugo Enzo Soto y de Luis Daniel De Urquiza**, imponiéndose a efectos de garantizar la tramitación de este proceso caución suficiente, juratoria y, atento a la imposibilidad legal del Ministerio de Defensa de la Nación de prestar caución institucional en caso de ex militares, personal de al menos un tercero fiador que garantice su presencia en el proceso.

Respecto de **Luís Orlando Varela**, atento a sus circunstancias y antecedentes personales y específicamente al rol que desempeña en el ocultamiento de pruebas y en el dominio que tiene a la fecha sobre la investigación, solicita se revoque a su respecto su actual situación de libertad y determinar su encarcelamiento cautelar, el que en aplicación del principio de excepcionalidad, así como su situación previa de libertad, resulta admisible sea ordenada en modalidad domiciliaria.

(vii) Que con relación a **José Eloy Mijalchyk** existen respecto de él pruebas concluyentes sobre su participación criminal en los hechos por los que es imputado y el rol que cumplió en la organización criminal cuyo accionar se investiga. No obstante no se verificaría a su respecto presunción legal de fuga, existiendo sólo una presunción atenuada de entorpecimiento de las investigaciones en estas y otras causas judiciales en trámite. Por todo ello, y considerando su situación personal, solicita se confirme su situación de libertad mientras se sustancie el presente proceso. A tales efectos se requiere la fijación de caución suficiente, juratoria, institucional y personal de al menos un tercero fiador que garantice la presencia del imputado en lo sucesivo del proceso.

7.2. Procedencia de las medidas cautelares privativas de libertad solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.-

Que en forma previa a resolver la procedencia o no de medidas cautelares en contra de los imputados que, conforme surge *ut supra*, son procesados mediante la presente resolución, se considera necesario efectuar algunas reflexiones previas.

Que el régimen procesal de la libertad durante el proceso se encuentra regulado como norma general en el art. 280 Procesal, habilitándose restricciones al principio sólo en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley. Tal principio encuentra ratificación y debido correlato en la norma del art. 2 Procesal que establece que toda disposición legal que coarte la libertad personal, deberá ser interpretada restrictivamente.

Que las normas mencionadas son coherentes con el principio de que la prisión preventiva es una institución de naturaleza meramente procesal y no debe implicar aplicación anticipada del derecho sustancial en la medida de la presunción constitucional de inocencia del art. 18 CN, la que solo podría ser desvirtuada por la existencia de sentencia condenatoria con carácter de cosa juzgada.

Que el principio referido encuentra asimismo consagración en la Convención Americana de Derechos Humanos arts. 7.2, 7.3, 7.5; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre art. XXV y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 9.1.

USO OFICIAL

Que en el ámbito de las restricciones al principio de libertad durante el proceso, corresponde referir al sistema establecido por el código de forma en los arts. 316, 317 inc. 1 y 319 conforme los cuales se establece un doble filtro para mantener la situación de libertad durante el proceso, regido por el principio de proporcionalidad que exige una necesaria correlación entre el rigor de la medida de coerción preventiva y el fin procesal a asegurar con dicha medida.

Que al decir de Marcelo Solimine *"ello para impedir que el proceso de la persecución penal signifique para el imputado una intervención más grave en su vida que la posible condena"*.

Que siguiendo al autor citado, el primer filtro se produce con la habilitación de la libertad en caso de cumplimentarse un requisito positivo, consistente en que el máximo de la pena prevista en abstracto para el caso concreto no supere los ocho años, presunción legal de no fuga.

Que el segundo tamiz opera aún dándose el caso de un máximo superior a los ocho años, cuando por las circunstancias del caso y las condiciones personales del procesado, se pueda estimar procedente una condena de ejecución condicional, cobrando relevancia tanto (i) el tipo de pena, prisión y no reclusión; (ii) el mínimo de la escala penal aplicable, tres años o menos (art. 26 C.P.); (iii) la ausencia de antecedentes condenatorios en el sentido del juego armónico con lo previsto por el art. 27 C.P. y (iv) el pronóstico de pena esperable y su modalidad de ejecución en tanto juicio hipotético conforme las pautas de los arts 26, 40 y 41 del C.P. (Solimine Marcelo, *"Tratado sobre las causales de excarcelación y prisión*

preventiva en el Código Procesal Penal de la Nación”, Editorial Ad-hoc. Villela Editor. Buenos Aires. Año 2003).

Que trasladando los conceptos vertidos al análisis de la presente causa, corresponde referir a que, la Corte Suprema de Justicia en la causa “Binotti, Julio César s/ causa 10.552” (Sentencia de fecha 14 de diciembre de 2010); “Clemens” (Fallo C412 XLV), “Cuomo” (Fallo 435 XLV) haciendo suyos los argumentos del Procurador Fiscal, ha afirmado que *“La circunstancias de que el imputado sea un agente entrenado y capacitado para operar en la clandestinidad sin ser identificado y ocultar prueba o rastro que pueda incriminarlo; que haya formado parte de un grupo de tareas o haya intervenido en una zona de operaciones, o que haya formado parte de estructuras de inteligencia o haya actuado coordinadamente con sectores de inteligencia; que se habrían cometido los delitos desde la estructura de una organización clandestina con alcance continental; son todas circunstancias que hacen al caso concreto”*.

Afirma también la Corte con el Procurador Fiscal que *“La superposición de las circunstancias que integran el tipo objetivo con las que sirven para establecer la hipótesis del riesgo procesal, es un avatar que nada interfiere en ambos juicios: el de adecuación típica y el de prospección del aseguramiento cautelar. Lo cual, por lo demás, se desprende del mandato legislativo, al establecer el artículo 319 del Código de forma la “objetiva y provisional valoración de las características del hecho” como pauta para fundamentar la presunción del riesgo procesal”*.

En tal sentido y conforme los argumentos vertidos precedentemente, puede colegirse que la Corte, frente a imputados por delitos de lesa humanidad ha considerado que su libertad *“favorece claramente la posibilidad de que eluda u obstaculice la acción de la justicia, al tener en cuenta su experticia, los medios y las relaciones de las que podría valerse dentro de aquellas estructuras, en virtud de su pasado como agente de inteligencia del Estado dictatorial y también del democrático. Riesgo que se ve fortalecido por la expectativa de una pena que, sería de suma gravedad”* (Fallo “Pereyra” 23 de noviembre de 2010).

Al tenor de los argumentos vertidos, y considerando cómo fuera resuelta ut supra la situación procesal de **Roberto Heriberto Albornoz, Camilo Ángel Colotti**, **Augusto Leonardo Neme**, **Juan Carlos Benedicto, Ariel Rolando Valdiviezo, Celso Alberto Barraza, Omar Marcelo Godoy, Tomás Adolfo Güemes, Carlos Eduardo Trucco, Adolfo Ernesto Moore, Luis Varela y Miguel Alfredo Manuel Paz,** corresponde disponer a su respecto medidas preventivas privativa de libertad, las que deberán cumplirse del modo que se especifica a continuación:

*** Roberto Heriberto Albornoz,** atento a que se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el Penal de Villa Urquiza, por disposición del Tribunal Oral Federal de Tucumán mediante sentencia de fecha 8 de julio de 2010, en la causa “Jefatura de Policía” (Expte. 795/04)

*** Camilo Ángel Colotti** atento lo resuelto en el punto XXI de la sentencia de fecha 9 de junio de 2010 en la causa "Actuaciones complementarias Jefatura de Policía (2do Grupo)" (795/04), corresponde mantener a su respecto la modalidad de arresto domiciliario dispuesta.

*** Augusto Leonardo Neme**, deberá cumplir prisión preventiva en la modalidad de arresto domiciliario, atento encontrarse incluido en las causales previstas en el art. 10 del CP, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto 1058/97.

*** Juan Carlos Jesús Benedicto**, deberá cumplir prisión preventiva en el Penal de Villa Urquiza, de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

*** Ariel Rolando Valdiviezo,** deberá cumplir prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria Federal de Ezeiza, Buenos Aires.

*** Carlos Eduardo Trucco**, deberá cumplir prisión preventiva en el Unidad Penitenciaria Federal de Ezeiza, Buenos Aires.

*** Marcelo Godoy,** atento la particular situación de salud acreditada en autos, corresponde a su respecto disponer el cumplimiento de la prisión preventiva en la modalidad de arresto domiciliario, en el domicilio sito en Pedro Suarez 3117 (ex calle 120) Posadas, Misiones, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto 1058/97.

*** Celso Alberto Barraza**, deberá cumplir prisión preventiva en la Unidad Penal de Candelaria, Misiones.

*** Tomás Güemes** deberá cumplir prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria Federal de Córdoba.

*** Miguel Alfredo Manuel Paz**, atento lo resuelto mediante sentencia de fecha 10 de noviembre de 2010 dictada en el Incidente de Exención de Prisión, en el ámbito de la presente causa, en razón de su particular situación de salud, corresponde disponer a su respecto el cumplimiento de la prisión preventiva en la modalidad de arresto domiciliario, en el domicilio sito en calle España 550, Block D, Piso 7 Dpto. E, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto 1058/97.

*** Luis Orlando Varela**, deberá cumplir prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria Federal de Jujuy.

*** Adolfo Ernesto Moore**, deberá cumplir prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria Federal de Ezeiza, Buenos Aires.

* Con relación a **Ernesto Alais**, manteniéndose las circunstancias particulares valoradas en la resolución de fecha 10 de agosto de 2010 en el Incidente de Excarcelación tramitado en la causa "Actuaciones Complementarias Jefatura de Policía (2do Grupo" (Expte. 795/84), se dispone que permanezca en libertad durante la tramitación del presente proceso, fijándose a su respecto una caución real de $ 500.000 (Pesos Quinientos Mil).

7.3.- Medidas cautelares pecuniarias.-

Que los encartados **Ramón Ojeda Fuente, Fernando Torres, Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, Ernesto Rivero y José Sowinski** se mantendrán en libertad

USO OFICIAL

durante la tramitación del proceso, bajo caución real la que se fija para cada uno de ellos en la suma de $ 300.000 (Pesos Quinientos Mil). El encartado **José Eloy Mijalchyk** mantendrá su situación de libertad bajo caución real, la que se fija en la suma de $ 150.000 (Pesos Ciento Cincuenta Mil)

Una vez cumplida la caución real impuesta y dispuesto el levantamiento de la detención domiciliaria vigente, los encartados no podrán modificar el domicilio real denunciado, donde deberán permanecer, informando a este Juzgado cualquier ausencia por más de 24 horas, para la que deberá requerir autorización del Juzgado actuante, bajo apercibimiento de procederse a su detención.-

7.4. Medidas para garantizar obligación de residencia y prevenir cualquier posibilidad de fuga.

Paralelamente, considerando la necesidad de adoptar medidas para garantizar la obligación de residencia –como medida diferente a la supervisión de la detención domiciliaria- y la permanencia de los encartados en el ámbito de la jurisdicción federal se dispone:

(i) que personal de Policía Federal de la delegación correspondiente al domicilio de cada encartado con prisión preventiva, cumpla rondas diarias de custodia en los domicilios de los mismos, informando quincenalmente a este Juzgado los movimientos registrados en los mismos;

(ii) que todas las fuerzas federales (Delegaciones Provinciales de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval Marítima y Dirección Nacional de Migraciones) tomen conocimiento de que los encartados **Ernesto Alais, Camilo Angel Colotti, Juan Carlos Jesús Benedicto, Adolfo Ernesto Moore, Ariel Rolando Valdivieso, Carlos Eduardo Trucco, Ernesto Rivero, Ramón Alfredo Ojeda Fuentes, Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, Fernando Torres, Marcelo Omar Godoy, Celso Alberto Barraza, José Carlos Sowinski, Hugo Enzo Soto, Luis Orlando Varela, Luis Daniel De Urquiza, Augusto Leonardo Neme, José Eloy Mijalchyk y Miguel Alfredo Manuel Paz,** se encuentran impedidos de salir del país, debiendo proceder de inmediato a su detención en caso de que intentar eludir la restricción dispuesta.

Por todo lo expuesto se,

RESUELVE:

I.- DECLARAR que los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de libertad con apremios y vejaciones, torturas, torturas seguidas de muerte, abuso deshonesto, violación sexual y homicidio investigados en la presente causa, se habrían perpetrado en el contexto de un ataque sistemático desde el Estado contra una parte substancial del grupo nacional argentino (grupos políticos, políticos militares, y grupos de personas involucradas con la lucha social sin pertenencia política partidaria) a los que se habría identificado como

"enemigos" del pensamiento "occidental cristiano" (cfr. Apartado 5.8), lo que configuraría el contexto del **delito internacional de GENOCIDIO** (conforme normativa internacional vigente al momento de los hechos: Declaración Universal de Derechos Humanos (1948); Resolución n° 3 y n° 95 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; Principios aprobados por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas (1950);Resolución 1074 D (28/7/65) y 1158 XLI (5/8/66) del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; Resoluciones 2338, 2391 y 2583 del año 1969 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad de 1968; Principios de cooperación internacional en la identificación, extradición y castigo de culpables de crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad de 1973; Convención para la prevención y sanción del delito de Genocidio de 1948; Convenios de Ginebra I, II, III y IV de 1949; la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados de 1969).

II.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA de CELSO ALBERTO BARRAZA, DNI 8.465.018, por considerarlo presunto autor material de los delitos de ***abuso sexual*** en perjuicio de A.V.B. (caso 10), del delito de ***homicidio calificado*** en perjuicio de Pedro Rondoletto y Jorge Osvaldo Rondoletto (casos 15 y 18), y del delitos de ***asociación ilícita agravada***, todos en concurso real (art. 127 del CP según ley 11.221 y 21.338, art. 80 inc. 2, 6 y 7, art. 210 y 210 bis, art. 55 y 45 del CP), delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado. Líbrese oficio a la Unidad Penitenciaria de La Candelaria, Misiones, a fin de que arbitre los medios pertinentes para proceder al alojamiento del encartado en dicha institución. Líbrese oficio al Jefe de la Delegación Posadas de Policía Federal a fin de que arbitre los medios para trasladar al encartado al Hospital Público más cercano a su domicilio a fin de que se le realice una revisación médica general y estudios bioquímicos pertinentes (HIV/VDRL/Clínicos y otros que se consideren necesarios) para efectivizar la privación preventiva de libertad dispuesta. Fecho, deberá disponer su traslado a la Unidad Penitenciaria de La Candelaria.-

III.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA de MARCELO OMAR GODOY, DNI 11.119.961, por considerarlo presunto autor material en la comisión de los delitos de ***privación ilegítima de libertad y tormentos*** en perjuicio de Víctor Fernando Alderete (caso 82), Nora Alicia del Valle Cajal (caso 83), y María Cristina Román de Fiad (caso 58) y del delito de ***asociación ilícita agravada***, todos en concurso real (arts. 144 bis inc 1 y 2, 144 ter segundo párrafo, art. 210 y 210 bis, art. 45 y 55 del C.P.), delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado.

USO OFICIAL

IV.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA de ROBERTO HERIBERTO ALBORNOZ, L.E. N° 4.073.811, por considerarlo presunto autor material de los delitos de delito de ***privación ilegítima de libertad con apremios y vejaciones*** en perjuicio de Juan Faustino Rodríguez (caso 39) Pedro Ricardo Rodríguez (caso 40), José Antonio Cano (caso 63), María Angélica Mazzamuto de Romero, Roberto Romero y Antonio Raúl Romero (casos 86, 87 y 88), y del delito de ***tormentos agravados*** en perjuicio de María Angélica Mazzamuto de Romero y Antonio Raúl Romero (casos 86 y 88) en concurso real (art. 144 bis inc. 1 y 2 y 144 ter segundo párrafo –ley 14616-, art. 55 y 45 del CP), delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado.

V.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA de JUAN CARLOS JESUS BENEDICTO, DNI 12.352.042, por considerarlo presunto autor material en la comisión del delito de ***tormentos agravados*** en perjuicio de Adolfo Méndez Brander, Margarita Laskowski (CASOS 94 y 95) y Gustavo Adolfo Fochi (CASO 66) y en la comisión del delito de ***homicidio*** en perjuicio de Gustavo Adolfo Fochi (CASO 66) y del delito de ***asociación ilícita agravada***, todos en concurso real (art. 144 ter segundo párrafo –ley 14616-, art. 80 inc. 2, 6 y 7, art. 210 y 210 bis del CP, art. 55 y 45 del CP), delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado. Líbrese oficio a la Unidad Penitenciaria de Villa Urquiza, Tucumán, a fin de que arbitre los medios pertinentes para proceder al alojamiento del encartado en dicha institución. Líbrese oficio al Jefe de la Delegación Local de Policía Federal a fin de que arbitre los medios para trasladar al encartado al Hospital Padilla a fin de que se le realice una revisación médica general y estudios bioquímicos pertinentes (HIV/VDRL/Clínicos y otros que se consideren necesarios) para efectivizar la privación preventiva de libertad dispuesta. Fecho, deberá disponer su traslado a la Unidad Penitenciaria de Villa Urquiza.-

VI.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO CON PRISION PREVENTIVA de TOMAS ADOLFO GUEMES, DNI nº 8.160.683, por considerarlo presunto autor material en la comisión de los delitos de ***privación ilegítima de libertad y tormentos*** en perjuicio de Nora Alicia del Valle Cajal (caso 83); partícipe primario en la comisión del delito de privación ilegítima de libertad con apremios y vejaciones (art. 142 bis inciso 1 y 2 del CP) en perjuicio de CORRAL Ana Cristina, CAMPOPIANO César, MEDINA Celia, CAMPOPIANO Julio, BARRIONUEVO Antonia del Valle, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, IRAMAIN María Trinidad, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, DIAZ MACIAS Enrique Gonzalo, AUGIER Alberto Argentino, SOSA DE REYNAGA Ana María, MANFREDI Ángel Vicente, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso,

ALMERICO José, GÓMEZ Juan de Dios, GODOY Enrique, DÍAZ Manuel Julio, PEREYRA Benigno Alberto, FALU Luis Eduardo, GONZÁLEZ Hernán Eugenio, VACA RUBIO Raúl Alberto, RODRÍGUEZ ROMÁN DE FIAD María Cristina, YAÑEZ Rafael Vitalino, SAFAROV Víctor Hugo, SÁNCHEZ María Teresa, CANO José Antonio, SÁNCHEZ Enrique Alberto, FOCHI Gustavo Adolfo, LERNER Rodolfo Hugo, CARRERAS Juan Francisco, GONZÁLEZ Humberto Alfredo, LORENZO LERMA Andrés Héctor, CHAPARRO Santos Aurelio, HOYOS Blanca, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, CAJAL Nora, SUÁREZ Julio Guillermo, CANTOS Germán, y como autor material del delito de ***asociación ilícita agravada*** (art. 210 y 210 bis del CP) en concurso real (art. 55 del CP); delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado. Líbrese oficio a la Unidad Penitenciaria Federal de Córdoba, a fin de que arbitre los medios pertinentes para proceder al alojamiento del Tomás Güemes en dicha institución. Líbrese oficio al Jefe de la Delegación Córdoba de Policía Federal a fin de que arbitre los medios para trasladar al encartado al Hospital Público más cercano a su domicilio a fin de que se le realice una revisación médica general y estudios bioquímicos pertinentes (HIV/VDRL/Clínicos y otros que se consideren necesarios) para efectivizar la privación preventiva de libertad dispuesta. Fecho, deberá disponer su traslado a la Unidad Penitenciaria Federal de Córdoba.-

USO OFICIAL

VII.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO CON PRISION PREVENTIVA de AUGUSTO LEONARDO NEME, DNI 4.862.449, por considerarlo presunto autor mediato en la comisión de los delitos de ***(i) Violación de domicilio (art. 151 del CP)*** en perjuicio de Argañaraz Rosario, Argañaraz Miguel Alberto, Quinteros René Manuel, Fote Fortunato Leandro, Godoy Enrique, Adad Julio Ricardo*;* Suarez Julio Guillermo***; (ii) Privación ilegítima de libertad con apremios y/o vejaciones (art. 144 bis inciso 1 y 2 ley 14616)*** en perjuicio de Argañaraz Rosario, Argañaraz Miguel Alberto, Quinteros René Manuel, Fote Fortunato Leandro, Godoy Enrique, Adad Julio Ricardo, Suarez Julio Guillermo, Pereyra Benigno; Lerner Rodolfo Hugo, Quinteros Juan Manuel, Suarez Manuel Humberto, Monasterio Francisco Carlos, Moyano María Candelaria*; **(iii) Torturas agravadas (art. 144 ter primer y segundo párrafo, Ley 14616)*** en perjuicio de Argañaraz Rosario, Argañaraz Miguel Alberto, Quinteros René Manuel, Fote Fortunato Leandro, Godoy Enrique, Abad Julio Ricardo, Suarez Julio Guillermo, Pereyra Benigno; Lerner Rodolfo Hugo, Quinteros Juan Manuel, Suarez Manuel Humberto, Monasterio Francisco Carlos, Moyano María Candelaria*; **(iv) Torturas seguidas de muerte (art. 144 ter tercer párrafo)*** en perjuicio de Abad Julio Ricardo; y ***(v) Homicidio agravado (art. 80 inc. 2, 6 y 7 del CP)*** en perjuicio de Lerner Rodolfo Hugo y como autor material del delito ***de asociación ilícita agravada (art. 210 y 210 bis del CP)*** en concurso real (art. 55 del CP), delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado.

VIII.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO CON PRISION PREVENTIVA de LUIS ORLANDO VARELA, DNI 7.092.080, por considerarlo presunto autor mediato en la comisión de los delitos de ***(i) Violación de domicilio (art. 151 del CP)*** en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, CORRAL Ana Cristina, CAMPOPIANO César Gustavo, MEDINA Celia Georgina, NIEVA Oscar René, YACKEL Ernestina Teresa; BARRIONUEVO Mario, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, IRAMAIN María Trinidad, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, GÓMEZ Juan de Dios, GODOY Enrique, DÍAZ Manuel Julio, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, YAÑEZ Rafael Vitalino, SÁNCHEZ María Teresa, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, FOCHI Gustavo Adolfo, MORALES Reyes Humberto, GONZÁLEZ Humberto Alfredo; LORENZO LERMA Andrés Héctor, CHAPARRO Santos Aurelio, IÑÍGUEZ Gloria del Valle, BRIZUELA Ramón, CORONEL Alfredo Antonio, CARABAJAL Ercilia Dolores, HOYOS Blanca, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, ALDERETE Víctor Fernando, QUINTEROS Juan Manuel, MAZZAMUTO DE ROMERO María Angélica, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria, HAZURÚN Teresita Cándida, MÉNDEZ BRANDER Ángel Adolfo, LASKOWSKI María Margarita, CANTOS Luis; ***(ii) Privación ilegítima de libertad con apremios y/o vejaciones (art. 144 bis inciso 1 y 2 ley 14616)*** en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, FERNÁNDEZ Enrique Raúl, CORRAL Ana Cristina, CAMPOPIANO César Gustavo, MEDINA Celia Georgina, CAMPOPIANO Julio César, NIEVA Oscar René, YACKEL Ernestina Teresa; BARRIONUEVO Mario, BARRIONUEVO Antonia del Valle, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, IRAMAIN María Trinidad, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, DÍAZ MACÍAS Enrique Gonzalo, AUGIER Alberto Argentino, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, SOSA DE REYNAGA Ana María, MANFREDI Ángel Vicente, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, FOTE Fortunato Leandro, MÁRQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, JUSTO Héctor Oscar,

PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, ACUÑA Baltasar, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, GÓMEZ Juan de Dios, GODOY Enrique, DÍAZ Manuel Julio, PEREYRA Benigno Alberto, ALARCÓN Rina Rosa, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, FÜRTH Federico Adolfo, GIRIBALDI Osvaldo José Gregorio, FALÚ Luis Eduardo, GONZÁLEZ Hernán Eugenio, VACA RUBIO Raúl Alberto, RODRÍGUEZ ROMÁN DE FIAD María Cristina, YAÑEZ Rafael Vitalino, SAFAROV Víctor Hugo, SÁNCHEZ María Teresa, ARCHETTI Armando, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, FOCHI Gustavo Adolfo, MORALES Reyes Humberto, LERNER Rodolfo Hugo, CARRERAS Juan Francisco, GONZÁLEZ Humberto Alfredo; LORENZO LERMA Andrés Héctor, PASTORI Juan Carlos, CRUZ Ernesto José Segundo, CHAPARRO Santos Aurelio, IÑÍGUEZ Gloria del Valle, BRIZUELA Ramón, CORONEL Alfredo Antonio, CARABAJAL Ercilia Dolores, HOYOS Blanca, ABAD Julio Ricardo, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, ALDERETE Víctor Fernando, CAJAL Nora Alicia del Valle, FABIO Diana Elsa, QUINTEROS Juan Manuel, MAZZAMUTO DE ROMERO María Angélica, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria, HAZURÚN Teresita Cándida, MÉNDEZ BRANDER Ángel Adolfo, LASKOWSKI María Margarita, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Luis, CANTOS Germán; ***(iii) Torturas agravadas (art. 144 ter primer y segundo párrafo, Ley 14616)*** en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, FERNÁNDEZ Enrique Raúl, CORRAL Ana Cristina, CAMPOPIANO César Gustavo, MEDINA Celia Georgina, NIEVA Oscar René, YACKEL Ernestina Teresa; BARRIONUEVO Mario, BARRIONUEVO Antonia del Valle, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, IRAMAIN María Trinidad, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, AUGIER Alberto Argentino, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, SOSA DE REYNAGA Ana María, MANFREDI Ángel Vicente, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, FOTE Fortunato Leandro, MÁRQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, JUSTO Héctor Oscar, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, ACUÑA Baltasar, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, GODOY Enrique, DÍAZ Manuel Julio, PEREYRA Benigno Alberto, ALARCÓN Rina Rosa, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, FÜRTH Federico Adolfo, GIRIBALDI Osvaldo José Gregorio, FALÚ Luis Eduardo, GONZÁLEZ Hernán Eugenio, VACA RUBIO Raúl Alberto, RODRÍGUEZ ROMÁN DE FIAD María Cristina, YAÑEZ Rafael Vitalino, SÁNCHEZ María Teresa, ARCHETTI Armando, CANO José Antonio, DEL CASTILLO

USO OFICIAL

Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, MORALES Reyes Humberto, LERNER Rodolfo Hugo, CARRERAS Juan Francisco; LORENZO LERMA Andrés Héctor, PASTORI Juan Carlos, CRUZ Ernesto José Segundo, CHAPARRO Santos Aurelio, IÑÍGUEZ Gloria del Valle, BRIZUELA Ramón, CORONEL Alfredo Antonio, CARABAJAL Ercilia Dolores, HOYOS Blanca, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, ALDERETE Víctor Fernando, CAJAL Nora Alicia del Valle, FABIO Diana Elsa, QUINTEROS Juan Manuel, MAZZAMUTO DE ROMERO María Angélica, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria, HAZURÚN Teresita Cándida, LASKOWSKI María Margarita, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Luis, CANTOS Germán; ***(iv) Torturas seguidas de muerte (art. 144 ter tercer párrafo del CP)*** en perjuicio de Julio César CAMPOPIANO, Juan de Dios GOMEZ, Enrique Gonzalo DIAZ MACIAS, Víctor SAFAROV, Humberto Alfredo GONZALEZ, Gustavo Adolfo FOCHI, Julio Ricardo ABAD y Ángel Adolfo MÉNDEZ BRANDER; y ***(iv) Homicidio agravado (art. 80 inc. 2, 6 y 7 del CP)*** en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, FERNÁNDEZ Enrique Raúl, CORRAL Ana Cristina, NIEVA Oscar René, BARRIONUEVO Mario, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, ARGAÑARAZ Rosario, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, IRAMAIN María Trinidad, CORBALÁN Félix Viterbo, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, SOSA DE REYNAGA Ana María, MANFREDI Ángel Vicente, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, FOTE Fortunato Leandro, MÁRQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, DÍAZ Manuel Julio, PEREYRA Benigno Alberto, ALARCÓN Rina Rosa, FÜRTH Federico Adolfo, GIRIBALDI Osvaldo José Gregorio, FALÚ Luis Eduardo, GONZÁLEZ Hernán Eugenio, VACA RUBIO Raúl Alberto, YAÑEZ Rafael Vitalino, SÁNCHEZ María Teresa, ARCHETTI Armando, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, MORALES Reyes Humberto, LERNER Rodolfo Hugo, CARRERAS Juan Francisco, PASTORI Juan Carlos, CORONEL Alfredo Antonio, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Luis, CANTOS Germán; como partícipe necesario en la comisión del delito de ***violación sexual (art. 119 del CP según ley 11.221 y 21.338)*** en perjuicio de G.V.I., N.C. y B.H; y del delito de ***abuso deshonesto (art. 127 del CP según ley 11.221 y 21.338)*** en perjuicio de A.V.B, D.F. y M.I.J.S., y autor material del delito de ***asociación ilícita agravada (art. 210 y 210 bis del CP)*** en concurso real (art. 55 del CP); delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado. Líbrese oficio a la Unidad Penitencia de Jujuy a fin de que arbitre los medios pertinentes para proceder a su alojamiento en dicha institución. Líbrese oficio al Jefe de la

Delegación Jujuy de Policía Federal a fin de que arbitre los medios para trasladar al encartado al Hospital Público más cercano a su domicilio a fin de que se le realice una revisación médica general y estudios bioquímicos pertinentes (HIV/VDRL/Clínicos y otros que se consideren necesarios) para efectivizar la privación preventiva de libertad dispuesta. Fecho, deberá disponer su traslado a la Unidad Penitenciaria Federal de Jujuy.-

IX. ORDENAR EL PROCESAMIENTO CON PRISION PREVENTIVA de ADOLFO ERNESTO MOORE, DNI 7.772.824, por considerarlo presunto autor mediato en la comisión de los delitos de ***(i) Violación de domicilio (art. 151 del CP)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, BERÓN Oscar Rafael, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, ALMERICO José, GODOY Enrique, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, CANTOS Luis; ***(ii) Privación ilegítima de libertad con apremios y/o vejaciones (art. 144 bis inciso 1 y 2 ley 14616)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, SOLDATI Luis Alberto, AUGIER Alberto Argentino, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, SAADE SAIEG Antonio Naief, BERÓN Oscar Rafael, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, MÁRQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, JUSTO Héctor Oscar, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, ACUÑA Baltasar, ALMERICO José, GODOY Enrique, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, ARCHETTI Armando, CRUZ Ernesto José Segundo, ABAD Julio Ricardo, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, CANTOS Luis, CANTOS Germán; ***(iii) Torturas agravadas (art. 144 ter primer y segundo párrafo, Ley 14616)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, SOLDATI Luis Alberto, AUGIER Alberto Argentino, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, SAADE SAIEG Antonio Naief, BERÓN Oscar Rafael, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, MÁRQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, JUSTO Héctor Oscar, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, ACUÑA Baltasar, ALMERICO José, GODOY Enrique, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, ARCHETTI Armando, CRUZ Ernesto José Segundo, ABAD Julio Ricardo, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, CANTOS Luis, CANTOS Germán; ***(iv) Torturas seguidas de muerte (art. 144 ter del CP)*** en perjuicio de Julio Ricardo ABAD; y ***(iv) Homicidio agravado (art. 80 inc. 2, 6 y 7 del CP)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, SOLDATI Luis Alberto, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, SAADE SAIEG Antonio Naief, BERÓN Oscar Rafael, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, MÁRQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, ALMERICO José,

USO OFICIAL

ARCHETTI Armando, CANTOS Luis; como partícipe necesario en la comisión del delito de ***abuso deshonesto (art. 127 del CP según ley 11.221 y 21.338)*** en perjuicio de M.I.J.S.; y del delito de ***asociación ilícita agravada (art. 210 y 210 bis del CP)*** en concurso real (art. 55 del CP); delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado. Líbrese oficio a la Unidad Penitenciaria Federal de Ezeiza a fin de que arbitre los medios para proceder al alojamiento del encartado en dicha institución. Líbrese oficio al Jefe de la Delegación de Policía Federal que tiene a cargo la custodia del domicilio del encartado, a fin de que arbitre los medios para trasladarlo al Hospital Público más cercano a su domicilio a fin de que se le realice una revisación médica general y estudios bioquímicos pertinentes (HIV/VDRL/Clínicos y otros que se consideren necesarios) para efectivizar la privación preventiva de libertad dispuesta. Fecho, deberá disponer su traslado a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza.-

X. ORDENAR EL PROCESAMIENTO de ERNESTO ALAIS, LE 4.794.181, por considerarlo presunto autor mediato en la comisión de los delitos de ***(i) Violación de domicilio (art. 151 del CP)*** en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, CORRAL Ana Cristina, CAMPOPIANO César Gustavo, MEDINA Celia Georgina, NIEVA Oscar René, YACKEL Ernestina Teresa; BARRIONUEVO Mario, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, IRAMAIN María Trinidad, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, GÓMEZ Juan de Dios, GODOY Enrique, DÍAZ Manuel Julio, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, YAÑEZ Rafael Vitalino, SÁNCHEZ María Teresa, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, FOCHI Gustavo Adolfo, MORALES Reyes Humberto, GONZÁLEZ Humberto Alfredo; LORENZO LERMA Andrés Héctor, CHAPARRO Santos Aurelio, IÑÍGUEZ Gloria del Valle, BRIZUELA Ramón, CORONEL Alfredo Antonio, CARABAJAL Ercilia Dolores, HOYOS Blanca, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, ALDERETE Víctor Fernando, QUINTEROS Juan Manuel, MAZZAMUTO DE ROMERO María Angélica, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria, HAZURÚN Teresita Cándida, MÉNDEZ BRANDER Ángel Adolfo, LASKOWSKI María Margarita, CANTOS Luis; ***(ii) Privación ilegítima de libertad con apremios y/o vejaciones (art. 144 bis inciso 1 y 2 ley 14616)*** en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, FERNÁNDEZ Enrique Raúl, CORRAL Ana Cristina, CAMPOPIANO César Gustavo, MEDINA Celia

USO OFICIAL

Georgina, CAMPOPIANO Julio César, NIEVA Oscar René, YACKEL Ernestina Teresa; BARRIONUEVO Mario, BARRIONUEVO Antonia del Valle, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, IRAMAIN María Trinidad, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, DÍAZ MACÍAS Enrique Gonzalo, AUGIER Alberto Argentino, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, SAADE SAIEG Antonio Naief, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, SOSA DE REYNAGA Ana María, MANFREDI Ángel Vicente, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, FOTE Fortunato Leandro, MÁRQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, JUSTO Héctor Oscar, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, ACUÑA Baltasar, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, GÓMEZ Juan de Dios, GODOY Enrique, DÍAZ Manuel Julio, PEREYRA Benigno Alberto, ALARCÓN Rina Rosa, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, FÜRTH Federico Adolfo, GIRIBALDI Osvaldo José Gregorio, FALÚ Luis Eduardo, GONZÁLEZ Hernán Eugenio, VACA RUBIO Raúl Alberto, RODRÍGUEZ ROMÁN DE FIAD María Cristina, YAÑEZ Rafael Vitalino, SAFAROV Víctor Hugo, SÁNCHEZ María Teresa, ARCHETTI Armando, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, FOCHI Gustavo Adolfo, MORALES Reyes Humberto, LERNER Rodolfo Hugo, CARRERAS Juan Francisco, GONZÁLEZ Humberto Alfredo; LORENZO LERMA Andrés Héctor, PASTORI Juan Carlos, CRUZ Ernesto José Segundo, CHAPARRO Santos Aurelio, IÑÍGUEZ Gloria del Valle, BRIZUELA Ramón, CORONEL Alfredo Antonio, CARABAJAL Ercilia Dolores, HOYOS Blanca, ABAD Julio Ricardo, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, ALDERETE Víctor Fernando, CAJAL Nora Alicia del Valle, FABIO Diana Elsa, QUINTEROS Juan Manuel, MAZZAMUTO DE ROMERO María Angélica, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria, HAZURÚN Teresita Cándida, MÉNDEZ BRANDER Ángel Adolfo, LASKOWSKI María Margarita, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Luis, CANTOS Germán; ***(iii) Torturas agravadas (art. 144 ter primer y segundo párrafo, Ley 14616)*** en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, FERNÁNDEZ Enrique Raúl, CORRAL Ana Cristina, CAMPOPIANO César Gustavo, MEDINA Celia Georgina, NIEVA Oscar René, YACKEL Ernestina Teresa; BARRIONUEVO Mario, BARRIONUEVO Antonia del Valle, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor

Hugo, IRAMAIN María Trinidad, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, AUGIER Alberto Argentino, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, BERÓN Oscar Rafael, SOSA DE REYNAGA Ana María, MANFREDI Ángel Vicente, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, FOTE Fortunato Leandro, MÁRQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, JUSTO Héctor Oscar, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, ACUÑA Baltasar, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, GODOY Enrique, DÍAZ Manuel Julio, PEREYRA Benigno Alberto, ALARCÓN Rina Rosa, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, FÜRTH Federico Adolfo, GIRIBALDI Osvaldo José Gregorio, FALÚ Luis Eduardo, GONZÁLEZ Hernán Eugenio, VACA RUBIO Raúl Alberto, RODRÍGUEZ ROMÁN DE FIAD María Cristina, YAÑEZ Rafael Vitalino, SÁNCHEZ María Teresa, ARCHETTI Armando, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, MORALES Reyes Humberto, LERNER Rodolfo Hugo, CARRERAS Juan Francisco; LORENZO LERMA Andrés Héctor, PASTORI Juan Carlos, CRUZ Ernesto José Segundo, CHAPARRO Santos Aurelio, IÑÍGUEZ Gloria del Valle, BRIZUELA Ramón, CORONEL Alfredo Antonio, CARABAJAL Ercilia Dolores, HOYOS Blanca, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, ALDERETE Víctor Fernando, CAJAL Nora Alicia del Valle, FABIO Diana Elsa, QUINTEROS Juan Manuel, MAZZAMUTO DE ROMERO María Angélica, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria, HAZURÚN Teresita Cándida, LASKOWSKI María Margarita, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Luis, CANTOS Germán; ***(iv) Torturas seguidas de muerte (art. 144 ter tercer párrafo Ley 14616)*** en perjuicio de Julio César CAMPOPIANO, Juan de Dios GOMEZ, Enrique Gonzalo DIAZ MACIAS, Víctor SAFAROV, Humberto Alfredo GONZALEZ, Gustavo Adolfo FOCHI, Julio Ricardo ABAD y Ángel Adolfo MÉNDEZ BRANDER*;* y ***(iv) Homicidio agravado (art. 80 inc. 2, 6 y 7 del CP)*** en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, FERNÁNDEZ Enrique Raúl, CORRAL Ana Cristina, NIEVA Oscar René, BARRIONUEVO Mario, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, ARGAÑARAZ Rosario, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, IRAMAIN María Trinidad, CORBALÁN Félix Viterbo, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, BERÓN Oscar Rafael, SOSA DE REYNAGA Ana María, MANFREDI Ángel Vicente, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, FOTE Fortunato Leandro, MÁRQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, DÍAZ Manuel Julio, PEREYRA Benigno Alberto, ALARCÓN Rina Rosa, FÜRTH Federico Adolfo, GIRIBALDI Osvaldo José Gregorio, FALÚ Luis Eduardo, GONZÁLEZ Hernán Eugenio, VACA RUBIO Raúl Alberto, YAÑEZ Rafael Vitalino, SÁNCHEZ María Teresa,

ARCHETTI Armando, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, MORALES Reyes Humberto, LERNER Rodolfo Hugo, CARRERAS Juan Francisco; PASTORI Juan Carlos, CORONEL Alfredo Antonio, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Luis, CANTOS Germán; como partícipe necesario en la comisión del delito de ***violación sexual (art. 119 del CP según ley 11.221 y 21.338)*** en perjuicio de G.V.I., N.C. y B.H; y del delito de ***abuso deshonesto (art. 127 del CP según ley 11.221 y 21.338)*** en perjuicio de A.V.B, D.F. y M.I.J.S.; y como autor material del delito de ***asociación ilícita agravada (art. 210 y 210 bis del CP)*** en concurso real (art. 55 del CP); delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado**.**

XI. ORDENAR EL PROCESAMIENTO CON PRISION PREVENTIVA de CAMILO ANGEL COLOTTI, DNI 6.119.283, se lo considera presunto autor mediato en la comisión de los delitos de ***(i) Violación de domicilio (art. 151 del CP)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, CANTOS Luis; ***(ii) Privación ilegítima de libertad con apremios y/o vejaciones (art. 144 bis inciso 1 y 2 ley 14616)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, FOTE Fortunato Leandro, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, PEREYRA Benigno Alberto, ABAD Julio Ricardo, CANTOS Luis; ***(iii) Torturas agravadas (art. 144 ter primer y segundo párrafo, Ley 14616)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, FOTE Fortunato Leandro, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, PEREYRA Benigno Alberto, CANTOS Luis ***; (iv) Torturas seguidas de muerte (art. 144 ter tercer párrafo)*** en perjuicio de Julio Ricardo ABAD; y ***(iv) Homicidio agravado (art. 80 inc. 2, 6 y 7 del CP)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, FOTE Fortunato Leandro, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, PEREYRA Benigno Alberto, CANTOS Luis y del delito de ***asociación ilícita agravada (art. 210 y 210 bis del CP)*** en concurso real (art. 55 del CP); delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado**.-**

XII. ORDENAR EL PROCESAMIENTO CON PRISION PREVENTIVA de PAZ MIGUEL ALFREDO MANUEL, DNI 4.833.407, por considerarlo presunto autor mediato en la comisión de los delitos de ***(i) Violación de domicilio (art. 151 del CP)*** en perjuicio de Quinteros Rene Manuel, Godoy Enrique, Quinteros Juan Manuel, Suarez Julio Guillermo, Suarez Manuel Humberto, Monasterio Francisco Carlos, Moyano María Candelaria; ***(ii) Privación ilegítima de libertad con apremios y/o vejaciones (art. 144 bis inciso 1 y 2 ley 14616)*** en perjuicio de Quinteros Rene Manuel, Fortunato Leandro Fote, Godoy Enrique, Pereyra Benigno Alberto, Lerner Rodolfo Hugo, Abad Julio Ricardo, Quinteros Juan Manuel, Suarez Julio Guillermo, Suarez Manuel Humberto, Monasterio Francisco Carlos, Moyano María Candelaria; ***(iii) Torturas agravadas (art. 144 ter primer***

USO OFICIAL

y segundo párrafo, Ley 14616) en perjuicio de Quinteros Rene Manuel, Fortunato Leandro Fote, Godoy Enrique, Pereyra Benigno Alberto, Lerner Rodolfo Hugo, Abad Julio Ricardo, Quinteros Juan Manuel, Suarez Julio Guillermo, Suarez Manuel Humberto, Monasterio Francisco Carlos, Moyano María Candelaria; ***(iv) Torturas seguidas de muerte (art. 144 ter tercer párrafo)*** en perjuicio de Abad Julio Ricardo; y ***(iv) Homicidio agravado (art. 80 inc. 2, 6 y 7 del CP)*** en perjuicio de Fortunato Leandro Fote, Pereyra Benigno Alberto, Lerner Rodolfo Hugo y del delito de ***asociación ilícita agravada (art. 210 y 210 bis del CP)*** en concurso real (art. 55 del CP); delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado

XIII. ORDENAR EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA de ARIEL ROLANDO VALDIVIEZO, DNI 8.196.717, por considerarlo presunto autor mediato en la comisión de los delitos de ***(i) Violación de domicilio (art. 151 del CP)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, QUINTEROS René Manuel, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, GODOY Enrique, QUINTEROS Juan Manuel, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria; ***(ii) Privación ilegítima de libertad con apremios y/o vejaciones (art. 144 bis inciso 1 y 2 ley 14616)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, FOTE Fortunato Leandro, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, GODOY Enrique, PEREYRA Benigno Alberto, LERNER Rodolfo Hugo, ABAD Julio Ricardo, QUINTEROS Juan Manuel, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria; ***(iii) Torturas agravadas (art. 144 ter primer y segundo párrafo, Ley 14616)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, FOTE Fortunato Leandro, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, GODOY Enrique, PEREYRA Benigno Alberto, LERNER Rodolfo Hugo, QUINTEROS Juan Manuel, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria***; (iv) Torturas seguidas de muerte (art. 144 ter tercer párrafo)*** en perjuicio de Julio Ricardo ABAD; y ***(iv) Homicidio agravado (art. 80 inc. 2, 6 y 7 del CP)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, FOTE Fortunato Leandro, PEREYRA Benjamín, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, LERNER Rodolfo Hugo y como autor material del delito de ***asociación ilícita agravada (art. 210 y 210 bis del CP)*** en concurso real (art. 55 del CP); delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado**.** Líbrese oficio a la Unidad Penitenciaria Federal de Ezeiza a fin de que arbitre los medios para proceder al alojamiento del encartado en dicha institución. Líbrese oficio al Jefe de la Delegación de Policía Federal que tiene a cargo la custodia del domicilio del encartado, a fin de que arbitre los medios para trasladarlo al Hospital Público más cercano a su domicilio para que se le realice una

revisación médica general y estudios bioquímicos pertinentes (HIV/VDRL/Clínicos y otros que se consideren necesarios) para efectivizar la privación preventiva de libertad dispuesta. Fecho, deberá disponer su traslado a la Unidad Penitenciaria Federal de Ezeiza.-

XIV. ORDENAR EL PROCESAMIENTO CON PRISION PREVENTIVA de CALOS EDUARDO TRUCCO, DNI 8.268.240, por considerarlo presunto autor mediato en la comisión de los delitos de ***(i) Violación de domicilio (art. 151 del CP)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, QUINTEROS René Manuel, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, GODOY Enrique, QUINTEROS Juan Manuel, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria; ***(ii) Privación ilegítima de libertad con apremios y/o vejaciones (art. 144 bis inciso 1 y 2 ley 14616)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, FOTE Fortunato Leandro, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, GODOY Enrique, PEREYRA Benigno Alberto, LERNER Rodolfo Hugo, ABAD Julio Ricardo, QUINTEROS Juan Manuel, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria; ***(iii) Torturas agravadas (art. 144 ter primer y segundo párrafo, Ley 14616)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, FOTE Fortunato Leandro, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, GODOY Enrique, PEREYRA Benigno Alberto, LERNER Rodolfo Hugo, QUINTEROS Juan Manuel, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria***; (iv) Torturas seguidas de muerte (art. 144 ter tercer párrafo)*** en perjuicio de Julio Ricardo ABAD; y ***(iv) Homicidio agravado (art. 80 inc. 2, 6 y 7 del CP)*** en perjuicio de ARGAÑARAZ Rosario, FOTE Fortunato Leandro, PEREYRA Benjamín, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, LERNER Rodolfo Hugo; y como autor material del delito de ***asociación ilícita agravada (art. 210 y 210 bis del CP)*** en concurso real (art. 55 del CP), delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado. Líbrese oficio a la Unidad Penitenciaria Federal de Ezeiza a fin de que arbitre los medios para proceder al alojamiento del encartado en dicha institución. Líbrese oficio al Jefe de la Delegación de Policía Federal que tiene a cargo la custodia del domicilio del encartado, a fin de que arbitre los medios para trasladarlo al Hospital Público más cercano a su domicilio para que se le realice una revisación médica general y estudios bioquímicos pertinentes (HIV/VDRL/Clínicos y otros que se consideren necesarios) para efectivizar la privación preventiva de libertad dispuesta. Fecho, deberá disponer su traslado a la Unidad Penitenciaria Federal de Ezeiza.-

USO OFICIAL

XV. ORDENAR EL PROCESAMIENTO de PEDRO OSVALDO CABALLERO, LE nº 4.259.468, por considerarlo presunto autor del delito de ***encubrimiento (art. 277 del CP)*** conforme lo considerado.-

XVI. ORDENAR EL PROCESAMIENTO de HUGO ENZO SOTO, LE 6.946.841, por considerarlo presunto autor del delito de ***encubrimiento (art. 277 del CP.)*** conforme lo considerado.

XVII. ORDENAR EL PROCESAMIENTO de RAMON ALFREDO OJEDA FUENTE, DNI 4.531.128, por considerarlo presunto partícipe necesario en la comisión de los delitos de ***(i) Violación de domicilio (art. 151 del CP)*** en perjuicio de CORRAL Ana Cristina; DÍAZ SARAVIA José Horacio, RONDOLETTO Pedro, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, MEDINA GUTIERREZ Ángel Alfonso, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, GODOY Enrique, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, MAZZAMUTO DE ROMERO María Angélica, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, HAZURÚN Teresita Cándida, CANTOS Luis; ***(ii) Privación ilegítima de libertad con apremios y/o vejaciones (art. 144 bis inciso 1 y 2 ley 14616)*** en perjuicio de CAMPOPIANO Julio, CORRAL Ana Cristina, DÍAZ SARAVIA José Horacio, RONDOLETTO Pedro, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, SOLDATI Luis Alberto, AUGIER Alberto Argentino, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, SAADE SAIEG Antonio Naief, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, MEDINA GUTIERREZ Ángel Alfonso, FOTE Fortunato Leandro, MARQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, JUSTO Héctor Oscar, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, ACUÑA Baltasar, ALMERICO José, GODOY Enrique, PEREYRA Benigno Alberto, ALARCÓN Rina Rosa, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, ARCHETTI Armando, CARRERAS Juan Francisco, CRUZ Ernesto José Segundo, ABAD Julio Ricardo, CAJAL Nora, ALDERETE SORIA Alejandro, MAZZAMUTO DE ROMERO María Angélica, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, HAZURÚN Teresita Cándida, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Luis, CANTOS Germán. ***(iii) Torturas agravadas (art. 144 ter primer y segundo párrafo, Ley 14616)*** CORRAL Ana Cristina, DÍAZ SARAVIA José Horacio, RONDOLETTO Pedro, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, SOLDATI Luis Alberto, AUGIER Alberto Argentino, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, SAADE SAIEG Antonio Naief, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, MEDINA GUTIERREZ Ángel Alfonso, FOTE Fortunato Leandro, MARQUEZ Damián

Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, JUSTO Héctor Oscar, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, ACUÑA Baltasar, ALMERICO José, GODOY Enrique, PEREYRA Benigno Alberto, ALARCÓN Rina Rita, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, ARCHETTI Armando, CARRERAS Juan Francisco, CRUZ Ernesto José Segundo, CAJAL Nora, ALDERETE SORIA Alejandro, MAZZAMUTO DE ROMERO María Angélica, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, HAZURÚN Teresita Cándida, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Luis, CANTOS Germán; ***(iv) Torturas seguidas de muerte (art. 144 ter del CP)*** en perjuicio de CAMPOPIANO Julio, ABAD Julio Ricardo; y ***(iv) Homicidio agravado (art. 80 inc. 2, 6 y 7 del CP)*** en perjuicio de CORRAL Ana Cristina, DÍAZ SARAVIA José Horacio, RONDOLETTO Pedro, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, SOLDATI Luis Alberto, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, SAADE SAIEG Antonio Naief, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, MEDINA DE GUTIERREZ Ángel, FOTE Fortunato Leandro, MARQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, ALARCÓN Rina Rosa, ARCHETTI Armando, CANTOS Luis, CANTOS Germán, y como autor material del delito de ***asociación ilícita agravada (art. 210 y 210 bis del CP)*** todos en concurso real (art. 55 del CP); delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado.

USO OFICIAL

XVIII. ORDENAR EL PROCESAMIENTO de FERNANDO VARELA por considerarlo presunto partícipe necesario en la comisión de los delitos de ***(i) Violación de domicilio (art. 151 del CP)*** en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, CORRAL Ana Cristina, CAMPOPIANO César Gustavo, MEDINA Celia Georgina, NIEVA Oscar René, YACKEL Ernestina Teresa; BARRIONUEVO Mario, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, IRAMAIN María Trinidad, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, GÓMEZ Juan de Dios, GODOY Enrique, DÍAZ Manuel Julio, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, YAÑEZ Rafael Vitalino, SÁNCHEZ María Teresa, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, FOCHI Gustavo Adolfo, MORALES Reyes Humberto, GONZÁLEZ Humberto Alfredo; LORENZO LERMA Andrés Héctor, CHAPARRO Santos Aurelio, IÑÍGUEZ Gloria del Valle, BRIZUELA Ramón, CORONEL Alfredo Antonio, CARABAJAL Ercilia Dolores, MAZZAMUTO DE ROMERO María Angélica, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio

Raúl, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria, HAZURÚN Teresita Cándida, MÉNDEZ BRANDER Ángel Adolfo, LASKOWSKI María Margarita, CANTOS Luis; ***(ii) Privación ilegítima de libertad con apremios y/o vejaciones (art. 144 bis inciso 1 y 2 ley 14616)*** en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, FERNÁNDEZ Enrique Raúl, CORRAL Ana Cristina, CAMPOPIANO César Gustavo, MEDINA Celia Georgina, CAMPOPIANO Julio César, NIEVA Oscar René, YACKEL Ernestina Teresa; BARRIONUEVO Mario, BARRIONUEVO Antonia del Valle, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, IRAMAIN María Trinidad, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, DÍAZ MACÍAS Enrique Gonzalo, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, SOSA DE REYNAGA Ana María, MANFREDI Ángel Vicente, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, FOTE Fortunato Leandro, MÁRQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, JUSTO Héctor Oscar, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, ACUÑA Baltasar, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, GÓMEZ Juan de Dios, GODOY Enrique, DÍAZ Manuel Julio, PEREYRA Benigno Alberto, ALARCÓN Rina Rosa, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, FÜRTH Federico Adolfo, GIRIBALDI Osvaldo José Gregorio, FALÚ Luis Eduardo, GONZÁLEZ Hernán Eugenio, VACA RUBIO Raúl Alberto, RODRÍGUEZ ROMÁN DE FIAD María Cristina, YAÑEZ Rafael Vitalino, SAFAROV Víctor Hugo, SÁNCHEZ María Teresa, ARCHETTI Armando, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, FOCHI Gustavo Adolfo, MORALES Reyes Humberto, LERNER Rodolfo Hugo, CARRERAS Juan Francisco, GONZÁLEZ Humberto Alfredo; LORENZO LERMA Andrés Héctor, CRUZ Ernesto José Segundo, CHAPARRO Santos Aurelio, IÑÍGUEZ Gloria del Valle, BRIZUELA Ramón, CORONEL Alfredo Antonio, CARABAJAL Ercilia Dolores, ABAD Julio Ricardo, CAJAL Nora Alicia del Valle, FABIO Diana Elsa, MAZZAMUTO DE ROMERO María Angélica, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria, HAZURÚN Teresita Cándida, MÉNDEZ BRANDER Ángel Adolfo, LASKOWSKI María Margarita, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Luis, CANTOS Germán; ***(iii) Torturas agravadas (art. 144 ter primer y segundo párrafo, Ley 14616)*** en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, FERNÁNDEZ Enrique Raúl, CORRAL Ana Cristina, CAMPOPIANO César Gustavo, MEDINA Celia Georgina, NIEVA Oscar René, YACKEL Ernestina Teresa; BARRIONUEVO Mario, BARRIONUEVO Antonia del Valle, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl,

RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, IRAMAIN María Trinidad, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, SOSA DE REYNAGA Ana María, MANFREDI Ángel Vicente, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, FOTE Fortunato Leandro, MÁRQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, JUSTO Héctor Oscar, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, ACUÑA Baltasar, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, GODOY Enrique, DÍAZ Manuel Julio, PEREYRA Benigno Alberto, ALARCÓN Rina Rosa, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, FÜRTH Federico Adolfo, GIRIBALDI Osvaldo José Gregorio, FALÚ Luis Eduardo, GONZÁLEZ Hernán Eugenio, VACA RUBIO Raúl Alberto, RODRÍGUEZ ROMÁN DE FIAD María Cristina, YAÑEZ Rafael Vitalino, SÁNCHEZ María Teresa, ARCHETTI Armando, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, MORALES Reyes Humberto, LERNER Rodolfo Hugo, CARRERAS Juan Francisco; LORENZO LERMA Andrés Héctor, CRUZ Ernesto José Segundo, CHAPARRO Santos Aurelio, IÑÍGUEZ Gloria del Valle, BRIZUELA Ramón, CORONEL Alfredo Antonio, CARABAJAL Ercilia Dolores, CAJAL Nora Alicia del Valle, FABIO Diana Elsa, MAZZAMUTO DE ROMERO María Angélica, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria, HAZURÚN Teresita Cándida, LASKOWSKI María Margarita, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Luis, CANTOS Germán; ***(iv) Torturas seguidas de muerte (art. 144 ter tercer párrafo)*** en perjuicio de Julio César CAMPOPIANO, Juan de Dios GOMEZ, Enrique Gonzalo DIAZ MACIAS, Víctor SAFAROV, Humberto Alfredo GONZALEZ, Gustavo Adolfo FOCHI, Julio Ricardo ABAD y Ángel Adolfo MÉNDEZ BRANDER; y ***(iv) Homicidio agravado (art. 80 inc. 2, 6 y 7 del CP)*** en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, FERNÁNDEZ Enrique Raúl, CORRAL Ana Cristina, NIEVA Oscar René, BARRIONUEVO Mario, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, ARGAÑARAZ Rosario, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, IRAMAIN María Trinidad, CORBALÁN Félix Viterbo, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, SOSA DE REYNAGA Ana María, MANFREDI Ángel Vicente, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, FOTE Fortunato Leandro, MÁRQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, DÍAZ Manuel Julio, PEREYRA Benigno Alberto, ALARCÓN Rina Rosa, FÜRTH Federico Adolfo, GIRIBALDI Osvaldo José Gregorio,

USO OFICIAL

FALÚ Luis Eduardo, GONZÁLEZ Hernán Eugenio, VACA RUBIO Raúl Alberto, YAÑEZ Rafael Vitalino, SÁNCHEZ María Teresa, ARCHETTI Armando, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, MORALES Reyes Humberto, LERNER Rodolfo Hugo, CARRERAS Juan Francisco, CORONEL Alfredo Antonio, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Luis, CANTOS Germán y como autor material del delito de ***asociación ilícita agravada (art. 210 y 210 bis del CP)*** todos en concurso real (art. 55 del CP); delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado.

XIX. DECLARAR LA FALTA DE MERITO para procesar o sobreseer a **LUIS DANIEL DE URQUIZA**, DNI 7.792.831, sin perjuicio de la continuación de la investigación a su respecto.

XX. DISPONER EL SOBRESEIMIENTO de HORACIO ALBERTO VACCARO, DNI 5.526.801, al tenor de lo normado por el art. 336 inciso 4 del CPPN.-

XXI. ORDENAR EL PROCESAMIENTO de ALBERTO HÉCTOR RAFAEL MONTES DE OCA, DNI 8.024.954, por considerarlo presunto partícipe necesario en la comisión del delito de ***privación ilegítima de libertad con apremios y vejaciones (art. 142 bis inciso 1 y 2 del CP)*** en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, FERNÁNDEZ Enrique Raúl, CORRAL Ana Cristina, NIEVA Oscar René, YACKEL Ernestina Teresa; BARRIONUEVO Mario, BARRIONUEVO Antonia del Valle, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, IRAMAIN María Trinidad, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, SOSA DE REYNAGA Ana María, MANFREDI Ángel Vicente, FOTE Fortunato Leandro, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, JUSTO Héctor Oscar, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, GÓMEZ Juan de Dios, GODOY Enrique, DÍAZ Manuel Julio, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, FÜRTH Federico Adolfo, GIRIBALDI Osvaldo José Gregorio, SÁNCHEZ María Teresa, ARCHETTI Armando, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, FOCHI Gustavo Adolfo, MORALES Reyes Humberto, LERNER Rodolfo Hugo, LORENZO LERMA Andrés Héctor, CRUZ Ernesto José Segundo, IÑÍGUEZ Gloria del Valle, BRIZUELA Ramón, CORONEL Alfredo Antonio, CARABAJAL Ercilia Dolores, HOYOS Blanca, ABAD Julio Ricardo, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, ALDERETE Víctor Fernando, FABIO Diana Elsa, QUINTEROS Juan Manuel, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria, HAZURÚN Teresita Cándida, MÉNDEZ BRANDER Ángel Adolfo, LASKOWSKI María Margarita, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Luis, CANTOS Germán, y como autor material del delito de ***asociación ilícita agravada (art. 210 y 210 bis del CP)*** todos en concurso real (art.

55 del CP), delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado.

XXII. ORDENAR EL PROCESAMIENTO de ERNESTO RIVERO, DNI 7.788.235, por considerarlo presunto partícipe necesario en la comisión del delito de ***privación ilegítima de libertad con apremios y vejaciones (art. 142 bis inciso 1 y 2 del CP)*** en perjuicio de CORRAL Ana Cristina, CAMPOPIANO César Gustavo, MEDINA Celia Georgina, CAMPOPIANO Julio César, YACKEL Ernestina Teresa; BARRIONUEVO Mario, BARRIONUEVO Antonia del Valle, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo, BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena, GONZÁLEZ GALLO María Celestina, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, IRAMAIN María Trinidad, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, DÍAZ MACÍAS Enrique Gonzalo, AUGIER Alberto Argentino, SOSA DE REYNAGA Ana María, MANFREDI Ángel Vicente, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, FOTE Fortunato Leandro, JUSTO Héctor Oscar, PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles, ALMERICO José, GÓMEZ Juan de Dios, GODOY Enrique, DÍAZ Manuel Julio, PEREYRA Benigno Alberto, ALARCÓN Rina Rosa, GIRIBALDI Osvaldo José Gregorio, FALÚ Luis Eduardo, GONZÁLEZ Hernán Eugenio, VACA RUBIO Raúl Alberto, RODRÍGUEZ ROMÁN DE FIAD María Cristina, YAÑEZ Rafael Vitalino, SAFAROV Víctor Hugo, SÁNCHEZ María Teresa, SÁNCHEZ Enrique Alberto, FOCHI Gustavo Adolfo, MORALES Reyes Humberto, LERNER Rodolfo Hugo, CARRERAS Juan Francisco, GONZÁLEZ Humberto Alfredo; LORENZO LERMA Andrés Héctor, PASTORI Juan Carlos, CRUZ Ernesto José Segundo, CHAPARRO Santos Aurelio, IÑÍGUEZ Gloria del Valle, BRIZUELA Ramón, CORONEL Alfredo Antonio, CARABAJAL Ercilia Dolores, HOYOS Blanca, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, CAJAL Nora Alicia del Valle, FABIO Diana Elsa, QUINTEROS Juan Manuel, SUÁREZ Manuel Humberto, MOYANO María Candelaria, MÉNDEZ BRANDER Ángel Adolfo, LASKOWSKI María Margarita, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Germán, y como autor material del delito de ***asociación ilícita agravada (art. 210 y 210 bis del CP)*** en concurso real (art. 55 del CP), delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado

XXIII. ORDENAR EL PROCESAMIENTO de JOSE SOWINSKI, DNI 5.093.721, por considerarlo presunto partícipe necesario en la comisión del delito de ***privación ilegítima de libertad con apremios y vejaciones*** (art. 142 bis inciso 1 y 2 del CP) en perjuicio de HOLMQUIST Luis Adolfo, FERNÁNDEZ Enrique Raúl, CORRAL Ana Cristina, NIEVA Oscar René, YACKEL Ernestina Teresa; BARRIONUEVO Mario, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, FÜRTH Federico Adolfo,

USO OFICIAL

GIRIBALDI Osvaldo José Gregorio, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, FOCHI Gustavo Adolfo, MORALES Reyes Humberto, LERNER Rodolfo Hugo, CHAPARRO Santos Aurelio, IÑÍGUEZ Gloria del Valle, BRIZUELA Ramón, CORONEL Alfredo Antonio, CARABAJAL Ercilia Dolores, HOYOS Blanca, QUINTEROS Juan Manuel, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MOYANO María Candelaria, MÉNDEZ BRANDER Ángel Adolfo, LASKOWSKI María Margarita, y como autor material del delito de ***asociación ilícita agravada (art. 210 y 210 bis del CP)*** en concurso real (art. 55 del CP), delitos todos ellos que configuran el contexto del delito internacional de genocidio, conforme lo considerado.

XXIV. ORDENAR EL PROCESAMIENTO de JOSE ELOY MIJALCHYK, DNI 7.086.361, por considerarlo presunto partícipe secundario en la comisión de los delitos de privación ilegítima de libertad con apremios y vejaciones y torturas agravadas en perjuicio **Félix Viterbo Corbalán** (CASO 27), **María Angélica Mazzamuto de Romero, Roberto Romero y Antonio Raúl Romero** (CASOS 86, 87 y 88).-

XXV. DISPONER QUE LAS PRISIONES PREVENTIVAS ordenadas en autos respecto de ***CAMILO ANGEL COLOTTI, AUGUSTO LEONARDO NEME, MARCELO GODOY, MIGUEL ALFREDO MANUEL PAZ***, se efectivicen en la modalidad de **ARRESTO DOMICILIARIO** (art. 10 del CP, conforme ley 26.472), en los domicilios particulares de cada encartado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por el Decreto 1058/97 (el pedido de un familiar o persona responsable; la realización de un informe médico y sicológico social que dé cuenta de la aptitud del o la garante que asumirá el cuidado del individuo privado de su libertad, y los informes Socio ambientales del lugar que se ofrece para dicho cumplimiento). Una vez efectivizada la medida la misma deberá ser supervisada por el Patronato de Liberados con jurisdicción en el domicilio de cada encartado, semanalmente y sin previo aviso de visita.

XXVI. DISPONER EL LEVANTAMIENTO DE LA DETENCIÓN DOMICILIARIA DISPUESTA respecto de **Ramón Ojeda Fuente, Fernando Torres, Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, Ernesto Rivero y José Sowinski,** previo cumplimiento de la caución real dispuesta para cada uno de ellos, fijada en la suma de $ 300.000 (Pesos Trescientos Mil). Una vez cumplida la caución real impuesta y dispuesto el levantamiento de la detención domiciliaria vigente, los encartados no podrán modificar el domicilio real denunciado, donde deberán permanecer, informando a este Juzgado cualquier ausencia por más de 24 horas, para la que deberán requerir autorización del Juzgado actuante, bajo apercibimiento de procederse a su detención.-

XXVII.- DISPONER que ERNESTO ALAIS mantenga su libertad durante el proceso fijando a su respecto una caución real de $ 500.000 (Pesos Quinientos Mil).

Póngase en conocimiento del encartado que no podrá modificar el domicilio real denunciado, donde deberá permanecer, informando a este Juzgado cualquier ausencia por más de 24 horas, para la que deberá requerir autorización del Juzgado actuante, bajo apercibimiento de procederse a su detención.-

XXVIII.- DISPONER que JOSE ELOY MIJALCHYK mantenga su libertad durante el proceso fijando a su respecto una caución real de $ 150.000 (Pesos Ciento Cincuenta Mil). Póngase en conocimiento del encartado que no podrá modificar el domicilio real denunciado, donde deberá permanecer, informando a este Juzgado cualquier ausencia por más de 24 horas, para la que deberá requerir autorización del Juzgado actuante, bajo apercibimiento de procederse a su detención.-

XXIX) LIBRAR OFICIO a la **JEFATURA DE LA POLICIA FEDERAL**, a fin de que por intermedio de la DELEGACIÓN correspondiente al domicilio de los encartados ***CAMILO ANGEL COLOTTI, AUGUSTO LEONARDO NEME, MARCELO GODOY, MIGUEL ALFREDO MANUEL PAZ***, cumpla rondas diarias de custodia en los domicilios de los mismos, informando quincenalmente a este Juzgado los movimientos registrados en los mismos-

USO OFICIAL

XXIX) LIBRAR OFICIO al MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACION a fin de que disponga que todas las fuerzas federales (Delegaciones Provinciales de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval Marítima y Dirección Nacional de Migraciones) tomen conocimiento de que los encartados **Ernesto Alais, Camilo Ángel Colotti, Juan Carlos Benedicto, Adolfo Ernesto Moore, Ariel Rolando Valdivieso, Carlos Eduardo Trucco, Ernesto Rivero, Ramón Alfredo Ojeda Fuentes, Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, Fernando Torres, Marcelo Omar Godoy, Celso Alberto Barraza, José Carlos Sowinski, Hugo Enzo Soto, Luis Orlando Varela, Luis Daniel De Urquiza, Augusto Leonardo Neme, José Eloy Mijalchyk y Miguel Alfredo Manuel Paz,** se encuentran impedidos de salir del país, debiendo proceder de inmediato a su detención en caso de que intentar eludir la restricción dispuesta.

HÁGASE SABER

ANTE MÍ: